

**CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE HONDURAS
CEDOH**

Honduras después del Mitch

Ecología política de un desastre



André-Marcel d'Ans

CDh CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE
HONDURAS

CDh CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE
HONDURAS

El Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información necesaria para un mejor conocimiento de la realidad nacional.

Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros, orientados al fomento de la cultura democrática en el país.

Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional.

**CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE HONDURAS
CEDOH**

Honduras después del Mitch

Ecología política de un desastre

André-Marcel d'Ans

Febrero 2008

614.875 André-Marcel d'Ans
A55 Honduras después del Mitch: Ecología política de un desastre / André-Marcel d'Ans
-- [Tegucigalpa]: Centro de Documentación de Honduras / [Impresos Cerratos] / [2008]
 323 p.

ISBN: 978-99926-41-02-6

1.- HURACANES. 2.-DESASTRES NATURALES-HONDURAS 3.-DESASTRES
NATURALES-CARIBE Y CENTROAMÉRICA.

Primera edición febrero de 2008

Centro de Documentación de Honduras

El Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) es una institución privada, sin fines de lucro, dedicada a producir, recolectar, clasificar y divulgar toda la información necesaria para un mejor conocimiento de la realidad hondureña.

Dirección:
Apartado Postal 1882
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: +504 2323265
Fax: +504 2323708

email: info@cedohg.org

web: www.cedoh.org

André-Marcel d'Ans

sl

HONDURAS DESPUÉS DEL MITCH
Ecología política de un desastre

Tegucigalpa, Honduras
2008

Honduras después del Mitch

Ecología política de un desastre

André-Marcel d'Ans

Traducción libre

Primera edición en español 2008,

Tegucigalpa, Honduras

ISBN:

© Primera edición en francés 2005

Editions Karthala, France

ISBN de la edición francesa: 2-84586-657-7

Título Original:

Écologie politique d'un désastre

Le Honduras après l'ouragan Mitch

ÍNDICE

Introducción	1
Capítulo 1: Cronología del evento climático	25
- El ciclón Mitch sobre el Mar Caribe. La agonía del <i>Fantome</i>	30
- Irrupción del ciclón en el espacio insular hondureño	34
- En el Norte: inundaciones desastrosas desde antes de la llegada del Mitch	37
- El milagroso rescate de Isabela Arriola	41
- El deslave del volcán Casita en Nicaragua	45
- El diluvio golpea la capital hondureña en una sombría noche	49
- El desastre prosigue su cabalgata río abajo hasta el mar	56
- ¿Catástrofe “natural”, o imputable a la ecología política?	61
Capítulo 2: El ciclón mediático a contratiempo, a contraverdad	65
- Una información primero ciega, luego entorpecida durante el fin de semana	68
- Una tardía “estupefacción” atribuida a los Centroamericanos	71
- El crecimiento del ciclón, en emisión diferida	73
- El progresivo regreso al tiempo real	75
- No obstante, el huracán sigue soplando en el relato mediático	78

- Los errores de la información rectificadas por la suspicacia y el insulto	81
- El periodismo, entre el deber de información y la vocación humanitaria	89
Capítulo 3: Análisis detallado de las consecuencias del Mitch en Honduras	95
- Bienes privados: no siempre fueron los que tenían menos quienes perdieron más	100
- En el sector de la producción: daños importantes, pero contrastados	107
- Pérdidas gravemente invalidantes en las infraestructuras públicas	114
- Revelación y acentuación de algunos atoladeros ecológicos	120
- Algunas denuncias espectaculares a considerar con detenimiento	131
Capítulo 4: Caridades mal ordenadas, reconstrucciones muy selectivas, y una transformación política en la expectativa	139
- El gran desorden de los donativos caritativos	144
- El opaco misterio de las ayudas financieras	148
- La invasión de las ONGs desbarata la capacidad de acción del Estado	159
- Las ONG en Honduras, después del Mitch	165
- Lo más y lo menos en la restauración de las infraestructuras	170
- Logros y fracasos en el realojamiento de los damnificados	174
- Apertura del debate político: una reconstrucción ¿con o sin transformación?	186
Capítulo 5: Consecuencias sociológicas: Una desalentadora generalización de poblaciones “en el aire”	195
- Del banano a las industrias de ensamblaje	198
- La república de las maquiladoras	201
- Unas condiciones de trabajo muy duras, para una mano de obra esencialmente femenina	206

- Unas protestas exteriores a veces disparatadas	211
- Impotencia sindical y resignación social	214
- Las trabajadoras de las maquiladoras en su medio ambiente mediocre y precario	216
- Unas perspectivas inseguras para el porvenir de las maquiladoras	219
- El emigrante: en adelante primer rubro de las exportaciones hondureñas	225
- Las migraciones, pieza en el tablero del ajedrez diplomático y medio de presión política	231
- Generalización de la violencia y autoterrorismo	235

Capítulo 6: Esperanzas, líos y sinsabores de la transformación política

	245
- La corrupción, ¿fenómeno cultural?	247
- Una primeras reformas meramente técnicas no suscitan interés por parte del público	250
- Una implicación inesperada de la “sociedad civil” en el proceso de reforma de la Corte Suprema de Justicia	252
- Fruto de una sorprendente inventividad institucional: la Junta nominadora	257
- Psicodrama en torno a las decisiones de la Junta nominadora	264
- Consecuencias y enseñanzas de un desenlace sorpresivo	270
- La nueva Corte Suprema a prueba de crisis, primeras averiguaciones	276
- A buena distancia todavía de un funcionamiento sosegado de la democracia...	283

Anexos

- Anexo 1: Cronología de los sucesos, 18 de octubre - 30 de noviembre de 1998	291
- Anexo 2: Clasificación de los ciclones	299

Bibliografía general	301
1. Sobre Honduras y Centroamérica antes del Mitch	303
2. Sobre “catástrofes naturales”	305
Bibliografía por capítulos	306

Honduras después del Mitch
Ecología política de un desastre

INTRODUCCIÓN

Abordar el estudio de una catástrofe desde el punto de vista de la *Ecología política*, descarta, de entrada, la idea de que pueda considerarsele como “natural”. Desde luego, nadie puede cuestionar que el origen del fenómeno internacionalmente conocido con el nombre de «*Huracán Mitch*»¹ se debió a alteraciones meteorológicas que los actuales medios de acción humana son incapaces de predecir y, menos aún, de prevenir. No obstante, no se puede aceptar que los hechos acontecidos en Honduras y en los países vecinos golpeados por el Mitch se analicen como simplemente inscritos en una cadena de causas y efectos exclusivamente atribuibles a circunstancias climáticas.

En todo momento, por el contrario, vemos factores de orden económico, demográfico, sociológico, psicológico y cultural interferir en esta cadena de consecuencias, sin que siempre sea posible determinar si se trata de causas o efectos, pues cada uno de estos factores se encuentra inmerso en una madeja de interacciones cruzadas, constitutivas de la relación vital muy compleja que toda sociedad mantiene con su entorno material -en parte elaborado por ella misma- y sin el cual las acciones de sus miembros no podrían tener realidad. La *Ecología política* tiene por objeto el estudio de estas interacciones, tanto más difíciles de aprehender, pues sabemos que los humanos sólo son parcialmente conscientes de las interferencias que ellos producen en su «*ambiente natural*».

¹ En Honduras, en vez de utilizar la terminología internacional *Huracán Mitch* (correspondiente al inglés *Hurricane Mitch*), la gente acostumbra referirse al proceso catastrófico que golpeó al país en octubre de 1998 designándolo simplemente como «el Mitch», al tratarse de un episodio tan decisivo que se llega a considerarlo como un actor histórico, de la misma manera que solemos decir: el Coloniaje, la Independencia, la Reforma liberal, el Cariato, etc.

Así, por ejemplo, puesto que en este estudio se van a plantear interrogantes referentes a un huracán, recordemos que nada permite excluir que las alternancias de sequía y de episodios lluviosos que dependen de las oscilaciones El Niño/La Niña, así como la repetición inusitada de ciclones muy violentos en la zona del Caribe puedan al menos parcialmente ser el resultado de acciones humanas perturbadoras del equilibrio general del planeta. Si tal fuera el caso, desastres supuestamente «*naturales*» como los huracanes deberían entonces estudiarse como fenómenos de origen antropogénico.

Al no poder pronunciarnos definitivamente sobre este punto, estamos en la capacidad -sin temor alguno a ser desmentidos-, de recalcar el apoyo de la pertinencia de un análisis político-ecológico de las catástrofes llamadas «*naturales*», según que un accidente climático o telúrico (ciclón o terremoto, por ejemplo) ocurra en tal o cual país, más o menos rico, con un Estado más o menos fuerte, con un régimen político autoritario o consensual, la importancia de los daños materiales, así como el número de víctimas variarán considerablemente. Este mismo razonamiento puede también aplicarse a las acciones de rescate y reparación que, al realizarse a un ritmo y según modalidades de ejecución a veces muy contrastadas, son susceptibles de provocar, sobre todo cuando se trata de países pobres y dependientes, cambios considerables en la estructuración de la sociedad y hasta provocar inesperadas inflexiones en la orientación de la vida política. Para tomar la medida de estas eventuales mutaciones, la observación de las consecuencias de una catástrofe debe prolongarse sobre un lapso suficientemente largo. Al presente estudio, optamos por dedicarle cinco años.

Por fin, tomando en cuenta que los factores que generan las catástrofes llamadas «*naturales*» se producen a escala planetaria y que en nuestro mundo de comunicaciones globalizadas el eco que estas calamidades generan puede propagarse a grandes distancias, suscitando, por aquí y por allá, las reacciones más diversas (desde la simple curiosidad hasta la ingerencia desfachatada, pasando por todos los estados intermediarios tales como la compasión o el interés), resulta imperativo evitar concentrar toda la mirada en el sitio donde el desastre se produjo. Importa, sin embargo, ensanchar la vista a la dimensión de una geopolítica mundial.

Tales son, resumidos en lo esencial, los lineamientos teóricos que guiaron la investigación, cuyos resultados se exponen en esta obra.

*

* *

Enfrentar el reto de un análisis político económico que articula la comprensión de los efectos materiales necesariamente locales de la catástrofe con la puesta en evidencia de los factores sociológicos y políticos que, a escala tanto nacional como internacional, provocaron y a la vez resultaron del desastre, implica adoptar un necesario distanciamiento respecto a la intensidad de la emoción localmente suscitada por la catástrofe.

Frente a esta situación el autor se benefició, desde el principio, de un doble distanciamiento: no es hondureño y no se encontraba en Honduras cuando el desastre se produjo. Disponía, sin embargo, como fruto de sus trabajos anteriores, de un buen conocimiento del país, de su geografía y de sus instituciones. Esto lo habilitaba para medir y analizar con serenidad los efectos del desastre, evaluar la pertinencia de las reacciones que iban a producirse en el mundo y en particular en Francia, donde el autor reside y donde se encontraba a la hora en que el Mitch devastaba a Centroamérica.

Para abordar el tema con la conveniente prudencia, la primera tarea que se imponía era reconstituir, con la mayor exactitud posible, la realidad de los acontecimientos.² Este es el objeto del primer capítulo. La minuciosa reconstitución de la naturaleza y de la sucesión de los episodios catastróficos resultó difícil de establecer; especialmente porque lo propio de un acontecimiento como el Mitch es que carece absolutamente de testigos globales y distanciados. Ciertamente, cada uno de los testigos presenciales es una fuente de información muy valiosa, pero lo que puede aportar no va más allá del entorno inmediato en que fue actor, espectador o víctima. Aún así, la objetividad de los relatos que uno recoge debe, muchas veces, ponerse en duda, pues el recuerdo aterrador que los testigos conservan de los hechos se muestra permeable a las informaciones, ciertas o falsas, que se difundieron durante la catástrofe (transmitidas por el rumor o por medio de receptores de radio con baterías), o lleva la marca de los relatos normativos que se impusieron a posteriori.

Por otra parte, comprensiblemente influenciados por la necesidad de poner en evidencia la importancia específica de los daños sufridos por la población bajo su jurisdicción -con el objetivo de enfatizar su derecho prioritario a recibir socorros y reparaciones- las autoridades locales suelen

2 Cf. Anexo 1: «Cronología de los acontecimientos: 28 de octubre-30 de noviembre de 1998».

avalar balances que acentúan la dramatización de la situación local en detrimento de la comprensión del fenómeno global. Por lo tanto, uno no puede contentarse con el simple registro de los testimonios individuales, ni de los balances elaborados por los poderes públicos, sin pasarlos por el filtro de una crítica acuciosa.

*

* *

Siendo así, uno podría ser conducido a pensar que, cuando la relación de los hechos proviene del exterior, se puede confiar más en su objetividad. El segundo capítulo de nuestro estudio desmiente esta tranquilizante ilusión. En efecto, en comparación con la reconstrucción meticulosa del fenómeno y de sus diferentes fases, contenida en el primer capítulo, el análisis de la manera con que la prensa internacional (particularmente europea y francesa) dio cuenta de los acontecimientos revela distorsiones considerables.

La primera imprecisión corresponde a la etiquetación del evento con el nombre de «*Huracán Mitch*». Sabemos que el huracán propiamente dicho, con su magnitud excepcional,³ no causó efectos directos en el Istmo Centroamericano, donde no hubo destrucción atribuible a la violencia de los vientos. Los efectos del ciclón como tal se concentraron en el ámbito marítimo. Sólo la isla de Guanaja sufrió el furor de su embestida. Sobre el espacio continental, en cambio, fue la sobreabundancia de las lluvias periciclónicas lo que provocó los peores desastres, agravando las inundaciones que, sin que los medios internacionales les prestasen atención, ya estaban desolando el norte de Honduras mucho antes de la llegada del Mitch.

En el centro y en el sur del país, las mismas precipitaciones torrenciales causaron devastadoras crecientes e innumerables deslizamientos de terrenos. Además de provocar la destrucción de la mayor parte de la red vial y de inhabilitar las instalaciones eléctricas y telefónicas, esas lluvias fueron la causa de la impresionante destrucción del centro de Tegucigalpa y de graves daños en el lecho mayor de los ríos que desembocan en el Golfo de Fonseca. En la Mosquitia, las lluvias también provocaron el desbordamiento de los ríos y terribles inundaciones en las dos riberas del río Coco que marca la frontera con Nicaragua. En este último país, la

3 Cf. Anexo 2: «Clasificación de los ciclones».

sobresaturación de los suelos fue también el origen de importantes daños, causando sobre las faldas del volcán Casita el episodio más mortífero de todo el proceso del Mitch. En menor medida, consecuencias trágicas fueron también registradas en El Salvador y Guatemala.

*

* *

El eco mediático internacional no sólo falló al hacer una identificación inexacta de las causas de la catástrofe; también erró por centrar exageradamente la atención sobre ciertos episodios particularmente espectaculares (tal como la violencia excepcional del ciclón cuando se encontraba sobre el mar, la destrucción del centro de Tegucigalpa, y la tragedia provocada por los deslizamientos de terrenos en las faldas del volcán Casita), en detrimento de la atención que se merecían otros aspectos del desastre, casi completamente ignorados por los medios: la inundación de las ciudades y de las plantaciones de la zona caribeña, la devastación de la isla de Guanaja, y las inundaciones en la Mosquitia. Pero definitivamente, la falla más extraordinaria del relato mediático fue que, dando todas las apariencias de estar informando «*en vivo y en directo*», como suele decirse, el desastre centroamericano fue llevado al conocimiento del público internacional... ¡con más de una semana de retraso respecto al desarrollo real de la catástrofe!

Se puede comprender las razones por las cuales, al principio, los cables de las agencias de prensa referentes a este desastre no suscitaron la debida atención por parte de los medios de comunicación del norte: la información que llegaba se refería a países mal conocidos, en donde las grandes potencias de este mundo no tienen muchos intereses, y en donde además la llegada de un ciclón es un hecho habitual. Por otra parte, el azar hizo que el huracán coincidiera, en Europa, con el inicio de un período de vacaciones escolares y con el principio de uno de los fines de semana más largos del año (el de la fiesta de Todos los Santos), lapso durante el cual los medios de comunicación sólo suelen dar espacio a los resultados deportivos y a los accidentes de tránsito. De tal modo que, en esos países del Norte, la atención mediática estaba como aletargada.

Recordemos además que, en el caso que nos ocupa, los medios internacionales ya se habían quedado mudos acerca de las inundaciones que afligían el norte de Honduras, mucho antes de que el Mitch se declarara. Parecería que para acceder al estatus de verdadera noticia, hace falta que una tragedia salga francamente de lo ordinario,

sobre todo cuando ocurre en un país en estado de calamidad cuasi permanente como Honduras... También hizo falta que la alerta fuese dada por corresponsales de agencias de prensa de reconocida importancia, y que estuvieran presentes en el país. Lo que no era -ni es hoy en día- el caso de Honduras.

En resumen, sólo fue cuando empezaron a amontonarse las informaciones provenientes de diversas fuentes, al final de ese largo fin de semana, que las grandes cadenas informativas del norte recién se dieron cuenta de que, esta vez, no cabían dudas: la magnitud del desastre vivido en Centroamérica era una noticia de un enorme impacto mediático, que no podía pasar inadvertida. En aquel momento, todavía hubiese sido posible publicar lacónicamente que dichas devastaciones se habían producido unos días atrás, en lugares donde el aislamiento geográfico y la poca atención internacional no permitían que se les atribuyera inmediatamente la importancia que se merecían. Actuando de esa manera, el seguimiento de la actualidad todavía hubiese podido retomarse día a día, respetando la temporalidad real de los hechos.

En vez de eso, el «Huracán Mitch» pasó instantáneamente del grado cero en la escala de la comunicación, al rango de evento mediático de dimensión planetaria. Este cambio, sin transición desde el silencio a la exageración periodística, da muestra del desamparo y del malestar profesional que se debieron experimentar en el mundo periodístico, al verse confrontado con la evidencia de que el inexorable avance y el fabuloso desencadenamiento de una catástrofe tan colosal habrían podido pasar inadvertidos. También se dio la casualidad de que, en aquel momento, no hubo ningún folletín de importancia, ningún evento deportivo, ningún matrimonio de príncipes o de estrellas del *show-business* capaz de atraer la atención del público. Esto ciertamente también jugó su papel en la extraordinaria precipitación de los órganos de prensa para lanzarse colectivamente al reportaje de la catástrofe Mitch con la apariencia de una relación inmediata de los hechos cuando, en realidad, la información se reportaba con retraso de casi diez días.

Evidentemente, nadie puede imaginar que esta unanimidad fuera el resultado de una acción concertada. Todo parece indicar, al contrario, que sólo intervino un proceso de alineamiento mutuo de los diferentes medios de prensa los unos tras los otros, todos preocupados por no dejarse adelantar por ningún competidor. El resultado fue paradójico, puesto que el hecho de negarse a que cualquiera de ellos destacara sobre los demás, condujo a la colectividad de los periodistas a someterse todos al reflejo borreguil, con la consecuencia de que ¡todos terminaron contando la misma historia al mismo tiempo y casi en los mismos términos! Es inútil

tratar de identificar quién comenzó, seguramente no a engañar sistemáticamente al público, pero sí a intentar disimular la torpeza de no haber informado en su debido tiempo sobre un evento cuya excepcional importancia sólo fue percibida con un pasmoso retraso.

Una causa adicional del gregarismo de la información periodística reside en que la competencia encarnizada a la cual se libran los medios de prensa para la conquista comercial del mayor número posible de consumidores de noticias, los está llevando a converger en un moralismo mimético empeñado en proyectar sobre el público la misma imagen reconfortante que cada cual se complace en atribuirse a sí mismo. Sabedores de que, hoy en día, la víctima se ha convertido en la inevitable figura central de toda escenificación de la realidad y que el irresistible afán de correr a brindar socorro constituye, de ahora en adelante, la piedra de toque de la virtud pública, no debemos extrañarnos de que los medios de información hayan hecho un deber el abalanzarse con avidez sobre cualquier infortunio, con tal de que pudiera resultar espectacular.

Considerando que el hedonismo individualista constituyó la marca distintiva de la generación anterior, puede parecer sorprendente esta inclinación actual hacia la victimización. Sin embargo, la contradicción sólo es aparente: el egocentrismo gozador no ha desaparecido; por el contrario, sigue constituyendo el telón de fondo de las ansias presentes. La diferencia con el período anterior, consiste en que, angustiada por la desaparición de las grandes promesas otrora fundadas en la fe en el progreso y la certeza de un futuro mejor, la generación actual ha perdido el optimismo mesiánico que permitía a su predecesora entregarse serenamente al goce de los placeres, con la ilusión de que esto constituyera un objetivo asignado a la especie humana en su totalidad.

Hoy en día, la aspiración al goce de una felicidad sin límites se ve frenada por el pánico de ya no poder entregarse a ella sin restricciones y por la frustración de ya no sentirse autorizado a prometerla a aquellos que están privados de ella. Por lo tanto, la tendencia actual es a la conmiseración sobre sí mismo y sobre los demás. Proliferan las víctimas por todos los lados. Nos miramos a través de ellas. Por una aplicación obsesiva del «*principio de precaución*», cada uno busca preservarse de la mala suerte de caer víctima de cualquier desgracia. Bajo la figura de lo *humanitario* -nuevo y mediocre avatar del humanismo- la solidaridad no se concibe más que como forma de asistencia a las víctimas.

La última parte del capítulo 2 se dedica a mostrar cómo los medios informativos, una vez más confrontados en una sobrepuja por amoldarse

a la demanda del público, desarrollan una nueva forma de conformismo al emularse todos en la compasión humanitaria. Para desgracia, este objetivo implica que se caricature la realidad: quien recibe asistencia puede presentarse como una verdadera víctima totalmente lastimosa, mientras los que acuden a su socorro pueden verse como héroes.

Una identificación errónea de la naturaleza de la catástrofe, en tanto que «huracán», había preparado el terreno para este relato compasivo al ofrecer una falsa imagen de destrucción ilimitada que habría indiscriminadamente afectado a la población en su totalidad. A esto se agregó una serie de groseros prejuicios, muy bienvenidos para terminar de pintar de negro el cuadro de la victimización:

—se da por bien conocido que las poblaciones «del Sur» son, por antonomasia, incapaces de solucionar sus problemas por sí mismas; —y que, además, viven bajo la bota de regímenes políticos exclusivamente definidos por la corrupción y la incapacidad.

Elevados al rango de axiomas, estos prejuicios preparaban el terreno para el despliegue de esta forma invasiva de la caridad universal que hoy en día se conoce bajo el nombre de *intervención humanitaria*, de la cual la casta mediática se atribuyó el papel de vocero y propiciador ante el público.

*

**

Fue así que Honduras no tardó en convertirse en una enorme receptora de la ayuda llamada «*de emergencia*», como preludeo para todas las formas de ingerencias exteriores a más o menos largo plazo, justificadas por el pretexto de dar «asistencia a la reconstrucción». El capítulo 3 registra los datos necesarios para poder proceder al balance crítico de esa «reconstrucción».

Por supuesto, no sería lógico emprender la evaluación de las acciones de reconstrucción sin disponer previamente de un diagnóstico preciso del estado del país inmediatamente después de la catástrofe, desglosando lo que fue realmente destruido, más o menos, y por qué, así como cuáles fueron las categorías sociales que resultaron particularmente afectadas. Forzosamente, este balance manifestará una cierta diferencia con el planteamiento cívico-demagógico expresado, al día siguiente del último del Mitch, por la Primera Dama, cuando proclamó que la catástrofe había afectado *por igual* a todos los hondureños, de modo que sólo un esfuerzo mancomunado y unánime de la ciudadanía permitiría sobreponerse a sus consecuencias.

En el capítulo 1 ya subrayamos que, geográficamente, los desastres causados por el Mitch no se hallan uniformemente repartidos. Examinando en detalle los daños sufridos por los diversos sectores de actividad y categorías sociales, en el capítulo 3 se hace resaltar que el Mitch no ha generado pérdidas para todos. Se nota por ejemplo que, poco perjudicados por los accidentes climáticos, los sectores de la maquila y de la extracción forestal aparecen como los grandes beneficiarios de la coyuntura. Lo mismo puede decirse de todos los que, de cerca o de lejos, tienen relación con las empresas de construcción y de trabajos públicos. A la inversa, el sector agrícola se ve doblemente golpeado: directamente por los daños causados a sus producciones e instalaciones e indirectamente por el deterioro de la red de carreteras, que impide el transporte de sus cosechas, cuando éstas no fueron destruidas.

Las desgracias individuales tampoco afectaron por igual a toda la población. De manera general, no sorprende que los ricos no sean los más afectados: cuando sufrieron daños, tenían seguros o están en condiciones de recuperarse muy pronto, debido a que sus actividades se sitúan en los sectores que resultaron beneficiados por la coyuntura. En las capas sociales más modestas, el esquema es más matizado. Primero, los que no tenían nada, o muy poco, no pudieron perder gran cosa: fueron simplemente transferidos de una forma a otra de la trágica permanencia en la miseria. Las pérdidas fueron más duramente sentidas por la franja de la población que va desde los menos pobres hasta la clase media, categoría además que nunca se considera merecedora de la conmiseración pública, nacional o internacional, puesto que la atención humanitaria suele concentrarse siempre sobre los más pobres.

Esta victimización selectiva, en detrimento de las capas situadas en una categoría social ligeramente superior a la de los más pobres, no es un hecho nuevo. Se inscribe, al contrario, en una continuidad histórica que, en razón de las incesantes trabas que se oponen a la emergencia de la clase media, mantiene a Honduras en esta categoría de país donde una brecha aparentemente infranqueable separa a los ricos de la masa de los desprovistos, condenados a no ser nunca más que ciudadanos de segunda clase. A esta auténtica fractura social responden graves desequilibrios en la organización del territorio, que un desastre como el Mitch no solamente contribuye a poner en evidencia sino que también acentúa peligrosamente.

Los más pobres entre los pobres se ubican principalmente en las zonas rurales marginales. Cuando su supervivencia se vuelve imposible allí donde nacieron, abandonan sus hogares y sus pertenencias para trasladarse hacia las periferias urbanas (las mismas que durante el Mitch iban a conocer el

mayor número de víctimas). Al emigrar de esa manera, no dejan de ser pobres, sino que se convierten en pobres de otra manera, en zonas territoriales cuyo carácter inhóspito empeora todavía por el hecho de acoger esta migración. Si a corto término, este desplazamiento de la población puede representar una oportunidad positiva para los sectores mejor posicionados en la sociedad (principalmente, en vista de que este movimiento migratorio interno pone a la disposición del sector de la *maquila* una mano de obra poco onerosa y socialmente dócil), no está de más advertir que esta masiva migración interna constituye, a más largo plazo, una grave amenaza para el equilibrio ecológico, económico y social del país.

El crecimiento acelerado y desordenado de la capital, situada en una posición geográfica fundamentalmente inapropiada para el desarrollo de una urbe, conduce inexorablemente a Tegucigalpa al colapso por falta de agua. Hoy en día, si bien Honduras es un país en donde la relación entre la disponibilidad general del recurso agua y el volumen de la población es excepcionalmente favorable, este no es el caso del Distrito Central, en donde todos los indicadores de la crisis ya están al rojo vivo. Ello no impide que la construcción inmobiliaria así como la especulación sobre los terrenos sigan acelerando su marcha hacia el abismo.

Mientras las autoridades se hacen las de la vista gorda ante esta colosal amenaza, la alarma mediática internacional suscitó mucha agitación a propósito de peligros mucho menos reales, y a veces totalmente ilusorios como, por ejemplo, las supuestas 75,000 minas antipersonales que las inundaciones hubieran desparramado por el campo (¡sin hacerlas explotar!), o el flujo de pesticidas que hubiera contaminado el Golfo de Fonseca... El fin del capítulo 3 se dedica al análisis de aquellos estragos sobrenaturales, poniendo en evidencia que, a pesar de ser idénticamente imaginarias, algunas alarmas provenientes del extranjero pueden tener eco en el país (por ejemplo: los pesticidas), mientras que otras no suscitan más que indiferencia (p. ej.: las minas antipersonales).

A la inversa, la incriminación de las quemas de primavera que los campesinos efectúan anualmente constituye un constante motivo de indignación en Honduras (donde se considera, no sin cierta razón, que esas quemas contribuyen, a la deforestación y que por lo tanto se pueden responsabilizar por la importancia de los daños del Mitch). En cambio, dicha acusación no es endosada sino con mucha circunspección por la bien pensante burguesía-bohemia de los países del Norte, distorsionada entre, por una parte, su lírico enternecimiento ante de las prácticas ancestrales, y por otra parte su ecologismo

puritano y fundamentalmente conservacionista. A igual distancia de esos dos tipos de exageraciones sentimentales, el enjuiciamiento de las quemas de primavera merece ser objeto de un enfoque razonable. El final del capítulo 3 se dedica a relatar cómo el antropólogo y agrónomo holandés Kees Jansen procede, con ponderación y sensibilidad, a propósito de este caso, a una magistral demostración de lo que se puede esperar de la ecología, cuando es política... y correctamente informada.

*

* *

No hay que maravillarse de que, engañados por una información mediática tardía y a veces aberrante, los socorros internacionales supuestamente «de primera urgencia» llegaron tarde, caracterizándose generalmente por una actuación confusa y a contratiempo. Nuestro capítulo 4, dedicado al balance crítico de las acciones de ayuda y de reconstrucción que se pusieron en práctica en Honduras después de la catástrofe, comienza por hacer el recuento de los errores que, a pesar de la evidente buena fe de los «humanitarios», hicieron que este movimiento internacional de solidaridad se mostrara poco útil, aportando finalmente más estorbos que alivios.

El tumulto autopromocional del que suele rodearse la ayuda humanitaria venida del Norte también contribuyó a que nadie se diera cuenta de que, antes de la llegada de la ayuda extranjera, la sociedad hondureña tuvo todo el tiempo necesario para demostrar su capacidad de hacer frente, ella sola, al desastre, con valentía y dignidad, desmintiendo la reputación de desorden e incapacidad que a menudo se le achaca. Otra realidad generalmente llevada al silencio: las solidaridades regionales, especialmente la mexicana y la cubana, se mostraron mucho más prontas en la intervención y más eficaces en la acción que la mayor parte de los humanitarios occidentales.

Ahora bien, si se desplaza la mirada del corto plazo hacia el término medio, con el propósito de abordar la evaluación de los programas de ayuda a la reconstrucción que se ejecutaron en Honduras, uno tropieza con una prodigiosa dificultad: *resulta imposible conocer el monto, siquiera aproximado, de los fondos internacionales que se vertieron para auxiliar al país*. No es que hagan falta las estadísticas: hubo, de hecho, por parte de toda clase de entidades, una avalancha de promesas, cascadas de proclamaciones de entrega de socorros, cerros de balances autocelebradores... Pero, al final, todo esto resultó propiamente indescifrable puesto que, aparte de que se descubren

fácilmente un número considerable de reduplicaciones de anuncios, esta sobreabundancia de datos contables nunca permitió establecer con certeza quién donó qué, cuándo y a quién. Imposible también determinar si se trata de donaciones o de préstamos (¡que no es para nada la misma cosa!), sabiendo además que también entraron en la cuenta, mezclándose con donaciones y préstamos, una serie de condonaciones y de refinanciamientos de deudas (de las que, además, nadie puede ignorar que, de todas maneras, jamás serían saldadas).

Resulta también imposible desglosar, en esta marejada de datos cifrados, si se trata de la simple continuación de programas que ya estaban ejecutándose o se proyectaban antes del Mitch, o de financiamientos nuevos, específicamente destinados a remediar las consecuencias de la catástrofe. Imposible también, entre tantas promesas profesadas en la emoción de los primeros días, discernir cuántas llegarían realmente a ejecutarse, sabiendo que las ayudas internacionales suelen ser condicionadas, y que cada cual se da cuenta de que las condiciones a las que son sometidas no se pueden satisfacer.

Inútil es decir que si la opacidad reina por el lado de los donantes internacionales, tampoco vamos a encontrar transparencia en las cuentas nacionales. De este lado, también, los balances se caracterizan por la imprecisión y una relajada indiferencia ante las contradicciones. En suma, resulta imposible, aquí también, establecer claramente quién recibió qué, de quién, cuánto y cómo lo gastó... Frente a tal laberinto el investigador se siente primero llevado a considerar la hipótesis de su propia incompetencia. Pero termina, luego, por sospechar que si sumas tan considerables se han repartido con tanta laxitud, debe forzosamente haber una parte de ellas que tomaron un destino inconfesable.

Cabe, sin embargo, subrayar firmemente que la inescrupulosidad no es menor entre los grandes donantes internacionales que entre los operadores locales (que sólo manejan migajas de los enormes fondos que administran los primeros). El cliché complacientemente difundido según el cual las élites de los países del Sur serían fundamentalmente venales y corruptas debe reconsiderarse. No porque la corrupción no existe en estos países, sino porque el prejuicio tiende a acreditar que la corrupción sólo existe ahí. Es cierto que la hay, pero en un grado forzosamente menor que en los pisos superiores del sistema financiero mundial, en donde la corrupción se juega golosamente con sumas mucho más elevadas. Si subsistiera la mínima duda al respecto, el recuerdo de ciertas realidades recientemente sacadas a la luz por la prensa internacional contribuiría a disiparla.

Es así que en un informe oficial de la Casa Blanca, con fecha del 3 de julio del 2004, se reveló que «un año después de haberse aprobado en el Congreso para la reconstrucción de Irak, sólo el 2% de los 18.4 mil millones de dólares había sido efectivamente gastado hasta el 22 de junio del 2004».⁴ Y el 11 de agosto de ese mismo año, el *Wall Street Journal* hacía saber que los expertos del Pentágono llegaron a la conclusión de que la empresa Halliburton and Co., cuyas estrechas relaciones con el grupo en el poder de Washington son de notoriedad pública, estaba en la incapacidad de detallar los servicios supuestamente proporcionados por esa empresa en Irak y en Kuwait por un monto de más de 1.8 mil millones de dólares...

Si fuera necesario convencerse de que las instituciones financieras más retóricamente empeñadas en la lucha contra la corrupción (¡pero que, en realidad, contribuyen a alimentarla!) no están exentas de estas fabulosas evaporaciones de montos financieros, baste con recordar que el 13 de mayo del 2004, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, el senador republicano Richard Lugar, citando informes de expertos, estimaba que «entre el 5% y el 25% de los 525 mil millones de dólares invertidos desde 1946 por el Banco Mundial con el concepto de créditos para el desarrollo, habían sido malversados mediante operaciones de corrupción, *la mayor parte de ellas pasivas*» (lo que nos lleva a pensar que esta corrupción pudo ser, en algunos casos, también activa). Se calcula que de esa manera se inyectó, en circuitos sospechosos, una suma global comprendida entre 26 y 130 mil millones de dólares (el profesor Jeffrey Winters de la North Western University opina que el monto más probable se eleva a 100 mil millones de dólares). Discutiendo esta última cifra, un portavoz del Banco Mundial sólo pudo argumentar que su institución «estaba muy consciente del problema, pero que se necesitarían muchos años para solucionarlo».⁵ Todo esto nos confirma que el carácter vaporoso de los créditos que fluyeron hacia Honduras después del Mitch se inscribe en una tradición bien establecida, de la cual sólo los ingenuos se maravillarán.

Una de las razones que hacen que la evaporación de recursos financieros se haya convertido en asunto banal, es que los donantes internacionales se acostumbraron a descargarse de la ejecución de

4 Cf. *Le Monde* del 14 de agosto de 2004.

5 Cf. un telegrama de la AFP, publicado sin comentario por *Le Monde* del 15 de mayo del 2004, bajo el título de: «La corrupción hubiera costado 100 mil millones de dólares al Banco Mundial».

sus proyectos sobre una nueva categoría de operadores: las organizaciones no gubernamentales (ONG). La observación de la actuación de estos organismos en Honduras, después del Mitch, conduce, irremediabilmente, a confirmar el diagnóstico pesimista de muchos analistas: no solamente estos entusiastas cruzados de la «democracia» se autohabilitan sin más legitimación que la que se hacen otorgar por los medios de comunicación de masas; más aún, al mismo tiempo que adoptan la postura de implacables dadores de lecciones en materia de la lucha contra la corrupción, ellos son los primeros en mantener una inquietante opacidad sobre la administración de sus propios medios financieros.

Por otro lado, la verdad obliga a decir que detrás de la formulación «no gubernamental», es «anti Estado» lo que se debe escuchar y entender. De hecho, las ONG se inscriben con mucha naturalidad en la onda neoliberal actualmente imperante. Caducó ya la época en que las políticas de cooperación internacional dependían de las relaciones de Estado a Estado, en el marco histórico de la guerra fría. Hoy en día, esto se ha sustituido por un flujo de solidaridades compasivas no gubernamentales, bañadas en una logorrea derechos-del-hombre. Nada mejor, pues el activismo desenfrenado de estas ONG cuadra con la actual tendencia hacia las desregularizaciones sociales y la privatización de los servicios públicos. Nuestro análisis mostrará cómo, invadiendo sistemáticamente las esferas de competencia del Estado, incitando a la deserción a los mejores servidores públicos para poder contratarlos, negándose cínicamente además a someter sus acciones al control del fisco, las ONG contribuyen a debilitar al mismo Estado... ¡que se supone han venido a ayudar!

¡Si todavía la eficacia pudiese justificar todo esto!... Pero la realidad no lo evidencia. Así por ejemplo, el gran desorden, en el sector de la reconstrucción de la vivienda después del Mitch, basta para demostrar que la buena voluntad algo paternalista de las ONG no está a la altura de la complejidad del problema, en un país como Honduras en el que el número de damnificados permanentes es, por lo menos, igual al número de hogares dañados por el Mitch... Ciertamente, nadie ignora que el Estado hondureño es tradicionalmente débil, generalmente ineficaz y permeable a la venalidad. Pero aquí, como en cualquier parte del mundo, sólo el Estado puede estar en condiciones de articular las iniciativas económicas y sociales con una visión coherente a escala nacional y asegurar su viabilidad a largo plazo. Si acaso el Estado se muestra incapaz de hacerlo, o poco animado para emprenderlo, ¿no convendría que los entes de cooperación exterior se esforzasen por ayudarlo y estimularlo, en vez de seguir contribuyendo

a la insidiosa desconsideración del potencial del poder público, tal como lo hacen las ONG?

Para que el Estado asuma de manera positiva su papel titular, también haría falta que se dinamice desde el interior. Para tal efecto, no se trata solamente de hacer que los poderes públicos se vuelvan empíricamente capaces de armonizar todas sus acciones en función de una prioridad claramente enunciada (como por ejemplo, en este caso, la de favorecer la expansión de la maquila, al privilegiar absolutamente la restauración de la red de carreteras principales en detrimento de la accesibilidad a las zonas rurales), convendría sobre todo asegurarse de que tal opción cuente con el apoyo de una ciudadanía consciente de su deber de compartir los frutos tanto como los inconvenientes que se destilan de tal política.

La posibilidad de una consulta sobre este punto, si queremos que sea libre y plenamente informada, no puede decretarse de un día para el otro. Es cierto que esta posibilidad no existía en Honduras antes del Mitch. De hecho, sabemos que, siempre inspiradas por los intereses a corto plazo de los sectores empresarial y comercial, las opciones de los gobiernos hondureños no se diferencian mucho según esté en el poder el uno o el otro de los dos partidos tradicionales. Dada esta realidad, si las posibilidades del desarrollo nacional fueran realmente sometidas al voto del electorado, sólo podrían recoger su aprobación con la soga al cuello, por la falta de visualización de soluciones alternativas.

Sobre este punto, la situación parece haber evolucionado positivamente como consecuencia del impacto del Mitch y de la ola de acciones de socorro que cayó sobre el país. Ya vimos que estas ayudas fueron generalmente poco eficaces y a veces realmente torpes. Paradójicamente esto dio lugar a dos efectos muy positivos, que nos obligan a matizar nuestro juicio global sobre las ventajas de la acción humanitaria. Por una parte, el carácter tardío e inapropiado de esta solidaridad extranjera no privó al pueblo hondureño de la posibilidad de demostrarse a sí mismo su capacidad de dar valientemente la cara al infortunio, sin ayuda de nadie. Posteriormente, ésto no le impidió saborear plenamente la feliz sorpresa de comprobar que sus sufrimientos habían conmovido al mundo entero, que se mobilizó para manifestar su compasión. Esta revelación obró como un electrochoque, propio para remover la inercia de las estratos más profundos de la sociedad hondureña, y hacerlos salir de su resignación frente a la banalidad de su cotidiana desgracia.

Este arranque hubiese podido ser nada más que momentáneo. Pero se sostuvo gracias a la prolongada permanencia, hasta en los lugares más abandonados del territorio, de cientos de jóvenes, hombres y mujeres, llegados de los países del Norte en el marco de la acción de

las ONG. En aquellos medios populares, dichos jóvenes aportaron demostraciones de modelos poco convencionales de comportamiento personal, e introdujeron elementos inéditos de discurso sobre la organización ideal de la sociedad, sobre el papel de las mujeres, sobre la preservación del medio ambiente, etc.

En líneas generales, su fraseología no difería mucho de la de los intelectuales que en Honduras se presentan como los representantes naturales de la «sociedad civil» (cuyas temáticas por lo demás son calcadas sobre las de la «sociedad civil» de los países del Norte, la misma de donde provienen aquellos jóvenes voluntarios). Pero si, esta vez, la voz de estos últimos captó mejor la atención popular, fue porque su discurso ya no dimanaba «de arriba», de ese mundo social inaccesible que el pueblo hondureño siente confusamente vinculado con quienes lo oprimen, sino de jóvenes benévolos, venidos a compartir la vida cotidiana de la gente y, por tanto, acreedores del buen trato que se debe a los visitantes. La seducción suscitada por las ideas que esos jóvenes divulgaban -y por los modelos de acción que preconizaban- fue tanto más grande a pesar de que los que las aportaban casi siempre las formulaban en un castellano hesitante y las ilustraban con comportamientos tan extraordinarios en relación a las normas locales, que dejó a sus huéspedes toda la libertad para asimilar aquellas novedades de manera libre y creativa, para adaptarlas con soltura a las realidades de su existencia.

*

* *

Desde luego, el despertar, en Honduras, de una conciencia cívica más alerta, inventiva y exigente no se puede solamente atribuir a la permanencia de algunos jóvenes voluntarios extranjeros en el seno de la población. También tiene que relacionarse con los importantes cambios que intervinieron en la sociología hondureña después del Mitch. Nuestro capítulo 5 se aplica a analizar las mutaciones directa o indirectamente deducidas de la prioridad que las políticas de reconstrucción concentraron en la expansión de la maquila, propuesta como eje casi exclusivo del desarrollo nacional. Al mismo tiempo, el sector agroindustrial tradicional (banano y café) zozobraba en el marasmo consecutivo al poco interés demostrado para el campo y materializado por el desastroso estado de la red de carreteras secundarias. A consecuencia de esto, se comprobó una brusca aceleración de los movimientos migratorios: primero del campo hacia las ciudades, y luego hacia los Estados Unidos.

Otra consecuencia en gran parte ligada al proceso de desruralización, fue una modificación considerable de las relaciones hombre/mujer, debido particularmente a que los tres cuartos de los empleos creados por la maquila se destinan a la mano de obra femenina, al mismo tiempo que el sector del empleo rural y agropecuario tradicional, otrora reservado a los hombres, entraba en una crisis profunda. La decadencia acentuada de los sindicatos, históricamente fuertes en Honduras, está notoriamente ligada a esa inopinada recomposición del mundo laboral.

Al margen de éste, la desocupación y el subempleo proyectan una sombra de angustia sobre más de la mitad de la población en edad de ser activa. Esto no puede más que avivar el deseo, sobre todo entre los más jóvenes, de sumarse a las filas de los que emprenden el camino hacia «el Norte». Este movimiento migratorio ha llegado a ser tan masivo que pronto el número de los emigrados se elevará al 10% de la población nacional. De ahora en adelante aquellos emigrantes juegan un papel capital en la supervivencia de la economía del país, puesto que el monto de sus remesas está cerca de superar el valor agregado de la maquila, a pesar de que ésta constituye, desde hace mucho, el principal recurso de la economía hondureña.

Esto genera una situación tan tensa que nadie osa imaginar lo que sucedería si este flujo de divisas disminuyera o si, peor aún, estos emigrantes que en su mayor parte son indocumentados fueran expulsados y forzados de regresar al país. Conscientes de las consecuencias desastrosas que este retorno provocaría, los Estados Unidos han adoptado una de las medidas más concretas ofrecidas a Honduras para ayudarla a hacer frente a las consecuencias del Mitch: se otorgó a los emigrantes hondureños que residen ilegalmente en los Estados Unidos un Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) válido hasta el 5 de julio del 2000. Dicho TPS garantiza a los inmigrantes ilegales en EE.UU., siempre y cuando su conducta se mantenga irreprochable, el privilegio de no ser objeto de una expulsión hacia su país de origen.

Por supuesto, en la fecha indicada para el vencimiento del TPS, la situación no se había mejorado en Honduras y no se había vuelto menos amenazante la perspectiva de un eventual regreso de los emigrantes. Esta coyuntura ofrece a los Estados Unidos un cómodo medio de control y de presión política sobre Honduras, a consecuencia de la necesidad en que ésta se encuentra, al igual que los países vecinos que se hallan en la misma situación, en el momento de renegociar año tras año la extensión del TPS. En esa constante necesidad de mendigar tolerancias extralegales a favor de sus emigrantes terminan de esfumarse las últimas apariencias de la soberanía.

No obstante, la concesión del TPS nunca privó a los Estados Unidos de la posibilidad de deportar a los elementos más indeseables que se encuentran en el seno de la inmigración. Es así que, en grupos compactos, fueron devueltos a su tierra muchos jóvenes, miembros de las bandas callejeras que proliferan en la periferia de los barrios latinos de las grandes urbes norteamericanas. Una vez devueltos al país, aureolados de prestigio en su calidad de granujas de más alta categoría, estos antisociales muy pronto lograron ejercer su ascendencia sobre la pequeña hampa local, y rápidamente se conglomeraron en *maras*, novedosa clase de pandillas cuyo comportamiento espectacularmente provocador y violento reproduce el comportamiento de sus similares del Norte, respecto a las cuales muestran relaciones regulares de avasallamiento. Sobre esta pendiente, las *maras* pronto se convirtieron en Honduras, así como en los países vecinos, en una verdadera plaga social.

En un primer tiempo, la nocividad de esas *maras* quedó concentrada en las colonias populares. A continuación, su acción nefasta se hizo más visible y preocupante, a medida que empezaron a generalizarse los raptos, las tomas de rehenes para rescate y los asesinatos de personalidades, poniendo en evidencia que una articulación se estaba estableciendo entre la delincuencia de cuello blanco (dedicada al narcotráfico, al contrabando y al lavado de dinero, convertidos en los principales modos de rápido enriquecimiento en Honduras) y el mundo de las *maras*, muchas veces llamadas a ejercer el rol de ejecutores en beneficio de esa criminalidad de más alto vuelo. Fue así que el índice de inseguridad pública en Honduras no tardó en convertirse en uno de los más altos del mundo.

Una profunda preocupación ensombrece el porvenir de este pequeño país afligido por el desempleo, el exceso de pobreza, las injusticias sociales, los atolladeros ecológicos y, como acabamos de verlo, una incontrolable violencia social. A más o menos corto plazo, las dos principales fuentes de recursos lícitos de que dispone el país: la maquila y las remesas, aparecen condenadas: la primera por una deslocalización aparentemente ineluctable de las industrias *off-shore* hacia China y otros países del Asia, detentadores de «ventajas comparativas» insuperables; y, la segunda, por la permanente amenaza de un cambio que ponga fin a la actual mansedumbre de las autoridades migratorias norteamericanas con los inmigrantes indocumentados, y por la previsible disminución progresiva del envío de remesas, a medida que los emigrantes se vayan integrando a la vida norteamericana.

*

* *

En resumidas cuentas, las debilidades estructurales que presentaba la economía de Honduras, anteriores al Mitch, siguen sin modificarse. Nuevas actividades, ciertamente, han aparecido, pero no han hecho más que reemplazar las que se han perdido, y sus perspectivas de duración parecen dudosas. Si agregamos a esto la sensible agravación que intervino en el campo de la inseguridad pública, el balance del quinquenio post-Mitch tiende a hundirse en lo negativo. Sin embargo, algo impalpable induce al optimismo: el estado de ánimo de la sociedad da la impresión de haberse modificado en el sentido de volverse más tónico, como si las circunstancias hubieran sacudido la apatía política que tradicionalmente hace cortejo al clientelismo bipartidista y al consensual ronroneo de una democracia de corte puramente formal, en la que todo concurre a la resignación ante el egoísmo de los poderosos y donde sólo la astucia se ofrece como modo de defensa para los más humildes.

¿Qué sucedió para que tomara cuerpo esta brizna de despertar democrático, este esbozo de un renacimiento de la vitalidad política? En lugar de mascullar declaraciones sentenciosas que se limitan a proferir que las adversidades «hacen madurar» a las sociedades, tal como se dice para los individuos, podemos intentar deslindar con mayor precisión las razones de esta paradoja que vió el cuerpo social de Honduras salir de la desgraciada catástrofe, no moribundo ni abatido como se podía temer, sino, por el contrario, más optimista y confiado en si mismo.

Primero, la evidencia de haber sabido enfrentar con valentía y dignidad la embestida de una catástrofe de amplitud nacional y de resonancia mundial es motivo de legítimo orgullo. El haber soportado tamaño desastre sin incurrir en daños irreparables genera por demás un optimismo paradójico: si hemos resistido al Mitch ¿que peores cosas no seremos capaces de enfrentar? parece engallarse el alma catracha. De veras, Honduras demostró que es indestructible. Tal certeza no es solamente tranquilizante, alimenta un cierto sentimiento de triunfo: en un país en donde para la mayoría de los habitantes el mayor éxito en la vida consiste en lograr sobrevivir, parece que la gente se reconfortó al pensar: «Triunfamos contra el Mitch, pues Honduras no ha muerto». Todo, como vemos, ocurre como si la moral de la población hubiese sacado fuerzas de la misma violencia del ciclón, elevándose con él hasta el quinto grado de la escala de medición... y se quedase asomada en ese nivel después de la catástrofe.

Sobre este fondo de dinamismo endógeno vinieron a injertarse fragmentos de discursos heterogéneos, captados al vuelo en la

confusión consecutiva al Mitch, aprovechando la hora en que las referencias que normalmente rigen las convenciones de la vida social estaban como en suspenso, despojadas de su carácter inmutable. El impacto de estas nuevas nociones, reveladoras de posibilidades hasta entonces inimaginables, removió conciencias que, con el pasar del tiempo se habían vuelto indiferentes a la esperanza. Con un ingenuo ardor, en las capas sociales, hasta entonces siempre mantenidas al margen del discurso político, múltiples voces tuvieron la audacia de apoderarse de esos conceptos exóticos para lanzar críticas, otrora sofocadas en el silencio, y atreverse a plantear reivindicaciones que hasta el momento, siempre se habían quedado amuralladas en la pasividad.

¿Quiere esto decir, como algunos se apresuran a proclamarlo, que como feliz consecuencia del Mitch, asistimos a *la emergencia de una sociedad civil en Honduras*? Primero, recordemos que para nadie resulta muy claro lo que puede significar exactamente la expresión «sociedad civil». Y si se debe conceder a este concepto el significado deliberadamente optimista que le atribuyen sus propiciadores, consideramos que no hay que adelantarse tanto como para emitir la opinión de que la «sociedad civil» ya logró despejarse en Honduras. Lo que sí se puede comprobar, con certeza, es que el nivel de implicación política de las capas populares hondureñas ha subido significativamente y que esta nueva implicación se expresa en una fraseología y sobre temáticas que ya no son las de los viejos refranes revolucionarios de la guerra fría. Llevan más bien la marca de las temáticas que propician los que, tanto en el plano internacional como nacional, se presentan como portavoces de la «sociedad civil».

Sin embargo, entre las líneas de acción que éstos proponen, no todas reciben la misma adhesión por parte de la opinión pública, a veces reacia a adoptar algunos planteamientos que le parecen muy «abstractos» (otra manera de decir: «irrealistas»). En cambio, esa misma opinión puede mostrarse muy lista para comprometerse cuando le parece que el tema vale la pena. Así se pudo comprobar que el sometimiento de las masas a las exhortaciones de los intelectuales que pregonan la defensa de la «sociedad civil» no es ni automático ni incondicional.

*

* *

El último capítulo de nuestro estudio aborda el tema de la transformación política que, después del Mitch, se suponía iría a la

par con la reconstrucción material del país. El punto clave de esa transformación radica en la necesidad de una reforma del Poder Judicial, en estrecha vinculación con la instauración de un clima de seguridad y con la voluntad de luchar implacablemente contra la corrupción y los modos de actuar clásicamente intransigentes y deplorablemente estériles de la clase política hondureña.

Sobre el particular, lo primero que se pudo comprobar fue que las reformas de carácter puramente técnico, con las cuales se deleitan las sutiles competencias de los profesionales del derecho, no suscitaron más que indiferencia por parte del público, justamente convencido de que los sistemas, sean cuales sean, no valen más que por la eventual honradez de quienes los ponen en práctica. A la inversa, a partir del momento en que se trató de instaurar una Junta nominadora, cuya finalidad era introducir un control ciudadano en la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, máxima personificación del Poder judicial, se mobilizó vivamente la atención del público, y motivó el desenvolvimiento de una serie de acaloradas peripecias, que el lector encontrará relatadas en el último capítulo.

La sucesión de rocambolescos rebotes, más el desenlace extravagante de esta acción destinada a garantizar la independencia del Poder judicial frente al ejecutivo y al legislativo, dieron evidencia de que, cuando una voluntad se muestra realmente decidida a introducir una cuota de participación popular en el juego político, las fuerzas tradicionales se muestran dispuestas a jugárselas con todo, con el único fin de obstaculizar las reformas. Simétricamente, su determinación de seguir adelante conduce inevitablemente el pragmatismo de los partidarios de la reforma a recurrir también a actuaciones tortuosas, hasta el punto de ponerse a veces en clara contradicción con los mismos principios del derecho y de la democracia, poniendo así en relieve las ambigüedades de los teóricos de la «sociedad civil», quienes acompañaron al movimiento (más que dirigirlo, verdaderamente) para poder finalmente regocijarse de haber ganado una guerra «contra la vieja clase política autoritaria y corrompida»...

El populismo y la demagogia bordean inevitablemente esta temeraria vía hacia la «transformación política». ¿Logrará finalmente ésta imponerse algún día? Sólo el futuro tiene la respuesta. Entretanto, la observación sobre el lapso de algunos meses de la laboriosa puesta en marcha de la Corte Suprema reformada, permitió observar con qué diabólica habilidad los reflejos del viejo bipartidismo lograron reintroducirse en el seno de un organismo precisamente concebido para neutralizarlos. Esto condujo a darnos cuenta de que las viejas fuerzas de la política tradicional no estaban dispuestas a depositar las armas, y que la semi-derrota que tuvieron que

conceder no es inapelable. Ellas saben que, más que a las fuerzas propias de los defensores de la «sociedad civil», su revés se debió a dos factores, uno de naturaleza puramente coyuntural y el otro de más larga trayectoria.

El primero de esos dos factores todavía corresponde a la permanencia del efecto del Mitch, en tanto que iniciador de una dinamización del sentido crítico y de una implicación más decidida de la población a favor del cambio. Por algún tiempo, todavía, este frágil despertar político goza del apoyo moral y material de la «sociedad civil internacional». Pero ¿por cuánto tiempo todavía? ¿Hasta que el recuerdo del Mitch termine de borrarse de las memorias, y acabe de hundirse en el pasado?...

El otro factor, más genuinamente arraigado en la realidad hondureña, reside en el viejo fondo místico y religioso de la moralidad popular de este país, portadora de una maravillosa facultad de abnegación, pero también provista de un explosivo potencial de indignación presto a desencadenarse en contra de quien tuviera la imprudencia, por sus escándalos, de exponerse a su vindicta. Los acontecimientos relatados en el capítulo 6 ponen en evidencia el constante deslizamiento entre lo religioso y lo político; factor potentemente movilizador, es cierto, mas imprevisible e inconstante, y que inspira serias dudas en cuanto al real encaminamiento de esta sociedad hacia la democracia.

A la hora de ponerle el punto final a este estudio de los cinco años posteriores al Mitch, se evidencia que este cataclismo se está retirando lentamente de la escena del presente para ir a ocupar su sitio en la historia. Ya cada vez menos se habla de él. La vegetación ya renació sobre los escombros. Poco a poco nuevas preocupaciones van borrando el espanto de los recuerdos. Si tratamos de establecer el balance del acontecimiento, lo primero que atrae la atención y causa sorpresa es la aparente facilidad con la cual el pueblo hondureño se repuso de la catástrofe. Auxiliado, es cierto, por el hábito de sufrir desgracias...

¿Podemos considerar que, a las finales, el episodio del Mitch surtió algunos efectos positivos? El lector opinará como le parezca al enterarse de los elementos de juicio que figuran en este libro. Seguramente hoy en día, ya nada es igual que antes. Todo cambió de figura, ya sea en el aspecto sociológico, en la estructura de las actividades económicas y hasta en el diseño de las líneas de fractura que dividen el mundo político. Nuevos problemas han aparecido, ni más ni menos desesperantes que los de antes del Mitch, en este país, siempre muy pobre, dependiente y privado de un real poder de decisión sobre la conducción de su destino. Sin duda, la coyuntura ya pasó a otra etapa. Entretanto, hombres y mujeres han vivido. Otros han muerto.

Todos trataron de comprender lo que les estaba sucediendo. Modestamente, intentamos acompañarlos en este pedazo de su historia.

París, 1º de octubre del 2004

Capítulo 1

CRONOLOGÍA DEL EVENTO CLIMÁTICO

Meteorológicamente, el período anterior al huracán Mitch no fue favorable para Honduras: como consecuencia del fenómeno popularmente conocido con el nombre de El Niño (la oscilación del oeste hacia el este de las aguas tibias superficiales del Pacífico sur, que sabemos ahora induce consecuencias meteorológicas a escala planetaria), en 1997 se produjo una sequía pronunciada que afectó a Centroamérica y la zona de El Caribe, con consecuencias bastante severas, principalmente para el sur de Honduras, en donde ese año las precipitaciones habían apenas sobrepasado la mitad de las ocurridas en el año precedente (1614 mm en 1997, contra 3037 mm en 1996).

En 1998, considerando globalmente los 12 meses del año, las precipitaciones parecían haber vuelto a un nivel equivalente y hasta ligeramente superior al promedio estadístico de referencia, que los meteorólogos tienen establecido sobre la base de 30 años de datos recogidos entre 1961 y 1990. Sin embargo, no nos dejemos engañar por este aparente regreso a la normalidad: éste sólo se debió a la extrema abundancia de las lluvias reportadas en octubre; hasta esa fecha el registro pluviométrico se había mantenido en franco déficit respecto al promedio estadístico, por razones que la mayor parte de los especialistas imputan a la acción de El Niño.¹

¹ El *Monthly Climatic Data for the World* que publica el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en unión con WMO (World Meteorologic Organization), no incluye en 1998 (Vol. 51), datos específicos sobre Honduras, ni tampoco sobre Guatemala y El Salvador. Sin embargo es posible extrapolar la situación de Honduras a partir de la convergencia de los datos recogidos en las estaciones meteorológicas de los aeropuertos de Belice y de Managua. En estos dos lugares el déficit de pluviosidad sigue manifestándose durante los nueve primeros meses del año, previamente a la aparición de un pico fulgurante de precipitaciones en octubre, durante el cual fueron respectivamente registrados, en Belice y en Managua, 25 y 26 días de lluvias así como volúmenes de precipitaciones equivalentes a 307 y 425% de los promedios de referencia establecidos entre 1961 y 1990. Las estadísticas del mes siguiente

Conviene, entonces, considerar que si la sobreabundancia de las lluvias durante el Mitch produjo tantos desastres, fue porque, al caer sobre terrenos ya debilitados por un largo período de sequías, las precipitaciones ocurridas durante las semanas precedentes tenían saturados los suelos. Esto no podía dejar de engendrar consecuencias calamitosas, sabiendo que el substrato geológico de Honduras consiste en depósitos piroclásticos, saldos de antiquísimas erupciones volcánicas, cuya textura friable y predominantemente fina, combinada con el fuerte declive de las pendientes, multiplica los sectores topográficamente inestables. La peligrosidad de estas condiciones naturales se agrava por la presión que la ocupación humana ejerce sobre aquellos espacios frágiles, haciendo proliferar los cultivos, cuando sólo el arraigamiento de bosques ombrófilos podría asegurar la estabilidad de este tipo de suelos.

*

* *

El domingo 25 de octubre de 1998, la mente de los habitantes de Tegucigalpa estaba muy lejos de dejarse llevar a este tipo de consideraciones relevantes de la Meteorología, de la Geología y de la Ecología en general. El clima desabrido que reinaba sobre la capital no impedía el apasionarse por el evento que se preparaba para la tarde de ese día. Provenientes de todas las regiones del país, caravanas de vehículos llenos de fanáticos convergían hacia la capital, en donde el club Motagua, privado desde hacía 6 años del título supremo, tenía que enfrentarse a su eterno rival, el club Olimpia, en la final del campeonato nacional de fútbol.

Esta circunstancia hizo que no se prestase mucha atención, sino de manera distraída, a los mensajes de alerta que la televisión había estado difundiendo a partir del viernes 23, ilustrados por gráficos e imágenes satelitales, que advertían que se estaba formando, sobre el Mar Caribe, un ciclón capaz de amenazar el litoral hondureño. Con mayor razón, nadie podía imaginar que las abundantes lluvias, que en ese momento estaban cayendo sobre la región norte del país (las cuales podían todavía considerarse como el augurio de una "buena" temporada de lluvias), preludiaban, en realidad, lo que iba a ser la peor catástrofe ciclónica de la

(noviembre de 1998) muestran todavía un cierto excedente de lluvias, debido a la prolongación, durante los primeros días de noviembre, de lluvias atribuibles al entorno del Mitch.

historia, desde el Gran Huracán que, del 10 al 16 de octubre de 1780, desoló las islas de Martinica, San Eustaquio y Barbados, causando un total de 22,000 muertos.²

A partir del miércoles 21 de octubre de 1998, el Centro Nacional de Ciclones de Miami había comenzado a emitir mensajes de alerta, desde que notaron sobre el Mar Caribe la formación de una depresión situada a 500 km al sur de las costas de Jamaica, justo en la vertical del Canal de Panamá. Aumentando rápidamente en potencia sobre el Mar Caribe, cuyas aguas superficiales se encontraban en ese momento muy calientes (28°C), esta depresión rápidamente se convirtió en tormenta tropical y, posteriormente, avanzaría al estado de huracán, el sábado 24, recibiendo entonces el nombre de Mitch.³

Al amanecer del domingo 25, la población, cuya atención se encontraba acaparada por el fútbol, se mantiene, todavía, calmada, en Tegucigalpa. No ocurre lo mismo en el norte del país, en donde se presta mayor atención a las noticias alarmistas que difunde el Centro Nacional de Ciclones de Miami. Éste, que en la víspera aún mandaba mensajes tranquilizadores (según los cuales el ciclón, dada su orientación sur-norte, no debería afectar al territorio de Honduras, con excepción tal vez de las Islas del Cisne y eventualmente de la Mosquitia), habían súbitamente cambiado de tono al dar cuenta de que el fenómeno meteorológico había bruscamente desviado su orientación hacia el oeste. De modo que ahora es una alerta roja la que el centro de Miami difunde en dirección a Honduras, en donde los medios informativos se hacen inmediatamente eco de esa advertencia.

En verdad, Tegucigalpa tiene pocas razones para alarmarse: habitualmente los efectos ciclónicos no se sienten ahí. Pero no ocurre lo mismo en el norte

2 Cuatro años antes, el 6 de septiembre de 1776, Martinica fue víctima de otro ciclón, que había causado más de 6,000 muertos. Desde aquellas lejanas fechas, las aproximadamente 8,000 muertes registradas respectivamente en Galveston Island (Texas) el 8 de septiembre de 1900; en República Dominicana del 1° al 6 de septiembre de 1930; en Haití y en Cuba por el ciclón Flora del 30 de septiembre al 8 de octubre de 1963; y en la misma Honduras del 14 al 19 de septiembre de 1974 por el ciclón Fifi, constituyen, en números de víctimas humanas, registros inferiores a los de Mitch. Aunque no se elevan más que aproximadamente a la mitad de las pérdidas provocadas por el Gran Huracán de 1780 -esperamos que este record nunca sea superado- los 11.000 muertos atribuidos al Mitch en Centroamérica inscriben, este huracán, en la historia como la más grave catástrofe de origen ciclónico registrada desde hace más de dos siglos.

3 Cuando se instauró la costumbre de atribuir un nombre a los ciclones, se recurrió, al principio, sólo a nombres femeninos. Al progresar la paridad en todos los dominios, en adelante los llamamos alternativamente con nombres masculinos y femeninos.

del país, donde el recuerdo de los desastres causados en 1974 por el huracán Fifi todavía se mantiene muy vivo. Por eso, la inquietud está ahí más presente, aun cuando en esas horas el Mitch sigue estacionado a 400 km al Este de las costas hondureñas, cada quien complaciéndose en pronosticar que de aquí a un día o dos debería cambiar su curso hacia el norte, como normalmente lo hacen los ciclones que se aproximan a las costas hondureñas. Esto no impide que las lluvias torrenciales, que afligen al valle del río Aguán y todo el departamento de Gracias a Dios, preocupen mucho en esas regiones donde suelen producirse inundaciones catastróficas. Las noticias provenientes de los vecinos nicaragüenses no son mejores: allí igualmente las lluvias no cesan, extendiéndose hasta Chinandega. También amenazan inundaciones en la Mosquitia nicaragüense.

Tomando muy en serio los mensajes de alerta que difunde Miami, el domingo 25 de octubre las autoridades gubernamentales hondureñas deciden poner en pie un Comité Nacional de Emergencia. Inmediatamente éste insta a la población para que adopte medidas de protección. Mientras en Tegucigalpa el partido de fútbol pudo realizarse con un tiempo fresco y sin lluvias, permitiéndole al club Motagua una sólida revancha sobre su rival, este mensaje de alerta suscita un principio de pánico en San Pedro Sula en donde, temiendo un poco irracionalmente ver el ciclón precipitarse sobre la ciudad al día siguiente, la gente se dedica a trancar puertas y ventanas y a acumular provisiones en previsión de lo peor. Desde las pulperías de los barrios hasta los supermercados y las estaciones de venta de combustibles del centro, todos los negocios deciden mantenerse abiertos durante toda la noche del domingo al lunes, con el fin de poder responder a la angustiada demanda de los compradores.

El ciclón Mitch sobre el Mar Caribe. La agonía del *Fantome*

Ese mismo domingo 25 de octubre de 1998, se encontraba anclado en Omoa uno de esos veleros gigantescos que hoy suscitan la admiración de las masas. Se trataba del *Fantome*, goleta de cuatro mástiles y 282 pies de largo, capaz de enarbolar 14 velas con una superficie total aproximada de 2000 metros cuadrados. Palacio flotante para acomodados turistas, esta suntuosa nave, dueña de una historia romanesca capaz de entusiasmar a todos los lectores ávidos de revistas especializadas en actores y personajes mundanos⁴, pertenecía a la Windjammer Barefoot Cruise

⁴ Inicialmente construido como destructor por la Marina italiana durante la Primera Guerra mundial, este bello bote se volvió inútil al terminar el conflicto. Fue entonces

Co., compañía de Florida que dirige un tal Mike Burke. Tres años antes, éste había invertido 6 millones de dólares para equipar la nave con todo lo mejor en materia de confort y de tecnologías modernas, volviéndola apta para recibir a bordo 45 tripulantes y 128 pasajeros, en las mejores condiciones de comodidad y seguridad.

Una serie de circunstancias inoportunas llevaron a que, ese mismo domingo 25 de octubre de 1998, un centenar de pasajeros se embarcase en el *Fantome* para emprender un crucero por las Antillas. Permanentemente mantenido al tanto gracias a los medios técnicos de la embarcación, de las advertencias del Centro Nacional de Ciclones de Miami, el capitán de la nave, un británico de nombre Guyan March, se sentía legítimamente preocupado. Ciertamente esa mañana, el Centro en cuestión se mostraba relativamente optimista en cuanto a las posibilidades de que la costa hondureña escapase al impacto del ciclón. Sin embargo los especialistas de Florida no cesaban de recalcar el carácter errático, difícilmente previsible, de la trayectoria del fenómeno.

Esto era suficiente como para inducir a la prudencia al capitán March. Para éste, lo más importante era la seguridad de los pasajeros que la compañía le había confiado. Decide reunir a los cruceristas recientemente embarcados para comunicarles que, en razón de circunstancias atmosféricas preocupantes, y del riesgo que éstas podrían hacer correr a la nave, prefiere anular el crucero programado. Por el momento, la mejor solución parece ser zarpar de Omoa con destino a Belice, donde los pasajeros se desembarcarán. De ahí podrán tomar un avión para regresar a los Estados Unidos.

comprado por el duque de Westminster quien lo convirtió en crucero de prestigio, rebautizándolo como *Flying Cloud*. En 1932, el duque lo revendió a un norteamericano. En 1937, la nave cambió una vez más de propietario al ser comprada por el multimillonario escocés Guinness. Fue entonces cuando recibió el nombre de *Fantome*. El segundo conflicto mundial marcó una nueva pausa en el destino mundano del *Fantome*. Hasta que, en 1956, muriéndose de ganas de ser invitado a la boda de Rainier y Grace de Mónaco, Aristóteles Onassis adquiere este barco, que pretende ofrecer a Rainier y a Grace como regalo de matrimonio. Con este fin, lo hace renovar suntuosamente. Desgraciadamente, despreciado por advenedizo, ¡jamás Onassis verá su nombre inscrito en la lista de los invitados! El despecho lo llevó a dejar el *Fantome* amarrado en un puerto del Báltico, y no se volvió más a ocupar de él. Diez años más tarde, terminó por deshacerse muy prosaicamente de la nave revendiéndola a Mike Burke, un empresario norteamericano especializado en la organización de cruceros de lujo. Éste matriculó la nave en Antigua, pabellón de complacencia si es que lo hay.

En la noche del domingo 25 al lunes 26 de octubre, mientras el *Fantome* navegaba hacia el norte bordeando las costas de Guatemala y de Belice, el huracán, en el centro del cual los vientos alcanzaban ahora 240 km/hora, se encontraba aún entre 300 y 400 km más al este. No representó entonces ningún obstáculo como para que el lunes 26, a eso de las 10 de la mañana, el *Fantome* anclara sin problema en la bahía de Belice. El capitán March procedió a evacuar a los pasajeros. Conservando solamente a los marinos absolutamente indispensables para maniobrar la embarcación, envió igualmente a tierra a 10 de los 42 miembros de la tripulación.

Como a las 12:30 horas, después de consultar nuevamente al Centro de Florida, en donde las modelizaciones informáticas asignaban por entonces al Mitch una dirección hacia el noroeste que amenazaba directamente las costas de Belice (en donde ningún puerto seguro se podía ofrecer al *Fantome*), Guyan March decide retomar el mar y hacer movimiento hacia el este, con la intención de dar la vuelta al huracán por el sur, y escapársele poniéndose a seguro bajo la protección de la isla de Roatán. Entretanto el Mitch, cuyo curso parecía haberse estabilizado en la dirección noroeste, había alcanzado su presión más baja: 905 milibares en su centro, donde se desencadenaban vientos de aproximadamente 300 km/h. Felizmente, este clímax del cataclismo se produjo en alta mar, a buena distancia de las costas hondureñas, donde entretanto los aguaceros tan intensos como interminables no cesaban.

El lunes 26 de octubre, como a las 22:00 horas, cuando el *Fantome* se encontraba a media distancia entre Belice y Roatán, los eventos súbitamente se tomaron dramáticos: los expertos de Florida acababan de darse cuenta de que la acción de un lejano anticiclón desestabilizaba la trayectoria del huracán, trabando su orientación hacia el noroeste. Un frente frío proveniente del Golfo de Méjico hacía retroceder el avance del ciclón. Una hora más tarde, esto iba a provocar una súbita inflexión de su recorrido hacia el Sur.

El martes 27 de octubre, alrededor de las 4:00 de la mañana, tal como lo había proyectado, Guyan March logró conducir su *Fantome* al sur de Roatán. Pero en lugar de hallar ahí un refugio como se esperaba, se da cuenta de que, en realidad, se había lanzado de plano en la boca del huracán. En el mensaje que dirige a su armador, el capitán March hace saber que, sometida a vientos de 75 a 90 km/h, su nave se bambolea peligrosamente sobre un mar muy agitado. Y en ese lugar la profundidad es demasiado importante como para poder lanzar el ancla.

Al medio día, los vientos que asaltan la nave no cesan de reforzarse: alcanzan ahora una velocidad comprendida entre 90 y 110 km/h, y provocan, alrededor del barco, olas de más de 10 metros. En vano la tripulación se esfuerza en echar una ancla flotante. Una mortal deriva va entonces a

comenzar: orientándose hacia el sur, como atraído por un imán, el Mitch se precipita directamente sobre el *Fantome*, ahora solamente separado por 60 km del centro del monstruo, ¡donde reinan vientos de más de 280 km/h!

A las 13:00 horas, en una maniobra desesperada para tratar de esquivar la embestida del monstruo, Guyan March lanza de nuevo su embarcación hacia el este. Pero, como poseído por una voracidad inexorable, Mitch cambia súbitamente su marcha en la misma dirección, aproximándose ferozmente al *Fantome*, que ahora no está a más de 40 km del ojo del ciclón. A las 16:30 h, en un último mensaje transmitido sobre su línea satelital, Guyan March hace saber que el *Fantome* debe aguantar vientos de 185 km/h y afrontar olas de más de 25 metros de alto. Más tarde, solamente el silencio contestará las angustiadas llamadas lanzadas desde Miami: el *Fantome* ya no dará más signos de vida.

Los días siguientes, tres aviones de la guardia costera norteamericana, así como un helicóptero basado en el *H.M.S. Sheffield* y una fragata británica, patrullaban la región. La misma fragata una vez llegada a esos lugares, recorrió el mar en todos los sentidos, en busca de eventuales naufragos. No se encontró ninguno. Sólo algunos escasos restos (siete chalecos salvavidas, dos balsas vacías, una escalera de seguridad, y algunos otros vestigios menores provenientes del *Fantome*) aparecieron esparcidos sobre las playas de la isla de Guanaja y del norte de Roatán, tristes testigos de la destrucción del navío y de la desaparición de su tripulación.⁵

Esta trágica agonía del velero floridense pone en relieve el carácter aberrante de la trayectoria del Mitch. Irónico resulta el hecho de que, si el *Fantome* se hubiera quedado tranquilamente anclado en Omoa, nada le hubiera sucedido, y hoy en día la Windjammer Barefoot Cruise Co. podría tranquilamente amasar dólares paseando felices cuadrillas de turistas descalzos a bordo de su flamante barco. Si no ocurrió así fue, tal vez, por excesiva confianza en la sofisticación de los medios de comunicación que le permitían al capitán March y sus patronos enterarse, «en tiempo real», de las informaciones del Centro Nacional de Ciclones de Miami, tomando los pronósticos como verdaderas predicciones, creyeron posible jugar, con fina habilidad, con la ciega embestida del ciclón. Eso no tomaba en cuenta que, frente a la complejidad de estos fenómenos tan inestables como violentos, hasta los especialistas mejor dotados con los equipos más modernos todavía

5 Además del capitán March, de nacionalidad británica, 32 hombres perdieron la vida en este naufragio: 14 hondureños (de los cuales 11 eran originarios de la Isla de Guanaja), 4 nativos de Granada, otros 4 de San Vicente, 3 jamaíquinos y siete miembros de la tripulación respectivamente ciudadanos de Nicaragua, Santa Lucía, Panamá, Trinidad-Tobago, Antigua, Rumanía y Gran Bretaña.

se ven obligados a confesar su incapacidad de prever los acontecimientos más allá del muy corto plazo.

Irrupción del ciclón en el espacio insular hondureño

Consideremos ahora los efectos del ciclón en el territorio hondureño. En la jornada del lunes 26 de octubre, el huracán Mitch había golpeado con pleno furor las Islas del Cisne. Solamente se encontraban ahí un oficial y cinco marinos de la fuerza naval hondureña, que debieron asistir, impotentes y aterrorizados, a la devastación completa de la vegetación y al vuelo de los techos de los raros edificios existentes en ese lugar.

Entretanto, en el norte del país, contrariamente a lo que muchos tenían previsto el día anterior, todavía no se habían producido vientos violentos. No obstante, esto no tranquiliza a la población: los incesantes aguaceros sobre los suelos, ya saturados, provocan una elevación rápida del caudal de los ríos haciendo, más que nunca, temer severas inundaciones. Éstas prometen ser más graves todavía que las que ya están afligiendo a la Mosquitia. Primero: porque en el norte la población está mucho más concentrada que en el extremo este del país. Y sobre todo porque los ríos Ulúa y Chamelecón, que corren paralelos en el valle de Sula, para poder habilitar al valle circundante y establecer en él grandes plantaciones (principalmente de bananos), fueron canalizados con simples diques de tierra o bordos, como se dice en Honduras. De tal suerte que las plantaciones, así como muchas zonas habitadas, se sitúan a una altura inferior al nivel de los ríos cuando éstos crecen, razón por la cual esas zonas corren el peligro de ser sumergidas si los bordos ceden. Accidente tan frecuentemente sucedido en el pasado que, se puede considerar, se ha convertido en una desgracia habitual.

La inquietud está tan viva frente a este diluvio -no termina de abatirse sobre el norte del país-, que las estaciones de radio y televisión deciden mantener la antena abierta 24 horas al día, para informar ininterrumpidamente al público, gracias a sus corresponsales movilizados hacia los lugares devastados, o que amenazan con serlo. Esta tarea se vuelve siempre más difícil a medida de que los derrumbamientos y deslaves de lodo cortan las carreteras e impiden que la gente se traslade de un lugar a otro... o que se regrese desde donde ha podido llegar. Las primeras rupturas de puentes comienzan también a reportarse.

Desde la mañana de ese día lunes, en toda la zona norte, se instó a maestros y alumnos para que no acudieran a los establecimientos escolares. Varias empresas hicieron lo mismo instando a su personal a permanecer en casa.

Durante el día, otras plantas se vieron en la necesidad de cerrar por la falta de transporte para sus empleados. Entretanto, la gente se enteró de que, sobre el mar, el ciclón había llegado al grado 5 en la escala de Saffir Simpson. Esto no deja de espantar a los que recuerdan que, en 1974, el devastador ciclón *Fifi* no había sobrepasado el grado 3. En Tegucigalpa, al cabo de una reunión del Consejo de Ministros, el presidente Flores decreta el estado de alerta roja sobre el litoral atlántico y el espacio insular del país. El personal de socorro (bomberos, rescatistas, etc.) es despachado, desde la capital, hacia las regiones en donde las catástrofes de envergadura parecen inminentes. Nuevas disposiciones son igualmente tomadas para evacuar, al día siguiente por la mañana, a los miles de turistas que se encuentran veraneando en las Islas de la Bahía.

Estas islas (de oeste a este: Utila, Roatán y Guanaja, a las que se suman unos cayos menores) constituyen, hoy en día, uno de los 18 departamentos de Honduras. La más oriental de las tres, Guanaja, se enorgullece de haber sido descubierta, el 30 de julio de 1502, por Cristóbal Colón en persona. Sorprendido de encontrar ese lugar tropical cubierto de bosques de coníferos, el almirante le dio el nombre de Isla de los Pinos. Apelativo más tarde abandonado y sustituido por una toponimia que se supone procedente de la lengua autóctona. Larga, con alrededor de 17 kilómetros de longitud y entre 5 y 6 en su mayor anchura, esta isla, en gran parte montañosa, había visto su población duplicarse en el curso del decenio precedente al Mitch, pasando de 5,000 a 10,000 habitantes.

La mitad de éstos viven en la cabecera de la isla, Bonacca, situada en la parte sur, no sobre la isla misma, pero a corta distancia de ella, en un par de arrecifes coralinos. Los fundadores de Bonacca eligieron este lugar para alejarse de los jejenes y preservarse de la malaria, que en aquel tiempo infestaba el lugar. En gran parte construida sobre pilotes, Bonacca no cuenta con edificios de concreto y mucho menos con automóviles. Éstos no servirían de nada, sabiendo que todos los desplazamientos se efectúan en bote. Es por eso que, a fin de acortar las distancias entre Bonacca y los poblados de la costa norte de la isla, se ha cavado un canal que corta la isla.

Aparte de Bonacca, las dos únicas aglomeraciones con que cuenta Guanaja son simples poblados de pescadores, denominados Mangrove Bight y Savannah Bight situadas, la una y la otra, en la parte septentrional de la isla, respectivamente una al norte y la otra al sur. Situadas a corta distancia la una de la otra, estas dos localidades están unidas por una tosca carretera que recorren, bien que mal, los únicos dos vehículos de motor que se pueden ver en la isla.

En las proximidades de Mangrove Bight, una sociedad mercantil constituida por iniciativa del actor franco-hollywoodense Christopher Lambert

acababa, en 1998, de adquirir unas 20 hectáreas de bosques, bordeadas por una playa de arena blanca de 280 metros de largo. Su intención era construir un complejo hotelero de prestigio. Diseñado por el arquitecto Jean Louis Godivier, este proyecto, con una inversión estimada en 58 millones de dólares, había sido simbólicamente inaugurado en 1998 por Lambert en persona, acompañado por Claudia Schiffer, el embajador de Francia en Honduras y algunos otros invitados de honor. Su realización, que debía extenderse 6 años, estaba destinada a iniciarse en enero de 1999. Esto era, sin contar con la maldad del Mitch. La concisión apartada de la isla y sus pequeñas dimensiones no permitieron que jugara a su favor la regla que quiere que, al tocar tierra, la violencia de un ciclón decrezca rápidamente, puesto que su formidable energía deja de alimentarse de la elevación, en forme de espiral, del aire sobre la superficie de un mar calentado a más de 25 grados. Ahora bien, además de no producirse la desactivación del ciclón, por razones que nadie está verdaderamente en condiciones de explicar, en lugar de pasar rápidamente su camino, el huracán Mitch, que había atacado Guanaja en la noche del lunes 26 al martes 27 de octubre, se estacionó sobre la isla durante... ¡39 largas horas! Nunca, desde tiempo inmemorial, un lugar habitado había sido expuesto durante tanto tiempo a un cataclismo ciclónico de tal violencia y de tal duración...

No fue sino hasta el jueves 29 por la mañana, cuando los elementos por fin se calmaron, que los habitantes de Guanaja, al salir de algunos edificios más estables en donde habían encontrado refugio, pudieron darse cuenta de los daños sufridos por su isla y comenzar a contarse. Los unos a los otros, las escenas de horror vividas. Algunos vieron a los pines, arrancados como por una mano invisible, pasar volando como si fuesen aviones. En Savannah Bight, muchos testigos impotentes tuvieron que asistir a la agonía de un barco pesquero que, después de romper sus amarras, sirvió por largo tiempo de juguete de las olas para finalmente zozobrar, llevando a la muerte al patrón pesquero y a los cuatro tripulantes que se encontraban a bordo.

En la isla, las destrucciones son alucinantes. Desmantelada por la violencia de las olas, una buena parte de Bonacca, construida sobre pilotes, no existe más. El 90% de las viviendas de Mangrove Bight y de Savannah Bight se encuentran severamente dañadas: la casi totalidad de los techos de lámina fueron arrancados por los vientos que soplaban a más de 200 km/h, y yacen lejos de las paredes que otra vez los sostuvieron. Por toda la isla, la electricidad y los teléfonos no son más que recuerdos. El mismo paisaje natural no tiene nada de reconocible: uno pensaría estar en el Vietnam luego de un ataque con productos deshojantes. Sobre los árboles que se han mantenido de pie no se ve una sola hoja: las que no fueron arrancadas por la borrasca han sido destruidas por las trombas de agua que el huracán, después de haberlas levantado desde la superficie del mar, proyectó sobre la isla en apocalípticos

aguaceros de agua salada. Completamente desfigurada, Guanaja habrá de esperar muchos años antes de que su vegetación recupere un aspecto normal.

Felizmente, las pérdidas en vidas humanas no están a la altura de los desastres materiales. Arruinados, aterrorizados, empapados, pero con la vida salvada, los habitantes de Guanaja pueden contarse: fuera de los marinos naufragados, pocos son los que no atienden al llamado. En sí mismas, y a pesar de su excepcional duración en este caso particular, la monstruosa brutalidad de los vientos ciclónicos se revela poco mortal. Y además los daños que producen son extremadamente localizados: a poca distancia de la trayectoria del Mitch, la vecina isla de Roatán quedó prácticamente indemne.

En el norte: inundaciones desastrosas desde antes de la llegada del Mitch

Sobre el continente, cuando las primeras borrascas comienzan a sacudir la costa norte, en altas horas del martes 27 de octubre, el peligro que éstas representan no es más que poca cosa, en comparación con la amenaza de las inundaciones. Sobre esta materia, durante todo el día, las malas noticias van a desgranarse principalmente provenientes del puerto de La Ceiba, tercera ciudad del país. Primeramente ésta se ve aislada del Departamento de Colón por el derrumbamiento del puente sobre el río Cangrejal, a consecuencia de una descomunal riada. Un poco más tarde, la ciudad se encontrará completamente aislada, cuando la caída del puente sobre el río Perla, al oeste, la privará de comunicación con el resto del litoral atlántico. Por otro lado, la importancia de la marejada que provoca el ciclón estacionado sobre Guanaja hace que el mar penetre hasta el centro de la ciudad ocasionando algunos estragos y aumentando las inquietudes de los pobladores, ahora completamente apartados del resto del país. (Esta marea ciclónica también se hará sentir, aunque de manera atenuada, hasta en Puerto Cortés y Omoa).

El aislamiento es aun peor en el Departamento de Colón, fundamentalmente a consecuencia del desbordamiento del río Aguán y sus afluentes cuyas riberas, llenas de plantaciones y haciendas ganaderas, están invadidas por las aguas. Una cuarentena de puentes fue arrastrada por el río, haciendo toda circulación por carretera prácticamente imposible. Las bananeras y las plantaciones de palma africana se encuentran sumergidas. Algunas 15,000 cabezas de ganado se pueden considerar como perdidas: arrastrados por la crecida, sus cadáveres flotan sobre las aguas furibundas... En suma, en los municipios de Sonaguera, Sabá, Tocoa y Trujillo, no se escuchan más que lamentos y gemidos de angustia, y llamados de socorro.

Alertado por el eco de estos desastres, cuya verdadera amplitud por ahora nadie puede medir con exactitud, aunque su revelación viene a sumarse a las también alarmantes noticias provenientes de la Isla del Cisne, de Guanaja y de la Mosquitía (esta última afligida por una inundación general), el Gobierno declara el litoral atlántico en estado de alerta máxima y decreta el estado de emergencia sobre el resto del país, en donde por todos lados las lluvias torrenciales no cesan. Éstas no perdonan las regiones limítrofes con la vecina Nicaragua. El cierre de los aeropuertos de La Ceiba y de Islas de la Bahía es además decidido por los poderes políticos, lo que pone un término a toda esperanza de evacuación de la población por la vía aérea.

Pero lo peor todavía estaba por suceder. Se iba a producir hacia la medianoche, en Santa Rosa de Aguán, en la desembocadura del río Aguán. Allí, chocando de frente con la marea ciclónica que mencionamos anteriormente, la crecida del río va a ver sus efectos decuplicados. Así es, al elevar fuertemente el nivel del mar, esta marea excepcional traba el desembocamiento del exagerado caudal de las aguas del río. Éstas se ven rechazadas río arriba, provocando su desbordamiento en las tierras aledañas. Sin que nadie haya tenido el tiempo de tomar disposiciones para protegerse, este fenómeno provoca el brusco engullimiento de la casi totalidad de las zonas pobladas, principalmente habitadas por garífunas.⁶ Trescientos de ellos desaparecerán ahogados y arrastrados hacia el mar. Más adelante relataremos la suerte increíble que corrió una de esas víctimas, milagrosamente rescatada. Algunos 3,500 salvaron sus vidas por subirse precipitadamente a los techos de sus casas, o por quedar asidos de los árboles que emergían de las olas desbordadas y que éstas no arrancaron de raíz.

El miércoles 28, mientras que el ciclón sigue ensañándose sobre la Isla de Guanaja, el diluvio, que no deja de abatirse sobre la región de El Progreso y de San Pedro Sula, así como la crecida de los ríos, hace vanos todos los esfuerzos de la población para reforzar los bordos: en varios puntos éstos ya no tardarán en ceder. COPECO, el organismo gubernamental encargado de la prevención de las catástrofes, no puede hacer más que advertir a la población sobre el carácter inevitable de la ruptura de los bordos.

En una intervención televisada el presidente Flores decreta, esta vez, el estado de emergencia sobre todo el litoral atlántico. En Tegucigalpa, la solidaridad nacional se moviliza en pleno: se hacen colectas de víveres y otros

6 Los garífunas son una población de negros que, escapando de la esclavitud, se fueron a vivir con los indios Caribes de la Isla de San Vicente, de los que adoptaron el idioma y la cultura. A fines del siglo XVIII, habiendo tomado partido por los revolucionarios franceses, fueron derrotados por los ingleses. En 1796, éstos los deportaron masivamente a la isla de Roatán. Acogidos en el litoral hondureño por los

artículos de primera necesidad, con la intención de acudir en ayuda de los damnificados de la zona norte. ¿Pero, cómo hacer llegar estos socorros? No hay hora en la que no se informe de nuevos destrozos en la red de carreteras y deslizamientos del terreno que las vuelven inutilizables. Ahora, Yoro está aislado, como desde el día anterior lo ha estado La Ceiba. La comunicación por medio de carreteras está igualmente interrumpida entre San Pedro Sula y Tela, entre San Pedro Sula y la vecina ciudad de El Progreso. Decenas de municipios están ahora sin agua ni electricidad. Se rumorea que el número de damnificados en el país no debe ser inferior al medio millón.

Aprovechando la contrariedad general y el aflojamiento de la vigilancia, un motín estalla en la prisión de Trujillo. Durará seis días, sin que los presidiarios logren salir de la penitenciaría. En La Ceiba, por el contrario, una revuelta similar termina con la evasión de 300 reclusos que van a engrosar el número de malhechores que, sacándole ventajas a la situación, hacen reinar el terror y el pillaje entre la población. De modo que la maldad de los hombres se suma al furor de los elementos.

El jueves 29 de octubre, el huracán deja por fin de ensañarse sobre Guanaja. Retomando su camino, el ojo del ciclón termina por tocar el litoral de Honduras, ligeramente al este de Trujillo. Llegado ahí, y privado del calor de las aguas de la superficie del mar que le proveen su energía, el Mitch declina, perdiendo inmediatamente su calidad de ciclón para descender al grado relativamente benigno de tormenta tropical. En ese momento la rapidez máxima de los vientos ya no excede los 100 km/h y su velocidad no cesa de disminuir rápidamente: al día siguiente, la velocidad máxima caerá a 65 km/h. Ya no se deploran desgracias atribuibles a los vientos. En cambio, las lluvias se mantienen catastróficas, abatiéndose sin cesar sobre toda la región del istmo.

Esta vez es en el valle de Sula donde los desastres son incalculables. Los bordos del Ulúa y del Chamelecón han cedido en distintas partes. La ciudad de La Lima está completamente sumergida. Sus 80,000 habitantes no han tenido otra opción que la de ir a aglomerarse en los escasos lugares que no están bajo agua. Buen número ha ido a parar a los tramos de la carretera de cuatro pistas que domina el nivel de las plantaciones y de las zonas habitadas. En aquellas zonas de alto riesgo, el número de pérdidas de vidas humanas debió ser elevado. Todas las bananeras que circundan a El Progreso han sido

españoles, han permanecido allí hasta nuestros días, con su físico africano y su curiosa cultura de inspiración amerindia. Una parte de ellos fue a radicarse en Guatemala, y sobre todo en Belice, en donde curiosamente hacen figura de “pueblo autóctono”.

anegadas por las aguas, así como algunos barrios de San Pedro Sula. También invadido por las aguas, el aeropuerto internacional está fuera de uso. En helicóptero, el presidente Flores se ha trasladado a los lugares devastados tratando con su presencia de aportar algún consuelo a los damnificados. Por primera vez, el mandatario evoca la idea de hacer un llamado a la comunidad internacional. En ese momento los daños del Mitch se estima ascienden a 5,000 muertos, 10,000 desaparecidos y un millón y medio de damnificados.

Ese jueves 29 de octubre se registran igualmente las primeras pérdidas humanas fuera de la zona atlántica, cuando unas gigantescas masas de lodo y piedras sepultan varios poblados y colonias del municipio de La Libertad, en el Departamento de Comayagua. Mil quinientas personas se reportan desaparecidas. Ganando las zonas accidentadas del país, la catástrofe cambia radicalmente de naturaleza: esta vez ya no son los anegamientos sino los derrumbes y los deslizamientos del terreno los que causan la desgracia. Cabe notar una vez más que, como ya era el caso para las inundaciones en la zona atlántica, el desastre de la Libertad se produjo mucho antes del paso de la perturbación propiamente tal, que ese día estaba estacionada sobre Olanchito para posteriormente dirigirse hacia el norte del departamento de Olancho en donde una cuarentena de puentes será destruida y se deplorará la pérdida de unas 3,600 cabezas de ganado.

Si ahora volvemos la mirada hacia Nicaragua, veremos que este vecino país tampoco quedó a salvo de las destrucciones. La Mosquitia nicaragüense se inundó igual que la hondureña. En la parte occidental del país, colindante con Honduras, no se ha visto brillar el sol durante toda una semana; las lluvias son incesantes y los ríos cargan monstruosos caudales. Uno de los efectos de esto fue la subida del nivel de las aguas en los dos grandes lagos del país. Una elevación de 4 metros en el Lago de Managua generará un fenómeno que no se había producido desde 1955: una conexión se restablece con el Lago Nicaragua bajo la forma de un torrente impetuoso, cuyo caudal se elevó hasta 83 metros cúbicos por segundo. Desafortunadamente las familias miserables, que la precariedad había llevado a construir sus cuchitriles en estos lugares inundables, verán sus escasas pertenencias arrastradas por las aguas. Pero su desgracia no es más que poca cosa en comparación con lo que va a producirse en las faldas del volcán Casita.

Más adelante contaremos lo sucedido en ese lugar. Por ahora, antes de alejarnos de la costa norte -en donde las inundaciones demorarán buen rato para enjugarse- conviene insertar, en nuestra relación de los hechos, uno de los más fabulosos episodios ocurridos en el curso de esta trágica secuencia de eventos que se reagrupan bajo el nombre de Mitch: la increíble y emocionante historia de Isabela Arriola.

El milagroso rescate de Isabela Arriola

Previamente a los acontecimientos que vamos a relatar se podía considerar que, a fuerza de voluntad y de trabajo, Isabela Arriola, enérgica mujer de 36 años de origen garífuna, había logrado salir adelante en la vida. Muy joven, al terminar su escolaridad primaria, se había trasladado a Tegucigalpa, en donde subsistió con trabajos de planchadora y otras tareas domésticas. Así logró financiar sus estudios de profesora de primaria. En 1998, varios años después de su retorno a la tierra natal, Isabela Arriola fungía como maestra en la escuela José Cecilio Del Valle, de Barra del Aguán.

Como su nombre lo indica, esta localidad se sitúa en la desembocadura del río Aguán, en la ribera izquierda, donde termina la carretera procedente de Trujillo. Al otro lado del río, en la ribera derecha, se encuentra Santa Rosa de Aguán, el poblado garífuna más grande de Honduras, en donde viven entre 4 y 5 mil personas. Son pocas las casas construidas de materiales resistentes en este gran poblado. Gran parte de las viviendas conserva todavía el aspecto tradicional de la casa garífuna: paredes de madera con techo de palma. No se ven autos en las calles: a falta de un puente sobre el río Aguán, sólo por barco se puede acceder a Santa Rosa, a partir de Barra del Aguán. Allí sí, en contraste con Santa Rosa, se notan algunos signos de modernización, como testimonio de la relativa prosperidad de los que viven por este lado.

Es este el caso de la familia que Isabela Arriola forma con su marido Ricardo y sus tres hijos. Agricultor, Ricardo explota, no lejos de allí, un buen cultivo de arroz. Después de sus horas de clase, Isabela completa los ingresos de la familia atendiendo un pequeño puesto de bebidas gaseosas. Entre unas y otras todas estas actividades les permitieron a Ricardo y a Isabela hacer construir, no muy lejos de la carretera, una buena casa de concreto en la que, admirable lujo para la zona, cada uno de sus tres hijos tiene su propio cuarto. Por fin, signo adicional de bonanza: Ricardo e Isabela han podido comprar un buen carro de doble tracción - usado, es cierto - con alrededor de 15 años- pero que todavía anda muy bien. En suma: todas las apariencias del éxito y la felicidad para esta familia de empeñosos hondureños.

Una felicidad frágil, sin embargo, que la noche del martes 27 al miércoles 28 de octubre de 1998 iba a reducir a la nada. Ese día ya hacía buen rato que la crecida del río generaba inquietud entre la población. Pero ¿qué hacer? Ricardo e Isabela no quisieron tomar el riesgo de abandonar su casa para ponerse a salvo: eso sería ofrecerla a la codicia de los ladrones que merodean en la región, sin que ninguna fuerza policiaca esté presente para controlarlos. Fue así que, sin pensar que se trataba de una imprudencia, decidieron quedarse ahí con la esperanza de que las aguas no llegasen a tocar su casa.

El martes 27 de octubre, mientras duró la luz del día la situación parecía todavía sostenible. Pero de pronto, en la noche, como por la una de la mañana, el ruido del agua que invadía la casa despertó a Isabela: ¡había ya varios centímetros en la sala! Cargando a sus hijos dormidos, Ricardo e Isabela corren bajo el aguacero hasta la casa de una vecina quien, ella sí, ya había tomado la precaución de abandonar su vivienda. Situada en una pequeña elevación de terreno, dicha casa presentaba además la ventaja de tener dos pisos. Otra pareja de vecinos con cuatro hijos ya estaban refugiados allí. En su compañía la noche se hizo larga para todos por la angustia que les producía, en la oscuridad, la implacable subida de las aguas.

Pasaron algunas horas. Escrutando el grisáceo amanecer, Ricardo e Isabela tuvieron que constatar, con inmenso dolor, que su casa había sido llevada por la corriente. No le va mucho mejor al edificio sobre cuyo techo se encuentran ahora, asediado por las aguas. Provisionalmente preservada en una suerte de pequeño islote, la casa ya vacila, oscilando peligrosamente sobre sus bases. El eco de los llamados desesperados de los naufragos se pierde sobre la turbulenta superficie de las aguas. Nadie les escucha. Además, ¿quién podría venir en su auxilio? El día anterior, una patrulla de policía, despachada desde La Ceiba (más con el propósito de darse cuenta de la situación que para traer socorro a quien fuera), perdió la vida al cruzar un puente, en el preciso momento en que éste cedía ante la furia de las aguas.⁷

Hora tras hora, la situación de Isabela y de quienes estaban con ella se hace más desesperante. Dándose cuenta de que es inminente el derrumbe de la casa en donde hallaron refugio, Ricardo decide confiar sus últimas esperanzas a un gran árbol plantado en el patio. Usando una cuerda tendida por él entre el árbol y la casa, logró trasladar su familia a las ramas de dicho árbol. Hecho esto, apenas tuvieron el tiempo de felicitarse por la iniciativa: a las 7:00 horas, las paredes de la casa se desplomaron estrepitosamente, provocando sobre las aguas que están alrededor, un oleaje tan fuerte que arrancó de raíz el árbol ¡en donde se encuentran refugiados Ricardo y su familia! Isabela apenas tuvo el tiempo de ver cómo su marido y sus dos hijos eran llevados por la corriente. Ella misma trató de sostener entre sus brazos al menor, el pequeño Anderson de 6 años de edad. Pero no pudo evitar que el agua se lo arrebatara, para engullirlo, igual que a sus hermanos mayores, en un torbellino sin regreso.

⁷ El vehículo de estos desafortunados policías recién será descubierto ocho años más tarde, en octubre del 2005, por una excavadora que saca arena del río, varios kilómetros más abajo. Pero siguen sin encontrarse los restos de los hombres que viajaban en él.

Llevada hacia el mar por la fuerza de la corriente, Isabela emergió un poco más lejos, asida de unos restos flotantes de madera. Alrededor de ella nada más que agua se ofrece a su vista: no se ve ninguna tierra, ningún ser viviente. El único objeto que pudo divisar fue la raíz de un árbol que estaba derivando a alguna distancia. Nadó hasta allá, tomando el riesgo de dejar los frágiles restos que hasta ese momento le habían salvado la vida; logra alcanzarla y acomodarse en ella. Por lo menos allí, fuera del alcance directo de las olas, se encuentra en un ambiente algo más seco, aun cuando las ráfagas de vientos muy violentas abaten incesantemente aguaceros torrenciales sobre esta pobre mujer, mientras que gigantescas olas provenientes de todas partes llevan hacia sólo Dios sabe dónde el frágil esquife en que ella se encuentra acurrucada.

Varios fueron, sin duda los que como Isabela conocieron la angustia de esta precaria supervivencia. Nunca sabremos cuántos, debido a que, contrariamente a lo que pasó con ella, nunca regresaron para contarlo. En efecto, si se puede relatar con tanta precisión el calvario de Isabela, es porque ella sobrevivió. Y en circunstancias tan extraordinarias que el mundo entero se maravilló de ellas: ¡no fue sino después de más de 6 días de deriva en el mar, siguiendo una corriente que la llevaba hacia el noroeste que Isabela, arrastrada al mar el miércoles 28 de octubre por la mañana fue, por fin, rescatada, el martes 3 de noviembre, a inicios de la tarde! En este entonces se encontraba a 100 millas de la costa. Náufraga sin jamás haberse embarcado en ningún barco, Isabela Arriola acababa de escribir una de las páginas más fabulosas del patético historial de la supervivencia en el mar.

¡Cuánta furia por vivir debió haber animado a esta pequeña mujer para lograr sobrevivir a lo largo de unas 150 horas en el mar sobre la precaria embarcación que le ofrecía un tronco de árbol! ¡Desmontada un número incontable de veces mientras duró la tempestad, cada vez Isabela halló el coraje y la fuerza necesaria para volver a treparse y asirse de nuevo en el palo! Más tarde, cuando finalmente la tempestad se calmó, con qué lucidez y valentía osó, deliberadamente esta vez, descender de su esquife para ir nadando alrededor de él y pescar restos flotantes: tablas, plásticos y cartones gracias a los cuales, poco a poco, logró armar una plataforma un poco más segura sobre la cual le fue posible abandonarse a algunos instantes de sueño sin correr el peligro de caer al mar.

Dios, dice ella, la ayudó. Cree en Él tan fervientemente que jamás dejó de dirigirle plegarias, interrumpiéndose de hablarle sólo para cantarle cánticos... o para reñirlo a veces, cada vez que ella estimó que Dios le infligía excesivas pruebas. Así, por ejemplo, cuando al segundo o al tercer día de su viaje sin rumbo —ella no recuerda muy bien— apareció durante largas horas flotando

a la deriva, a poca distancia de la balsa de Isabela, el cadáver de un niño inflado por su permanencia en el agua, la cara mirando hacia el interior del mar. Esto era demasiado: «¿Por qué? -requisió ella al Creador-, ¿por qué venís a recordarme sin cesar que yo perdí a mis hijos? En este momento, lo que necesito es valor, ¡y no reavivar mi tristeza!» Debió escucharla: poco tiempo después, el cadáver del niño se alejó, fuera de la vista de Isabela...

Felizmente no sólo había desperdicios y cadáveres en la superficie del mar. También entre los desechos innumerables que flotaban en la superficie de las aguas se encontraban abundantes cocos. Cada vez que Isabela podía hacerse de uno de ellos, le rompía la cáscara golpeándola contra el árbol sobre el cual se encaramaba. El contenido de estos cocos le permitió hidratarse y alimentarse. Por otro lado, empujada por el instinto de conservación de la vida, hizo exactamente todo lo necesario para asegurar su supervivencia en el mar. Primero, sus ropas, que había conservado, la protegieron del frío durante todo el tiempo en que reinó la tempestad y los aguaceros. También fue gracias a éstas que se pudo evitar la deshidratación y las quemaduras una vez que el sol volvió a reverberarse sobre la superficie de las aguas. Por otro lado, los frecuentes zambullidas de Isabela en el mar, en busca de desechos y alimentos, le evitaron la anquilosis y las escaras que hubiera inevitablemente sufrido al mantenerse sentada en una misma posición a bordo de su balsa. En fin, estos baños frecuentes le permitieron quitarse las costras de sal que las salpicaduras de las olas depositaban sin cesar en su piel y que, a falta de esas frecuentes inmersiones, hubiesen terminado por carcomerla.

Todo esto demuestra una extraordinaria sangre fría, una seguridad de juicio y un deseo salvaje por sobrevivir. Estos permitieron a Isabela repeler las decisiones funestas que pueden sugerir la precipitación y la desesperación. Así, en un momento dado, su errática travesía marítima hizo que la balsa de Isabela pasara entre las islas de Roatán y Utila, a más corta distancia de ésta última. Isabela cuenta que, en un momento, tuvo la tentación de lanzarse al agua con el propósito de ganar la orilla nadando. Una voz interior le susurraba que no lo lograría. Pero la tentación era muy fuerte y llegaba hasta límites irresistibles. Pero por último, la voz de la razón tuvo la última palabra, haciéndole decidir que mejor le valía quedarse a bordo de su nave de infortunio. Esto la salvó.

No obstante, ya era urgente que la rescataran. En efecto, en la madrugada del sexto día, el martes 3 de noviembre, ella se encontraba muy debilitada. Esa mañana, ella recuerda que un gran pájaro blanco vino a posarse en la extremidad del tronco de árbol que la llevaba. Haciéndole frente, Isabela se puso a conversar con el ave, contándole su vida y sus tristezas y suplicándole, pues podía volar, que llevara a la tierra la noticia de que ella estaba viva, allí, en el mar, y que ya era tiempo de que la vinieran a socorrer.

Sin embargo cuando, como si hubiera comprendido el encargo, el gran pájaro blanco levantó el vuelo, de repente ella se sintió muy sola y, por primera vez, se puso a llorar.

¿Era esto el principio del fin? Probablemente. Pero, de manera inesperada, dicho fin iba a resultar feliz. En efecto, algunas horas más tarde, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, el ruido de un motor de avión sacó a Isabela de su abatimiento. Con todas las fuerzas que le quedaban se levantó y se puso a agitar una bolsa de plástico roja encontrada entre los bártulos que había pescado en el mar. Cuando la divisaron desde la aeronave, se lo hicieron saber tirando cohetes. Además, antes de alejarse, el avión dió algunas vueltas alrededor de ella para que se tranquilizara. Seguidamente no faltó mucho tiempo para que el avión fuera reemplazado por un helicóptero. Surgiendo del horizonte, éste se dirigió directamente hacia Isabela y vino a pararse en vuelo estacionario sobre ella. Suspendido de un cable, un hombre descendió a reunirse con la náufraga en su incómodo esquiife. Sus primeras palabras para Isabela fueron para preguntarle si hablaba inglés. Ella le contestó que no. Por lo tanto fue por ademanes que el hombre le hizo entender que ella tenía que agarrarse fuertemente a él y cerrar los ojos —lo que ella hizo con determinación— mientras los estuvieron jalando hacia el helicóptero.

Algunos minutos más tarde el aparato aterrizó en la plataforma del *H.M.S. Sheffield*, nave sobre la cual viajaba embarcado. Por suerte, este buque de guerra británico todavía no había recibido la orden de poner fin a su búsqueda de eventuales sobrevivientes del *Fantome*. De modo que fue por la desgracia de estos otros infelices que Isabela pudo ser salvada. En efecto, sin esa circunstancia, ¿quién hubiera pensado en ir a alta mar a buscar sobrevivientes de las inundaciones de Honduras?

Algunos días de recuperación en el hospital de Trujillo bastaron para que esta inflexible mujer se recuperara. Regresada al mundo, Isabela recibió con tristeza la noticia de que mientras duraba su propio infortunio el desastre se había extendido a toda Honduras y a la vecina Nicaragua.

El deslave del volcán Casita en Nicaragua

El viernes 30 de octubre, transcurridos ya más de cuarenta y ocho horas desde que Isabela había sido llevada al mar por las enloquecidas aguas del río Aguán un horroroso drama, atribuible a las lluvias periféricas del Mitch, va a enlutar a Nicaragua: el deslizamiento del volcán Casita.

Casita es un pequeño volcán inactivo situado a 140 km. al noroeste de Managua y a una cincuentena de kilómetros de la frontera con Honduras. El volcán culmina a 1405 m. y en su cima se abre un pequeño cráter de un

centenar de metros de ancho y de apenas una treintena de metros de profundidad. Entre el pie del Casita y la pequeña ciudad de Posoltega pasa la ruta panamericana que une a México con Panamá.

Ese día, en las laderas del volcán, los campesinos se mostraban tristes y preocupados. Llueve sin cesar, de manera torrencial, desde hace más de una semana. Como consecuencia de la prolongada ausencia del sol durante el día, las noches son frías. Aquí, normalmente, la temperatura ascendiente a 35° durante el día y en la noche sólo se disfruta de un poco de frescura antes del amanecer. Esta vez en cambio los habitantes, con su ligera vestimenta, tiritan durante toda la noche. Su moral, ya muy afectada por lo que están viviendo, se deteriora aún más con lo que les muestran las emisoras de televisión. Entrecortando sus informaciones con la habitual propaganda comercial, éstas no paran difundiendo imágenes de desastre: inundaciones en la Mosquitia, que una fabulosa crecida del río Coco transformó en un inmenso lago de aguas lodosas de donde solo emergen las cimas de los árboles;⁸ desbordamiento de los lagos en el centro del país; derrumbes y hundimientos de terrenos en los departamentos del Noroeste, colindantes con Honduras, que el desplome de los puentes aisló del resto del país...

Pues, en las faldas del volcán Casita impera la ansiedad. Por cierto, aquí no son la inundaciones las que amenazan. No hay ningún río que pueda desbordar. Inquietan, en cambio, extraños ruidos que regularmente se escuchan desde las entrañas del volcán.⁹ Los más optimistas tratan de tranquilizarse recordando que cada año, en período de lluvias, es normal escuchar gruñir al volcán de esta manera. Otros, al contrario, presienten una catástrofe mayor y, sin temor a pasar por cobardes, se declaran listos para dejar el lugar. Lo que los retiene, la mayoría de las veces, es el miedo de abandonar sus bienes a disposición de los ladrones o de los mismos vecinos ¿quién sabe? listos para robárselo todo.

Desde la antevíspera de ese viernes, 30 de octubre, el empleado encargado del mantenimiento de las antenas de televisión instaladas en la cima del volcán Casita, había hecho saber a sus superiores que abandonaba su puesto para a ponerse a salvo.¹⁰ El mismo día en las ondas de una radio local, la alcaldesa de Posoltega, Felícita Zeledón que porque es maestra todo el mundo llama

8 Centenares de miskitos encontraron la muerte por ahogamiento; otros se quedarán aislados por la corriente durante varias semanas antes de que fuera posible evacuarlos.
9 Estos ruidos no tienen nada que ver con la actividad volcánica. Proviene de la "reptación de los suelos", ciertas capas geológicas deslizándose sobre otras, a consecuencia de infiltraciones de aguas. Este fenómeno es habitual, y no es grave en tanto que no se llegue a un punto de ruptura, como va a suceder aquí.

«la profe» se había hecho eco del peligro que representaba la abundancia extraordinaria de lluvias y de las aprehensiones que inspiraban los ruidos inhabituales provenientes del volcán. Ella intimaba a las autoridades superiores a que evacuaran las poblaciones ubicadas en las faldas del Casita. Pero se burlaron de ella sus adversarios políticos: tomándola por loca (era, pues, sandinista), nadie tomó en serio su alarmismo, calificándolo de «histórico». El día siguiente, las lluvias, sin disminuir ni cesar ni un solo momento; y el volcán persistiendo en hacer sonar sus rugidos, ninguna novedad se había producido. ¿No era esto la prueba de que se había tenido razón al no inquietarse?

Es así como se llegó a la madrugada del viernes 30 de octubre. Llueve, todavía. Y la gente sigue tiritando. Y no se ve gran cosa: la tercera parte más alta de la montaña se desapareció de la vista por las espesas nubes negras que la cubren. Los borborismos provenientes de las entrañas de Casita han cambiado de naturaleza y de intensidad, llevando a su extremo máximo los tormentos de los más angustiados, tal vez también los más lucidos. Una habitante cuenta:

«Se escuchaban en el suelo unos burbujeos acompañados por ruidos sordos y temblores. Era horroroso. Entonces, con mi esposo, decidimos irnos. Siendo muy chiquitos nuestros hijos tres meses y un año y medio, los metimos en dos sacos que normalmente sirven para cargar maíz. Hicimos en ellos unos huequitos para que pudieran respirar. En otras bolsas más, echamos alguna ropa y alimentos. Mi marido caminando adelante y yo atrás, emprendimos la marcha, cada uno cargando al hombro una punta de la vara. Así bajamos hasta Posoltega.»¹¹

Éstos salvarán sus vidas. Pero no así la mayor parte de sus vecinos, a excepción de aquellos que, testigos impotentes y horrorizados, se escaparon de la avalancha a uno y otro lado de ésta. A éstos se les agregaron otros pocos que milagrosamente se salvaron del aplastamiento bajo la corriente de lodo y piedras, protegidos por los escombros de sus casas o por algún otro elemento que resistió.

Al medio día, en efecto, cuando la tormenta tropical Mitch estaba pasando sobre Olancho, 350 km más al norte, un enorme desprendimiento de tierra

10 «Me voy, declaró él a sus superiores. El volcán está muy raro. En la tarde, ha escupido agua, piedras, lodo, rocas, y hasta troncos de árboles. El cielo derrama trombas de agua, y las nubes están tan bajas que ya ni puedo ver las instalaciones. No sé que va a pasar. Ya me voy. Abandono mi puesto. Presiento que se va a producir un desastre». (Citado en JARRY 2000, p. 22).

11 Citado en JARRY 2000, p. 23.

lodosa se produjo, y empezó a rodar hacia abajo, a lo largo de las faldas del volcán. Los habitantes de los poblados de El Porvenir y Rolando Rodríguez apenas tuvieron el tiempo de ser prevenidos por un enorme rugido proveniente de la cima de la montaña («como si una cuadrilla de helicópteros hubiera sobrevolado el volcán», recuerdan los sobrevivientes). Una avalancha despiadada estaba precipitándose sobre ellos. Más alta que el techo de las casas, y con una anchura en este lugar de más de 500 metros, esta ola de lodo líquido mezclada con rocas y árboles arrancados, sepultó en un instante estas dos localidades y a sus habitantes. Siguiendo su ruta hacia abajo, cortó la carretera panamericana a la altura de valle Las Mayoras para finalmente, aminorando poco a poco su velocidad a medida que llegaba a la planicie, detenerse en los primeros arrabales de Posoltega.

Entre los habitantes que vivían sobre el trayecto del deslizamiento no hubo más que 180 sobrevivientes. Ocho días más tarde sólo los restos de una parte de las víctimas habían podido ser ubicados. El terreno, todavía muy blando, hacía muy difícil y extremadamente peligrosa la intervención de los rescatistas. Por todas partes no había más que extensiones viscosas, engañosamente recubiertas por una capa dura y agrietada, producto de una desecación superficial. De esta capa, sembrada de toda clase de desechos, emergían aquí y allá restos semienterrados de seres humanos y animales. Ahí hacían su agosto los perros, los zopilotes y los puercos errantes. Desde la Panamericana, en donde el tráfico fue restablecido a duras penas, se divisaba muy bien en el flanco del volcán el diseño de una suerte de fabulosa autopista: era la huella color café claro trazada por el derrumbe, de un total de 15 kilómetros de largo y alcanzando hasta 5 kilómetros de ancho en la parte baja de su recorrido.

El análisis a posteriori que los científicos hicieron de esta catástrofe, determinó que ésta consistió de dos fases, de las cuales la primera se dió el 30 de octubre, entre las 10:30 y las 11 de la mañana:

«Se trató primero, en la parte suroeste del volcán Casita, del desprendimiento de un bloque de 60 metros de alto, 150 metros de ancho y 20 metros de espesor. El desprendimiento de este bloque desencadenó, por su caída, una avalancha de desechos orientada hacia el sureste, afectando en su paso al pueblo de Argelia. Luego giró hacia el suroeste. [...] La avalancha se detuvo a una distancia comprendida entre dos y tres kilómetros a partir de la cima del volcán. Por dejar en este lugar la pendiente de ser muy pronunciada, el flujo perdió una parte de su energía cinética. Entonces, los materiales deslizados formaron en ese rellano un dique natural de piedras, árboles, arena y otros materiales arrancados en su paso por la avalancha. En este lugar los depósitos llegaron a tener un espesor de cuatro a cinco metros, pero sin ninguna matriz para consolidarlos. Hacia las 14:00 horas se inició la segunda parte de la

*avalancha, que revistió todas las características de un lahar.¹² Éste se produjo seguidamente a la ruptura de la barrera natural formada por la primera avalancha, como consecuencia del embalsamiento de grandes cantidades de agua detrás del amontonamiento de desechos».*¹³

Se estima que, habiéndose devastado una superficie de 60 kilómetros cuadrados, provocando la pérdida del 70% de las tierras cultivables, el desprendimiento del volcán Casita le costó la vida a más de 2,300 personas.

El diluvio golpea la capital hondureña en una sombría noche

En Honduras; suspendimos nuestra crónica de los hechos en el momento en que, el jueves 29 de octubre, las primeras vidas humanas se perdieron fuera de la zona atlántica, sobre los primeros contrafuertes montañosos del centro del país, arriba del valle de Sula. La ansiedad comienza entonces a ganar Tegucigalpa en donde las diferentes quebradas que surcan la ciudad acarrearán corrientes que la memoria local decreta «sin precedentes». De pronto ya nadie se siente seguro de que, como en otras ocasiones, los efectos del ciclón no se sentirían en la ciudad.¹⁴

Para comprender lo que va a seguir, es indispensable tener en mente la configuración geográfica muy peculiar de la capital de Honduras. Tegucigalpa está situada en una vasta hondonada cuyo fondo se encuentra a una altitud de aproximadamente 1,000 metros. De los cerros que la encierran baja un gran número de quebradas, estrechos y abruptos torrentes en donde se producen, en períodos de lluvia, brutales crecidas. Durante el resto del tiempo, o bien estos cauces están secos, o no se perciben en ellos más que insignificantes hilos de aguas contaminadas. Nacido en las montañas al sur de Tegucigalpa, el río Grande (también llamado río Choluteca, desde que se ha descubierto el punto de llegada de su recorrido, lo cual no debió ser evidente para los primeros habitantes de Tegucigalpa) recoge en el fondo de esta hondonada el caudal de diversos afluentes. Entre los más importantes, a su entrada en la ciudad, el

12 El fenómeno conocido bajo el nombre de *lahar* resulta generalmente del fundimiento brutal de un glaciar bajo el efecto de un fuerte aumento de la temperatura sobre los flancos de un volcán activo. En noviembre de 1985, este tipo de fenómeno fue el origen de la horrorosa catástrofe de Armero, en Colombia, que costó la vida a 22,000 personas.

13 in: HARDY 2000, pp. 43-44.

14 Las viejas crónicas cuentan que, pocos años después de su construcción, el puente Mallol fue víctima, por primera vez el 23 de octubre de 1822, de la furia de las aguas, que destrozaron los dos pilares adyacentes a la ribera de Comayagüela. A causa de la

río Grande se alimenta primero del río Guacerique. Luego, en el centro de la ciudad recogerá el aporte del río Chiquito. Precisamente, el centro histórico del reducido pueblo que fue Tegucigalpa bajo la Colonia se encuentra ubicado sobre el promontorio escarpado deslindado por la confluencia entre el río Chiquito y el río Grande.

Originalmente, Tegucigalpa no era más que un simple Real de Minas, a donde los mineros de los centros de extracción de los alrededores venían a abastecerse y a gastar sus ganancias en francachelas. En frente, en la ribera izquierda, donde un ensanchamiento del valle del río Grande forma una pequeña planicie, se había instalado, conforme al esquema del colonial, un pueblo de indios destinado a servir de anexo agrícola y de reserva de mano de obra para el centro español. Por mucho tiempo, no se transitó más que vadeando de un lado a otro, siempre y cuando las corrientes no lo impedían. No es sino, un poco tiempo antes de la Independencia, que un puente de piedra fue construido, gracias a la iniciativa del último alcalde español, Narciso Mallol.

Las dimensiones aparentemente desmedidas de este puente (así como de las obras más recientes que hoy le hacen compañía) son testigos de la extraordinaria desproporción entre el estado del río la mayor parte del año (durante la cual sólo un pequeño hilo de agua zigzaguea entre los arenales) y el enorme caudal que lo puede llenar a la hora de sus corrientes más fuertes (el único momento en el que de verdad se merece el nombre de río Grande). Pero no es ésta la particularidad más extraña de este río: siendo tributario de la cuenca del Pacífico, situado en el sur, el río Grande atraviesa la capital de sur a norte, ¡es decir, en sentido contrario a su destino final! No es sino hasta después de un largo recorrido hacia el interior del país, indispensable para encontrar la salida de la hondonada de Tegucigalpa, que el río pasará esta vez, tomar la correcta dirección hacia el sur, una treintena de kilómetros al este de la capital.

debilidad de las finanzas locales durante los primeros años de la Independencia, la reconstrucción demoró varios años. Posteriormente, algunas fotografías dan fe de que, el 10 de octubre de 1906, una corriente sobreabundante puso a prueba una vez más la solidez del puente Mallol, que en esa época era todavía el único existente en Tegucigalpa. En esa ocasión, cedió un solo pilar (situación que no se producirá en 1998). En 1974, con el huracán Fifi (que se recuerda como la primera catástrofe de escala verdaderamente nacional vivida en Honduras previamente al Mitch), las crecidas importantes que se registraron en Tegucigalpa no tuvieron más efecto que el de impedir momentáneamente, por medidas de precaución, el tránsito vehicular y de peatones en los diferentes puentes de la capital.

Siguiendo entonces su ruta, que no cesa de pasar alternativamente por estrechamientos y planicies, en un momento dado, sobre algunos kilómetros, el río Grande fungirá de frontera con Nicaragua. Después de esto, internándose de nuevo en el territorio hondureño, su cuenca se vuelve paulatinamente más amplia, haciéndose propicia para la instalación de cultivos irrigados a medida que nos acercamos a la ciudad de Choluteca, a la cual el río le debe el segundo nombre que se le atribuye. Más allá de esa ciudad, el estuario del río se expande hacia el Golfo de Fonseca por una planicie cubierta de manglares. Notemos que, a pesar de su relativa longitud (250 km.), y en razón de la extraordinaria inconstancia de su caudal así como de la violencia de sus crecidas, en ningún momento el río Choluteca es navegable.

En vista de las realidades geográficas que acabamos de exponer, uno podría preguntarse cómo es posible que la capital de Honduras se haya establecido en un lugar tan poco propicio para el desarrollo de lo en que hoy en día se ha convertido: una vasta conurbación de más de un millón de habitantes nacida de la unión, mediante varios puentes, de Tegucigalpa, centro nacional de la administración política y de los negocios, con Comayagüela, el antiguo pueblo de indios, ahora convertido en una populosa ciudad. La fusión de estas dos ciudades no ha borrado sus contrastes: la primera es una ciudad jardín; por todas partes sus colonias residenciales suben al asalto de las montañas rodeantes, ásperamente disputadas con los migrantes del campo, que tratan de asentar en ellas sus tugurios. Allende del río Grande, la plana Comayagüela bulle en actividades artesanales y oportunistas, multiplicando los pequeños puestos semi-improvisados en los mercados populares. De este lado también hay una cintura de barracas miserables.

En conjunto, esa conurbación corre a la apoplejía. La circulación de los automóviles es lenta, ruidosa y contaminante. La razón principal reside en el relieve, tan irregular que, después de hacer de Tegucigalpa la única capital latinoamericana privada de ferrocarril, impide hoy en día que se pueda trazar una pista de aterrizaje conforme a las exigencias modernas de seguridad. Veremos, más adelante, cómo esta insensata topografía va a jugar un rol funesto en la catástrofe Mitch. Luego expondremos también la hipoteca mortal que su abastecimiento de agua hace pesar sobre esta ciudad, tan inapropiadamente situada.

Esto demanda una explicación. Al principio, en efecto, los españoles, al momento de escoger el sitio de la capital de esta lejana provincia de su imperio, la habían fijado en Comayagua, en una vasta planicie en el pleno corazón del país, «a igual distancia entre los dos mares», como solía decirse en esa época. Más tarde la República, lógicamente, mantuvo su capital en ese lugar. Vino entonces, a la entrada del último cuarto del siglo XIX, el liberal reformador Marco Aurelio Soto a asegurarse el control del país y a cambiar de sitio la

capital. Dos razones lo empujaron a trasladar la capital: por un lado, poseía personalmente poderosos intereses en las minas situadas en los alrededores de Tegucigalpa; por otro lado, estaba motivado por liberarse de la influencia de la élite conservadora y clerical que reinaba sobre Comayagua, la antigua capital. He ahí el porqué decidió transferir la sede de su gobierno a Tegucigalpa.

Desde entonces, el polo del poder político y de los asuntos económicos quedó donde Soto lo había establecido. Y el crecimiento desordenado de esta nueva capital continuó mecánicamente, en ausencia de toda consideración de índole ecológica o social, en tanto que la antigua Comayagua no cesaba de hundirse en el nostálgico recuerdo de su hegemonía colonial. A continuación, primero como consecuencia del desarrollo de la economía bananera durante la primera mitad del siglo XX, y ahora por el auge de las maquiladoras, le nació a Tegucigalpa un nuevo rival en el norte del país: San Pedro Sula, cuya modernidad acentúa el parecido con una ciudad norteamericana. Pero su volumen demográfico no llega todavía ni a la mitad del de Tegucigalpa.

*

* *

Descrito el escenario, intentemos ahora reconstruir el curso dramático de los eventos que, a partir del viernes 30 de octubre de 1998, van a desolar la capital hondureña. La tarea no es fácil y a veces arriesgada, por la circunstancia de que esta catástrofe se desarrolló prácticamente sin testigos, es decir sin observadores distanciados e independientes capaces de describir el conjunto de los hechos y su curso. En cada situación particular, en efecto, los sobrevivientes no fueron testigos más que de la parte del desastre que les tocó vivir personalmente. No es más que recopilando los relatos de muchos de estos testigos, que pudimos reconstituir el escenario que exponemos a continuación.

En la mañana de ese viernes 30 de octubre, seguía lloviendo torrencialmente. Y la radio hacía saber que ocurría lo mismo en el resto del país. Todos los aeropuertos estaban cerrados y la red de carreteras, cortada en múltiples lugares, es inutilizable. Los diversos torrentes que surcan la capital resuenan furibundos, llevando troncos de árboles y desechos de toda clase. El aspecto positivo de todo esto es que la basura y otros detritus voluminosos que los ribereños tienen la mala costumbre de echar en los cauces han sido completamente eliminados, por primera vez después de largo tiempo.

El volumen de las crecidas es más y más preocupante. La madrugada anterior, jueves 29, el alcalde César Castellanos, luego de haber constituido

un Comité Municipal de Emergencia, destinado a proteger a las personas en zonas de riesgo, hizo desalojar, como hay que hacerlo todos los años, a los desdichados que construyen sus chozas en el mismo lecho del río. Y desde la madrugada de ese viernes, se vió al mismo alcalde, con la ayuda de los bomberos y socorristas que se quedaron en la capital (los otros habían dejado la ciudad para ir a socorrer a los damnificados del Norte, y se encontraban ahora en la imposibilidad de regresar), ir de puerta en puerta, para tratar de convencer a los residentes de las márgenes del río de ponerse en resguardo dejando sus moradas. La mayor parte se negaba, temiendo abandonar sus bienes en manos de los ladrones. Muchos no se decidieron sino hasta el último minuto, cuando ya tenían el agua hasta la cintura. Otros perderán la vida por el entercamiento de no querer alejarse de sus pobres bienes.

De hecho, hacia las 9 de la mañana del viernes, los primeros siniestros comenzaron a producirse en la capital: desbordándose de su lecho, el río Chiquito inundó, poco a poco, el barrio La Hoya, en donde las antiguas casas, hechas de madera y adobe, caían las unas tras las otras. La corriente amenazó luego la vieja penitenciaría, establecida en la ribera norte de aquel río. Mitad por pánico y mitad por aprovecharse de la situación, un motín estalló entre los prisioneros. Para captar imágenes de lo que ocurría, un reportero del periódico *El Herald*, Víctor Saucedá, trepó al techo de un inmueble vecino. Mala suerte: este inmueble se derrumbó y Víctor Saucedá desapareció en la aguas turbulentas del río Chiquito. No se encontrará jamás su cuerpo. El desdichado periodista fue la primera víctima de este funesto día que se llevaría a muchos otros, anónimos.

Entretanto, los pilares de los puentes que unen Tegucigalpa y Comayagüela comienzan a desaparecer, anegados por la subida de las aguas. ¿Hasta dónde llegará esta crecida del río Grande? La ansiedad aumenta entre el público. A las 14:00 horas, el Correo Central cierra sus puertas al público y la dirección prefiere mandar a sus empleados de vuelta a su casa. Muchas casas de comercio deciden hacer lo mismo. Sigue lloviendo. Hacia las 16:30 horas, el aguacero da breves señales de intermitencia. Pero no es más que para volver a empezar de inmediato y con mayor fuerza. En este momento, no hace falta más que apenas un metro cincuenta para que las aguas del río Grande lleguen al nivel del tablero del puente Mallol. A las 18:00 horas, habiendo aumentado considerablemente la corriente, los policías prohíben el paso de los peatones por el puente. Por poco tiempo todavía el puente ha de seguir a la vista de los curiosos: pronto se verá completamente sumergido por las aguas.

A las 20:00 horas, la electricidad se corta en Comayagüela. Una media hora más tarde hay ya un metro de agua en la Primera Avenida. Algunos vehículos flotan. Otros se hunden. A las 21:00 horas, en el mismo lugar el agua alcanzó ya la altura del segundo piso. Completamente recubiertos por

la corriente, los puentes Mallol, Soberanía y Carías desaparecieron de la vista. La noche no permite a los testigos identificar exactamente todo lo que arrastran las aguas del río Grande. Fugazmente se perciben vigas, fragmentos de casas, automóviles, muebles, frigoríficos, troncos de árboles, cadáveres humanos y de animales...

Unos diez minutos más tarde, el cerro El Berrinche, que se encuentra sobre el lado oeste del río Grande, hacia la salida de la ciudad, en el lugar en donde el valle se cierra para encañonarse, se derrumba ruidosamente con todas las barracas situadas en sus costados, sumergiendo a la Colonia Soto y formando en el lecho del río un dique que, haciendo obstáculo al curso del agua, va a agrandar todavía más el lago que la corriente está formando en toda la parte baja de Comayagüela. A las 22 horas la electricidad se corta, esta vez en toda la capital. Los televisores dejan de funcionar; de ahora en adelante no habrá más información sino por medio de las radios de pilas.

Por la parte superior de la ciudad, el río Guacerique contribuye también al desastre: luego de hacer desaparecer la Colonia La Primavera y parte del Barrio Lempira sumerge, como a las 22:30 h., a la Colonia Loarque y a la Colonia Río Grande. Mientras tanto, no deja de llover y las aguas no cesan de subir de nivel. Cerca de las 22:30 h., de repente, la corriente deja de progresar. Parece que por fin alcanzó su nivel más alto. Apenas empezó la gente a reconfortarse con esto cuando un irresponsable anuncia por radio que se van a abrir la compuertas de la represa Los Laureles para liberar los 15 millones de metros cúbicos de agua que ésta contiene. Noticia que luego será desmentida. Pero los que la habían escuchado se quedaron con el susto.

Sin embargo, no es porque las aguas dejaron de subir que la catástrofe ha llegado a su fin. Esa noche reserva todavía lo peor para los residentes de la mal nombrada Colonia Buena Esperanza: hacia las 3:00 de la mañana la montaña sobre la cual ésta se encontraba asentada se derrumba llevándose al abismo viviendas y habitantes. Es éste el último episodio funesto de esta calamitosa noche. La lluvia que caía de manera continua desde las 13:00 h. del día anterior se da por fin un poco de descanso. Esta vez no cabe duda: la corriente está bajando. Hacia las 4:30 h., no hay más que un metro de agua sobre la Primera Avenida de Comayagüela (al mismo nivel que el día anterior a las 20:30 h.). Hacia las 6:30 h., poco después de que un día muy opaco se levantó sobre el sábado 31 de octubre, el viejo puente Mallol reaparece a la vista, emergiendo victoriosamente de las aguas del río que esta vez no dieron razón de él.

*

**

Será a posteriori que se podrá esclarecer las causas precisas de la gigantesca corriente que, en espacio de algunas horas, subió a más de 10 metros sobre las riberas que normalmente contienen las más importantes crecidas del río Grande. La causa fundamental reside en las lluvias torrenciales que durante 40 horas, prácticamente sin interrupción, precipitaron sobre la capital un total de 28 pulgadas (7,112mm) de agua. Derramándose en la superficie a causa de la saturación de los suelos, esta cantidad de agua llegó a las quebradas con una violencia acentuada por lo escarpado de las pendientes.

La destrucción causada por el derramamiento de las aguas se agravó por el hecho de que la corriente no fue continua al igual que la lluvia que la alimentaba. En múltiples lugares los desechos acumulados por las corrientes se trabaron en las quebradas, creando embalses que amortiguaron momentáneamente el flujo de las aguas. Esto alivió provisionalmente los lugares situados río abajo. Pero cuando estas barreras cedieron por la presión de las aguas, fue con la violencia de una fuerte marejada que las aguas súbitamente liberadas vinieron a golpear a estos lugares que por un momento se creyeron indemnes. Muchas veces, los puentes dieron lugar a la formación de semejantes diques improvisados, antes de desaparecer por derrumbamiento.

Todos estos factores jugaron su papel en la catástrofe de Tegucigalpa, en donde la sola subida del río Grande, si se hubiera tratado sólo de ella y que hubiera sido continua, no bastaría para explicar la amplitud de los daños. Antes de los eventos, existía al sur de Tegucigalpa un lago conocido con el nombre de laguna El Pescado. En la noche del 30 al 31 de octubre las orillas de este lago cedieron, liberando en dirección de la ciudad una enorme ola cuya duración fue de más o menos media hora. En ese momento culminante de la crecida, la rapidez de las aguas del río Grande alcanzó los 7 metros por segundo. Tenemos razones para pensar que el golpe de ariete dado por la evacuación de las aguas de la laguna El Pescado no fue un factor ajeno al derrumbe del cerro El Berrinche. A su vez, viniendo desdichadamente a taponar la salida de la hondonada de Tegucigalpa, el material producido por este derrumbe formó una barrera que contribuyó a acrecentar el nivel de las aguas empozadas sobre el espacio urbano situado río arriba, en donde se formó un verdadero lago.¹⁵

15 Este embalse no desapareció por completo cuando el dique cedió bajo la presión de las aguas. Hasta alrededor de dos meses después de la catástrofe subsistía allí todavía un abultamiento, causa del mantenimiento, sobre la parte baja de la ciudad, de una vasta laguna de agua pútrida, cuyo contenido de 29 millones de metros cúbicos hubo que bombear, hasta que la maquinaria del SOPTRAVI pudiera intervenir en el lecho del río, para liberarlo de los restos del derrumbe y devolverlo a su cauce normal.

El desastre prosigue su cabalgata río abajo hasta el mar

La dramática importancia de los desastres sufridos en Tegucigalpa, hizo que en un primer tiempo la gente no se preocupara mucho de las calamidades ciertamente menos monstruosas, aunque considerables que, en el transcurso de ese funesto viernes 30 de octubre de 1998 y de la noche siguiente, se produjeron en otros puntos del país.

Arriba de Tegucigalpa, el viejo centro minero de San Juancito, otrora de mucha importancia pero hoy caído en desuso, vio su parte central completamente devastada por la furia de las aguas. Al igual que un gran número de casas, una ceiba gigantesca centenaria que reinaba sobre el pueblo, por la cual la población tenía veneración, no pudo resistir la furia de las aguas: rompiéndose de raíz, cayó tumbada para siempre. Más al sur, sobre la vertiente del Pacífico, el río Nacaome, cargando también una corriente fenomenal, destruyó parcialmente la antigua localidad de Pespire, reduciendo a la nada el terruño agrícola que la circundaba.

En cuanto al río Choluteca, ya responsable de la devastación del centro de la capital, éste siguió sembrando destrucciones a lo largo de su valle, y sobre todo en la parte inferior de éste. Ya hemos mencionado el extraño diseño que adopta el curso de dicho río. Al dejar la capital en dirección al norte para encurvarse hacia el sur después de recorrer un amplio meandro, el río Grande sólo cruza al principio lugares relativamente poco habitados, donde no produjo más que pequeños estragos. Este fue el caso hasta que, llegando a las tierras bajas que anuncian la proximidad de la costa, el valle del río Choluteca se ensancha, creando espacios propicios para el desarrollo de actividades agrícolas, y por lo tanto al establecimiento de centros de población relativamente más importantes.

Es así que, a la entrada de la planicie del sur, Morolica es o más bien era la primera localidad de importancia al lado de la cual pasaba el río Choluteca que recibe, un poquito más abajo, el aporte del río Texíguat. Antes de los hechos, esta encantadora población de aspecto tradicional, agrupaba alrededor de su iglesia colonial 312 moradas familiares, razonablemente amplias y muchas veces centenarias, abrigando a 1,900 habitantes. Un poco adormecida en el pasado, lejos de las grandes vías de comunicación, Morolica exteriorizaba algunos signos evidentes de una modesta prosperidad: el 90% de los habitantes estaba provistos de agua y electricidad; y tres meses apenas antes de la catástrofe, 90 de entre ellos acababan de ser equipados con teléfono. Todas estas mejoras se debían mucho a la entrega y el entusiasmo de un joven alcalde de 40 años, Ramón Espinal, que desde 1994 había tomado en sus manos la conducción de los asuntos de Morolica.

En la tarde del viernes 30 de octubre, si bien es cierto que las lluvias inverosímiles no dejaban de caer desde hacía varios días y si era verdad que las corrientes simultáneas de los ríos Choluteca y Texíguat habían alcanzado proporciones inusitadas, nadie podía imaginar que sus aguas combinadas terminarían por invadir toda la superficie del valle, al punto de amenazar la pequeña cabecera municipal. Sin embargo, es eso lo que va a suceder. A decir verdad, el único en temer aquel final fatal fue Ramón Espinal, el alcalde. Pegado al teléfono, no deja de consultar a sus parientes y amigos, radicados en Tegucigalpa, en donde el desbordamiento de los ríos comienza también a producir inquietud.

Afrontando la incompreensión de todos y aun la de su propia esposa que aseveró que había perdido la razón, Ramón Espinal decide entonces hacer evacuar la localidad. Inmediatamente envía por las calles del pueblo comisiones provistas de altoparlantes, dándole a todo el mundo la orden de salir de sus casas para ponerse a salvo en una elevación de terreno que se encontraba en la proximidad. Algunos negábase a reubicarse de buena gana, a tal grado que más de una vez el alcalde tuvo que llegar hasta romper la puerta de recalcitrantes para obligarlos a apegarse a la ordenanza municipal. Finalmente, con la excepción de una sola familia de nueve personas (una pareja de adultos, sus seis hijos, y un tío que vivía con ellos), cuya morada se encontraba un poco lejos del pueblo, todos terminaron por acatar la voluntad del alcalde.

Y por su bien lo hicieron: al final del día de este maldito viernes 30 de octubre, las calles de Morolica comenzaron a ser invadidas por aguas cargando diversos desechos, arrancando a su paso los postes eléctricos para usarlos a manera de mazos contra las paredes de las casas. La electricidad se cortó, reapareció, y luego se volvió a apagar, esta vez para no regresar más. De pronto la inundación, ya increíblemente alta, comenzó a crecer con una velocidad vertiginosa, elevándose en poco tiempo a la altura de los techos que comenzaron a hundirse, unos después de otros, frente a los ojos aterrados de los habitantes, ordenados en una colina vecina como para apreciar el espectáculo. Con cada derrumbe, se escuchaban llantos y clamores de desilusión, sobre todo por parte de los comerciantes y de las personas más acomodadas, que veían todo lo suyo perderse en un instante: ¡Solamente dos de entre ellos habían suscrito seguros! Hubo que detener a algunos que decían preferir suicidarse para no ver aquella desgracia...

Pero lo más terrorífico estaba aún por venir. Prisioneros de las inundaciones (que en ese lugar alcanzarían un ancho mayor de kilómetro y medio), los miembros de la familia López Rodríguez, que no habían aceptado dejar su casa, luego de darse cuenta de que las aguas del río los iban a llevar, habían buscado refugio en las ramas de árboles cercanos. Durante horas se pudo observar, entre la oscuridad de la noche, las lámparas de mano que estos

desdichados mantenían encendidas, y se pudieron escuchar sus voces, dominando por instantes el rugido de las olas, pidiendo patéticamente ayuda a sus parientes y amigos. Pero ¿quién hubiera podido acudir a su socorro sin perder la vida? De pronto, a las 3 de la mañana, el silencio se hizo y la oscuridad se tornó completa. Cuando en fin la madrugada disipó las tinieblas de esa espantosa noche, por más que los espectadores de la colina abrieran desesperadamente los ojos, ahí donde vivía esa familia, ya no había nada que ver: ni árboles, ni casa. Jamás se encontraron los cuerpos de estos nueve desaparecidos. ¿Cuántos hubieran compartido su suerte, sin la enérgica decisión del alcalde?

Sin embargo, la situación de los sobrevivientes no era para nada esperanzadora. Habiendo dejado sus casas pensando que no se alejarían, en el peor de los casos, más que por algunas horas, los habitantes de Morolica no habían prácticamente llevado consigo provisiones. La madrugada del sábado 31 los descubrió, no solamente mojados, y estupefactos por la destrucción de su pueblo, literalmente borrado del mapa, sino también gravemente desprovistos, privados de comida y bebida.

Viendo eso, el inflexible Ramón Espinal tomó otra decisión, que de nuevo algunos de sus prójimos decretaron insensata: se iría a pie hasta la capital (distante a más de 60 km. aproximadamente, y sin saber cuántos obstáculos habría de superar en este caos de cerros derrumbados, caminos destruidos y puentes arrasados), a fin de informar acerca de la desgracia ocurrida en su comunidad, e intentar regresar con socorros. Por supuesto, habiéndose cortado el teléfono, lo mismo que la electricidad, todavía se ignoraba en Morolica el desastre sobrevenido, ese mismo día, en Tegucigalpa.

Finalmente, acompañado por su padre, robusto anciano de 62 años, y de un agente municipal, Ramón Espinal demoró dos días enteros para recorrer la distancia que separa a Morolica de Tegucigalpa. Cuando por fin llegó a la capital, al anochecer del domingo 1° de noviembre, allí todavía se ignoraba por completo la desgracia sufrida en Morolica y, al principio, se recibió la noticia con algunas dudas. Hasta que a fuerza de multiplicar sus apariciones en los diversos medios de comunicación, el carismático Ramón Espinal logró convencer a todo el mundo de la triste realidad de los hechos, asegurándose de paso la aureola de «héroe positivo» de estas funestas jornadas. En el capítulo siguiente, contaremos cómo posteriormente se desarrolló su acción.¹⁶

16 Cf. John Warol ANDERSON: "A hero emerges from Mitch's devastation", in: *The Washington Post*, Monday April 19, 1999, page A1.

Entretanto, la corriente devastadora del río Choluteca había terminado por ir a precipitarse en el Golfo de Fonseca, no sin haber producido, a lo largo del valle, numerosos desastres, que se deben sumar a los descritos. Arriba de Morolica, los habitantes de caseríos peligrosamente situados en la proximidad del río (por ejemplo diversos caseríos dependientes del municipio de Duyure) habían podido ser evacuados. Perdieron sus bienes y moradas pero salvaron sus vidas. Más abajo de Morolica, varias colonias de Orocuina, situadas en los bordes del río, no escaparon de la destrucción. Ocurrirá lo mismo en las colonias situadas en las partes bajas de la ciudad de Choluteca, en donde felizmente la mayor parte de las casas del centro están edificadas sobre una altura, igual que en la vieja Tegucigalpa. Aquí también, al momento de escoger el emplazamiento de su residencia, los españoles de antaño tuvieron la cordura de tomar en cuenta la eventualidad de una crecida del río...

Hoy en día, ya no es el caso: por comodidad y para reducir los costos, las carreteras son trazadas, cada vez que es posible, en los valles, en la proximidad de los cauces de los ríos. Y, lógicamente, los habitantes no tardan en venir a establecerse a lo largo de estas vías de comunicación. En caso de fuertes corrientes, es inevitable que todo se sumerja. Esta fue la causa de numerosas destrucciones de habitaciones y edificios públicos, en muchos lugares situados en las riberas de los afluentes del gran río. Como en Linaca, por ejemplo, en donde en vano los ancianos habían llamado la atención de los más jóvenes, recordándoles el nivel alcanzado por la última gran corriente, a mediados de los años 30. Pero esto no impidió que, en el 2001, a la hora de reconstruir el pueblo, las calles así como las casas y escuelas fueran reedificadas en el mismo lugar en el que el Mitch los había sumergido tres años antes.

A decir verdad, en las planicies del sur, la destrucción de casas ocasionada por el Mitch parece ser poca cosa al lado de los desastres causados al medio ambiente y los daños sufridos en las infraestructuras y en el aparato productivo. Muchas tierras agrícolas se echaron a perder. De uno y otro lado del lecho del río Choluteca, extraordinariamente ensanchado, la capa fértil de la tierra, arrastrada por la corriente fue reemplazada por pedregales y arenales sembrados de desechos. Fruto de decenios de trabajo paciente y obstinada inversión, la mayor parte de las infraestructuras agrarias (y en particular la de los productores de melones y sandías, nuevo recurso económico de la región) desaparecieron o fueron seriamente dañadas: no subsistió gran cosa de las vías de acceso, los pozos, los cercos así como los sistemas de riego; y poco se pudo salvar de la maquinaria, las semillas y otros insumos de los que cada quien disponía. Unas semanas después de la catástrofe, cerca de Choluteca, frente a las dunas de arena que ondulaban ahí donde hace no mucho se encontraba su milpa, un campesino me hizo este comentario que el humorismo

ofrece como último recurso a los que están desesperados; «Ahora no me queda más que comprar sombrillas para ofrecer una playa»...

A la altura de la ciudad de Choluteca (140,000 habitantes), el río con su máximo volumen destruyó prácticamente todo. Ciertamente, como ya lo hemos indicado, el viejo centro histórico fue preservado. Pero poco faltó: todas las calles que llevan al centro se tomaron inservibles así como todos los puentes de los alrededores. A excepción de uno solo: el viejo puente metálico que data de las postrimerías de la segunda guerra mundial y que milagrosamente aguantó el golpe, aun cuando su superestructura conserva hasta hoy en día las marcas de los impactos que imprimió la colisión de troncos arrastrados por la furia del río.

Angosto, y considerado inadecuado para el tráfico moderno, este viejo puente acababa de ser duplicado, a unos cientos de metros de distancia, por una bella obra de arte toda blanca, de una gran pureza de líneas, construida gracias a la cooperación japonesa. De alguna manera también se puede decir que este puente resistió le embestida de las aguas; lo malo es que de un lado y otro de su magnífica estructura, ya no hay riberas: desaparecieron las dos vías de acceso a este monumental puente. Además, ya ninguna agua pasa debajo de su arca: los trastornos traídos por la corriente fueron tan extremos que el lecho principal del río Choluteca tomó otro recorrido, a alguna distancia de ahí, dejando al puente huérfano de sus aguas.

En Choluteca, como en Tegucigalpa, en las horas y los días que siguieron a la catástrofe, a la espera de que se organizaran campamentos para recibirlos, miles de damnificados atolondrados, buscando a sus prójimos o llorando su desaparición, se amontonaron desordenadamente en diversos lugares públicos: parroquias, salones de fiesta, gimnasios, escuelas u hospitales. Las dificultades del aprovisionamiento son grandes: no hay nada que pueda venir de Tegucigalpa ni de países vecinos, afectados por desgracias similares. Nada notablemente proviene de Nicaragua, país con el cual todo tráfico vial ha sido interrumpido por la ruptura de la carretera panamericana. A 24 horas de distancia, en efecto, por una extraña coincidencia, el ciclo de la catástrofe del Mitch vino a acabar aquí, en la zona del litoral Pacífico, a unos kilómetros del volcán Casita, en donde se inició la cronología de sus peores estragos.

En el centro del país, el relato de la continuación de la trayectoria del Mitch resulta casi anecdótico. Llegando a la altura de la ciudad de Gracias, el sábado 31 de octubre, Mitch perdió su calificación de "tormenta tropical", cambiándola por la de "depresión tropical". El 1º de noviembre, en su recorrido ligeramente al norte de la capital de Guatemala, se puede considerar que la depresión ya se encuentra en proceso de extinción: dejó de acompañarse de lluvias torrenciales. Es cierto que los aguaceros todavía causaron algunos derrumbes en las colonias periféricas de Guatemala-Ciudad, pero sin que

esto pueda para nada compararse con las devastaciones catastróficas ocurridas en Honduras y Nicaragua. El 2 de noviembre, recorriendo el norte del Estado de Chiapas, esta perturbación reorientará su trayectoria hacia el norte, llegando al Golfo de México al día siguiente. En su reencuentro con el mar caliente, Mitch cobró un renovado vigor. Pero ya sólo se trata de residuos de la depresión. Después de surcar a lo largo de las costas occidentales de la península de Yucatán, éstos llegarán, el 6 de noviembre, a sacudir el extremo sur de la Florida, sin provocar verdaderos desastres, antes de finalmente disolverse en las Islas Bahamas.

¿Catástrofe “natural” o imputable a la ecología política?

Al acabarse el relato del evento climático, se impone una pregunta: ¿deben, como lo indica con insistencia el lenguaje común, las devastaciones acumuladas durante el Mitch considerarse como el producto de una catástrofe natural? La inteligencia se rebela ante este tipo de calificación, que tiende a relacionar la explicación de los hechos con la acción de una instancia metafísica: la Naturaleza, en la cual difícilmente podríamos reconocer, en el caso presente, la figura tutelar esencialmente equilibrada, benévola y autoregulada que pregonan sus adoradores «ecologistas».

Para liberarse de esta desviación ideológica a la cual nos conduce la idea de Naturaleza, la reflexión desarrollada por Augusto Serrano sobre los diferentes «órdenes de la realidad» nos parece particularmente aclaratoria, en la medida en que opera la distinción entre una «naturaleza primera» y una «naturaleza segunda». La primera, existiendo independientemente de la acción del hombre, se mantiene fuera de la capacidad de intervención de éste. La segunda, por el contrario -que no puede realizarse más que en el seno de la primera, que la precede en la existencia, constituye por excelencia el campo de intervención del hombre en tanto que ser social: es en ella, y en ella sola, que se constituyen los «hechos», que son una mixtura entre las realidades brutas de la naturaleza primera y el producto de la acción humana.¹⁷

Ofreciendo un campo concreto al ejercicio de la libertad y de la creatividad del hombre, la naturaleza segunda constituye el dominio en donde la responsabilidad humana puede implicarse, dando lugar a cuestionamientos éticos. Según Augusto Serrano, los dos niveles de naturaleza son tanto el uno

17 Cf. Augusto SERRANO: «Las órdenes de la realidad», en: *Paraninfo*, Año III, Tegucigalpa, 1992, pp. 113-123.

como el otro objetos para la ciencia, pero no de la misma manera: el conocimiento de las leyes de la primera no nos permite modificar dichas leyes, que se mantienen fuera de nuestro alcance; en cambio, los «hechos» de la segunda se presentan ante nosotros en forma de problemas solucionables y de desafíos superables. Constituyen la esfera de lo que nosotros designamos como «ecología política».

Último en aparecer en la cadena de eventos ligados al Mitch, el desastre que se produjo en El Salvador, en el estuario del río Lempa, ofrece un excelente ejemplo para ilustrar los principios enunciados aquí. No cabe la menor duda que las lluvias sobreabundantes que normalmente se desatan en la periferia de un ciclón ocasionan los desbordamientos de los ríos; y tampoco se puede cuestionar que estos desbordamientos son más importantes en los estuarios en donde convergen todas las corrientes: esos hechos constituyen eventos perfectamente «naturales», característicamente atribuibles a la naturaleza primera, tal como la define Serrano, con sus mecanismos y leyes en los que no podemos intervenir.

En cambio, cuando nos enteramos de que las inundaciones, muy episódicas en el estuario del río Lempa, se convirtieron en un evento catastrófico recurrente a partir de los años 90 (sabiendo que, previamente al Mitch, ya se habían registrado cuatro de ellas que merecieron el calificativo de desastrosas¹⁸). Nos sentimos inclinados a pensar que aquellos desastres ya no son atribuibles a la naturaleza primera, pero sí a la segunda, en la que las acciones humanas, al interferir en la naturaleza «primera», constituyen «hechos», social y políticamente interpretables.

Hasta el inicio de los años 80 la región del Bajo río Lempa, se encontraba en manos de latifundistas que la dedicaban a la ganadería y al cultivo del algodón. Para estos propósitos habían establecido y mantenían, cuidadosamente, un complejo sistema de diques y de canales de drenaje e irrigación. Después, cuando se inició en El Salvador un doloroso decenio de guerra civil, por una parte, la concentración de la propiedad y la precaria condición de los trabajadores rurales hicieron de esta región del Bajo Lempa un importante foco de reivindicaciones sociales y de agitaciones revolucionarias. Además, consideraciones de orden estratégico hacían que el FMLN tuviera mucho interés en mantener esta región bajo su control, porque le daba acceso al litoral y eso le permitía recibir armas por la vía marítima.

18 Cf. SERAROLS 2001, p.91.

Esto no podía dejar de provocar la reacción de las fuerzas gubernamentales. Muchos combates tuvieron lugar y una masacre fue perpetrada por «las fuerzas del orden». Vencida, la guerrilla tuvo que retirarse hacia el volcán San Vicente. Y la zona del Bajo Lempa quedó despoblada hasta el final del conflicto. Al acabarse éste, en el marco de las medidas aplicadas tras los acuerdos de reconciliación nacional, esta región se destinó al realojamiento de antiguos combatientes provenientes de los campamentos de refugiados en Honduras y en Guatemala. En su inmensa mayoría, se trataba de personas pobres, provenientes de la base social y política del ex-FMLN.

Multiplicada por diez, en comparación con las cifras anteriores del año 1980, la población reconstituida en los municipios de Tecoluca y Jiquilisco se había vuelto completamente diferente de la de los «peones» que habían sido desalojados doce años antes. Si se trataba de campesinos o de personas dispuestas a reconvertirse en esa condición, su proyecto sólo consistía en desarrollar pequeñas explotaciones individuales. No tenían, por lo tanto, ni la necesidad, ni los recursos, ni las capacidades técnicas necesarias para volver a poner en uso las viejas instalaciones de drenaje e irrigación. En la indiferencia general, éstas terminaron por deteriorarse. En eso residen las causas de la elevada frecuencia de las inundaciones posteriores a 1990.

Pero hay peor aún. En 1983, había entrado en uso, sobre el curso medio del río Lempa, la central hidroeléctrica «Quince de Septiembre» de San Lorenzo, con un lago artificial de unos 35.5 km² de extensión y una profundidad máxima de alrededor de 40 metros, que le asegura una capacidad de retención de 380 millones de metros cúbicos de agua. El flujo excepcional ocasionado por la abundancia de las lluvias periféricas del Mitch, hizo temer por la seguridad de la cortina. El domingo primero de noviembre de 1998, el gobierno salvadoreño no dudó en decidir el alivio de la represa, sin poder ignorar las desgracias a las que exponía a la mayor parte de la población del estuario (un poco más de 21,000 habitantes en los municipios de Tecoluca y Jiquilisco, que tuvieron que ser apuradamente evacuados, al precio del sacrificio de todos sus bienes). A continuación, se ordenó la apertura de las compuertas, lo que no podía dejar de provocar el sumergimiento de todas las zonas cercanas a la desembocadura del río Lempa.

A sabiendas de que la población afectada consistía en partidarios del ex-FMLN, se puede suponer que para las autoridades de San Salvador, esto pareció ser una acción políticamente aceptable.¹⁹ En vista de lo que precede,

19 Cf. el testimonio del P. Ángel Aranis, reproducido en: SERAROLS 2001, p. 120.

recurrir al concepto de «catástrofe natural» para calificar la destrucción de los pueblos de Jiquilisco y Tecoluca e incluirla bajo tal concepto en el balance de Mitch como fenómeno meteorológico, sería tan indecente como inapropiado. Éste es propiamente un caso que se debe analizar a la luz de la ecología política.

Un mismo razonamiento debe aplicarse a la catástrofe ocurrida en Nicaragua sobre las faldas del volcán Casita, a propósito de la cual describimos más arriba las causas que se pueden asignar a la «naturaleza primera» (reptación de los suelos volcánicos, infiltración de éstos por el excedente de agua, avalancha de lodo y otros desechos, lahar, etc.). Pero aquí también, la «naturaleza primera» no tiene nada que ver con el hecho que los pueblos que fueron aniquilados por el derrumbe eran campesinos que se habían beneficiado de la repartición de tierras por la reforma agraria llevada a cabo bajo el gobierno sandinista. Tampoco tiene nada que ver con la «Naturaleza» el hecho de que la municipalidad de Posoltega, de la cual depende la zona damnificada, continuaba siendo regida por una alcaldesa de convicción sandinista, cuando en 1998 el país se encontraba administrado por un gobierno de ideología contraria. Y no hay dudas de que en esto reside la razón por la cual la medida de evacuación de los habitantes del Casita, que seguramente habría salvado muchas vidas, no fue decretada.

Para ilustrar la distancia que se abre entre los razonamientos sobre la «naturaleza primera» y los que conviene aplicar a la «naturaleza segunda», tales como los define Augusto Serrano, hemos deliberadamente escogido, entre las numerosas devastaciones causadas por el Mitch las dos más importantes que se produjeron fuera de los límites de Honduras. No regresaremos más a estos dos casos, a fin de poder concentrar exclusivamente nuestra mirada en lo que pasó en Honduras, que someteremos a un análisis en todo punto similar.

Pues no es la Naturaleza, evidentemente, la que quiso que, en las planicies del norte, los obreros de las compañías bananeras vivieran en lugares situados bajo el nivel de los ríos encauzados con diques de tierra. No es tampoco la Naturaleza la que quiso que las explotaciones agrícolas fueran destruidas, cuando las maquiladoras resultaron prácticamente indemnes. Ni es la Naturaleza tampoco la que seleccionó las víctimas de la marejada en Tegucigalpa y Comayagüela entre los habitantes de las colonias populares, cuando las colonias residenciales no sufrieron más que disgustos colaterales e insignificantes. Y por fin no es la Naturaleza la que siempre tiende a hacer que sean los más desprovistos los que regresan a habitar las zonas en peligro. Total, ni más ni menos que como el Mitch, la próxima catástrofe que ocurra no será «natural».

Capítulo 2

EL CICLÓN MEDIÁTICO, A CONTRATIEMPO, A CONTRAVERDAD

En Francia, como sin duda en la mayor parte del mundo, el anuncio de la catástrofe del Mitch llegó lentamente. Y, de manera más sorprendente todavía, cuando por fin se convirtió en noticia de primera plana, esto se hizo bajo la forma de revelación en «vivo y en directo» de un evento supuestamente en curso y aparentemente reportado «en tiempo real», ocultando que la comunicación estaba en evidente retraso con la coyuntura del momento. A esa hora, cuando las primeras informaciones sobre el asunto encontraron por fin una resonancia en el mundo exterior, en el lugar de los hechos, a pesar de haber tenido éstos una duración relativamente larga, el proceso catastrófico propiamente tal podía ser considerado como concluido.

Por otra parte, el uso sistemático por parte de esta mediatización tardía, del término *ciclón* para caracterizar la catástrofe sufrida en Centroamérica, tendrá como efecto el difundir en el público la imagen profundamente inexacta de unas destrucciones principalmente atribuibles a la violencia del viento y a una súbita avalancha de lluvias. Clavada en la opinión pública, por la insistencia mediática, esta representación inexacta no podía más que sesgar las reacciones internacionales con respecto a la situación real, provocando, al principio, un indudable retraso en materia de socorros supuestamente «de urgencia» y orientando después hacia vías erróneas la reflexión sobre el tipo de ayuda económica y de cooperación política que necesitaba la situación creada en Centroamérica por las devastaciones del Mitch¹.

1 Un auténtico huracán se habría mostrado más “equitativo” que el Mitch. De hecho, la violencia de los vientos afecta uniformemente la población (aún si es verdad que hay tipos de construcción que resisten mejor). En cambio, las inundaciones y deslizamientos de tierras golpean selectivamente a quienes carecen de los medios necesarios para poder establecer sus viviendas en otro lugar que en las zonas de peligro.

Una información primero ciega, luego entorpecida durante el fin de semana

En Francia, lugar a partir del cual el autor de esta obra siguió el curso de los eventos, la línea de demarcación entre la información propiamente dicha y la elaboración de una ficción mediática es fácil de trazar. Así, cuando el 27 y 28 de octubre el «Journal de 20 Heures»² de TF1 dedicó, respectivamente, 1' y 1'24" a la aparición de un ciclón llamado Mitch sobre el Mar de las Antillas, todavía se trataba de una información objetiva, emitida en tiempo real, acerca de un fenómeno meteorológico que la noticia del martes 27 situaba correctamente sobre el mar, a buena distancia de cualquier lugar habitado.

En cambio, ni durante ese día, ni en los siguientes, se dieron noticias respecto a las inundaciones desastrosas que en ese momento ya estaban afligiendo a Honduras. Es así que empieza a cavarse una separación entre dos categorías de hechos: una catástrofe real que pasa inadvertida, y un «ciclón» hipermediatizado. Creándose así, una distorsión que los relatos mediáticos ulteriores deberán solucionar recurriendo a reportajes ficticios, cuando la catástrofe real logró por fin imponerse en la atención del mundo, obligando a los medios de información a restaurar, para el público, una visión narrativamente coherente de la situación.

Esta reacomodación cronológica sólo comenzó a hacerse después del «puente» del feriado de Todos los Santos, uno de esos largos fines de semana del año que, a la imagen de lo que sucede durante las vacaciones de verano, hacen que, en los países del Norte, la información mediática se hunde en la letargia. No obstante, desde la tarde del sábado 31 de octubre, los medios audiovisuales franceses habían dejado fugazmente filtrar la información que, en relación con el «ciclón Mitch», un desastre se encontraba en curso en Centroamérica. Pero en razón de su brevedad (54" en el «20 Heures» de TFI, y 25" en el France 2), esta información quedó poco aparente y difícilmente interpretable.

Los señalamientos ulteriores de la noticia, al día siguiente en France-Info,³ fueron tan inquietantes como incomprensibles. Dado el tipo de atención semidistrada que se da a esta clase de radioemisoras de información continua, apenas el oído del auditor tiene tiempo de ser alertado por la noticia de que «algo» está pasando en Centroamérica, ya se ha acabado la corta frase del locutor que traía la información sobre el

2 «El Telediario de las 8 de la noche» es el noticiero de información de mayor audiencia en Francia. TF1, France 2 y, en menor grado France 3, son, en ese país, los principales canales de televisión.

3 France-Info es una emisora de información continua, 24/24 horas.

asunto. Habiéndose el locutor apresurado a enfilear otras informaciones, igualmente breves y desemejantes, el auditor que se interesa por Centroamérica no tiene más recurso que esperar una eventual repetición de la noticia en esa misma radio... o ponerse a buscar una confirmación de ella en algún otro medio de comunicación.

Un minuto y 36", el domingo 1º de noviembre por la tarde en TF1 o 1 minuto y 10" en France 2, para otra fracción del público, no aportaron mayor claridad. En razón de su rapidez y de la acumulación heteróclita de los temas abordados, la información televisiva sufre de la misma falta de legibilidad que la de las radioemisoras de información continua. En uno y otro caso, un minuto y algunos segundos sobre un tema cualquiera (y además, en el caso de la televisión, no ayuda el fraccionamiento de la atención del telespectador entre el atractivo de la imagen y la audición del comentario) no pueden más, en el mejor de los casos, que atizar una demanda de información que sólo podrá verdaderamente intentar satisfacerse, al día siguiente, con la lectura de la prensa escrita en la que el lector dispone de más autonomía para buscar información sobre los temas que le interesan.

Es así que sólo fue hasta que se acabó el «puente» de Todos los Santos que pudo comenzar a conformarse, entre los distintos medios informativos, un esquema narrativo menos flojo y contradictorio, para por fin desembocar en la narración de un *ciclón mediático* dramáticamente coherente, aunque radicalmente apartado de la realidad de los hechos.

En Francia, donde la prensa cotidiana no sale el domingo, el medio impreso más pronto en reaccionar fue *Le Journal du Dimanche* fechado del 1º de noviembre, mediante la publicación de doce pequeñas líneas de la Agencia Reuters ilustradas por una micro-fotografía (38x46 mm) representando a un niño en calzoncillos, con el agua llegándole hasta los muslos y jalando una carriola. La leyenda decía así: **NICARAGUA. Devastador ciclón en América Central.** Dicha noticia breve informaba que «el ciclón Mitch, que acaba de cruzar por Nicaragua, Honduras y Costa Rica, ha provocado la muerte de al menos 316 personas. Los refugiados se cuentan por decenas de millares, y vastas zonas cultivadas se encuentran bajo las aguas». [EN REALIDAD EL FENÓMENO MITCH, YA DEGRADADO A NIVEL DE TORMENTA TROPICAL, NO ATRAVEZÓ MÁS QUE A HONDURAS. Y CUANDO SALIÓ DE ESE PAÍS RUMBO A GUATEMALA, YA NO ERA MÁS QUE UNA PEQUEÑA PERTURBACIÓN TROPICAL. EL FENÓMENO MITCH NUNCA PASÓ POR NICARAGUA (GRAVEMENTE AFECTADA, SÍ, POR EL DILUVIO PERICICLÓNICO), Y MUCHO MENOS POR COSTA RICA, PAÍS AL QUE EL PROCESO CATASTRÓFICO NO DAÑÓ EN ABSOLUTO].

La mañana siguiente, el lunes 2 de noviembre, el cotidiano parisino *Libération* publicó una fotografía, esta vez de tamaño normal, mostrando un pintoresco rescate de gallinas en una planicie inundada (probablemente la Mosquitia). Una leyenda impresa en blanco sobre fondo negro acompañaba esta foto: **Nicaragua: ciclón mortal**. Al comentar «la inundación que devasta Nicaragua, Honduras y El Salvador [YANO SE MENCIONA A COSTA RICA] luego del paso del ciclón Mitch», el texto de esta leyenda evocaba por primera vez la catástrofe del volcán Casita, muy correctamente descrita en sus causas y efectos, pero inapropiadamente colocada cronológicamente al afirmar que se había producido «en la noche de viernes a sábado» [CUANDO EN REALIDAD SUCEDIÓ EL VIERNES AL MEDIODÍA]. Venía luego esta precisión [ABSOLUTAMENTE INCONFORME CON LA VERDAD, PERO CIERTAMENTE DESTINADA A CONFERIR LA APARIENCIA DE INMEDIATEZ A LA INFORMACIÓN DADA POR EL COTIDIANO]: «el drama no fue conocido sino hasta ayer [ES DECIR, TEÓRICAMENTE EL DOMINGO 1º DE NOVIEMBRE], cuando los primeros sobrevivientes llegaron a Posoltega, la cabecera más cercana». Al balance de esta catástrofe, evaluado en 2500 desapariciones, *Libération* avisaba que había que sumarle otro total provisional de «800 muertos en Centroamérica».

Esta estimación de las consecuencias del «ciclón» será luego revisada en constante aumento. Así, desde el medio día de ese mismo lunes 2 de noviembre, en *Le Monde* (con fecha del martes 3 de noviembre, pero puesto en venta en París en las primeras horas de la tarde del lunes 2), se podía leer bajo el título **El ciclón Mitch devasta Centroamérica**, una corresponsalía de unas 30 líneas, en la que se mencionaba un saldo general de más de 1500 muertos. El «ciclón» se reportaba como si hubiera «culminado entre el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, alcanzando los vientos una velocidad de 288 km/h». [EN REALIDAD, SABEMOS QUE ESTE PICO DE VIOLENCIA CICLÓNICA HABÍA SIDO ALCANZADO, SOBRE EL MAR, EL 25 Y 26 DE OCTUBRE, Y QUE EN LA NOCHE DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE, LA VELOCIDAD MÁXIMA DE LOS VIENTOS REGISTRADOS NO SOBREPASABA 65 KM/H]. En cuanto al derrumbe del volcán Casita, que el corto artículo de *Le Monde* también menciona, no se le atribuye más que la muerte de 471 personas, a las cuales se deben sumar otras 100 víctimas en El Salvador. 21 en Guatemala y «más de 250» en Honduras. [REMARQUEMOS QUE DE NINGUNA MANERA ESTOS NÚMEROS CORRESPONDEN A LA REALIDAD. ¡Y QUE LA SUMA DE ELLOS NO COINCIDE CON LOS 1500 MUERTOS

ANUNCIADOS EN EL ARTÍCULO!] En fin, el texto mencionaba que «alrededor de 700 000 personas se encontraban sin abrigo en la región».

Comprobamos con sorpresa que, algunas páginas más adelante en esta misma edición de *Le Monde*, en una columna de noticias breves cotidianamente presentadas en un tono sarcástico, figuran cuatro líneas relatando que «Desde el lunes 26 de octubre, el *Fantome*, un crucero norteamericano, desapareció en la tempestad, en alta mar, a lo largo de Honduras». Que la desaparición de un «fantasma» -aunque fuese norteamericano- pueda evocarse a manera de un hecho pintoresco y eventualmente cómico, ya crea un problema. Pero lo que más sorprende, es que en el seno de la redacción de *Le Monde*, nadie se percató de la discordancia de las fechas que se atribuyen, en una misma edición del periódico, a un mismo «ciclón» que supuestamente afectó a Honduras en la víspera o antevíspera del 2 de noviembre [PUESTO QUE EL LECTOR DE UN COTIDIANO PUEDE CONSIDERAR QUE LAS NOTICIAS QUE SE LE PROVEEN SON FRESCAS], y por otra parte creó la «tempestad» que, una semana antes, había hundido el *Fantome*.

Una tardía «estupefacción» atribuida a los Centroamericanos

En descargo de *Le Monde*, hay que notar que su edición del día siguiente, puesta en venta en París, en la tarde del martes 3, se incluyó, bajo un título a cuatro columnas, una corresponsalía mandada desde México por Bertrand de la Grange, en la que se evidencia un real progreso hacia una comprensión menos aproximativa del evento. El título dice: **El ciclón Mitch produce más de 7,000 muertos en dos países centroamericanos**, y el subtítulo añade: **Honduras y Nicaragua fueron devastadas por las inundaciones**. Ilustrando este artículo, un mapa diseña correctamente la trayectoria seguida por el Mitch. Y también figuran, a grandes líneas, las fechas de sus diferentes fases, haciendo ver que su nacimiento como huracán tuvo lugar el 22 de octubre, y que su mayor intensidad fue alcanzada en los días siguientes, cuando todavía el huracán estaba distante de cualquier lugar habitado. Sin embargo, este mapa no pone, para nada, en evidencia la rápida degradación del Mitch a la categoría de tormenta tropical desde el instante en que tocó la costa hondureña. Más bien este mapa deja pensar lo contrario, haciendo figurar en medio del territorio guatemalteco, como parte de la ruta del Mitch posteriormente a su salida de Honduras, un icono que parece simbolizar la persistencia del Mitch en estado de huracán [MIENTRAS QUE, EN LA REALIDAD, EN GUATEMALA, MITCH HABÍA CAÍDO AL NIVEL DE UNA BANAL PERTURBACIÓN].

Sin embargo, el factor de error más significativo que contiene el artículo de *Le Monde* no reside en el mapa pero sí en el texto, que afirma que «los hondureños y los nicaragüenses descubrieron con estupefacción, el lunes 2 de noviembre, la amplitud de la catástrofe que golpeó a Centramérica en el curso de los últimos días». Con la apariencia de un inocente artificio estilístico para introducir hábilmente el tema, dicha manera de relatar los hechos contribuye a confirmar al lector en una representación falsa del fenómeno Mitch, como que éste se hubiera sorpresivamente desencadenado en víspera o antevíspera de la publicación del periódico! En realidad, todo hace suponer que, desde México en donde reside, fue el corresponsal *Le Monde* quien se tardó hasta el 2 de noviembre para percatarse de la extrema gravedad de las destrucciones que, desde hacía una semana, desolaban a Centroamérica, provocando una legítima «estupefacción» por parte de los habitantes de Honduras y Nicaragua [QUIENES, SI BIEN SE ENTIENDE, NO HABÍAN ESPERADO HASTA QUE LOS MEDIOS INTERNACIONALES PRESTARAN ATENCIÓN AL HECHO, PARA DARSE CUENTA DE LA EXCEPCIONAL «AMPLITUD» DE LA CATÁSTROFE QUE LES ESTABA GOLPEANDO].

El lector francés tenía tanto menos razón de poner en duda la sorpresa evocada por Bertrand de la Grange que, al día anterior (es decir: en la noche del lunes 2 de noviembre), en el «Vingt Heures» de TF1, se había podido escuchar al célebre presentador Patrick Poivre d'Arvor abrir su telenoticiero declarando: «Centroamérica no hace más que acabar de descubrir el desastre de las inundaciones y deslizamiento de terrenos», evocando así el mismo supuesto estupor cuya confirmación se encontraría al día siguiente bajo la pluma del corresponsal de *Le Monde*.

De esta manera, el ciclón mediático se halló definitivamente desplazado en una temporalidad distinta de la del evento real. Posteriormente, esto implicará que se le confiera «en diferido» un crecimiento comparable con el del fenómeno meteorológico (Cf. Cronograma de la catástrofe). Fue así que el público francés fue puesto en la condición de asistir, día tras día, al crecimiento inexorable del número de las víctimas, a medida que desfilaban sobre sus pantallas unas imágenes desoladoras, presumiblemente captadas en vivo [PERO NUNCA SE SABE ¿POR QUIÉN?, NI ¿CUÁNDO?, NI A VECES ¿EN QUÉ LUGAR?], claramente destinadas a confirmar al telespectador en la impresión de ser informado «en vivo y en directo» sobre una catástrofe supuestamente en curso.

El crecimiento del ciclón, en emisión diferida

Por la tarde del lunes 2 de noviembre, las estimaciones referentes al número de víctimas eran todavía modestas y relativamente incoherentes. El noticiero televisivo de TF1 anunciaba que «En ese momento, en Honduras se reportan 500 muertos y 500,000 damnificados», en tanto que France 2, a la misma hora, revelaba «362 víctimas» sin mayor precisión.

A partir del martes 3 de noviembre, el pesimismo discretamente sugerido el día anterior por el «en ese momento» de TF1 encuentra su confirmación en una súbita elevación del número de víctimas: «5,000 muertos, la mayor parte en la capital», vocea France 2. Aparentemente más prudente, France 3 reporta, por su lado, que «Honduras anuncia un millar de muertos y 11,000 desaparecidos»... «Pero esto no ha terminado», advierte la presentadora, que contribuye de esta manera a mantener a los que la están escuchando en la espera de informaciones aun más dramáticas sobre esta catástrofe, a propósito de la cual todo está hecho para seguir dando la impresión de que se está proporcionando información «en directo».

Y esto continúa: en las noticias televisivas de la tarde siguiente (del miércoles 4 de noviembre), el saldo de víctimas se agrava todavía: «Más de 7 000 muertos», en France 2. Y TF1 deja la puerta abierta a nuevas gradaciones declarando que «Honduras perdió 7,000 habitantes; y 12,000 todavía se reportan desaparecidos».

La prensa internacional escrita de ese mismo miércoles 4 de noviembre expone un crecimiento similar:

- Reproduciendo en cuatro columnas un telegrama de la AFP, *Le Monde* sitúa su evaluación en «más de 24,000 muertos y desaparecidos» para Centroamérica en su totalidad;

- Por la mañana de ese mismo 4 de noviembre el cotidiano londinense *The Independent* titula dramáticamente, sobre todo el ancho de una página: «**Cuerpos flotando en ríos, muchos llevados al mar – Honduras ya no existe**» [SABEMOS QUE CUANDO, AL IGUAL QUE ISABELA ARRIOLA, ALGUNAS VÍCTIMAS PUDIERON SER LLEVADAS HACIA EL MAR, ESTO NO SE PRODUJO EN VÍSPERAS DEL 4 DE NOVIEMBRE, SINO ALREDEDOR DEL 27 O 28 DE OCTUBRE]. Localizando, sin embargo, con exactitud los puntos más graves del desastre, tanto en Nicaragua como en Honduras, el diario londinense concentra su atención sobre el naufragio del *Fantome*, del cual, recordemos, el comandante era de nacionalidad británica. Pero en ningún momento *The Independent* aclara la cronología de los hechos; aún cuando los diversos episodios que relata se ubican entre el 27 de octubre (el hundimiento del *Fantome*) y el 1º de noviembre (la muerte de César Castellanos, la que, al

haberse producido durante una evaluación de las destrucciones, ya no forma parte del proceso catastrófico propiamente tal). Además, la información cartográfica que ilustra los reportajes de *The Independent* asigna al «huracán» una trayectoria fantasiosa, que atraviesa Nicaragua de este a oeste antes de penetrar en Honduras. En cuanto al recuento de los muertos, el cotidiano británico asigna 5,000 de ellos a Honduras, 2,000 a Nicaragua, 150 a El Salvador y 100 a Guatemala, dejando entrever que el saldo de la catástrofe podría ser mayor.

- La misma puja sobre el número de víctimas aparece en *El País* del miércoles 4 de noviembre. Ese día, el gran cotidiano madrileño dedica su editorial, además de varios reportajes, a la catástrofe centroamericana. El título de uno de sus artículos le asigna 7,000 muertos y 11,000 desaparecidos solamente a Honduras. [AQUÍ TAMBIÉN REMARCAMOS QUE LAS FECHAS RESPECTIVAS DE LAS DIFERENTES FASES DEL DESASTRE NO SON MENCIONADAS, AUN SI ES CIERTO QUE EL TÍTULO DEL REPORTAJE QUE *EL PAÍS* DEDICA A HONDURAS MARCA UN PASO ADELANTE HACIA LA CLARIFICACIÓN DE LA VERDADERA NATURALEZA Y DURACIÓN DEL EVENTO, AL INFORMAR QUE: «MÁS DEL 70% DEL PAÍS SE ENCUENTRA TOTALMENTE DESTRUIDO POR LAS TORRENCIALES LLUVIAS DE OCHO DIAS»].

El día siguiente, jueves 5 de noviembre, la emoción mediática alcanza su clímax. Ya no hay más periódicos ignorantes del asunto; por el contrario, algunos se distinguen por una peculiar vehemencia:

- *Le Soir* de Bruselas, con fecha del 5 de noviembre, consagra al evento lo esencial de la primera página de su segundo pliego, con un título en 8 columnas y un bloque de fotos a color;

- Titular y foto a color igualmente en la primera página de *Libération*, cuyo titular exclama: **BALANCE DANTESCO DEL CICLÓN MITCH: Al menos 25,000 muertos y desaparecidos en la catástrofe;**

- *L'Humanité* se pone al unísono de sus colegas, aunque solamente en sus páginas interiores. **Mitch, la tragedia del siglo**, titula el cotidiano comunista;

- y, después del mediodía, en su edición del 6 de noviembre, *Le Monde* introduce la información en su primera plana, y la desarrolla debajo de este título que ocupa todo el ancho de su página 2: **Honduras y Nicaragua devastadas por el terrible huracán Mitch.**

Podemos observar cuán vertiginoso fue, del 1º al 4 de noviembre, el dramático crecimiento del balance del desastre en los medios de prensa europeos. En esta última fecha alcanzaron su punto culminante. Y allí permanecerán asomados. Un acuerdo general [PERO SEGURAMENTE

TÁCITO: SERÍA EVIDENTEMENTE ESTÚPIDO SOSPECHAR QUE LOS MEDIOS SE COPIARON O SE CONCERTARON. NO OBSTANTE LO CIERTO ES QUE NUNCA SE QUITAN LOS OJOS DE ENCIMA LOS UNOS A LOS OTROS, CADA UNO CUIDÁNDOSE DE NO DEJARSE SORPRENDER EN DÉFICIT DE SENSACIONALISMO, O EN FALTA DE AGILIDAD EN EL REPORTE DE LA ACTUALIDAD» POR SUS COLEGAS] parece haberse establecido entre todos ellos para cerrar el balance a la altura de aproximadamente 10,000 muertos y 14,000 a 15,000 desaparecidos en toda Centroamérica.⁴

El progresivo regreso al tiempo real

Cuando por fin se dio por acabado el proceso catastrófico, la comunicación mediática comenzó a cambiar de tono. Ciertamente, durante algún tiempo todavía, algunos medios perseveraron en la exteriorización de una emoción inmoderada delante de la excepcional amplitud del desastre; pero poco a poco la información puramente factual empezó a dar paso al comentario evaluativo [AL PRECIO, ALGUNAS VECES, DE NO POCAS CONTORSIONES PARA TERMINAR DE COLMAR LA BRECHA ENTRE LA FALSA «ACTUALIDAD», ARTIFICIALMENTE SUSCITADA DURANTE LA SEMANA DEL 2 AL 5, Y LA SITUACIÓN

4 A esta ilusión colectiva, creada por los medios que, a la largo de varios días, divulgaron como si fuera actualidad eventos ya acontecidos desde hacía varios días, el autor de este libro puede aportar el testimonio de que incluso un observador tan bien enterado de las realidades de Centroamérica como se supone que es, no logró salvarse del engaño. Es así que, invitado en tanto que “especialista” para tomar parte en el telenoticiero de TV5 (emisiones mundiales de la televisión francesa), transmitido desde París en la tarde del jueves 5 de noviembre, este autor tiene claramente el recuerdo de haber llegado al programa con el cometido de comentar hechos ocurridos en la víspera, o tal vez en la ante-víspera de ese día, y cuyo desarrollo apenas habría concluido, o estaría por hacerlo. La grabación de esa emisión muestra claramente como él no desapruaba a la presentadora Linda Guiguère cuando ésta inicia su comentario declarando, sobre el fondo de una filmación de corrientes catastróficas, que: «los desastres del Mitch se amplían hora tras hora» [¡LO QUE FELIZMENTE YA NO ERA CIERTO DESDE UN BUEN RATO!]. La verdad es que en ese momento la interrupción de toda comunicación directa con Honduras mantenía todavía al autor de la presente obra, en la imposibilidad de acceder a otras informaciones que las que le aportaban los medios.

REAL, QUE SE ESTÁ TRATANDO DE REENMARCAR, MAL QUE BIEN, EN UNA CRONOLOGÍA CONECTADA CON EL PRESENTE].

Es así por ejemplo que, el viernes 6 de noviembre, consagrando de nuevo su primera página y cuatro páginas interiores al evento, bajo el título general: **Huracán Mitch: 10,000 muertos, 14,000 desaparecidos. Centroamérica: la devastación**, todavía situado sobre el registro de la evocación instantánea del evento catastrófico, el cotidiano *Libération* introduce subrepticamente, bajo este gran título sensacionalista, un subtítulo que por primera vez manifiesta que nos encontramos ya «**a quince días después de la llegada del ciclón a la región**». Este comienzo de rectificación cronológica encuentra su confirmación en la página 2 de ese mismo periódico, en un mapa de la región en el que figura, por fin con una relativa exactitud, la trayectoria realmente recorrida por la depresión Mitch, con una determinación correcta de las fechas de su paso por los distintos puntos del país.

Hacia el fin de la semana, la emoción todavía hace recaudación: el sábado 7, *Libération* aún dedica una doble página al Mitch, con este notable y excelente título, encabezando un artículo que se refiere solamente a Honduras: **Una muy grande desgracia para un muy pequeño país**. Ese mismo día, el fenómeno accede por fin al honor de ocupar el centro de la primera página de *Le Monde* con fechas del domingo 8 y lunes 9 de noviembre. Bajo el título: **Honduras afronta la más grande catástrofe de su historia**, toda la página 2 de este periódico desarrolla una información en donde las exclamaciones de horror ceden lugar a una evaluación objetiva de las consecuencias del evento. De esa manera, Honduras se ve por fin designada por lo que es verdaderamente: la principal víctima del desastre [MIENTRAS QUE, DESDE EL PRINCIPIO, SIEMPRE FUE A NICARAGUA QUE LOS MEDIOS PUSIERON EN PRIMER PLANO].

Sin embargo, será por fin en el *Journal du Dimanche* del 9 de noviembre, que se abandonará definitivamente el disfraz del seguimiento en vivo de una catástrofe pretendidamente en curso. Para lograr esto, el semanario dominical había actuado de la mejor manera posible (la única buena, en verdad), es decir: enviando a una periodista para realizar encuestas visuales en el lugar de los hechos. Gracias a ello, el 9 de noviembre, *Le Journal du Dimanche* pudo dedicar toda su última página a un reportaje de Karen Lajon titulado: **Honduras: Viaje al país del horror**. Éste no dejaba subsistir la menor duda sobre la verdadera cronología de los hechos, puesto que la periodista mencionaba con toda claridad que lo que ella estaba describiendo era la situación reinante en Tegucigalpa «diez días luego de la catástrofe». Con esto, el fenómeno Mitch, hasta entonces

reportado en una falsa actualidad artificialmente fabricada por el relato mediático, por fin pudo reincorporarse en una temporalidad comprensible⁵.

Se puede suponer que fue porque él tuvo conocimiento del reajuste cronológico operado por Karen Lajon que, en esta misma edición del 9 de noviembre del *Journal du Dimanche*, Bernard Pivot decidió dedicar toda su crónica semanal a una crítica despiadada del trato hasta entonces reservado al Mitch por los medios de prensa. Apostrofada en estos términos por este célebre cronista literario que le preguntaba: «¿Cuántos días demoraron nuestros diarios para consagrar sus titulares de “primera plana” a aquel espantoso desastre?», la prensa escrita se veía confrontada a esta penosa evidencia: «No es sino hasta el viernes, unos diez días luego del inicio del cataclismo, que algunos diarios, no todos, al fin le dieron a esta tragedia la resonancia que merecía, abriéndole sus primeras planas».

A Bernard Pivot pues, se le debe atribuir el mérito de ser el primero en haber detectado esta extraña brecha de una decena de días, que un acuerdo espontáneo en el mundo de los medios de prensa había logrado acomodar entre el desarrollo real de los hechos y el relato artificial que traía al Mitch a la visibilidad mediática. No obstante, no compartimos la opinión de Pivot cuando éste, concentrando su crítica sobre los medios escritos, los somete a una comparación desfavorable con las cadenas televisivas que, según él, fueron las más prontas en reaccionar al evento. Nuestras averiguaciones sobre este punto no le dan la razón: ponen más bien en evidencia que la precedencia de las imágenes televisadas sobre los textos de la prensa escrita no sobrepasó nunca lo que es habitual en materia informativa: de la noche del día anterior a las horas tempranas del día siguiente, cuando se imprime la prensa escrita.

Por eso consideramos que la falsificación de actualidad que se observó en el trato mediático del Mitch, lejos de incumbir sólo a la prensa escrita, resulta de una acción articulada del conjunto mediático, en donde todos los componentes, audiovisuales y escritos, se mostraron acordados. En razón de la precedencia de su horario normal de emisión (en la noche), las televisoras fueron las que abrieron el camino en este proceso de falsificación de la actualidad, por la retransmisión de una abundancia de imágenes

⁵ Este cambio de tonalidad en la prensa escrita, en el sentido de substituir el relato sobreexcitado de un presente artificial por un comentario interpretativo, ya se había esbozado el día anterior en el editorial que publicó *Le Monde* bajo el título: De un ciclón a otro. En dicho texto, el editorialista se esforzaba –pero, para decir verdad, de una manera bastante torpe y enrevesada- para establecer una comparación entre el fenómeno Mitch y este «otro ciclón»(?) que se había producido poco tiempo antes, cuando la quiebra del fondo neoyorquino de inversión especulativa LTCM sólo pudo evitarse por una intervención del Banco Central Norteamericano...

sistemáticamente no fechadas y muy groseramente localizadas, propicias para darle al espectador consumidor de noticias la ilusión de verse proveer al instante testimonios visuales de una actualidad en curso.

Esta extraña cabalgata mediática en persecución de una catástrofe cuya importancia inicialmente pasó inadvertida, tuvo por efecto que, dada la necesidad de ocultar la inconfesable brecha que se había abierto entre la actualidad mediática y la cronología real de los hechos, el trato mediático tuvo que compensar su ausencia de claridad con exageraciones en el relato de los acontecimientos. Para esto, la evocación del «ciclón» con su desmedida violencia –¡el cuarto del siglo!-, y con todo lo que la simple mención de su nombre acarrea de imágenes apocalípticas, ofrecía amplias oportunidades para sobredramatizar los hechos.

Hubo, entonces, «ciclón» por doquier, presente en todos los titulares, derramando espanto en todos los comentarios. Poco importaba que, con la sola excepción de la isla de Guanaja (de la cual nadie habló), los desastres vividos en Honduras y en Nicaragua en nada se debieron a los vientos.⁶ Esto no impidió que el huracán soplara bárbaramente en todas las redacciones europeas. De tal manera que dos errores fundamentales terminaron por sumarse en la ficción periodística que se estaba divulgando: al retardo de los hechos por una decena de días se añadió la falsa representación de la catástrofe en forma de un tremendo vendaval ciclónico, cuando en verdad la catástrofe consistió en devastadoras corrientes de agua y en deslizamientos de tierras como consecuencia de las lluvias.

No obstante, el huracán sigue soplando en el relato mediático

El impacto causado en las mentes por el «ciclón mediático» fue tan grande que éste indujo al cartógrafo del *World disasters report*, publicado en 1999 por el Comité Internacional de la Cruz Roja, a cometer un extraño y muy revelador error. En efecto, a pesar de que el texto de dicho informe detalla con mucha exactitud las características del fenómeno meteorológico⁷, el dibujante del mapa se autorizó a reorganizar la trayectoria

6 Una buena ilustración de lo que es verdaderamente un ciclón, fue ofrecida en agosto del 2004 cuando el ciclón Charley, luego de haber tocado La Habana, vino a devastar la costa occidental de Florida, en donde vientos de 230 a 290 km/h tumbaron los árboles, demolieron la red eléctrica, llevaron los techos por los aires y destruyeron todas las construcciones ligeras, exactamente como lo hizo el Mitch en la isla de Guanaja, en octubre de 1998.

7 El capítulo introductorio de este informe puntualiza que el «Mitch no fue, en ningún momento y de ninguna manera, una tempestad excepcionalmente severa, [y que]

del Mitch, de tal manera que ésta pasara por Tegucigalpa y por el volcán Casita, los dos principales lugares cuyas devastaciones se atribuyeron al supuesto «ciclón». Se confirma así que la ficción mediática tiene suficiente fuerza como para lograr lo que nadie en el mundo podría cumplir en la realidad: ¡desviar la trayectoria de un huracán!

Otro signo del insensato poder de la ficción: aquéllos mismos que habían contribuido a elaborarla ¡se impregnaron de ella a tal punto que terminaron por creer en ella! Hallamos la demostración de esto en una emisión televisiva, en la que la manera de practicar el periodismo de Nicolas Poincaré fue, como lo veremos mas adelante, severamente puesta en tela de juicio.⁸

Refiriéndose a su llegada (muy tardía, de veras) a Tegucigalpa, el teatro de los hechos, el 3 de noviembre de 1998, el mencionado periodista soltó esta sorprendente frase: «Ese día 3, el Mitch todavía estaba soplando». Ahora bien, no sólo sabemos que los vientos en ningún momento contribuyeron en nada en las devastaciones sufridas por la Honduras continental. Además, el 3 de noviembre, ya hacía tres días que el Mitch había salido del territorio nacional, y lo que subsistía en aquel momento de la perturbación atmosférica, ¡estaba cruzando el Golfo de México! Pero eso no importa: un mes más tarde, el viento seguía remolinando en la alucinada memoria del reportero de *France-Inter*.

Para convencernos de que, una vez que se ha constituido una ficción mediática, ésta, por muy desviada que esté, tiende a hacerse indeleble, no hay más que leer el resumen que, cuatro años después de los hechos, un plumífero que, además de impenitente propagador de denuncias hiperbólicas, gusta lucirse como especialista de la región, hace de la catástrofe que en 1998 golpeó a Honduras: «Durante cinco días, Mitch

perdió su categoría de ciclón al momento de tocar Honduras y Nicaragua» (p.21). Por otro lado, enteramente dedicado a describir la “anatomía” de la catástrofe, el capítulo 3 de este mismo informe no deja ninguna duda sobre el hecho de que los desgastes registrados fueron esencialmente atribuibles a «un diluvio ininterrumpido que cayó sobre las vertientes montañosas, ya saturadas por una temporada anormalmente muy lluviosa» (p.43), generándose como consecuencia «deslizamientos de terreno e importantes inundaciones en las planicies». La diferencia que se evidencia entre el texto y su ilustración cartográfica, permite constatar que la seducción del relato mediático se ejerce preferentemente mediante representaciones de orden visual, mientras que la expresión escrita permite un mejor control sobre el espejismo de la ficción.

8 «Arrêt sur Images», de Daniel Schneidermann, difundido por *La 5*, el domingo 5 de diciembre de 1998.

estuvo derramando torrentes. Sin embargo, en Honduras, los primeros estragos fueron producidos por los vientos. En ese caldero del diablo, las ráfagas levantaron autos y casas como si fueran plumas, arrasando la Costa que produce el 50% del PIB».⁹

Todo llevaría a reírse frente a una descripción tan extravagante, que uno quisiera poder atribuir a un exceso de petulancia lírica. Lo que nos detiene en esa inclinación a la indulgencia, es el sentimiento de que, en este caso como en otros, la alteración de la realidad de los hechos resulta menos de la ignorancia o del descaro que de un *modus operandi* ahora ampliamente difundido en el mundo del periodismo, en donde el carácter muy aproximativo de la información está íntimamente ligado con el despliegue de una retórica sentenciosa y razonadora, tan inmodesta como políticamente aberrante.

De hecho, cada quien puede comprobar que, hoy en día, por una arrogante sobrevaloración de su misión (que debería normalmente limitarse a llevar sin ninguna alteración ni retraso los hechos reales al conocimiento del público), la clase mediática se embriaga con la vocación de encarnar la defensa de esas virtudes teologales que son la promoción de la *democracia*, la compasión *humanitaria*, y la defensa de los *derechos del hombre* en todas sus declinaciones: derechos de la mujer, del niño, de la cultura, del medio ambiente, etc.

La fiebre por darse la apariencia de luchar por estas nobles exigencias tiene como contraparte el truncamiento de la información por una precipitación que se justifica con la convicción de gozar de una extralucidez moral que, en ausencia de toda distancia crítica con los hechos, haría que el periodista se sienta inmediatamente capaz de dictaminar sobre la verdad. Esta concepción de un sacerdocio autoatribuido conduce a los periodistas a representarse a sí mismos, ya no solamente como honestos proveedores de información con el propósito de hacer que cada quien pueda elaborar su criterio personal sobre los acontecimientos, sino más bien como «mediadores» ávidos de reivindicarse como «formadores de opinión» y guías de ésta, hasta el punto de creerse legítimamente investidos de un enigmático “cuarto poder”, que en definitiva se ubicaría por encima de los tres poderes clásicamente constitutivos de la democracia.¹⁰

9 LEMOINE (Maurice): *Amérique centrale. Les naufragés d'Esquipulas*. Nantes. Librairie L'Atalante, 2002, p. 700.

10 Los medios de comunicación que se vanaglorian de constituir un contrapoder, en realidad no tienen ellos mismos que afrontar ningún contrapoder. Ejercen *de facto* el ministerio de la verdad automática. Y esto por un procedimiento tan simple como eficaz: por una parte, al autoproclamarse portavoz de la “sociedad civil”, la clericalidad mediática puede presentar cualquier cosa dicha por ella como preaprobada por los

De esta aberrante sobreestimación de su importancia, proviene hoy en día no solamente la sacralización absoluta de su profesión por los periodistas (al escucharlos, no hay peor crimen en este mundo que el que se pueda cometer en contra de uno de ellos). Sino sobre todo, por una insolente extensión de la noción de «libertad de prensa», les vemos otorgarse el exorbitante derecho de ejercer su profesión sobre el modo inquisidor, sintiéndose autorizados a arrancar, por todos los medios, la «verdad» a quienes, por bien o por mal, consideran oportuno el saberla disimular.

Las consecuencias de esta obsesión por la verdad inmediata son temibles: llevados por la imprudencia de creerse dotados de una clarividencia ilimitada que les permite enunciar de plano la verdad sobre la realidad de los hechos, su significación social o política y emitir el juicio moral que les corresponde, los periodistas se privan de la posibilidad de reexaminar la veracidad, supuestamente definitiva e intangible, de la información que han dado. Ningún arrepentimiento les es posible, a no ser para poder golpear su culpa en el pecho de algún prójimo: pues el *homo mediaticus* sólo puede desautorizarse alegando el motivo de haber sido engañado.

Los errores de la información rectificadas por la suspicacia y el insulto

El reporte mediático de la catástrofe del Mitch, del cual pudimos apreciar la inexactitud en relación a la realidad de los hechos, también iba a proporcionarnos una estupefaciente ilustración de este axioma que quiere que el enunciado mediático sólo pueda revisarse mediante la acusación.

Recordemos primero los hechos. En la madrugada del 30 de noviembre de 1998 -un mes después de que Honduras fuera devastada por el Mitch, y cuando la atención periodística ya se había desviado hacia otros temas-, la audiencia de Radio-France tuvo la sorpresa de ver a Honduras y su ciclón regresar de pronto al primer plano de la actualidad, con esta sensacional revelación: el número de víctimas habría sido tan sobreevaluado que convendría

mismos a quienes ella se dirige. Por otra parte, el falso efecto de evidencia que consiste en transmitir hacia el público lo que a éste le gusta escuchar, excluye cualquier necesidad de prueba o de argumentación. El ronroneo de este conformismo bien pensante sitúa el discurso mediático más allá de toda reflexión crítica, de modo que cualquier eventual polémica con el pensamiento único que subtiende aquel discurso, sólo puede considerarse estúpida o malintencionada: no hay nada menos pluralista que la certeza de siempre tener la razón.

reducirlo... ¡en una proporción, por lo menos, de 10 a 1! Esa sensacional noticia resultaba de una "investigación" realizada por Nicolás Poincaré, gran reportero que la redacción de Radio-France había enviado de vuelta a Honduras para que fuera a auditar la realidad del número de víctimas de la catástrofe.

Para los observadores habituales de los medios, resulta fácil vislumbrar, en esta iniciativa, todos los indicios de una audaz empresa de autopromoción. Por evidencia, la intención de la redacción de Radio-France no se limitaba a tratar de recoger algunos tardíos laureles sobre el terreno de una curiosidad pública ya en vías de agotamiento. Mejor que esto, se trataba en última instancia de hacerse de todo el beneficio del tratamiento mediático del Mitch, inscribiéndose descaradamente en falso contra todo lo que hasta la fecha se había oficializado como relato mediático consensual. Mostrándose más astuta que todas las demás, Radio France trataba de obligar a la cohorte de los medios a alinearse bajo su bandera, en una drástica reevaluación final del evento.

De hecho, era lógico apostar que, para no correr el riesgo de pasar, ante los ojos de su clientela, por unos inocentes pertinaces en el error, los medios internacionales no tendrían otra opción que la de seguirle la corriente a Radio-France, acreditando una visión retocada del evento según la cual, cambiando el escándalo de naturaleza, la aflicción frente a la crueldad absurda de la Naturaleza se substituiría por la indignación frente a la incapacidad y la duplicidad de los dirigentes «del Sur».

El análisis de las fórmulas a las que la redacción parisina recorrió para introducir la retransmisión radial de las comunicaciones telefónicas de Poincaré desde Tegucigalpa, es muy revelador. Se notaron, al comienzo, algunas precauciones oratorias, destinadas a atenuar el efecto chocante que podría producir sobre ciertas sensibilidades aquel súbito despliegue de ardor mediático a propósito del infortunio de todo un pueblo. No obstante, la verdad tiene exigencias contra las que la sensiblería no tiene derecho de elevar la voz, ¿no es cierto? Fue así que se escuchó, a continuación, a los locutores de France-Inter recurriendo insistentemente al *nosotros*, («*nuestro* objetivo», «*nuestro* enviado especial», etc...), empecinándose en poner en evidencia que la redacción nacional endosaba plenamente las alegaciones de su reportero, revistiéndolas de una autoridad tal que el conjunto del firmamento mediático - informadores e informados todos confundidos - no tendrían más opción que la de hacer lo mismo.¹¹

11 Evolución de los "lanzamientos" de las declaraciones telefónicas de Nicolás Poincaré por los locutores de France-Inter en el transcurso de la jornada del 30 de noviembre de 1998:

En aquel momento el corresponsal permanente de Radio-France en Washington, Nicolás Poincaré forma parte de aquellos periodistas que, al igual que Bertrand de la Grange y muchos otros, sólo se percataron tarde de la importancia del desastre que había ocurrido en Centroamérica. No obstante, había compartido con Karen Lajon el mérito de haber sido, con una semana de retraso, el primer periodista francés en haber llegado a Honduras para enviar información de primera mano hacia su redacción parisina.

Sin embargo, por las breves notas, que grabó en aquel momento, y por lo que en seguida revelarían sus diversas declaraciones, se evidencia que en el transcurso de su estadía en Honduras, Poincaré no se alejó mucho de los centros urbanos; que no maneja el idioma castellano y que es ignorante del contexto histórico, social, político y hasta geográfico de Honduras. Todo esto tuvo como resultado que, cuando se vió confrontado con la indignación que suscitaron sus revelaciones revisionistas¹² del fin de noviembre, este periodista tuvo que ponerse a la defensiva. Lo esencial de los pretextos detrás de los cuales trató de escudarse, consistió en decir que no había hecho más que repetir lo que le habían dicho, sin disponer de ningún medio para verificar las cifras que se le proporcionaban. Para recopilar tal clase de información, uno puede preguntarse si realmente valía la pena mandar un «enviado especial» hasta Honduras...

Ocho de la mañana: «No se trata aquí de establecer una contabilidad mórbida. Pero nuestro objetivo es el de informarles. Y parece que los recuentos en cuestión fueron enormemente sobreestimados. En Honduras, que todavía anuncia hoy en día 7,000 muertos y 12,000 desaparecidos, podría finalmente haber más de 10 veces menos».

Seis de la tarde: «Decir la verdad sobre el ciclón Mitch es la tarea de nuestro enviado especial en Honduras, Nicolas Poincaré. Ha llegado al lugar de los acontecimientos, un mes luego del drama. Encontró un número mucho menor de víctimas que el anunciado. Y lo dijo sin importarle el hecho de incomodar».

Siete de la noche: «El enviado especial de France-Inter en Honduras revela una mentira bien intencionada: el número de víctimas del ciclón Mitch sería diez veces menor del que anuncian las cifras oficiales».

Retomando estos “lanzamientos”, u otros similares, las declaraciones grabadas de Nicolas Poincaré también fueron difundidas durante toda la jornada del 30 de noviembre por las ondas de France-Info.

¹² El término “revisionismo”, que puede parecer excesivo, corresponde a lo expresado por el Ministro de Gobernación Délmer Urbizo Panting en una conferencia de prensa convocada de emergencia el lunes 30 de noviembre para oponer el más enérgico desmentido a las alegaciones del periodista francés. En esa ocasión, el representante del gobierno hondureño perdió la paciencia al punto de exclamar: «¿Creen ustedes que buscamos vender nuestros muertos para tener más ayuda internacional? Nadie

Lo que contribuye a hacer de este episodio un caso que podríamos calificar «de escuela», es el hecho de disponer de un documento excepcional que nos permite ver y escuchar a su principal protagonista esgrimiendo sus argumentos frente a sus colegas en un debate contradictorio, revelándonos excepcionalmente unos entretelones del mundo periodístico generalmente disimulados a la vista del público. El documento en cuestión consiste en la grabación de la emisión televisiva «Arrêt sur Images», difundida por *La 5*¹³ el domingo 5 de diciembre de 1998 en horas del medio día. Esta emisión semanal, dirigida por Daniel Schneidermann, prolonga la reflexión epistemológica y ética que el mismo Schneidermann desarrollaba en sus crónicas de *Le Monde*, sobre el papel y las responsabilidades de la televisión y de los medios en general. Ese día, el panel constituido por *La 5* actuaba como una especie de jurado de honor ante el cual el acusado Poincaré había tenido la valentía -o la imprudencia- de comparecer.¹⁴

De la propia boca de este reportero nos enteramos de que sólo fue después de regresar de su primera misión en Honduras, a inicios de noviembre, que tomó conciencia del extraordinario impacto que el Mitch había producido sobre la opinión mundial. Un mes más tarde, a pesar de no alimentarse más con hechos nuevos, el interés del público por este tema, todavía no se había extinguido. Mediáticamente pues, algo todavía se podía aprovechar del asunto.

cuestiona las cifras del Holocausto porque es un crimen contra la humanidad. De la misma manera, nadie tiene el derecho de poner en duda nuestros datos, porque es una catástrofe» (Declaración reproducida en *Le Monde* del 7 de diciembre de 1998).

13 Cadena de televisión cultural franco-alemana.

14 Participaron en esta emisión, además de Daniel Schneidermann y Nicolás Poincaré; Marcel Trillat, director de la información de *Antenne 2*; los periodistas Alain Rémond y Olivia Buffi; y el célebre fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, que había estado presente en Honduras en los primeros días luego de la catástrofe, y del cual podemos decir que su manera de practicar el periodismo está en total contraste con la de Nicolás Poincaré. Hablando el idioma y no dudando en ir, sin importarle la rusticidad de los medios de transporte, hasta los lugares más apartados del territorio, Sebastião Salgado realizó en aquel viaje un extraordinario reportaje fotográfico que, por haber sabido mostrarse discretamente compasivo con los sufrimientos de las víctimas, emocionó hasta a los mismos hondureños. Una importante selección de las fotos de Salgado acababa de publicarse en la revista *Paris-Match* con fecha del 3 de diciembre de 1998. Notemos que, por haber sido grabada el 4 de diciembre, la emisión de *La 5* no pudo contar con la participación de la Sra. Mendieta, embajadora de Honduras en Francia, quien en ese momento se encontraba atendiendo otras obligaciones en Bruselas. El día anterior sin embargo, durante el noticiero de TFI, la Sra. Mendieta tuvo la oportunidad de expresar ante Patrick Poivre d'Arvor todo lo malo que pensaba de las aseveraciones de Nicolas Poincaré.

Fue entonces que Poincaré participó a sus superiores la incredulidad que le inspiraban las cifras oficiales respecto al número de víctimas, expresando la certeza de que ciertamente habían sido exageradas.¹⁵

Muy interesada por la perspectiva de revelaciones sensacionales, la dirección de Radio-France optó por confiar una nueva misión a su corresponsal, para que fuera a buscar confirmación de sus suspicacias. En Honduras, nada más fácil para Poincaré que recoger por aquí y por allá toda clase de chismes -que nunca faltan- y a los que sólo les puede conceder crédito a ciegas el que es ignorante de la complicada configuración de los rencores políticos locales, que siempre incitan a los unos y a los otros a divulgar cualquier rumor en apoyo de mutuas imputaciones de incompetencia y corrupción.

Como era de esperarse, el efecto de las declaraciones revisionistas de Poincaré fue fulminante. El conjunto de la prensa francesa y extranjera, *Le Monde* y *El País* a la cabeza, repercutieron apresuradamente este clamoroso tema: ¡No, Mitch no fue lo que se había dicho! Y los que engañaron al mundo (¿tal vez engañándose a sí mismos?) no fueron los medios de información sino las autoridades hondureñas. ¡Ah, qué lindo cuento éste! Muy apropiado para disfrazar la evidencia de que, después de haber acreditado a su conveniencia un relato notoriamente alejado de la verdad de la catástrofe, la misma cleroatura

15 Dicha “intuición” de Nicolás Poincaré resultaba, casi ciertamente, como se le hizo notar durante el debate, de una lectura del *Miami Herald* del 16 de noviembre. En esa edición, un corresponsal del cotidiano floridiano, luego de observar que el 2 de noviembre se había producido un brutal aumento de la evaluación del número de muertes por parte de las autoridades hondureñas (pasando bruscamente de «algunos cientos» a «varios millares»), emitía la opinión de que este repentino reajuste podría haberse decidido con el propósito de evitar que la ayuda extranjera se desviara de Honduras para concentrarse solamente en Nicaragua, país de mayor atractivo periodístico, y sobre todo de más fácil acceso (el aeropuerto de Managua se encontraba en perfecto estado, mientras que el de Tegucigalpa estaba con más problemas que nunca, y el de San Pedro Sula, totalmente fuera de uso). No obstante, se hizo notar a Nicolás Poincaré que el periodista norteamericano no evocaba esta explicación con tono de sospecha o de acusación, sino en tanto que hipótesis razonable. En efecto, está permitido pensar que, después de minimizar la importancia del desastre para evitar sembrar el pánico entre la población mientras la catástrofe estaba en curso, las autoridades hondureñas reservaron para más tarde la publicación de saldos más realistas en cuanto al número de víctimas. Y es cierto que, una vez terminado el proceso catastrófico propiamente tal, el objetivo principal consistió en tratar de comprometer lo más que fuera posible a la ayuda internacional en la reconstrucción del país.

mediática estaba ahora desacreditando este mismo relato, ¡dándose aires de sacrificarlo todo sobre el altar de la Verdad!

Esto, no solamente tuvo como consecuencia el incomodar a las autoridades de Tegucigalpa. De esto, en realidad, nadie se preocupaba. Pero la pirueta mediática resultó esta vez tan atrevida que suscitó la reprobación de un cierto número de personalidades mejor informadas que Poincaré de la realidad de los hechos. En primer lugar, el señor Gilles Vidal, Embajador de Francia en Honduras, estaba particularmente bien ubicado para hacer saber cuánto reprobaba «una polémica sin derecho a ser». «En la hora en que estamos, añadía el diplomático, es un absurdo querer hacer un recuento. Todavía hay pueblos aislados sin teléfono y cadáveres sepultados bajo varios metros de lodo. Además, no existe un censo en las zonas rurales».¹⁶

En *Le Parisien/Aujourd'hui en France* de ese mismo día, Robert Sebbag, director de operaciones internacionales de la Cruz Roja francesa, que acaba de formar parte de la comitiva del presidente Chirac durante su gira por Centroamérica, manifestaba igual sentimiento de inconveniencia:

«Uno siente molestia frente a esta aritmética macabra, en tanto que esto no le resta nada a la catástrofe. Yo he estado en el escenario de los hechos. Honduras fue realmente devastada. Se olía a muerte. No creo en una posible manipulación o utilización política de las cifras. [...] Uno se siente incómodo frente a esto. Mitch no ha sido inventado; ni los derrames de lodo, los puentes rotos, los cadáveres, las epidemias...»

Y Robert Sebbag cerraba su declaración con una pregunta:

«¿Acaso no podría haber un ajuste de cuentas políticas detrás de todo esto, entre los departamentos y el gobierno central hondureño?»

Y terminaba con una observación cuya pertinencia no se le escapará a nadie:

«Estas polémicas sobre las cifras no cambiarán nada para los que han muerto. Es mejor pensar en reconstruir el país».

Igual sonido de campanas se produce en *Le Monde* del 2 de diciembre, en una entrevista con Cristian Claptier, director de operaciones de *Acción contra el Hambre*,¹⁷ interrogado al regreso de una misión de evaluación en Honduras. Habiendo trabajado en los departamentos de Choluteca y El Paraíso (diferentes de los departamentos en donde Poincaré había recogido informaciones discrepantes con las cifras del gobierno), este experto manifestaba que:

¹⁶ Declaraciones publicadas en el diario *France-Soir*, 1º de diciembre de 1998.

¹⁷ Importante ONG francesa.

«Concerniente a los muertos, desaparecidos, heridos y damnificados, nuestros datos confirman en general los análisis de las municipalidades locales».

Y agregaba que:

«En base a lo que pudimos verificar, no hay razón para cuestionar los datos oficiales».¹⁸

En fin, a propósito de esta displicente polémica sobre el número de víctimas, Christian Claptier no disimulaba su irritación:

«Temo la amalgama entre algunos casos locales, en donde los datos pueden haber sido sobreevaluados, y las cifras globales de la tragedia. Lo esencial de la atención se focaliza bruscamente en aquellas cifras, en vez de tomar primero en cuenta el estado sanitario [y alimenticio] de las víctimas. [...] Lo esencial reside en eso, y no en conocer con rigurosa exactitud el número de las víctimas».

Sabiendo que las impugnaciones de Poincaré no versaban sobre diferencias marginales, pero sí sobre cifras de gran importancia, uno estaría en derecho de preguntarle en qué exacta medida fueron exageradas. Eso nunca lo sabremos ya que él nunca especificó cómo se deben corregir las estadísticas que denunciaba como falsas. ¿Habían las autoridades del país multiplicado el número de víctimas por cuatro, por diez o por catorce, como se llegó a proclamar, en la confusión de un debate que sólo se alimentaba de rumores, a falta de fundamentarse en datos verificables? Por otra parte ¿cuál era el número de víctimas que se suponía que el gobierno hondureño quería oficializar: 10,000, 15,000, 24,000 o hasta 30,000? Cantidades que los participantes del debate se lanzaban a la cara en una controversia sobreexcitada, pero sin nunca precisar lo que se tomaba en cuenta: ¿Tratábase sólo de los muertos, de los desaparecidos, o de la suma de ambos? ¿Tomando en cuenta sólo a Honduras o a toda Centroamérica? Ya nadie sabía, ni parecía preocuparse de esto.

En medio de la cacofonía, nadie prestó atención a la declaración emitida, unos días antes, por el portavoz de la presidencia hondureña, quien reiteraba que el gobierno se mantenía firme, sin ninguna variación, en el anuncio de un saldo provisional de 5,657 muertos y 8,000 desaparecidos (información reportada en Francia por el diario *Le Parisien/Aujourd'hui en France* con fecha del 1º de diciembre de 1998). Parece verdaderamente exorbitante

18 Durante la confrontación suscitada por «Arrêt sur Images», Sebastião Salgado también aseguró no tener ninguna duda sobre el número de víctimas declarado por Honduras. Él más bien temía que dicho número pudiera ser más elevado. Sobre este punto como en otros, el testimonio de Salgado difería tanto del de Nicolas Poincaré que Daniel Schneidermann insistió muchas veces en puntualizar que «parecería que los dos no habían visto el mismo país, ni la misma catástrofe».

que, siendo tema del debate la audaz impugnación hecha por Nicolás Poincaré de la evaluación oficial del número de víctimas, ¡a nadie se le ocurrió averiguar *cuál era realmente el monto de víctimas anunciado por las autoridades hondureñas!* (Sabido que el debate convocado por David Schneidermann fue grabado el 4 de diciembre, cada participante hubiera ampliamente tenido el tiempo de enterarse de lo que había sido publicado sobre el tema, tres días antes, en la prensa de su propio país...)

En vez de eso, se hizo evidente, en el curso del debate, que todos los presentes tenían por asegurado que, inmediatamente después de la catástrofe, el gobierno hondureño hubiera publicado un saldo de 7,000 muertos. Lo cómico del asunto es que cualquier observador cuidadoso de la grabación del debate puede notar que, mientras los participantes peroraban, una pantalla luminosa mostraba, de manera muy legible en el decorado del estudio, el texto de este telegrama:

«TEGUCIGALPA, 2 de noviembre (AFP). El presidente hondureño, Carlos Flores, evaluó este lunes el número de muertos en «unos millares» como consecuencia del paso del ciclón Mitch sobre Honduras, pero sin dar un número preciso.»

En suma, tanto los críticos de Poincaré como éste mismo, dieron la impresión de no interesarse para nada en lo que las autoridades hondureñas hubieran podido realmente decir o no decir. ¿De dónde sacaban entonces los desmedidos balances que despertaron las suspicacias de Poincaré? ¿De los «círculos oficiales», como él no se cansaba de repetir, como para convencerse a sí mismo? ¡De ninguna manera! Pero sí de las diágnosis propias del delirio mediático.

Esa espantosa unanimidad en la substitución de la información objetiva por la ficción se ilustra una vez más en el hecho de que, aun entre los más críticos interlocutores de Poincaré, nadie se inmuta cuando éste plantea como una evidencia que «los medios repercuten los saldos oficiales anunciados por el gobierno», agregando que «todo el mundo tenía en mente este número: 30,000 muertos y desaparecidos». Dando esto por asegurando, Nicolas Poincaré tiene por fin el descaro de conceder que bueno, sí, tal vez, mejor hubiese sido que él se mostrara más prudente al «citar sistemáticamente sus fuentes de información». Antes de concluir perentoriamente: «Sistemáticamente, hubiera tenido que decir: hay 24,000 muertos y desaparecidos, SEGÚN EL GOBIERNO».

¡Veinticuatro... o treinta mil víctimas!.. Si tal monto jamás hubiese sido verdaderamente anunciado por el gobierno hondureño, legítimamente se pudiera haber hecho un llamado al sentido crítico. Pero ningún participante del debate quiso percatarse de que *en ningún momento ninguna autoridad hondureña ni nicaragüense hizo mención de saldos tan*

elevados. Por lo tanto, impugnando las cantidades que señala, Nicolás Poincaré no hace más que indignarse contra una ficción mediática que él mismo y sus semejantes contribuyeron a forjar, a buena distancia de los hechos verificables.

Remarcamos que, nuevamente interrogado, un año más tarde, sobre este mismo tema,¹⁹ Nicolas Poincaré ya no se mostró tan categórico en su incriminación hacia las autoridades hondureñas. Esta vez, la supuesta falsificación que él se sigue vanagloriando de haber desenmascarado, sólo se atribuye a un ente impersonal: «Se había enormemente sobreestimado la magnitud de la pérdidas humanas [...]. Hubo de diez a quince veces menos víctimas que lo que se había estimado en un primer momento [...]. Se había anunciado 30,000 muertos y desaparecidos en conjunto para los dos países [...] pero posteriormente uno se dio cuenta de que la cantidad era mucho menor»... Vaya, Sr. Poincaré, haga un esfuercito más: diga nomás NOSOTROS - o mejor: YO - en vez de «UNO», para restablecer la verdad, por lo menos sobre este punto.

¿Para qué, además, querer obstinadamente dar números de una situación en la que todo indica que esto, además de inútil, resulta imposible? Patético es el momento del debate en el que Poincaré, recordando que él mismo había sido llevado, durante su primera encuesta, a hacerse eco de números inverosímiles, expuso la razón por la cual posteriormente los quiso rectificar: «No se puede decir cualquier cosa. La próxima vez que suceda una catástrofe, quiero que se me crea». Sobre este punto, podemos decir que el tiro le salió por la culata: habiéndose puesto en evidencia los métodos de trabajo de Nicolas Poincaré, el autor de esta obra decidió que, en adelante, nunca más recibiría con confianza las informaciones proporcionadas por este periodista... Y se recomienda a todos que hagan lo mismo.

El periodismo, entre el deber de información y la vocación humanitaria

Al final de la emisión, visiblemente cansados por esta desalentadora polémica sobre la evaluación del número de víctimas, los participantes del debate televisivo saltaron, sin transición, a otro aspecto del tema: Al denunciar el carácter excesivo del número de víctimas ¿no tomó Nicolás Poincaré el riesgo de desanimar el movimiento de generosidad de que se alimentan las organizaciones humanitarias?

19 El 9 de noviembre de 1999, entre las 10 y 11 horas, en *France-Inter* durante la emisión "Alter Ego", de Patricia Martin.

La respuesta a esta pregunta no deja lugar a duda: haciéndole saber al público que fue engañado (y al final de cuentas, poco importa por quién) sobre la extensión de la desgracia a socorrer, lo único que se podía esperar era que se deteriora el mecanismo compasivo sobre el cual repona el *fund-raising* mediático. Todos los participantes del debate estaban bien de acuerdo sobre eso. Hasta el mismo Poincaré quien, muy embarazado, y para tratar de minimizar los efectos negativos de su acción, en ese momento hizo coro con todos sus colegas para recalcar que, efectivamente, Honduras había sido víctima «de una catástrofe monumental».

Esta pregunta – así como la manera de responderla – es reveladora de una mutación considerable en la manera según la cual el periodismo concibe su papel. Transformada, hoy en día, en más resueltamente *mediática* que propiamente *periodística*, la información se ve confrontada a una dualidad de obligaciones relativamente incompatibles, entre las cuales la definición de una prioridad resulta difícil. Daniel Schneidermann, tuvo el mérito de definir desde el principio la naturaleza del problema: «*Quiero subrayar una paradoja, es que los medios en general y las cadenas televisivas en particular tienen, como primera misión, la de informar. Ellos llenan –lo vemos en esta clase de catástrofes– una segunda misión que es, directa o indirectamente, la de favorecer el encaminamiento de la ayuda internacional*».

Observamos que en la boca del conductor del debate, la noción de *misión* se deslizó hacia la de *función* cuando se puso a interrogar a sus invitados acerca de la eventualidad de una contradicción entre «la antigua función de informar» que le toca a la prensa, y la más nueva, la «de facilitar la intervención humanitaria». El debate, a decir verdad, no llevó a gran cosa. En la obligación de clausurar el programa en la hora exacta, la palabra final le fue rápidamente cedida a Alain Rémond, quien puso fin al conversatorio con esta fórmula dilatoria: «Algún día quizás habrá que llegar un poco más al fondo de todo esto».

Imaginemos ahora que aquel día llegó. Para ir «un poco más al fondo» del asunto, habría, antes que todo, que aclarar bien el sentido de la palabra “informar”. Si lo que este verbo significa consiste en alimentar la reflexión crítica del ciudadano llevando a su conocimiento hechos debidamente verificados, interpretables pero no interpretados, se alude ni más ni menos que al rol esencial que el periodismo debe cumplir al servicio de la democracia. Y la valentía de asumir sin vacilar esta «función» justifica ampliamente que se les otorgue a los periodistas todas las protecciones legales que ellos reclaman para poder ejercer de su profesión.

Desdichadamente, cada quien se da cuenta de que, al cabo de una sucesión de derivas, el periodismo de hoy se ha convertido en otra cosa. Al punto de

sentirse sinceramente menoscabado en sus atribuciones si se le recuerda que su verdadera vocación es la de librar información «bruta» sin adornar ésta con comentarios pretendidamente sociológicos o políticos y generalmente moralizantes, destinados a orientar al público hacia una interpretación «correcta» de los eventos reportados. Aparentemente llena de buenas intenciones, tal forma de actuar adormece el sentido crítico del público, reduciéndolo a la condición de consumidor pasivo de análisis predigeridos. Además, esta autoatribuida «función» didáctica y política hace que el periodismo invada intempestivamente la esfera de competencia de dos categorías de mediadores a los cuales, cuando lo considere conveniente, el público puede referirse para forjar los criterios de su juicio:

- el personal político, a quien la democracia representativa confía, de manera exclusiva, la delegación de la palabra del «pueblo soberano»;
- y el mundo de los intelectuales, que incluye a los científicos, literatos y artistas de toda clase, de quienes el público puede, a su conveniencia, esperar que le proporcionen elementos útiles para su comprensión de la vida real.

La escapada del periodismo fuera del cuadro normal de sus atribuciones, también es consecuencia de que los organismos de prensa se han convertido en empresas comerciales concurrenciales, al mismo tiempo que los nuevos medios técnicos de comunicación (radio, televisión) colocan al periodismo en posición de *mediador absoluto* de la vida social. En efecto, el periodista de hoy se encuentra en la ventajosa posición de poder repartir soberanamente migajas del tiempo mediático al personal político, al escritor, al artista, o al especialista de cualquier clase de saber, todos reducidos a la condición de agradecidos con respecto al que les ofrece la oportunidad de «existir mediáticamente». Sin embargo, aparte de satisfacer vanidades narcisistas, ¿qué valor reviste tal «existencia» que generalmente se reduce a intervenciones cortas y fugaces, insertadas como simples ilustraciones en el flujo del discurso mediático, del que sólo el periodista que invita posee el control? Sabiendo además que lo que los especialistas han de comunicar se encuentra inevitablemente mixturado con el impenitente parloteo de unas estrellas del deporte o de los graciosos del *show-business*, anárquicamente confrontados con los verdaderos sabios por la sola fantasía del periodista mediador...

Además, el discurso mediático en el que se enmarca la comparecencia de aquellos diversos interventores, tiene por exigencia fundamental la de ser consensual: la empresa mediática no puede correr el riesgo de alienarse, cualquier parte de su público, ahora convertido en cliente. Sabemos lo que esto implica en cuanto a la elección de las diversiones televisivas. En materia de información, las consecuencias se vuelven más graves aún: en el afán de

practicar constantemente la seducción y la complicidad con su público, las empresas mediáticas no tienen más opción que la de aferrarse sin cesar al conformismo y a los buenos sentimientos, optando invariablemente por coincidir con el sentir de las mayorías que engordan los índices de audioescuchas.

De esa manera, el mundo mediático llegó a enfocar a su clientela (a la misma que adormece diciéndole constantemente lo contrario) como un inmenso títere, al que ciertamente no se le puede aniquilar completamente el sentido crítico al imponerle marcos imperativos de análisis tal como lo haría la prensa de un régimen totalitario. Lo que se hace es peor: simulando considerar a este público como un adulto aún cuando la información que se le provee no deja de jugar con los registros más infantiles de su sensibilidad, se lo priva de autonomía en la elección de sus temas de inconformidad y de indignación, atiborrándolo de escándalos premasticados, todos referidos a un moralismo de pacotilla, en donde coexisten el ecologismo, el feminismo y el derecho-del-hombrismo, pero todo esto reducido a formulaciones tan superficiales y diáfanas que resulta imposible discrepar con ellas.

Sin embargo, nada es más monótono, y a la larga aburrido, que la virtud conformista. Es porque a fin de preservar el atractivo del discurso mediático conviene sacar, sin cesar, pimienta de la lucha contra la maldad, y de la rebelión contra la injusticia. Tales son los ingredientes de esta extraña paradoja: este periodismo maternalmente connivente debe también manifestarse como un periodismo de combate, pugnazmente suspicaz, pero ¡con tal de que se evite cualquier tema que pueda disgustar a la menor parte del público! En efecto, si se suscitaran verdaderos debates, estos no podrían dejar de revelar líneas de fractura en el seno de esa clientela, cuya adhesión perpetua resulta esencial preservar...

Es así que paulatinamente la información mediática ha sido llevada a convertirse en una producción ficcional en la que se oponen groseramente las figuras caricaturescas del Bien y del Mal, con el fin de ganar, sin riesgo, la aprobación de todo el mundo. Así concebida, la información mediática no podía más que descubrir su íntima convergencia con este irrisorio sustituto del afán político, del humanismo y de la caridad que se designa hoy en día con el nombre de *humanitarismo*. Los dos apuntan al mismo público: al más amplio, al más intelectualmente inerte: el de la televisión. Es allí donde mejor se pone en acción la *compulsividad de donar*, reflejo que impulsa al espectador a desligar los cordones de su bolsa como para retribuir el turbio placer de haberse dejado conmover por el espectáculo de alguna desgracia, de haberse sentido invadir por una justa cólera frente a la iniquidad y de haberse sentido puesto —al menos por un instante— en posición de creer que sólo depende de él, en el mundo, para que las cosas vayan mejor...

Notemos sin embargo que, abrazando las causas de la indignación y de la compasión humanitaria, de ninguna manera la industria de los medios se pone gratuitamente al remolque del *charity business*. Al contrario: afilándose espectacularmente -pero en realidad con muy poco gasto- en el campo de los «buenos», los medios de comunicación de masa logran establecer con su clientela una relación de complicidad de la que se espera que fidelice duraderamente esta franja mayoritaria del público, de sensibilidad superficial, parangón de la opinión pública. Todo esto culminando finalmente en un jugoso aumento de los recursos publicitarios...

Por supuesto, esto implica que se renuncie a la primera misión del periodismo, que es la de informar con prudencia e imparcialidad, en cumplimiento de una delegación claramente formulada en el marco de la democracia. Pero en realidad, no se ve quién podría haberle encargado al mundo periodístico estas nuevas «misiones» que él reivindica, y cuyo paradójico efecto es de eximirlo de lo que había de más fundamental en su cometido inicial: saber documentarse meticulosamente sobre los hechos y, en el caso en que esta tarea elemental sólo hubiese entregado resultados inseguros (lo cual es generalmente el caso cuando se debe trabajar en la emergencia), no dudar en poner en evidencia los límites de la información así recogida. Por fin, tanto el sentido común como la honestidad implican que cuando no se sabe nada sobre algún tema, uno se abstiene prudentemente de decir nada al respecto.

Terminemos de completar el cuadro al observar que, como lo demostró muy bien la comparación de Nicolás Poincaré ante el jurado autoproclamado de *Arrêt sur Images*, a partir del momento en que el mundo mediático llega a encontrar en sí mismo una materia suficiente para hacer el show, la objetividad de la información ya no tiene razón de ser. Desde que la información-espectáculo se somete a una crítica-espectáculo, el plato fuerte del banquete mediático ya no es el evento en sí mismo, sino el debate que los periodistas organizan a su entorno. Aquel descentramiento evidencia cruelmente que, en el fondo, no se siente más que indiferencia hacia las víctimas, en las que uno se pretende interesar y hacia las cuales se ostenta la voluntad de ayudar y defender. En realidad esos desgraciados no son más que efímeros figurantes, inmediatamente reemplazados por otros en el escenario de la «actualidad», esa agitación perpetua de la que se alimenta la industria mediática.

Capítulo 3

ANÁLISIS DETALLADO DE LAS CONSECUENCIAS DEL MITCH EN HONDURAS

Es posible, hoy en día, establecer un balance objetivo y crítico de las devastaciones causadas por el Mitch en Honduras: el distanciamiento en el tiempo permite corregir las equivocaciones y exageraciones generadas, al inicio, por el aterramiento de las víctimas, la estupefacción de los testigos impotentes y las distorsiones propias de los *discursos de crisis*, producto de la convergencia del sensacionalismo periodístico, de las estrategias de recolección de fondos para las acciones humanitarias, y del oportunismo de los órganos de gobierno, prioritariamente preocupados por asegurar su porvenir político después de la catástrofe, cuando no por la posibilidad de sacar alguna ventaja de ella.

Primero, para poner fin, de una vez, a la controversia evocada al final del capítulo anterior respecto al monto de las pérdidas de vidas humanas, se debe recalcar de entrada que, en Honduras y a nivel de las instancias internacionales, nunca hubo verdadera discrepancia. Ya en febrero de 1999, el US-AID había avalado el balance presentado al final de noviembre de 1998 por las autoridades hondureñas: 5,657 muertos y 8,052 desaparecidos. Poco después, en el mes de mayo, las Naciones Unidas oficializaron ese mismo balance a través de su Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): 5,657 muertos y 8,058 desaparecidos. El Grupo Consultivo reunido en Estocolmo al final de ese mismo mes de mayo de 1999 tendrá esas cantidades por definitivas. Se puede pues considerar esas cifras como universalmente aprobadas. Hubo pequeños desacuerdos por parte de algunos organismos sobre tal o cual punto de la evaluación que no modifican sustancialmente la figura general de este balance.¹

1 Inicialmente, en los primeros recuentos, se habían presentado evaluaciones más elevadas, pero no mayores del 15% al 20% respecto a las cifras que se adoptaron finalmente. Así, en noviembre de 1998, las Fuerzas Armadas de Honduras publicaban un balance de 6,598 muertos y 8,052 desaparecidos. El primer informe de la CEPAL, de fecha del 26 de enero de 1999, se mostraba un poco más alarmista al publicar un saldo de 7,007 muertos y 8,052 desaparecidos.

¿Qué opinar a propósito de estas cifras, supuestamente definitivas? Pues, que son esencialmente *no verificables*... Por una parte, los datos del registro civil son todavía muy inciertos en Honduras (donde además muchos archivos municipales fueron destruidos en las zonas devastadas por el desastre). Por otra parte, la frontera entre «muertos» y «desaparecidos» es particularmente difícil de definir en esta clase de cataclismo, en el que numerosas víctimas fueron sepultadas bajo toneladas de lodo, o llevadas hacia sólo Dios sabe dónde por las aguas de los ríos... Además, considerando el largo lapso sobre el que la catástrofe se desarrolló, numerosos cadáveres que se encontraron por aquí y por allá fueron rápidamente enterrados sin ser identificados. ¿Quién podría establecer un balance preciso de todo esto? Y es más: ¿Para qué hacerlo?

En cuanto al concepto de «muertos» en una situación como ésta, resulta imposible saber exactamente a qué se refiere: ¿nada más que las *víctimas directas* de la catástrofe? ¿O deben agregarse a estos todos los *decesos atribuibles a las consecuencias del desastre* (por causa de lesiones, de enfermedades o de los traumatismos psíquicos y de los debilitamientos físicos generados por las condiciones críticas de sobrevivencia después de la catástrofe)? En fin ¿en qué medida débese tomar en cuenta el número total de las muertes que se produjeron *en el marco cronológico de la catástrofe*, sabiendo que, a lo largo de una duración tan larga como el proceso catastrófico del Mitch, numerosos decesos se producen de todas maneras, estadísticamente, en un país de más de seis millones de habitantes?

Parece evidente que si tomamos en cuenta nada más que las víctimas directamente atribuibles a la violencia del evento climático (ahogadas en las inundaciones, arrastradas por los ríos enfurecidos, sepultadas bajo el lodo, atropelladas por los derrumbes o por el hundimiento de su casa), las cifras que se mencionan son manifiestamente sobrevaluadas. En privado, muchos responsables hondureños no disimulan compartir esa opinión. Pero argumentan en seguida que en situaciones de máxima desgracia como la de Mitch, el número invocado de víctimas tiene valor simbólico más que de precisión aritmética. Por lo tanto, cualquier duda expresada públicamente acerca de la realidad de las cifras oficiales se considera como un insoportable agravio a la memoria de las víctimas y al honor de la colectividad a la que pertenecían. Respeto pues, para los 5,657 muertos de Honduras y sus 8,052 compatriotas desaparecidos (y que jamás reaparecerán, sobreviviendo hasta siempre en el abstracto universo de las estadísticas).

El destino de los sobrevivientes importa mucho más. Les queda un país totalmente devastado. Lo que mejor da una idea de la absoluta

desgracia que golpeó a Honduras es la evaluación del monto financiero de las pérdidas que sufrió el país: ¡equivalente al 81.6% de su PIB! Clausurados en fecha del 18 de mayo de 1999, los cálculos de la CEPAL evalúan en 3,793.6 millones de dólares el monto total de los daños ocurridos en el país. Casi equivalente (94.1%) al monto —de por sí extraordinariamente elevado— de su deuda exterior. el costo de los daños representa casi dos años (174.3%) del volumen anual de las exportaciones de bienes y de servicios y el 343.9% de la inversión bruta en el país. En resumen: esto es peor que el saldo de una guerra. Todos los expertos concuerdan en opinar que las pérdidas causadas por el Mitch en Honduras y en Nicaragua superan, de lejos, los daños causados, en el anterior decenio, por el conflicto provocado por la intransigencia estadounidense respecto al régimen sandinista.

Sin temor a equivocarnos, es sobre Honduras que se concentraron los furores del Mitch. Cerca de los dos tercios (64%) del monto bruto de las devastaciones causadas por el Mitch en la región ocurrieron en Honduras. El último tercio se reparte entre Nicaragua (16.7%), Guatemala (12.6%) y El Salvador (6.7%). El segundo país más gravemente afectado (fundamentalmente por el derrumbe catastrófico del volcán Casita y las inundaciones en la Mosquitia²) fue Nicaragua, cuyo monto total de pérdidas se eleva a 987.7 millones de dólares, equivalente al 48.8% de su PIB, aún más pobre que el de Honduras. A la inversa, los 787.8 millones de dólares de daños sufridos por Guatemala (sobre todo por la inundación de sus bananeras en la Costa del Caribe), no representan más que el 4.2% del PIB de ese país, con una economía más consistente. Esta misma observación concierne a El Salvador, donde los 398.1 millones de dólares en daños corresponden al 3.6% del PIB.

Elocuentes, para situar el orden de la magnitud del desastre, estos datos financieros no bastan para representar adecuadamente la amplitud de las consecuencias sociales de la catástrofe. Ninguna estadística, en efecto, puede dar cuenta del estado de confusión que provocan entre los damnificados la destrucción masiva de sus viviendas, la suspensión de los servicios esenciales (agua, electricidad, transporte, teléfono, escuelas, centros de salud, etc.) y los desplazamientos forzados de poblaciones desamparadas. Esto no solamente pone en peligro la seguridad alimenticia y acarrea serias amenazas sobre la salud pública; también se puede temer que la extensión del desempleo, los conflictos que resultan de promiscuidades mal toleradas, la criminalidad que se expande como consecuencia del desorden, el vandalismo, los robos y carencias provocadas

2 Por lo que se refiere a las pérdidas humanas, el balance de Nicaragua se eleva a 3,045 muertos y 970 desaparecidos.

por la especulación, puedan ejercer sobre las desgracias ya citadas, un efecto trágicamente multiplicador.

Desastre general pues, pero no uniforme. A fin de rectificar la imagen errónea de un país destruido de manera análoga en todas sus partes, vamos ahora a proceder a un examen detallado de los daños incurridos, sector por sector. Esto demostrará que si algunas partes del territorio fueron severamente devastadas (aunque no todas de la misma manera y con igual intensidad), otras, por el contrario, no padecieron más que poco o nada los desgarros directamente debidos al Mitch. A nivel social y económico, la misma observación se impone: sin que esto reste nada a la gravedad general de la catástrofe, se debe constatar que algunos sectores de la economía pasaron el suceso sin mucha pena, mientras que otros padecieron daños gravísimos que los dejaron prácticamente aniquilados. Socialmente, en fin, el panorama debe matizarse: no se puede reducir al tosco cliché del contraste entre una delgada capa de gente muy rica y una masa enorme y homogénea de pobres, los primeros pasando la crisis sin dolor, mientras que los segundos sufriendo una desgracia unánime.

Bienes privados: no siempre fueron los que tenían menos quienes perdieron más

Antes del Mitch, se estimaba que en Honduras el déficit habitacional acumulado (cuantitativo y cualitativo) era del orden de 700,000 viviendas. Después del Mitch, este monto se vio agravado por la destrucción de 35,000 casas y la degradación de otras 50,000, dañadas en intensidad diversa por el episodio climático. Evaluadas, en términos monetarios por la CEPAL, estas pérdidas de viviendas ascienden a 344 millones de dólares, sumando:

- los *daños directos* (el valor de los inmuebles destruidos, más el monto de los daños personales sufridos por los desalojados, el costo de los mobiliarios y otros equipos perdidos);

- y los *daños indirectos* (incluyendo la evacuación de los escombros, la edificación de albergues temporales, la compra de terrenos para la reconstrucción de viviendas, la reparación y puesta en operación de los servicios esenciales, los alquileres y otros beneficios que no pudieron ser percibidos).

Hay que escarbar bajo la fría abstracción de las cifras para hacerse una idea de la realidades concretas de que rinden cuentas. Así por ejemplo, una lectura atenta, calculadora en mano, de los cuadros que ilustran el informe de la CEPAL, hace aparecer que el valor medio asignado a cada una de las 35,000 casas enteramente destruidas asciende a 1,758 dólares U.S., cuando los daños sufridos en las 50,000 moradas «dañadas pero no

completamente destruidas», da lugar a una estimación media de 2,600 dólares. De esto, se deduce que el valor medio de las casas simplemente dañadas (seguramente por ser de materiales más resistentes) debe ser bien superior al valor de las viviendas enteramente destruidas. En eso encontramos el indicio de una estratificación considerable entre los que, todos pobres pero no en la misma medida, sufrieron los efectos del Mitch.

Para abordar este punto con mejor conocimiento de causa, un breve retorno se impone sobre las peripecias del pasado reciente en el país. En el correr de los años 90, el Mitch había sido precedido por dos procesos, ya de por sí catastróficos, que habían modificado, agravándola, la geografía de la pobreza en Honduras. Se trata de:

- la aplicación muy rigurosa de planes de ajuste estructural a lo largo de los años 1990-92;

- y los efectos de la alternancia climática El Niño/La Niña que, en dos oportunidades consecutivas, respectivamente en 1993-94 y 1997-98, provocaron graves sequías e incendios en el centro y en el sur del país, y desastrosas inundaciones en el norte.

En esas circunstancias, numerosas poblaciones rurales fueron conducidas a la ruina. Habiendo perdido confianza en la perspectiva de poder mejorar sus condiciones de vida en el campo, aceleraron su movimiento de migración hacia los centros urbanos, atraídas, entre otras cosas, por la esperanza de gozar de mejores servicios en materia de educación y de salud.

Desgraciadamente, las ciudades de Honduras no estaban preparadas para absorber este nuevo flujo de migrantes. En ese momento, era precisamente en los migrantes que los efectos de las medidas de la política fiscal y monetarista requerida por los planes de ajuste estructural se hacían sentir con el mayor rigor. Tendientes hacia una hipotética estabilización de la situación macroeconómica, dichas medidas consisten fundamentalmente en exenciones de impuestos y de gastos sociales para favorecer a los empresarios cuya actividad se orienta hacia la exportación. Al mismo tiempo, importantes alzas, inspiradas por el propósito de «restablecer la verdad de los precios» (aumentos de las tarifas públicas y del costo de la gasolina, fin del control de los precios, impuestos sobre la venta, etc.) erosionan el poder de compra de los pequeños y medianos consumidores. Paralelamente a esto, la voluntad de reducir el gasto público se traduce en la supresión de numerosos empleos subalternos en la función pública. De esto resultó, en la Honduras de los años 90, un ahondamiento de la separación entre las minorías privilegiadas y la masa de los pobres y se instauró un clima general de crisis, en el cual el deterioro

generalizado de las condiciones de vida en el campo no se compensaba con la apertura de perspectivas nuevas en el sector urbano.

El resultado de esto fue que la mayor parte de los emigrantes rurales que llegaron a las ciudades de Honduras en el transcurso de los años 90, quedó marginalizada. La hiperconcentración urbana no les dejó otra opción que la de establecer sus alojamientos de fortuna (o más bien de infortunio) en zonas de riesgo: sea ubicándolos a como dé lugar en las vertientes inseguras de los cerros, sea yendo a implantarlas en el lecho mayor de los ríos que surcan el espacio urbano³. Las crecidas y los desmoronamientos destruyeron sin piedad estas precarias viviendas, que generalmente no eran más que modestas estructuras de madera cubiertas con láminas, cuyo valor de mercado era casi nulo (¿quién quisiera comprarlas?), y que, normalmente, nunca se deberían reconstruir allí donde fueron destruidas.

Diferente es la situación de los un poco menos desposeídos, comúnmente de arribo menos reciente a la ciudad. Éstos habían tenido tiempo de edificar casas de concreto, sobre terrenos más estables, ya viabilizados o en vía de serlo. De tal modo que, aun invadidas por el agua y el lodo, estas casas aguantaron mejor el golpe: fue posible limpiarlas y repararlas. En cambio, buena parte de lo que sus propietarios habían podido adquirir en mobiliario y equipos domésticos fue deteriorado, destruido, a veces robado. De modo que esa categoría de gente sufrió daños económicos más elevados que los más pobres, que sólo podían perder la vida... y la perdieron de hecho, en muchos casos. ¿Pero quién podría decirnos exactamente cuánto vale la vida de un hondureño pobre, en dólares o en lempiras?

El razonamiento desarrollado en el párrafo anterior se aplica semejantemente a los que, un poquito menos pobres todavía, conforman la pequeña clase media. Éstos poseen moradas más espaciales y mejor situadas, con mejores muebles y equipos, comúnmente comprados a crédito. Para estas personas, cuando sufrieron daños provocados por las lluvias y los desmoronamientos, el pánico es total: generalmente no asegurados, son incapaces de financiar la indispensable reparación de sus casas. Peor aún: los créditos contraídos sobreviven a la destrucción de los bienes que permitieron adquirir. De modo que muchos se verán obligados a vender sus casas para hacer frente a sus obligaciones de pago. Como esto no tiene ninguno efecto sobre el déficit global en materia de viviendas, aquel infortunio de la pequeña

³ Algunas encuestas anteriores a la catástrofe habían revelado que un tercio de los 1,200,000 habitantes de Tegucigalpa y sus alrededores vivían en lugares expuestos a inundaciones y derrumbes.

clase media no aparece claramente en las estadísticas, y por lo tanto no se contabiliza como parte significativa de la desdicha nacional: es esencialmente de dimensión personal e intra-familiar. Para esos «menos pobres» que habían subido algunas gradadas en la escala social, el efecto de la catástrofe se resume en la pesadilla de verse mandados de vuelta al subsuelo de la gran pobreza...

*

* *

Esta situación, que acabamos de describir en el medio urbano, se da igualmente en el campo, como lo pone en evidencia una extensa campaña de encuestas domiciliarias llevadas a cabo en el campo hondureño, de mayo a julio de 1999, por el International Food Policy Research Institute (IFPRI), de Washington D.C.⁴ Realizado en todo el país (y no de manera particular en las zonas siniestradas), este estudio no tenía el objetivo – que es el nuestro en este momento⁴ de analizar específicamente el impacto de la catástrofe sobre los bienes personales: sólo 7% de entre los 2,398 hogares de campesinos pobres que fueron investigados por el IFRI habían sido víctimas de la destrucción de sus viviendas o de daños de gran importancia. No obstante, el análisis de los datos proporcionados por este estudio son esenciales para comprender hasta qué punto la dimensión humana del desastre es mal traducida por las evaluaciones globales de la importancia de los daños.

En función de los datos sociales recogidos antes del Mitch, los evaluadores de la encuesta del IFPRI habían repartido a los 2,398 hogares investigados, en cinco muestras de 479/480 unidades familiares, correspondientes a cinco categorías que las clasificaban escalonadamente desde los «más pobres» hasta los «moderadamente pobres». El paso del Mitch puso claramente en evidencia las disparidades de vulnerabilidad de las viviendas de estas cinco categorías ante los efectos de la catástrofe. Así, mientras que, como promedio general, sólo 7% de estos hogares vieron sus casas ser objeto, con ocasión del Mitch, de importantes destrucciones que obligaron a sus habitantes a abandonarlas

4 Financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esta encuesta fue realizada a pedido del Programa de Ayuda Familiar (PRAF), organismo semi-público creado en Honduras en 1990 para intentar amortiguar, entre los más desheredados, las consecuencias del plan de ajuste estructural que se aplicaba en ese momento. Detrás del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), el PRAF era entonces el principal organismo de asistencia social en Honduras. (Cf. S. MORRIS et alii 2002).

(o, en el caso de no poder marcharse, a quedarse en ellas en condiciones extremadamente precarias), este porcentaje se eleva al 9.4% en los dos estratos más pobres, pero se reduce al 4.4% en los dos estratos menos pobres. Sólo el estrato central corresponde a la media general (7.1%).

Los porcentajes se invierten si tomamos en consideración los daños que afectaron los enseres domésticos, la utilería y el ganado. Sólo un poco menos del 20% de la muestra global sufrió daños en ese rubro. Dicho porcentaje baja a 15.8% en los dos estratos más pobres, pero sube a 23.5% en los dos estratos superiores. El de en medio queda una vez más en la media general (19.8%). La explicación que los autores del estudio proponen de esto se expresa bajo la forma de una cruel paradoja: «*Hasta cierto punto, los hogares más pobres están fuera del alcance de las catástrofes naturales tales como el Mitch, pues tienen pocas cosas que perder*».

Esta comprobación está particularmente bien ilustrada por las características de los bienes cuya destrucción se lamenta prioritariamente en los diferentes estratos de la pobreza: camas en las categorías más bajas y aparatos de música (*music systems*), en las más altas. Otro indicio más: las pérdidas de aves de corral, que representan hasta 70% de los daños deplorados en las capas más desheredadas, descienden proporcionalmente a medida que se sube hacia las capas de pobreza más moderada, sustituyéndose progresivamente por los puercos y, finalmente, por las reses (que representan 46% de las pérdidas sufridas en la categoría más elevada).

Cuando los autores del estudio van a la evaluación del monto monetario de los daños ocurridos en el rubro de los equipos domésticos, mobiliarios y ganado, es cuando más crudamente se revelan las diferencias entre los distintos niveles de pobreza rural. Como promedio, los cinco niveles, desde los más pobres hasta los menos pobres, deploraron pérdidas, respectivamente, de: 330, 525, 808, 2,168 y 5,261 lempiras⁵. Pero si relacionamos esas pérdidas con el monto de los bienes privados que los hogares poseían antes del Mitch, los porcentajes se elevan respectivamente a: 17.6%, 12.3%, 8.8%, 7.2% y 2.9%, de manera decreciente a medida que vamos de las categorías más pobres hacia las menos pobres. Esto significa que, habiendo perdido bastante menos en valor absoluto, los más pobres perdieron mucho más en relación al

5 La relativa modestia de las sumas declaradas aquí se explica por el hecho de que los montos mencionados resultan de un promedio calculado sobre el conjunto de los 2398 hogares investigados, de los cuales sólo un 20% fue víctimas de daños ocasionados por la catástrofe. Para evaluar el monto de los daños propiamente sufridos por los hogares damnificados, hay que multiplicar por cinco el monto mencionado aquí. En aquel momento, la tasa de cambio era del orden de 13.5 lempiras/ por 1 dólar.

nivel de sus anteriores pertenencias. Última confirmación de la profunda estratificación de la pobreza rural en Honduras: aunque su investigación no se destinaba propiamente a abordar este punto, los autores se sienten fundamentados para sostener que las pérdidas sufridas en términos de *cosechas* se elevaron hasta el 40% entre los 20% más pobres, pero no sobrepasaron del 25 al 30% en las demás categorías investigadas.

*

* *

Y se me preguntará: ¿que pasó con los «no pobres»? Pues, por lo general, esa categoría no existe en las zonas rurales. Y, en las ciudades, evitan residir en las zonas de riesgo... De modo que las clases medias y superior casi no sufrieron daños domésticos. Cuando se presentó el caso, a consecuencia de las inundaciones, de los deslizamientos de tierra o de accidentes anexos (de automóviles principalmente), el monto monetario fue, sin duda, considerablemente superior a los daños sufridos por los pobres. Pero estas categorías sociales tienen seguros, en una proporción siempre mayor a medida que se eleva su nivel de bienestar material. Del mismo modo, cuando ocurrió que sectores de esas categorías sociales más favorecidas fueron afectados por daños relacionados con la propiedad de los medios de producción o de establecimientos comerciales (destrucción de locales o de stocks de mercaderías, algunas veces como consecuencia de los pillajes), disponían de todos los medios necesarios para resarcirse prontamente, y no se privaron de utilizarlos. Es así que a menudo el oportunismo y la especulación les ayudaron a compensar, y con creces, las pérdidas atribuibles al ausentismo del personal y a la reducción del nivel de actividad económica durante las semanas que siguieron a la catástrofe.⁶

⁶ En ciertos casos, la protección de los intereses de los ricos contribuyó directamente a crear estragos entre los más pobres. Así por ejemplo, en razón de la rareza de terrenos disponibles para la construcción en la capital, ciertos ricos comerciantes (siendo algunos de ellos cercanos familiares de las élites dirigentes), no vacilaron, con desprecio de todas las reglas en la materia, en edificar depósitos de mercaderías en el mismo lecho de las quebradas que bajan hacia el centro de la ciudad. Al momento de las grandes crecidas causadas por el Mitch, esas construcciones, hechas de materiales capaces de soportar la violencia de las aguas, contribuyeron a la formación de represas que provocaron la destrucción de viviendas populares situadas bien arriba del nivel que las aguas hubiesen alcanzado en ausencia de aquellos obstáculos. Los habitantes de las colonias periféricas que visitamos poco tiempo después de la catástrofe no ocultaban su vivo resentimiento al respecto.

Por el contrario, cuando los sectores populares sufrieron destrucciones del mismo orden –también fueron agredidos por los pillajes–, las consecuencias fueron desastrosas. En Tegucigalpa, principalmente, la brutal devastación de los barrios bajos ha significado pérdidas innumerables en el sector de la economía informal. Todos los puestos de venta situados en el Mercado Central de Comayagüela fueron irremediamente destruidos con todo lo que contenían. De igual modo, los artesanos informales que se encontraban en los barrios devastados, al mismo tiempo que tuvieron que lamentar la destrucción de sus domicilios, se vieron privados de su taller y de sus herramientas, que constituían lo esencial de sus medios de subsistencia. Se considera que unas 10,000 «microempresas» fueron aniquiladas en la ciudad capital. Un número estimativo, cuya redondez sólo revela la magnitud del desastre y pone, una vez más, en evidencia la impotencia de las estadísticas para describirlo con precisión.

Las mujeres en fin, principalmente las más industriosas, figuran entre las víctimas más duramente golpeadas por el Mitch. A muchas les fueron destruidas sus cocinas, indispensable herramienta para la elaboración de los alimentos que suelen ofrecer en los pequeños puestos de venta de alimentos en la calle. Lo mismo ocurrió con los locales donde las mujeres lavan y planchan la ropa ajena. Aquellas que lograron perseverar en el pequeño negocio que tenían en la calle vieron su clientela escasear por culpa de las circunstancias. Y en cuanto a las empleadas domésticas, muchas de ellas, impedidas de llegar a su lugar de trabajo por las dificultades del transporte, perdieron, al menos provisionalmente, sus fuentes de ingresos...

La destrucción de tantas viviendas modestas tuvo también por efecto el aumentar el «nomadismo» de los hombres. Si bien es cierto que a la mano de obra masculina se le ofrecerán muy pronto buenas perspectivas de empleo después de la catástrofe (sobretudo en los trabajos de fuerza para la remoción de los escombros y en las obras de reconstrucción), mientras tanto, en estos momentos difíciles, toda la protección y el cuidado de los niños recayó más duramente que nunca en sus madres. Esto contribuyó enormemente a aumentar ese fenómeno que un detestable eufemismo hace llamar «las mujeres jefas de hogar» (¡Jefas por defecto, por supuesto, como consecuencia de la deserción de sus «maridos»!). Tradicionalmente, dichos «maridos», por más intermitentes que fueran, solían tener el pundonor de asegurar el mantenimiento de su hogar, en el que podían perfectamente haber los niños engendrados por su compañera con precedentes «maridos». Pero cuando la vivienda se halló destruida, los «maridos» se largaron. Fue así que a la entrada de los centros asistenciales que proliferaron después del Mitch, cuando a las mujeres abandonadas, a veces encinta, que habiendo perdido sus medios de subsistencia intentaban

encontrar refugio con su chiquillería, se les preguntaba: «¿Dónde está tu marido?», fue habitual escucharles contestar: «¡El Mitch se lo llevó!».⁷

En el sector de la producción: daños importantes, pero contrastados

Comencemos por una observación relativamente consoladora para los pequeños campesinos. Privados éstos, desde hace tiempo, por la acción repetida de extorsiones y desposeimientos de toda clase, de la propiedad de las tierras cultivables del fondo de los valles (codiciadas porque son más fácilmente manejables para los cultivos rentables y la cría intensiva de ganado), tuvieron que establecerse en las vertientes montañosas, donde se dedican a la agricultura de subsistencia y a la producción de café. Cuando pasó el Mitch, estas parcelas sufrieron generalmente menos destrucciones que las explotaciones más prósperas de los valles. Tanto en las planicies del Norte como en la parte meridional del país (regiones a las que corresponden el 29% de la superficie agrícola del país y donde se concentra lo esencial de las 80,000 hectáreas de cultivos de exportación), las inundaciones no solamente destruyeron los cultivos, también comprometieron seriamente la futura capacidad de producción de esas zonas, por la destrucción de sus infraestructuras y el deterioro, difícilmente recuperable, de muchos suelos con vocación agrícola.

En el resto del país, el 58% de la cosecha anual de maíz se da por perdida. En cambio, el monto de pérdidas no pasa del 14% en la producción de arroz y del 6% en la de frijoles, componentes fundamentales de la alimentación de los centroamericanos. Esto se debe al hecho de que, a la hora en que sobrevino el Mitch, las dos primeras cosechas del año ya se habían realizado, mientras que, de la tercera, sólo se destruyó un porcentaje situado entre el 30% y el 40%. Esto permite comprender porqué las graves dificultades alimenticias que se podían temer en las ciudades después de la catástrofe, no se produjeron. Desgraciadamente, sobre todo en el cultivo del arroz, las consecuencias se harán duramente sentir en los años que siguen. Cuatro años después de la catástrofe, la producción anual de arroz en Honduras no sobrepasa la cuarta parte de lo que había sido antes de 1998 y no llega a cubrir más que el 15% de las necesidades del país.

Otro indicio de la relativa preservación de los campesinos pobres de las zonas montañosas en contraste con el descalabro de las explotaciones agrícolas

⁷ Cf. Leonarda ANDINO: "Aumenta el número de mujeres solas; Mitch se llevó los maridos", in: *El Heraldo*, 25 de enero de 1999.

de los valles y planicies: mientras que la ruina de las bananeras del norte del país ascendió al 85%, y al 60% en las meloneras del sur, la tasa de destrucción en los cultivos de café de las zonas montañosas no pasó del 18%. No obstante, esto no significa que los productores de café resultaron inmunes luego de esta época difícil. Por un lado en efecto, el Mitch sobrevino para ellos en un mal momento: cuando las cerezas ya estaban formadas, pero todavía no se había iniciado la cosecha. Los caficultores que lograron finalmente efectuar su cosecha tuvieron mil dificultades para transportarla hasta los centros de acopio, en razón de la destrucción de las vías de comunicación. Sin embargo el elemento más catastrófico para los caficultores es de otra índole: la cotización del café (condicionado en sacos de 45 kilos) en el mercado internacional es muy inconstante. Esa vez, en enero de 1999, cayó a menos de 100 dólares. Pero felizmente (si podemos hablar así), la demanda internacional del producto iba a repuntar bruscamente al final de ese mes, como consecuencia de un terremoto ocurrido en Colombia.⁸

Como se puede ver, no todo es color de rosa para el pequeño campesinado hondureño. Si una buena parte de ellos no padeció las consecuencias directas del Mitch, queda una fracción (en una proporción de alrededor del 20% como lo mostró la encuesta del IFPRI) que sufrió el impacto directo de la catástrofe. Obligados a esperar hasta julio-agosto de 1999 para poder cosechar lo que no pudieron plantar más que en abril, quienes perdieron el fruto de su trabajo tendrán dificultades para sobrevivir durante esos diez meses. Si no gozan del apoyo de fuertes solidaridades familiares, éstos corren el riesgo de perder sus bienes en esta desventura, y de tener que ir a engrosar las filas de la emigración hacia los centros urbanos, o aun hacia el extranjero.

*

* *

En el sector de los cultivos para la exportación, las devastaciones son casi ilimitadas. Tragadas por las inundaciones, 12,000 hectáreas de bananeras deben considerarse completamente perdidas. Se va a tener que arrancar todas las plantas, labrar la tierra y, en un primer tiempo, sembrar sorgo o frijoles con el fin de descontaminar los suelos, atacados por el agua y la podredumbre.

8 A título de comparación entre los efectos de las catástrofes llamadas «naturales» y de las calamidades económicas, podemos señalar que cada vez que el precio del saco de café baja un dólar en el mercado mundial, la economía de Honduras sufre una pérdida de 2.4 millones de dólares.

Será solamente al cabo de seis meses que se podrá replantar bananos, y se tendrá que esperar un año más hasta la primera cosecha. Mientras tanto, le tocará al gobierno restaurar las infraestructuras destruidas por el Mitch, para que las compañías puedan reanudar sus actividades. En suma, pasarán dos años hasta que las bananeras estén en condiciones de reencontrar un nivel de producción más o menos normal.

La propiedad de las bananeras de Honduras se reparte entre dos multinacionales: la Tela Railroad Co. (fachada local de la Chiquita Brands, ex-United Fruit) con sus plantaciones situadas en los valles del Ulúa y del Chamelecón; y la Standard Fruit, establecida en el valle del Aguán. De cara a estos dos gigantes, se encuentra un número consecuente de productores nacionales independientes. El año precedente, los 33 millones de cajas de bananos (de 18 kg cada una) que constituyeron el volumen anual de exportación de Honduras (trayendo al país 220 millones de dólares) se repartieron en razón de 20 millones para las dos multinacionales, y 13 millones para los pequeños productores independientes.

Igual volumen de exportaciones se esperaba para 1999. Ahora bien, teniendo en cuenta el estado en que están las plantaciones en enero de 1999, esas previsiones tendrán que reducirse a 4 millones de toneladas: 3 para las dos grandes compañías (el 15% del volumen previsto), y un millón de toneladas en vez de 13 para los productores independientes (solamente el 7.7% del volumen previsto). Este cuadro muestra que los daños sufridos por los productores nacionales fueron aún peores que los de las plantaciones de las grandes compañías. Pero eso no es lo más grave: como consecuencia de las devastaciones causadas por el Mitch, la diferencia de rentabilidad entre esos dos sistemas de producción, promete crecer todavía más en el futuro, en detrimento de los productores independientes. En efecto, confrontadas con la necesidad de renovar enteramente sus plantaciones, las grandes compañías ya hicieron saber que aprovecharían esa oportunidad para introducir nuevos sistemas de riego, con el fin de aumentar la producción. Tales inversiones quedan evidentemente fuera del alcance para explotaciones de menor escala.

La destrucción dejó a las bananeras reducidas casi a la nada por al menos dos años, uno de los dos rubros de exportaciones tradicionalmente más prósperos de Honduras, llevó a suspender las actividades de una buena parte de los trabajadores de ese sector. Desde los primeros días de noviembre de 1998, la Standard Fruit (que anunciaba la pérdida del 77% de sus plantaciones) y la Tela Railroad Co. (que, de su lado, evaluaba el monto de sus pérdidas en 85%) solicitaron —y obtuvieron— del Ministerio del Trabajo, la autorización de suspender todo su personal por 120 días. A partir de fines de enero de 1999, sin embargo, una parte de este personal pudo ser

recontratada para ejecutar trabajos de rescate en las plantaciones. Pero sólo se trataba de trabajadores agrícolas. Para el resto de los trabajadores suspendidos, las perspectivas son más sombrías. Por ejemplo, los que trabajan en el acondicionamiento de las frutas deberán esperar el reinicio de las exportaciones hasta el final del año 2000 para volver a encontrar una oportunidad de trabajo.

A esos desgastes en las bananeras se suma, en esa misma región tropical del norte del país, el deterioro de las plantaciones de caña, de piñas, de verduras y de palma africana que, en el transcurso de los años precedentes, sustituyeron a las bananeras en el marco de una política de diversificación de las producciones. Un 25% de las palmeras tendrá que ser replantada. Lo mismo 7,000 hectáreas de naranjales en el valle del Aguán. La situación es menos aguda en lo que concierne a los toronjales, cuya producción anual ya había sido exportada alrededor del 15 de octubre. Pero aquí también, sobre todo en lo que se refiere a los cultivos de caña y de piña, muchos terrenos, severamente deteriorados por las inundaciones, deberán ser rehabilitados. Por lo tanto, ya se vislumbran severas bajas en la producción de los años futuros.

*

* *

En el sur del país, la región de Choluteca ofrece un panorama desolador. Allí se habían desarrollado, desde hace algunos años, importantes cultivos de melones que, junto con los camarones, constituyen los dos principales rubros de exportaciones no tradicionales de Honduras. Para este cultivo de contra-estación (que exporta su producción durante el invierno de los países del Norte), el informe de la CEPAL señala que se había previsto cultivar 12,000 hectáreas para la estación 1998-99. A la hora en que sobrevino el Mitch, 3,600 hectáreas ya habían sido sembradas o estaban preparadas para ello. Después del Mitch, el 80% de estas 3,600 hectáreas deben considerarse fuera de uso.

Para el melón, siendo éste un cultivo de ciclo mucho más corto que, por ejemplo, el café, los bananos o la palma africana, el calendario permitía todavía, teóricamente, reiniciar un ciclo productivo en los meses de noviembre-diciembre, con el fin de que una cosecha pudiera hacerse antes del fin del invierno en los países del Norte, y evitar de esa manera que la estación 98-99 fuese completamente perdida. Pero el problema está en dónde encontrar tierras con posibilidad de rehabilitarse. Cerca de la mitad de las *meloneras* se encontraban establecidas sobre terrazas fluviales, normalmente fuera del alcance de las inundaciones, pero que esta vez fueron invadidas por crecidas de una violencia inaudita que se han llevado la capa fértil del suelo,

reemplazándola por áridas dunas de arena o por abominables amontonamientos de piedras, cascajos y escombros de toda clase. Esto las convierte, por mucho tiempo, en impropias para cualquier tipo de cultivo. Las cuatro quintas partes de las 3,600 hectáreas de terrenos ya sembradas en octubre de 1998 se encuentran en tal situación. Es por esto que, en enero 1999, no se podría resembrar más que 7,000 hectáreas de las 12,000 inicialmente previstas.

*

**

En esta misma región del sur del país, las camaroneras ostentaban, desde algunos años, un desarrollo espectacular. Estas empresas, desarrolladas en estanques artificiales edificados en los estuarios y en los manglares que bordean el Golfo de Fonseca, no podían faltar de sufrir también el impacto de las monstruosas crecidas de los ríos. No exactamente por la sumersión de sus instalaciones (ya que éstas, que funcionan con aguas extraídas por bombeo, están generalmente situadas suficientemente en alto con respecto al nivel del mar para que sus diques las mantuvieran a salvo de una invasión de las corrientes). De modo que, por regla general, el perjuicio sufrido por las camaroneras no resultó de daños mecánicos causados a sus infraestructuras, sino de la contaminación de las aguas del Golfo de Fonseca por las aguas sucias aportadas por los ríos. No teniendo dicho golfo una tasa de drenaje muy elevada (por el hecho de estar muy cerrado y tener poca profundidad), las aguas contaminadas no tienen más opción que la de estancarse de manera prolongada.

Sabiendo que las aguas del Golfo son las que sirven para rellenar los estanques de las camaroneras, esta contaminación condujo a la prohibición de la exportación de la cosecha a efectuarse en noviembre (normalmente la más abundante del año). En efecto, no se puede transar con los rigurosas normas de calidad y de seguridad alimenticia exigidas en los países del Norte a los cuales esta mercancía se destina. El paro forzoso de la producción tuvo que prolongarse hasta que se lograra demostrar que las aguas del Golfo regresarán a un nivel de calidad que permitiera la reiniciación de la pesca en el mar y, por tanto, el proceso de producción en la camaroneras.⁹

*

**

⁹ La reiniciación de las actividades en la camaroneras se retardó por el rumor según el cual, a su paso sobre las zonas agrícolas del bajo valle del río Choluteca, las aguas de éste habrían destruido varios galpones conteniendo importantes cantidades de pesticidas. Éstos habrían sido arrastrados hacia el mar. La alerta a propósito de esta

En el sector del ganado bovino, otro rubro tradicional de la producción en Honduras, las pérdidas fueron igualmente considerables. Se evalúan en un mínimo de 5.000 cabezas de ganado, de carne o lechero. En el departamento de Olancho, al menos tres mil cabezas de ganado perecieron ahogadas por las inundaciones. Remarcamos una vez más hasta qué punto esas cantidades son aproximativas: ya en tiempo normal los datos del censo de estos animales no son muy consistentes; y además es muy probable que en el lapso de desorganización consecutivo a la catástrofe, una cierta proporción de los hatos faltantes fueron autoconsumidos o vendidos fuera de registro.

A estas pérdidas de ganado se suman numerosas destrucciones de activos: desaparición de forrajes y otros alimentos para los animales, de material genético, de vacunas y otros productos zoonosanitarios. A esto deben añadirse los daños padecidos por las unidades de producción: lecherías perjudicadas, pastos mejorados gravemente dañados, setos y cercas destruidas, etc. Agréguese la exposición del ganado sobreviviente a una mortalidad acrecentada por una alimentación empobrecida y los riesgos de enfermedades, con el consecuente descenso en el rendimiento de la producción lechera. Así golpeados en su potencial de producción, los ganaderos experimentaron también, como todo el mundo, los inconvenientes de la situación general consecutiva a la catástrofe: las infraestructuras viales destruidas o fuertemente perjudicadas dificultan el transporte de sus productos y tienen por consecuencia una elevación importante en el costo de los fletes.

Importantes daños deben señalarse también en el sector de la avicultura, donde el 60% de la producción debe considerarse como pérdida. Numerosos gallineros industriales, algunos situados en las zonas de riesgo, sufrieron importantes daños de sus instalaciones, llevando al deterioro los depósitos de alimentos y otros productos indispensables para la supervivencia de las aves. Aun cuando estas destrucciones no tuvieron lugar, los cortes prolongados de energía eléctrica así como las dificultades del transporte carretero pusieron fuertes barreras a la producción y obstaculizaron la llegada de huevos y pollos hasta los mercados.

*

* *

supuesta contaminación fue tan viva que el gobierno se vió forzado a prohibir la pesca artesanal que aprovisiona los mercados locales hasta que se demostrara la no contaminación de las aguas del Golfo. El análisis detallado de este episodio se encontrará al final del presente capítulo.

Si bien es cierto que, como hemos podido ver, la desolación reina de manera muy general en el sector agropecuario (afectando al 40% de la población económicamente activa), el panorama está lejos de presentar un balance tan desalentador en otros dos sectores de la producción.

El primero es el de la explotación forestal, cuyo potencial resulta prácticamente ileso: como no hubo “huracán” propiamente dicho, en vano se buscaría, en todo el territorio, bosques derribados por el viento (con la sola excepción de isla de Guanaja, donde un buen tercio de la cobertura arbórea se encuentra irremediablemente destruido. Pero no se cortaba madera en ese lugar, donde el daño causado a la vegetación debe más bien inscribirse en el rubro de los deterioros ocasionados al potencial turístico). En cuanto al resto del país, sabiendo que los trabajos de reconstrucción implicarán una masiva demanda de madera, se puede considerar que para el rubro madera, la coyuntura post-Mitch fue muy positiva.

Otro sector que salió prácticamente inmune de la catástrofe es el de las *maquillas*¹⁰, talleres de ensamblaje *off-shore* encerrados en parques industriales llamados ZIP (*Zonas Industriales de Procesamiento*). Muy liviano, el equipo de estos talleres pudo fácilmente ponerse a salvo, aun cuando los locales fueron invadidos por las aguas. De manera que de las 180 *maquiladoras* establecidas en el territorio hondureño (casi exclusivamente en el norte del país), solamente dos conocieron serios daños, siendo una sola de ellas, en La Ceiba, víctima de una destrucción total. El resto de este sector no sufrió más que de la suspensión de sus actividades durante las inundaciones y de una reiniciación un poco lenta de sus actividades, debido al tiempo necesario para reacomodar los locales, al ausentismo forzado de una parte de su mano de obra y al entorpecimiento general del tráfico portuario y carretero durante las semanas posteriores al fenómeno catastrófico propiamente tal.

No pasará mucho tiempo para que se evidencie cuánto la situación consecutiva al Mitch ofreció una fabulosa oportunidad para la expansión del sector maquilero en Honduras. Entre diciembre de 1998 y enero de 1999, atraídos por el aumento y la concentración del volumen disponible de mano de obra no calificada, 32 nuevas empresas decidieron implantarse en Honduras. Volveremos con más detalles sobre el espectacular desarrollo de

¹⁰ *Makila* es una palabra árabe que, en la edad media, designaba el pago que se debía al molinero. No produciendo nada, éste sólo contribuía por la puesta a disposición de un aparato técnico y por la prestación de su trabajo, al avance de una fase en el proceso de elaboración que va del trigo hacia el pan. Una producción que no le pertenecía no hacía más que pasar por sus manos, para devolverse a su dueño después de su

las *maquiladoras* en el quinto capítulo de la presente obra, en el que se analizarán las consecuencias, a más largo plazo, de la catástrofe del Mitch.

Pérdidas gravemente invalidantes en las infraestructuras públicas

De manera general, Honduras puede considerarse como un país de geografía difícil. Su territorio continental consiste, en su mayor parte, en un arrugamiento de montañas de origen volcánico, con suelos friables y mal estabilizados. Entre esas montañas, una multitud de ríos, casi todos de modesto caudal y de curso breve, a veces con un trazado muy complicado, cavaron profundos valles, frecuentemente estrechos y bordeados de acentuadas pendientes, que dividen al país en territorios mal conectados entre sí. Sólo un corredor centro-occidental ofrece una posibilidad de tránsito transistmico. Allí se ha concentrado la mayor parte de la población y de las actividades económicas.

Las dos planicies situadas en ambos extremos de este corredor axial, con un clima respectivamente tropical-húmedo en el norte y de tendencia seca y semidesértica en el sur -no son más que los vastos rebosaderos de los valles centrales, con la permanente amenaza de ser anegados por las inundaciones cuando se producen crecidas excesivas. De muy mediocre caudal y hasta casi secos durante la mayor parte del año, los ríos de la vertiente del Pacífico (el río Choluteca, el río Nacaome y sus afluentes respectivos) pueden convertirse en monstruosos torrentes que desbordan de sus lechos durante la estación de lluvias.

Beneficiándose de un régimen pluvial más abundante y regular, los ríos del norte (el Ulúa y el Chamelecón con sus respectivos afluentes y el río Aguán cuyo curso, más al este, se extiende paralelamente al litoral caribeño), son más importantes y de caudal menos inconstante. Hace más de un siglo, al iniciarse la explotación agro-industrial del banano, la mayoría de estos ríos fueron canalizados mediante la construcción de diques de tierra, para regularizar su curso e irrigar las plantaciones. En períodos de crecidas, no solamente estos diques hacen correr las aguas fluviales a un nivel superior a la de las

procesamiento. Muy atinada fue la retoma de este término para designar las industrias *off-shore* en las que artículos temporalmente importados son reexportados después de una o más operaciones que les han hecho avanzar en una o más etapas en su proceso de producción. El uso, todavía fluctuante, del término *maquila* parece indicar que éste se aplica al sector industrial de reexportación considerado en su conjunto. Las empresas individualmente consideradas se dicen generalmente *maquiladoras*, forma abreviada de *[empresa] maquiladora*.

explotaciones agrícolas, lo mismo ocurre con las zonas residenciales cuando éstas se sitúan en la proximidad de las plantaciones.

Este paisaje acumula todas las fragilidades posibles frente a un episodio pluvial sobreabundante tal como las lluvias peri-ciclónicas. Si por añadidura la mala suerte hace:

—que éstas sobrevengan después de una alternancia de sequías y precipitaciones excesivas que contribuyeron a fragilizar los suelos;

—en un paisaje marcado por el carácter anárquico y reciente de las intervenciones antrópicas (la población de Honduras se ha multiplicado por 20 en el transcurso de los 120 últimos años y su expansión territorial se ha hecho con una gran precariedad de medios y bajo la presión de una desigualdad social que oblitera la noción del bien común e impide la concepción de una política coherente de administración territorial);

—no resulta difícil comprender porqué el episodio pluvial del Mitch va literalmente a demoler todas las infraestructuras del país; y por qué las masas pobres, a pesar de haber sido las principales víctimas del cataclismo, serán designadas por algunos (y especialmente por los tecnócratas de la ecología) como el factor determinante de esa catástrofe.

De hecho, históricamente alejada de las tierras bajas por la acción de los poderosos y obligada a poblar las laderas de las montañas, que sus cultivos no tardaron en despoblar de árboles, la masa de los campesinos pobres se ve comunmente señalada en los informes internacionales como «responsable» de las inundaciones y de los deslizamientos de tierra que arruinaron el país. Hasta cierto punto, dicha aseveración es técnicamente cierta: no se puede dudar que una relación existe entre la destrucción de los bosques de las zonas altas y los estragos que se produjeron en las zonas bajas. La mejor ilustración de eso fue la devastación del centro de Tegucigalpa. Sin embargo, un momento de reflexión sociológica hace aparecer que, en este caso, los damnificados de la ciudad pertenecen a la misma categoría social que los campesinos de las montañas: en su inmensa mayoría, se trató de migrantes recientemente llegados del campo, o de descendientes de anteriores generaciones de migrantes que la miseria expelió del campo hacia las periferias urbanas. Una cruel paradoja hace que la misma clase social aparezca como siendo a la vez causa y víctima de su infortunio.

*

* *

Antes de la catástrofe, como resultado de un programa de inversiones ejecutado en el correr de los años 90, Honduras se había convertido en el

país centroamericano mejor provisto en materia de carreteras: su red vial se extendía sobre 14,602 km., de los cuales 2,673 eran asfaltados. Después del paso de cataclismo, este sistema vial debe considerarse como destruido en un 70%. Sólo se mantuvieron transitables múltiples trozos intercalados entre los derrumbes. Tal fue el caso de la capital, completamente aislada del resto del país. Al interior mismo del Distrito Central, ciertos desplazamientos resultaron difíciles. Por ejemplo, las vías de acceso al aeropuerto estaban muy averiadas. Esto complicó mucho la llegada de los socorros. Uno de los puentes mayores que comunican Tegucigalpa con su ciudad gemela, Comayagüela, no pudo aguantar la violencia de la crecida y en los demás puentes el tránsito sólo pudo restablecerse de manera limitada. De esto resultó, por mucho tiempo, un entorpecimiento general del tránsito vehicular en la ciudad capital.

En las zonas montañosas, innumerables derrumbes cortaron los caminos, generalmente situados en el flanco de las cerros. Para franquear esos obstáculos, la única solución consistía en llegar a un lado del derrumbe con un vehículo, para trasladarse a como diera lugar, trepando, caminando, resbalando, hasta la otra orilla, donde otro vehículo esperaba a los transeuntes, y así sucesivamente... Una y otra vez, al acumularse, en el fondo de los valles, las rocas, tierras, árboles y otros escombros arrastrados por esos derrumbes, se formaron diques improvisados en el lecho de los ríos. Luego de cierto tiempo, cuando aquellos obstáculos cedieron bruscamente, las aguas represadas se precipitaron violentamente hacia abajo, generando olas devastadoras, capaces de destrozarse puentes y carreteras, arrasando zonas de cultivos y a veces pueblos enteros. En algunos casos, fueron los mismos puentes los que, en los valles, detuvieron los escombros, causando retenciones de agua que, al liberarse, provocaron inundaciones y destrozos.

He aquí el porqué el balance de las infraestructuras deterioradas se establece ante todo en términos de puentes rotos, que se tendrán que reparar cuanto antes para poner fin a la parálisis del país: 99 obras de hormigón, con una longitud total de 9,198 metros, deberán ser reconstruidas. A esto se agregan 2,045 metros de vados y otros pasos rústicos que se necesita reparar de emergencia. Importantes tramos de carreteras deberán también restaurarse. En resumen, el informe de la CEPAL evalúa en 525 millones de dólares el perjuicio del país en materia de carreteras, precisando que el costo de la reconstrucción necesariamente superará esa suma porque, en un primer tiempo, se van a tener que armar obras provisionales, a fin de restaurar de urgencia el mínimo de movilidad indispensable para la vida del país. Ya desde enero de 1999, aparecía claro que la realización del programa de reconstrucción vial se extendería sobre por lo menos cuatro años.

Otra red cuya reparación, al menos de emergencia, no puede esperar, es la de electricidad. Felizmente, la represa de la gran estación hidroeléctrica de

El Cajón ha salido inmune. Al aguantar la presión del agua, no sólo pudo seguir surtiendo energía eléctrica después de la catástrofe, también se le puede acreditar un rol protector en relación con las planicies que se encuentran río abajo: detrás de su imponente cortina, la represa retuvo la fabulosa cantidad de 2,557 millones de litros de agua, que no vinieron a sumarse a las inundaciones que se produjeron en el Valle de Sula.

En el resto del país, los derrumbes y las inundaciones echaron abajo más de 2,000 km. de líneas eléctricas. Centenares de postes tumbados deberán ser puestos de pie o cambiados; 36 torres de transmisión están fuera de uso y una gran cantidad de transformadores deberán ser reparados. A costa de un trabajo encarnizado, cinco semanas serán necesarias para que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) logre restablecer una distribución de electricidad más o menos completa en todo el territorio. Mientras tanto, la población sufrió todos los inconvenientes que resultan de los cortes. La falta de alumbramiento tanto público como privado, tiene serias implicaciones sobre la seguridad pública y sobre la moral de la población. A esto se suman las rupturas de la cadena de frío, que afectan tanto a las neveras particulares como a las congeladoras del servicio público, principalmente en los hospitales, provocando estos riesgos: la inevitable destrucción de los alimentos que se deterioran, o una agravación considerable de las consecuencias sanitarias cuando, por motivo de la escasez o de la urgencia, la gente prefiere consumir los productos averiados, optando por desconocer las alteraciones ocasionadas por los descongelamientos.

Inútil es subrayar hasta qué punto la privación de energía eléctrica paraliza el funcionamiento de las empresas. La red telefónica, íntimamente asociada a la distribución de electricidad, se encontró también suspendida. Empresas, servicios públicos, personas, todos se vieron privados de comunicación, tanto locales como con el extranjero. Entre otras consecuencias, el funcionamiento y la seguridad de los aeropuertos fueron gravemente afectados, cuando todos los enlaces con el mundo exterior dependen de ellos.

La red de distribución de agua potable también dejó de funcionar como consecuencia del paro, por falta de electricidad, de las estaciones de bombeo y de los sistemas de filtración y potabilización. En las calles, los colectores de aguas pluviales estaban fuera de uso, debido a que las tuberías subterráneas se encontraban rotas o atoradas. En algunos sitios, las aguas usadas invadieron las cañerías del agua potable, generando un grave peligro para la salud pública. La verdad es que las alcantarillas así como las redes de aprovisionamiento ya estaban en un lastimoso estado desde antes de la catástrofe...

Durante un buen tiempo, en Tegucigalpa, la distribución del agua estuvo suspendida en un 100%. Se necesitaron cuatro semanas para restablecer el servicio a la altura de los tres cuartos de su capacidad anterior al Mitch.

Mientras tanto, cada cual tuvo que arreglárselas como pudo, recurriendo a diversos expedientes para salir del apuro. Los camiones cisternas tuvieron que repartir agua por los barrios acomodados, tal como acostumbran a hacerlo en las colonias pobres. Catorce pozos fueron perforados en diferentes lugares de la capital, mientras que los trabajos de reparación se efectuaban a toda prisa, particularmente arduos en las colonias escarpadas, lastimadas por los derrumbes. La situación fue igualmente difícil en Choluteca, en razón de los estragos provocados en esa ciudad por el río del mismo nombre.

En materia de aguas, tampoco se salvaron las zonas rurales: 1,600 redes locales de conducción de agua potable de diversa importancia fueron destruidas o por lo menos gravemente dañadas; muchos manantiales se taparon de lodo y arena, una buena cantidad de captaciones y colectores al aire libre se encontraron anegados o enterrados, sin contar los acueductos derribados, y las redes de tuberías trituradas, arrancadas o torcidas.

En fin, para terminar con la cuestión del agua, las oficinas centrales de la administración del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)¹¹, imprudentemente situadas en Comayagüela sobre el margen del río Choluteca, fueron devastadas por la marejada fluvial. Si los edificios resistieron, no así los vehículos, el mobiliario, los equipos y la documentación que se encontraban en ellos. Particularmente deplorable es la destrucción de los planos e informes técnicos sobre los sistemas de conducción del agua en todo el país, así como la pérdida del material informático relativo a la facturación de los clientes. Se necesitará mucho tiempo para reconstituir las bases de datos. Mientras tanto, el nivel de eficacia del SANAA en materia de percepción de facturas de consumo, ya no muy eficiente en tiempo normal, resultará aun menor.

Las destrucciones de archivos son más completas todavía en el ministerio de Educación Pública, igualmente situado en la orilla del río. Éste aniquiló todo: diplomas, datos administrativos del personal, estudios pedagógicos, archivos contables, y todo lo que permitía documentar la historia de la educación en Honduras. Además de eso, en todo el país, el sistema escolar se vio duramente golpeado: más de mil establecimientos escolares, desde el pre-primario hasta el secundario (aproximadamente 30% del total), fueron destruidos o severamente dañados, privando a 750,000

11 En aquel momento, el SANAA administraba todavía aproximadamente los dos tercios del servicio de agua y saneamiento del país. En algunas grandes ciudades como Choluteca, Puerto Cortés y San Pedro Sula, esta gestión ya se encontraba delegada a la autoridad municipal.

jóvenes de infraestructuras escolares en la proximidad de su domicilio. El año escolar de 1998 tuvo que ser declarado prematuramente clausurado, evaluándose a los estudiantes en base a los exámenes parciales efectuados previamente a la fecha de la catástrofe.

Frecuentemente alojados en las proximidades de su lugar de trabajo, 7,000 docentes lo perdieron todo y además sus salarios dejaron de ser pagados por un largo período.¹² En resumen, cada uno se pregunta en qué condiciones se podrán iniciar las clases del próximo año, que debe comenzar en febrero.¹³ Esta pregunta plantea con tanta más razón que el problema se extiende a los establecimientos que no han sufrido destrucciones. En efecto, teniendo que atender, inmediatamente después de la catástrofe, a una marea de desalojados (cuyo número, en un primer tiempo, se estimó entre 600,000 y 700,000), el gobierno no pudo hacer otra cosa que decretar la puesta a disposición de los establecimientos escolares como refugios de emergencia para albergar esa masa de desheredados. Al cabo de tres semanas después de la catástrofe, habiendo buena parte de éstos encontrado cómo alojarse en casa de familiares, en salas parroquiales, bajo carpas entregadas por la ayuda internacional, o yendo a amontonarse dentro y alrededor de instalaciones deportivas tal como el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, sólo quedaban 28,500 damnificados repartidos en los 1,375 centros de alojamiento acomodados en las escuelas. Pero cada uno se preguntaba en dónde podría ir a realojarse esa cantidad de personas a fin de que los locales escolares pudieran devolverse a su destino habitual.

La destrucción de los edificios así como la pérdida de los equipos y archivos también ocurrió en las oficinas, plantas y talleres de HONDUTEL y en el Ministerio de Economía. Pero lo más inquietante, sin duda, son las destrucciones que afectaron al sector de la salud, igualmente mal ubicado cerca de la ribera del río. Así es que el Hospital de la Seguridad Social sufrió enormes daños, que redujeron severamente su eficacia. En todo el país, 123 centros de salud (sobre un total de 1,091) fueron destruidos o severamente dañados.

Otras devastaciones, a pesar de que no significan amenazas directas sobre la población, contribuyeron al sentimiento general de desolación y abandono. Cuando los bienes pertenecen al dominio cultural, patrimonial o sentimental, su destrucción causa un verdadero sentimiento de luto social. En ese rubro, no se pudo evitar, por ejemplo, que el Conservatorio Nacional de Música,

¹² Cf. *Internationale de l'Éducation* V, 2 (Paris 1999), pp. 24 – 25.

¹³ En Honduras, las vacaciones de verano comienzan hacia el 15 de noviembre para finalizar a mediados de febrero.

también situado en la ribera del río Choluteca, fuese sumergido por las aguas. Lo que pudo ser recuperado, como los pianos por ejemplo, está definitivamente deteriorado. En cambio, situado a mayor altura (arriba de desplomado conservatorio, precisamente), el Estadio Nacional no habría sufrido ningún daño si no hubiera sido necesario transferir en él a los reclusos de la Penitenciaría Nacional, poco antes de que ésta fuera destruida por acción del río Chiquito. Como era de esperar, los maleantes causaron muchos estragos en el Estadio.

En el centro de la vieja Tegucigalpa, extraño y añejo ornamento urbano debido al régimen de Tiburcio Carías, el parque La Concordia, querido por los enamorados por su rancia decoración con monumentos de hormigón armado de motivos prestados a los antiguos mayas, vio las aguas fangosas del río despiadadamente invadir sus veredas. Está bien dañado, pero se podrá limpiar y restaurar. En el mismo orden de ideas, se tuvo mucho miedo por el sitio de Copán (¡éste del más auténtico estilo maya!), pero felizmente las venerables ruinas no experimentaron ningún daño. Sin embargo, el nuevo museo demostró necesitar mejor protección contra las precipitaciones. La crecida del río que bordea las ruinas causó aprehensiones en distintos lugares de su valle. En el futuro, el sitio conocido con el nombre de "Las Sepulturas" deberá ser protegido en previsión de una repetición posible de circunstancias tan extremas. En suma, en materia de patrimonio turístico, los verdaderos y únicos daños a lamentar son los que el huracán causó en la Isla de Guanaja.

Otro sector que resultó igualmente poco dañado: el de los equipos portuarios y de las instalaciones petroleras. En cambio, cinco estaciones de observación meteorológica y de vigilancia hidrográfica establecidas en diversos lugares del territorio fueron barridas por el Mitch, como si éste hubiese querido destruir la grabación de sus fechorías. Mientras que estos aparatos científicos, tan indispensables para la detección de riesgos, no se restablezcan, su ausencia implica para Honduras una acrecentada situación de vulnerabilidad frente a la eventual repetición de sucesos climáticos parecidos a los del Mitch.

Revelación y acentuación de algunos atolladeros ecológicos

Se sabe que las catástrofes llamadas «naturales» ponen crudamente en evidencia las vulnerabilidades físicas, sociales e institucionales de los países que golpean. Ya hemos señalado que la geofísica de Honduras presenta, *a priori*, todos los elementos de un escenario de multi-riesgos: suelos volcánicos, zona sísmica, topografía montañosa y frecuencia de los episodios

ciclónicos. A estas malas disposiciones de base se suman factores agravantes de origen antrópico, fundamentalmente debidos a un acelerado crecimiento demográfico en un contexto de gran pobreza, causa primera de una urbanización improvisada y anarquizada y de los usos inadecuados de las tierras agrícolas, tanto en el sector de la gran explotación capitalista como del campesinado pobre.

Segunda observación general: lejos de aliviar los factores que las producen, las catástrofes naturales los refuerzan, los agravan. Así, después del paso del Mitch, en muchos aspectos la geografía del país fue trastornada, con consecuencias ecológicas muy negativas. Una de las más preocupantes es que, como resultado de la erosión, del transporte y del depósito de sedimentos, se produjeron importantes modificaciones en la geodinámica de las cuencas fluviales y de los sistemas hidrográficos. Algunos ríos cambiaron de curso y a veces de manera localmente muy significativa.¹⁴ Peor aún: su capacidad de evacuar las crecidas se ve reducida por la invasión de sus lechos con depósitos de arena y de grava. La fragilización de sus nuevas orillas, enteramente desprovistas de vegetación y de arboledas ribereñas, así como el encenagamiento de los estuarios, obstruidos por toda clase de escombros que frenan la evacuación de las aguas fluviales hacia el mar, son otros factores que hacen que el riesgo de verse reproducir graves inundaciones es ahora más elevado que nunca.

Sobre las vertientes montañosas, el deterioro geográfico no es menor. A finales de octubre y comienzos de noviembre de 1998, no se contaba el número de pendientes saturadas por el agua de las lluvias diluvianas caídas ya desde antes del Mitch. Privadas de una cobertura forestal capaz de absorber la humedad y de frenar el correr hacia abajo de las aguas, muchas de esas faldas se han derrumbado destruyendo todo a su paso, provocando a veces el embalsamiento de los ríos en los valles. Pero no todo acabó de despeñarse con las lluvias del Mitch: numerosas vertientes quedaron frágiles, cerca de la ruptura, listas para desplomarse en las próximas estaciones de lluvias, aun cuando la intensidad de las precipitaciones no sea superior a la normal.

14 Una de las consecuencias imprevistas del Mitch fue desviar hacia el interior del territorio nicaragüense el curso del río Negro, cuyas cabeceras se encuentran en Honduras pero que, sobre 17.5 km., cumple el papel de línea fronteriza entre los dos países, antes de volver a adentrarse en territorio hondureño. En abril de 2004, la excavación por parte de Honduras – al precio de un millón de dólares - de un canal destinado a devolver el río a su cauce normal fue causa de una seria contienda con Nicaragua: los campesinos de ese vecino país se quejaban ante sus autoridades de que se les estaba quitando «¡sus aguas!»

Las consecuencias de esta degradación acentuada de las cuencas hidrográficas son incalculables. Es previsible que, a mediano o largo plazo, no solamente se producirán nuevos deslizamientos, ocasionando nuevas pérdidas de suelos, destrozados por las corrientes, sumergidos por los escombros, o vueltos inaptos para el cultivo por la destrucción de sus sistemas de irrigación o de drenaje. También hay que prever que se producirán nuevos daños en las carreteras (las mismas, eventualmente, que fueron reparadas después del Mitch).

En algunos casos, para intentar parar la sempiterna destrucción de las mismas carreteras, será necesario modificar su trazado, poniendo así en precario a los que habían establecido sus residencias y sus explotaciones en función del trazado que se abandonaría. Este desagrado se sumaría a los efectos ya producidos por la catástrofe en sí, que vino a acentuar el desequilibrio de la ocupación humana del territorio: pueblos borrados del mapa por las avalanchas, solares abandonados a causa del aislamiento al cual los condenó la destrucción de las vías de acceso, etc. Al mismo tiempo, inmensas concentraciones de refugiados vinieron a aglomerarse en lugares nada preparados para recibir flujos tan enormes e inopinados de población.

En este escenario general de trastornos de la geografía humana de Honduras, cuyos efectos se hacen sentir en todo el territorio, se destacan tres lugares, en donde las devastaciones fueron de una escala tan excepcional que graves amenazas pesan sobre su porvenir. El primero de esos tres lugares es el valle del río Patuca, en donde, a causa de su encajonamiento, los primeros 225 kilómetros, entre Nueva Palestina (Olancho) y Krausirpe (Gracias a Dios), sufrieron el arrancamiento total de la vegetación y de la capa fértil del suelo, teniendo como consecuencia una destrucción casi total de la fauna silvestre y la deserción de la población humana, que se fue a reubicar en zonas más protegidas de los caprichos del río.

Otras dos regiones durablemente dañadas por el Mitch están en los departamentos de Choluteca y de Valle en donde la capa vegetal de los suelos fue lavada y enormes derrumbes afectaron las pendientes. Allá, no queda prácticamente nada de fauna salvaje. Las especies acuáticas desaparecieron de los ríos. Las extensiones planas, en otros tiempos irrigadas, se han convertido en playas arenosas o cubiertas de piedras. Los mismos ríos son desfigurados: algunos se han vuelto más anchos y menos profundos, más temibles todavía en período de crecida, cuando antes daban la impresión de no representar ningún peligro...

Pero el mayor problema ecológico, al parecer sin solución, se descubre en la capital. Después de la catástrofe, el panorama urbano se presentaba como sigue:

- el Mitch aniquiló 11 colonias y otras 70 tuvieron que ser evacuadas;
- 7 puentes fueron destruidos y 6 dañados;
- 3 de 10 diez habitantes fueron víctimas de daños en diversos grados;
- innumerables locales comerciales y edificios públicos sufrieron destrucciones tan importantes que el retorno a la vida habitual fue lento y difícil.

Se tuvo que esperar semanas para que se restableciera, en el centro de la ciudad, un tráfico vehicular «normal» (es decir: al constante límite de la parálisis). Sin embargo al final, todo parece haberse arreglado. El carácter muy sectorial de las devastaciones (concentradas en el centro de la vieja ciudad y sobre algunas colonias víctimas de los desbordamientos de los ríos o de los deslizamientos de tierra) podía dar la impresión de que las nueve décimas del espacio urbano se habían salvado sin mayores daños.

Impresión muy falaz sin embargo, en la medida en que el Mitch puso a plena luz la insuperable debilidad que, a mediano o largo plazo, ha de conducir a la capital hondureña hacia una crisis sin solución. En efecto, cualesquiera sean los esfuerzos empeñados para reformar el sistema de distribución de agua, aun aceptando que se pueda acrecentar la disponibilidad del recurso, queda evidente que nunca la distribución del vital líquido -ya de por sí deficiente antes de la catástrofe- podría alcanzar un nivel aceptable: la diferencia entre las necesidades de una población en constante crecimiento (4.8% al año por el momento) y la disponibilidad del recurso no puede más que acrecentarse vertiginosamente hasta un previsible colapso.

Para darse cuenta de esto, hay que tener en mente las particularidades de la situación geográfica de Tegucigalpa. Situada en un hoyo, cuyo fondo se encuentra a una altitud de 980 metros, la ciudad se ha desarrollado sobre las faldas de las montañas circundantes, las cuales ascienden a una altura de 1500 metros. Con la excepción de las que corresponden a la reserva de La Tigra que ocupa los relieves que limitan la ciudad hacia el norte, estas montañas están extremadamente despobladas de árboles; ellas retienen poca agua susceptible de alimentar las fuentes. Además, estas montañas están invadidas casi hasta la cumbre por las colonias populares cuya mayoría, situada a una altitud mayor a la de las represas de agua que aprovisionan la ciudad, no se benefician de la distribución del agua y nunca estarán en condiciones de recibirla.¹⁵

¹⁵ En los años 80, no se permitía construir nuevas colonias sino hasta una altitud de 1,100 metros. Este límite pasó a 1200 metros en los años 90. Ahora se hallan aglomeraciones de barracas hasta los 1300 metros. El fondo de la laguna Los Laureles, construida al final de los años 70, se encuentra a 1000 metros de altitud; y el de la Concepción, construido en 1993, a 1114 metros.

Otra particularidad de ese extraño paisaje urbano: el río Grande o Choluteca, que recibe en la ciudad el aporte de otros ríos a la salida de unas quebradas extremadamente abruptas y encajonadas, no es más que un gran torrente cuyo flujo se reduce a casi nada durante la estación seca. No obstante es hacia su cauce que van a parar, forzosamente, todas las aguas usadas de la conurbación. Por este motivo, en pleno centro de la ciudad, discurre ahora una infame cloaca saturada de residuos de toda clase. En el verano, esparce una gama de olores pestilentes que hicieron del avecindarse en sus cercanías algo definitivamente incómodo.

Sin embargo, hasta mediados del siglo XX todavía, la alta sociedad tegucigalpense salía por las tardes a refrescarse en la orilla del río. Allí se había construido un elegante paseo cuyas ruinas son aún visibles. El palacio presidencial se erguía también sobre el borde del río, frente al viejo puente Malloj, construido en los últimos años del coloniaje para unir a la ciudad con el populoso arrabal de Comayagüela. Ahora bien, en el último medio siglo, la capital ha visto su población por lo menos decuplicarse, para alcanzar hoy en día... ¿quién sabe? ¿Un millón? ¿1,200,000 habitantes? Pero siempre con el río Choluteca como única vía de evacuación, a cielo abierto, de todas las aguas negras producidas por esta población desmesurada.

Al observar la morfología del paisaje de la zona, uno se pregunta por qué aberración la capital de Honduras fue situada allí. El error no fue de los españoles, que nunca pensaron hacer de Tegucigalpa una verdadera ciudad. La prueba de esto es que no existe ninguna acta de fundación del poblado. Es por esta razón también que la ciudad no presenta el plan cuadrangular habitual de la ciudad hispanoamericana. Tegucigalpa no es más que una aglomeración surgida de la expansión descontrolada de lo que, al principio, era un simple *real de minas*, suerte de campamento fortificado, lugar de abastecimiento y esparcimiento para los mineros de la región circundante.

Tardíamente elevada al rango de *villa* hacia el fin del régimen colonial (en 1768), Tegucigalpa no sobrepasaba la dimensión de una modesta aldea al momento de la Independencia. Peor aún: descendida a 3,800 habitantes en 1821, su población había declinado con respecto a las 4,300 personas que vivían en esos muros cuarenta años antes¹⁶. Esta disminución se debía a la reducción de la actividad minera, que la agricultura y la ganadería habían

16 Cf. Luis Pedro TARACENA ARRIOLA: *Ilusión minera y poder político. La alcaldía mayor de Tegucigalpa, siglo XVIII*. Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 1998, p.88.

progresivamente suplantado, convirtiéndose en las actividades dominantes de la región¹⁷. En 1880, a la hora del renacimiento minero y de verse revestida del título de capital, Tegucigalpa no alcanzaba los 6,000 habitantes...

Durante un buen medio siglo después de eso, la urbanización de Tegucigalpa no progresó más que lentamente: la primera conducción de agua sólo se implementó en 1891; y la energía eléctrica en 1907. De más en más, entretanto, la capital se benefició de la concentración en ella de todas las sedes del poder, de la administración, del comercio y de las finanzas. Razón por la cual Tegucigalpa empezó a obrar como un poderoso imán sobre las migraciones internas. Éstas pusieron en marcha un proceso de crecimiento urbano desmedido con respecto a las capacidades del sitio en donde se encuentra la ciudad. Esta, que todavía no contaba con más de 11,104 habitantes en 1910, va a pasar a 27,573 en 1930; 47,223 en 1940; 72,385 en 1950; 99,000 en 1955; 150,000 en 1962 y, bajo el impulso de un crecimiento enloquecido: 500,000 en 1983, ¡y ahora más del doble!

El nivel muy bajo del consumo de agua por una población constituida, en su mayor parte, por inmigrantes rurales muy pobres, mantuvo desapercibido por mucho tiempo el hecho de que las disponibilidades locales en fuentes hídricas no estaban –y jamás podrán estar- a la altura de las necesidades de una aglomeración de tanta importancia. Fue siempre con retraso, y con el cuchillo en la garganta, que se tomaron, para parar una crisis inminente, medidas siempre insuficientes. Fue así que, para completar la vieja red de La Tigra alimentada por manantiales, se edificó, al final de los años 1970, una primera represa al aire libre con una capacidad de 11 millones de metros cúbicos: la represa de Los Laureles, en el valle del río Guacerique. Como la insuficiencia de ésta no tardó en hacerse evidente, como paliativo se construyó, al principio de los años 90, una nueva represa (La Concepción, sobre el curso superior del río Grande, inaugurada en 1993), con una capacidad tres veces mayor que la de su predecesora: 33 millones de metros cúbicos. Gracias a esto, se proclamó entonces que el problema del suministro de agua a Tegucigalpa estaba «definitivamente resuelto».

17 En las páginas 168-171 de los *Apuntamientos para una historia Colonial de Tegucigalpa y su alcaldía mayor* (Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 1982), Mario Felipe Martínez Castillo reproduce una carta, con fecha del 28 de agosto de 1820, en la cual el Gobernador Intendente de Comayagua, explica al Rey que las minas cercanas a Tegucigalpa son tan explotadas que ellas «apenas producen para subsistir». En consecuencia, solicita del Soberano la supresión de la Alcaldía mayor «pues no es más que un traspantojo de los mineros de Tegucigalpa que más bien debían de dedicarse a la agricultura que a la búsqueda de minerales que sólo les produce para el día».

Menos de 10 años más tarde, la situación nuevamente ha vuelto a un estado de crisis aguda. En el año 2000, se calculaba que sólo el 46% de la población de la capital se beneficiaba del agua corriente a domicilio, gracias a una producción total media de 2.16 metros cúbicos por segundo. Los tres centros de producción (La Tigra, Los Laureles y La Concepción) aseguraban respectivamente 15, 25 y 60% de la oferta. Si se agrega al 46% de los habitantes de Tegucigalpa que se beneficiaban de una conexión de agua a domicilio, el número de los que tienen indirectamente acceso al agua potable gracias a algunas fuentes públicas o porque se les aprovisiona por medio de camiones cisternas, la proporción de los habitantes de la capital en condición de recibir agua teóricamente controlada por el SANAA se elevaba entonces, en todo y por todo, al 85%.

Remarcamos, sin embargo, que el suministro de agua dista mucho de ser constante en todas las épocas del año: durante la estación seca, que comienza en las últimas semanas del año civil para extenderse hasta mayo, el nivel de la represas baja de manera regular, para habitualmente alcanzar la cuota de alerta en los alrededores de Semana Santa. Para retardar esto, se multiplican los cortes y delastrajes que suspenden el servicio, preferentemente en las colonias pobres. Éstas tienen entonces que acostumbrarse a recibir agua día de por medio y solamente durante algunas horas; o lo que es peor todavía, a no recibir más agua corriente y a convertirse en dependientes aleatorios de los camiones cisternas. Estas restricciones que se extienden por varios meses, terminan también por afectar los barrios más acomodados, en los que los efectos de la escasez de agua son amortiguados por el hecho que las casas están generalmente provistas de una cisterna en el techo, en donde se puede almacenar el agua cada vez que ésta viene por las tuberías.

Se ha llegado pues, nuevamente, a un estado de crisis permanente, y muy alarmante.¹⁸ Realmente hay que regocijarse -si uno puede expresarse así- de que la mayoría de los habitantes de la capital de Honduras sean tan pobres. Pues si esta enorme cantidad de gente tuviera un nivel de consumo de agua a la altura siquiera del 50% de lo que es ahora la norma en los países desarrollados, está claro que de ninguna manera los recursos disponibles podrían satisfacerlo y que Tegucigalpa sería, con esto, conducida al colapso. Un experto hidrólogo describió fríamente la gravedad de la situación, aun tomando como base una hipótesis tan optimista como improbable:

18 Una consecuencia realmente preocupante de esta carencia de agua es que los bomberos de Tegucigalpa no disponen de reservas suficientes para hacer frente a un incendio de grandes proporciones. Si éste ocurriera en el centro de la vieja ciudad, donde el habitat está muy concentrado, es muy dudoso que se pueda dominar.

«Disminuyendo la tasa de crecimiento de la capital de 4.88% a 1.88% de crecimiento anual al año 2030, con un suministro de agua a 18 horas diarias en promedio, con 189 litros por persona por día (50 gppd) se requerirán 6.74 m³/s., 3.1 veces más que el suministro actual».¹⁹

¿En dónde podríase encontrar tal cantidad de agua? No cabe dudas que si las instalaciones estuvieran en un buen estado y bien mantenidas, se podría ahorrar la mayor parte del agua que ahora se está desperdiciando, y que por otra parte una mejor administración permitiría disminuir las pérdidas financieras que ocasionan el fraude y el descuido actual.²⁰ Pero todo esto no daría ni una gota más en términos de disponibilidad general del agua. Es porque se puede temer que la construcción, actualmente proyectada, de nuevas represas sobre el alto curso del río Choluteca y de sus afluentes no pueda más que ocultar por un tiempito más las insuperables limitaciones del sistema. Cada uno sabe que el volumen de la población, así como el nivel medio de sus necesidades en agua, no podrá dejar de seguir creciendo implacablemente, de manera exponencial.

Para convencerse de cuánto la situación está sin salida, hay que comprobar el carácter resueltamente utópico de las soluciones que adelantan los especialistas cuando se les interroga sobre los medios posibles para evitar la

19 Cf. Rodolfo OCHOA ÁLVAREZ: “Medidas urgentes para Tegucigalpa”, en: *El Heraldo* del 30 de mayo del 2001. A título de comparación, notemos que en 1989, en la ciudad de Puebla, México, el 10% de la población «socialmente más favorecida» consumía 300 litros de agua al día por habitante, absorbiendo así el 20% del consumo total. La categoría intermedia, correspondiente a un poco menos de la mitad de la población total, consumía un poco más de la mitad de los volúmenes de agua disponibles, a razón de 175 l/d/h. En fin, el 43% de la población calificada de «popular» no consumía más que el 28.5% del agua, en función de un consumo diario de 105 litros por habitante. (Cf. Jean-Marc FOURNIER: *L'eau dans les villes d'Amérique Latine*, Paris, L'Harmattan, 2001, p.98).

20 En ese aspecto, falta mucho todavía. Casi cinco años después del Mitch, el 8 de mayo del 2003, los periódicos anunciaban el arranque de la segunda etapa del proyecto de rehabilitación y modernización de la red de distribución del agua en Tegucigalpa, cuya primera etapa se había iniciado en octubre del 2000. Al mismo tiempo (en mayo del 2003), las obras para asegurar el cerro El Berrinche (que al derrumbrarse en octubre del 1998, obstruyó el lecho del río Choluteca) se encontraban todavía en estado de proyecto. Una buena noticia sin embargo: una primera estación de depuración de aguas – la primera en Centroamérica – se estaba construyendo. La finalización de su construcción, por una empresa italiana, se preveía para noviembre del 2005. Dicha estación, con una capacidad de 100 litros por segundo, contribuirá al saneamiento del río Choluteca y traerá una mejora en las condiciones de vida, principalmente en materia de pureza del aire, de los habitantes de una parte del sudeste de la ciudad,

crisis. Ciertos proponen, sin reírse, el bombardeo de las nubes para hacer caer la lluvia sobre Tegucigalpa; o la desalinización del agua del mar (procedimiento tan costoso que hasta los países más dotados en petrodólares vacilan en ponerlo en obra y que en el caso presente supondría el hacer subir el agua desalinizada desde el nivel del mar hasta más de 1000 metros de altura, por más de cien kilómetros de tuberías).

Otros, un poco menos irrealistas, echan la mirada en los recursos hídricos de otras regiones cercanas. La más apetitosa sería el agua de la represa en construcción sobre el río Nacaome, no lejos de Pespire. Pero en este caso Tegucigalpa seguiría, de todas maneras, situada a mil metros de altitud, y también sería necesario bombear el agua para hacerla subir hasta la capital. ¿Con qué energía y a qué precio? Se ha llegado a evocar la cómica perspectiva de una noria de camiones cisternas moviéndose día y noche sobre los 100 kilómetros de carreteras a través de las montañas, con muchas curvas, que separan a Pespire de Tegucigalpa, para traer el agua.²¹ Todo esto, sin tomar en cuenta que esta operación no haría más que desvestir a Pedro para vestir a Pablo, y que no solamente se debería enfrentar el descontento de las poblaciones a las que se les despojaría de su agua, sino probablemente prever un movimiento de migración de esa gente hacia la capital, una vez que se les habría quitado los medios de seguir viviendo en su tierra.²²

Sin embargo, es en esa perspectiva de bombeos hechos en otras cuencas o embalses que el hidrólogo que mencionamos más arriba coloca sus últimas

21 Cf. "La represa Nacaome con agua para Tegucigalpa", Editorial de *El Heraldo* del 15 de febrero del 2002.

22 Iniciada en 1991, la represa "José Cecilio del Valle" sobre el río Nacaome, había sido concebida, al principio, solamente para evitar inundaciones y para irrigar 5,400 hectáreas de tierras agrícolas. Seguidamente, una extensión del proyecto, apuntando a producir 82 millones de kilowatios/hora por año y para abastecer de agua potable a las 130,000 personas que habitan las 127 comunidades aledañas, hizo que el costo de la construcción se elevara de 625 millones a un billón de dólares. Dicha represa, con una capacidad de 43 millones de metros cúbicos, está programada para terminarse en el 2005. La eventual sustracción de una parte de las aguas de esa represa en beneficio de Tegucigalpa no podría sino traducirse por una reducción –o hasta en la anulación– de las ventajas prometidas desde tanto tiempo a los habitantes de esa región árida y pobre.

Con igual falta de realismo, otras miradas de codicia se están volcando hacia la represa de El Coyolar, que irriga Comayagua, y está sobre El Cajón, cuya la construcción se remonta al año 1980 y que, con 300 megavatios, sigue siendo hoy en día la principal fuente de producción hidroeléctrica del país. ¿Cómo se puede pensar en aprovechar una parte de su agua, sabiendo que año tras año el bajo nivel de esta represa durante la estación seca obliga a reducir, en al menos un tercio, su producción de electricidad?

esperanzas, estimando que, al final de cuentas, el costo de esta operación resultaría competitivo con respecto al de un reciclaje rotativo de las aguas usadas. Perspectiva ultrautópica también, sabiendo que este tipo de solución ni siquiera está a la orden del día en los países más desarrollados: implicaría, en efecto, una revisión completa de las redes de abastecimiento y saneamiento, de manera que se puedan separar escrupulosamente las aguas de lluvia, las aguas servidas de uso industrial o doméstico y las aguas negras que arrastran excrementos humanos. En efecto, estas tres categorías de aguas usadas demandan técnicas de reciclaje totalmente diferentes.

En este punto, se ve que los funcionarios públicos encargados de tomar las decisiones ya no saben a cual santo encomendarse y se sienten inclinados a deshacerse del problema optando por privatizar la gestión del agua. Un precedente los motiva: el de San Pedro Sula, donde, en febrero del 2001, la gestión del agua fue concedida a una empresa italiana. Hay que recordar sin embargo que esta opción se tomó para superar una situación desesperada: el organismo municipal hasta entonces encargado del suministro y saneamiento del agua, se encontraba en un estado financiero peligrosamente deteriorado.

Las ventajas de esta solución son evidentes: no solamente una empresa privada extranjera tiene capacidad de reponer la red de distribución remediando sus imperfecciones técnicas; además sabrá mostrarse inflexible en la percepción de lo adeudado (lo que la administración pública nunca pudo lograr, ni tal vez quiso realmente hacer). Para tal efecto dispone de un método infalible: colocar contadores debidamente chequeados en cada lugar de consumo y suspender sin piedad el servicio del agua a quienes no paguen sus facturas en el plazo requerido²³.

Esta solución sin embargo, encubre una terrible amenaza: tarde o temprano, una empresa privada será llevada a cobrar precios reales. Y si se incluye en éstos el costo del mantenimiento de las instalaciones existentes, el

Igualmente falaces son las ideas, regularmente evocadas por los tecnócratas y los comentaristas de la prensa, que vislumbran la solución del problema de agua de Tegucigalpa mediante la construcción de una represa sobre el río Patuca (a más de 200 kilómetros, a vuelo de pájaro, de la capital y con algunas cadenas de montañas de por medio); o del bombeo de las aguas del Lago de Yojoa, a pesar de tener éste muy pocas posibilidades de reabastecimiento y sabiendo además que sus aguas son tan gravemente contaminadas con metales pesados, que se recomienda evitar consumir los pescados que de ahí provienen.

23 Según confidencias recogidas entre los agentes del SANAA de Tegucigalpa, el nivel de recaudación deja mucho que desear. Presumiendo que por razones de parentesco, o de complicidad política, o por el simple efecto de la arrogancia social, nadie se atreverá a cortarles el agua, muchos grandes consumidores dejan amontonarse las facturas y no las pagan, y se puede dudar que jamás las paguen. Peor todavía, son comunes las groseras trampas: la simple inexistencia de contador por

amortiguamiento de las inversiones para extender y mejorar la red; y si además, como es de esperarse, se repercute también hacia los consumidores el costo de la depuración de las aguas usadas, no hay duda de que el precio del agua no tardaría a dispararse a niveles tan altos que, aun si se mantiene un sistema de tarifas diferenciadas comparable al que está actualmente en vigor, los usuarios de las clases populares y sin duda también una buena parte de la clase media, no estarían en capacidad de pagarlos.²⁴

Esta perspectiva, ya preocupante para las regiones donde, como en San Pedro Sula, la cobertura global de las necesidades de agua no tiene realmente problemas, se convierte en terrorífica si se considera el nivel de las inversiones que serían indispensables para poner el abastecimiento de Tegucigalpa a la altura de las exigencias de su población. El costo de la producción de esta agua sería tan elevado que llevaría a una crisis urbana generalizada: una parte de los habitantes se vería obligada a fugarse de la capital; los precios de las casas y de los terrenos se desplomarían; poblaciones con niveles de vida precarios invadirían entonces los espacios abandonados y la inseguridad no tardaría en generalizarse.

Esta amenaza es tan palpable que ya se ha evocado en la prensa.²⁵ Siendo el peligro tan claramente identificado, uno podría esperar que algo se esté planeando en materia de planificación y administración del espacio nacional, concretamente para limitar el crecimiento de Tegucigalpa (algunas medidas fiscales enérgicas podrían contribuir a eso, por ejemplo), y para favorecer una mejor repartición de la población urbana sobre el territorio. La disponibilidad de recursos de agua (que no son deficitarios a nivel del país) debería ser el criterio fundamental en esa materia. En lugar de esto, vemos que está por

ejemplo. En algunos casos, éste solamente está conectado con el cuarto de la empleada doméstica, por lo que el resto del consumo de la casa, incluso el riego del jardín y el lavado de los carros, pasa discretamente por una conexión clandestina... En el mismo orden de ideas, el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) estima que más del 80% de sus clientes (600,000 sobre un total de 740,000) son morosos en sus pagos. Cf. Manuel TORRES CALDERÓN: *¿Quién conoce a Honduras?*, p.15)

24 Revisadas en alza a la fecha del 15 de marzo del 2001, las tarifas cobradas por el agua en Tegucigalpa son las siguientes: los que consumen menos de 15 m³ mensuales son facturados a razón de 0.70 lempiras por m³ (menos de 5 centavos de dólar); los que consumen de 15 a 20 m³, 1 lempira (6.5 centavos de dólar); los que consumen de 20 a 30 m³, 2 lempiras (0.13 dólares)... y así siguen las tarifas progresivas hasta los que consumen mensualmente más de 60 m³ de agua. Éstos pagan el m³ de agua al precio tope de 4.50 lempiras, o sea 0.29 dólares. Se remarcará que esta última tarifa es diez veces menor que la que se exige del consumidor francés.

25 Cf. Leonarda Andino: "Tegucigalpa será tan cara que los habitantes tendrán que emigrar", in: *El Heraldo* del 5 de marzo del 2003.

concluirse alrededor de la capital un bulevar periférico que tiende a abrir nuevos espacios a la urbanización. En resumen, el baile de la especulación inmobiliaria sigue desparramando luces a bordo de este Titanic urbano que es Tegucigalpa, que por algún tiempo todavía, opta por complacerse en la despreocupación.

Algunas denuncias espectaculares a considerar con detenimiento

En contraste con la desesperante gravedad de los problemas que acabamos de exponer, y a propósito de los cuales un prudente mutismo parece ser unánimemente considerado como de buen gusto, uno no puede faltar de asombrarse ante el tono alborotador que adopta la expresión de un cierto número de inquietudes pretendidamente “humanitarias” o “ambientalistas”, afanadas en alertar a la opinión pública a propósito de hechos de dudosa realidad, o desrazonablemente interpretados.

En la categoría de alertas con visible falta de fundamento, señalemos primero la angustia manifestada en los medios de prensa europeos a propósito de las minas antipersonales. Así por ejemplo, el jueves 5 de noviembre de 1998, bajo el título de «Miles de minas salen a la superficie», el diario *Le Soir* de Bruselas informaba a sus lectores que «en la región, las lluvias diluvianas arrastraron algunas 75,000 de éstas [minas antipersonales instaladas durante el conflicto que confrontó a los sandinistas con la Contra] para depositarlas a kilómetros de distancia, haciendo su localización muy difícil». Y ese mismo periódico añadía: «Se necesitarán numerosos años antes de poder localizar y desarmar esas 75,000 minas movedizas, sepultadas en el lodo y que ponen en peligro las acciones de socorro». Semejante refrán se escuchaba en París, en *L'Humanité* de ese mismo 5 de noviembre, donde se podía leer que «en ciertas zonas, los deslizamientos de lodo pusieron al descubierto las minas antipersonales. Esto significa cientos de nuevas víctimas, en su mayoría niños»...²⁶

Ahora, reflexionemos un poco. ¿Podemos imaginar un solo instante que minas arrastradas *sin haber explotado* por una avalancha infernal de agua,

26 Cf. también las palabras atribuidas a Robert Sebbag, director de las operaciones internacionales de la Cruz Roja francesa y a Xavier Emmanuelli, fundador del «Samu social» (sistema asistencial nocturno) de París. Al tratar de dar una visión global de la situación al presidente Chirac en el avión que lo traía a Centroamérica, decían así: «Toda una parte del territorio de Honduras y de Nicaragua está cubierta [de minas antipersonales] y ha sido declarada zona prohibida. Cuando pasó el huracán, las lluvias y las inundaciones lavaron el terreno, y las minas derivaron en los torrentes, listas para matar... (Cf. *Paris Match* n°2583, del 26 de noviembre de 1998, p.50)

de lodo, de rocas, árboles y desechos de todo tipo, podrían encontrarse allí, al acecho bajo la superficie del suelo, listas para explotar al primer roce del pie de un niño?²⁷ Esta idea es tan absurda que no se pudo encontrar, en el lugar, ninguna persona que se alarmara por este tipo de peligro. Y a decir verdad: ningún accidente de este orden se ha reportado.

*

* *

Lo que, por el contrario, es corrientemente – por no decir unánimemente - incriminado por la opinión pública hondureña, son las quemas de primavera, método tradicional que los campesinos usan para limpiar y fertilizar los suelos antes de la siembra. Al escapar de su control, esas quemas ya han producido ingentes incendios forestales, que han arrasado con una buena parte de la cubierta forestal del país. No hay duda de que esa destrucción del bosque no fue ajena a la amplitud de los daños provocados por el Mitch. Por esa razón es común que al campesino pobre de las vertientes montañosas se le eche la culpa de ser el primer responsable de las devastaciones ocurridas. Resulta paradójico y, hasta cierto punto, indecente, ver cómo, de esa manera, la víctima se ve transformada en culpable.

Tratemos de abordar con más serenidad esta cuestión de las quemas, verdadera serpiente de mar que regresa anualmente a los medios de comunicación hondureños. Sobre este tema, los términos del debate fueron finamente aclarados en un libro reciente del agrónomo y antropólogo holandés Kees Jansen.²⁸ Al cabo de una larga y minuciosa encuesta de campo efectuada entre los campesinos de las montañas de Honduras, este autor comienza por hacernos recordar que, en Centroamérica, la práctica de las quemas es de mucha antigüedad. Utilizada desde tiempos inmemoriales en las épocas precolombinas, esta técnica agrícola confirió a los paisajes montañosos el típico aspecto que hoy se considera «natural». Pero si el pino es tan propagado en las zonas en cuestión, es precisamente porque

27 ¿Y por qué forzosamente el pie de un niño y no de un adulto, de una mula, de una vaca? ¿Quién recontó aquellas supuestas 75,000 minas? Y sobre todo ¿quién las habría colocado? ¿los sandinistas, la Contra o los mismos hondureños? ¿En qué lugar y con qué propósito? Típico ejemplo de preocupación cursi, sin objeto, pero que engalana mucho al que la ostenta...

28 Cf. Kees JANSEN: *Political Ecology, Mountain Agriculture, and Knowledge in Honduras*. Amsterdam, Thela Publishers, 1998.

este árbol, particularmente apto para aguantar la práctica de la quema, se ha generalizado como resultado de la repetición de los incendios a lo largo de tantos siglos. Por lo tanto, la cubierta forestal en la que predomina el pino debe considerarse, no como «natural», sino como claramente de origen antrópico.

Los campesinos hondureños entrevistados por Kees Jansen opinan que la quema es el mejor método posible, el más simple y el más eficaz, para desbrozar y fertilizar el terreno antes de cultivarlo. Presenta además la ventaja de despojar el suelo de las malezas y de liberarlo de todas las demás plagas: roedores, serpientes, insectos, etc. No se puede dudar, observa el científico holandés, que sólo el masivo recurrir a toda una gama de fertilizantes, insecticidas y pesticidas (que, además, de ninguna manera los campesinos actuales estarían en capacidad de comprar) podría tener una eficacia equivalente... ¡pero a costo de otros daños que los ambientalistas no se harían falta de criticar tan ruidosamente como lo hacen ahora con la quema de los bosques!

En cuanto a los campesinos que no aceptan renunciar a la práctica de la quema, se debe recalcar que, cuando comparan sus condiciones de vida actuales con las del pasado, lo que ellos más deploran es *la trágica reducción de las superficies cultivables de que ellos disponen*. Otrora, recuerdan, siendo la población notablemente menos numerosa que la de hoy, se podía cómodamente rotar los cultivos, dejando amplias porciones del terreno en barbecho por largos periodos, permitiendo de esa manera la reconstitución de bosques en los que, entre otras cosas, todavía era posible conseguir carne de caza.

Kees Jansen concluye que las destrucciones del bosque comúnmente atribuidas a la práctica de las quemas «a la antigua» no se deben a una intrínseca falta de racionalidad de la técnica de las quemas, pero sí:

- a la extraordinaria expansión demográfica que tuvo lugar en Honduras;

- y a la extrema pobreza en la que se mantienen las poblaciones campesinas, cada vez más confinadas en la marginación social, económica y política.

Mientras solamente poblaciones de débil densidad, asentadas sobre extensos territorios, recurrían a la agricultura de roce y quema, ésta práctica tenía todo para ser considerada como una técnica respetuosa del medio ambiente, útil para los hombres, que no entrañaba más que una antropización leve y controlada del medio ambiente.

Pero en la actualidad, considerando que los incendios de primavera pueden llegar a cubrir al país entero con una bruma tan espesa que las autoridades se ven obligadas a decretar el cierre de los aeropuertos, con la consecuente suspensión de todo tránsito aéreo, a veces por varios días; y si a esto se suma la agravación de las enfermedades respiratorias en las ciudades (donde, en

verdad, el humo de los campesinos está lejos de constituir la causa principal de la contaminación atmosférica), se puede comprender que la práctica de la quema forestal provoca impaciencia en la opinión pública.

No obstante, la traducción política de este descontento no puede limitarse a la simple condena (por lo demás puramente retórica) de las prácticas campesinas. Si en el caso presente, una contradicción de hecho se ha instaurado entre los modos de vida de los campesinos y de los ciudadanos, (lo cual no tenía lugar de ser cuando en el país no había más que poblaciones de agricultores), no se puede incriminar a una sola entre las diferentes categorías de pobladores que ahora se reparten el espacio hondureño (y singularmente no la que, ya víctima del curso ineluctable de la historia, sólo dispone de los recursos técnicos del pasado para enfrentar las exigencias del presente).

Kees Jansen tiene toda la razón en traernos a la memoria que dada la imposibilidad de recurrir al soberano arbitraje de una instancia de racionalidad universal que sería la Naturaleza, la ecología no puede ser sino *política*. A las diferentes categorías sociales que conviven en un determinado espacio geográfico, les corresponde, teniendo en cuenta la diversificación constantemente cambiante de los usos sociales del paisaje, elaborar entre ellas las mediaciones necesarias a fin de repartirse, de manera equitativa, solidaria (y, en una palabra: *ciudadana*), las ventajas y los inconvenientes que derivan de sus respectivos modos de existencia.

En consecuencia, si en la situación presente, podemos considerar que las prácticas culturales tradicionales de los campesinos tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente, esto es esencialmente el producto del estado de miseria en el que viven las poblaciones rurales del país y no de una falta intrínseca de racionalidad de sus técnicas de cultivo: éstas eran perfectamente racionales mientras ellos eran menos numerosos y los únicos en ocupar y organizar, en función de sus necesidades, un paisaje que además explotaban con menos intensidad que ahora. Teóricamente, la solución del problema actual consistiría en actuar de tal modo que, en el futuro, se establezca un nuevo equilibrio, tanto demográfico como tecnológico, entre las capacidades productivas de la población del campo y los demás modos sociales de ocupación del espacio que pregonan los que se reclaman de la «modernidad».

No faltemos sin embargo en recalcar que, de manera general, la resorción de las marginalidades sociales y tecnológicas no puede disociarse de la introducción de prácticas culturales nuevas, llamadas a sustituir los métodos tradicionales que ya no se pueden perpetuar. Esto implicaría, entre otras cosas, que los futuros campesinos, menos numerosos que ahora, sean igualmente menos pobres y más educados, para poder poder aprovechar los equipos y las tecnologías asociadas a sus nuevos modos de producir.

Falta mucho, en la Honduras actual, para verse instaurar estos nuevos equilibrios, aun si se acentuó más todavía, recientemente, el vigoroso movimiento de desruralización, iniciado ya desde hace varios decenios. Lamentablemente, éste consiste casi siempre en una simple transferencia de la miseria del campo hacia la ciudad. En esas condiciones, resulta realmente chocante ver atribuir, por la militancia «ambientalista» citadina, a la fracción más desfavorecida de la sociedad hondureña, la responsabilidad de la degradación del medio ambiente nacional. Sabiendo además que las prácticas culturales de los campesinos no son el primer factor responsable de la deforestación de Honduras, pero sí los indiscriminados cortes de madera que las compañías papeleras extranjeras operan en enormes superficies y cuyos contratos de concesión no fueron firmados por los campesinos, sino por los que tienen el poder en la esfera urbana.²⁹

*

**

Hay otro punto sobre el cual los trabajos del agrónomo-antropólogo Kees Jansen contradicen el alarmismo acusador de la militancia «ambientalista» urbana. En un artículo reciente³⁰, el científico holandés analiza un problema que, en oposición con el asunto de las minas antipersonales (que sólo agitó las mentes en el exterior del país), y en contraste también con la crítica de las prácticas agrícolas tradicionales (que fue propia de los hondureños), despertó la inquietud de la «sociedad civil» tanto en el país como en el extranjero: se trata de la supuesta contaminación del bajo valle del río Choluteca y de su

29 La toma de conciencia de esto estuvo en el origen de un poderoso movimiento social que, del 20 al 26 de junio del 2003, culminó con una marcha pacífica de miles de campesinos de Olancho hacia Tegucigalpa. Exigían del gobierno un moratorio sobre los cortes de árboles que se estaban saqueando en más de la mitad de los 2.5 millones de hectáreas de bosques que existen en la parte oriental de aquel departamento. Negándose a ceder ante esa presión popular, visiblemente suscitada y encuadrada por curas progresistas tal como el padre Andrés Tamayo y su “Pastoral del Medio Ambiente”, los poderes públicos optaron por temporizar, emitiendo la sospecha de que podría tratarse de un movimiento sedicioso capaz de engendrar una “ecoguerrilla”. Pero al mismo tiempo se cerraba los ojos sobre el hecho de que, desde 1998, varios militantes “«ambientalistas» habían pagado con su vida, sin que jamás se identificaran los autores de sus asesinatos. Se sospecha fuertemente que éstos podrían haber sido comandados por los madereros...

30 Cf. Kees JANSEN: «Crisis discourses and technology regulation in a weak State: Response to a pesticide disaster in Honduras», in: *Development and Change*, XXXIV, I (2003), pp.45-46.

estuario por enormes cantidades de pesticidas, como consecuencia de las inundaciones de octubre–noviembre de 1998.

Antes de todo, recordemos los hechos. En el furor de su carrera hacia el mar, la crecida del río Choluteca había destruido, a su paso, algunos galpones que contenían tambores de pesticidas agrícolas destinados a las meloneras. En la misma zona, la crecida también había devastado la planta de Agroquímicas de Honduras, en la que se elaboraban aquellos productos. Al día siguiente de la catástrofe, algunos testigos vieron tambores flotando en el Golfo de Fonseca. Un cierto número de éstos pudieron ser recuperados y restituidos a sus propietarios a cambio de una gratificación de 400 lempiras (alrededor de 30 dólares) cada uno, muy inferior desde luego al valor real del producto recuperado. Al final de cuentas, las autoridades del Ministerio de Agricultura estimaron que unas 70 toneladas de pesticidas habían desaparecido, sin que nadie pudiera decir adónde habían ido a parar: sea sepultadas bajo enormes masas de sedimentos, con el riesgo de diluirse en las capas acuíferas, sea dispersadas en el Golfo, con la posibilidad contaminar los manglares así como las camaroneras.

En el marco de la euforia de lo que Kees Jansen llama irónicamente «*the emerging boom economy in Honduras*», (o sea: la emergencia de una súbita sobreactividad económica consecutiva a la catástrofe), se asistió a una súbita avalancha de fondos y de expertos extranjeros, ansiosos de brindar su apoyo a las autoridades locales en la febril búsqueda—no de las toneladas de pesticidas perdidas, que nunca se hallaron—pero sí de las consecuencias que éstos podrían haber inducido en los ecosistemas y la salud pública. Kees Jansen establece el minucioso relatorio de todas las encuestas, mediciones y análisis de toda clase que se efectuaron al respecto. Resultado: ¡Nada! ¡Ni el menor signo de contaminación! Las profetizadas hecatombes de peces en el Golfo no se produjeron. Y, por suerte, ningún indicio de un eventual envenenamiento de la población...

Esto daría motivo de regocijarse si no se observara, como lo hace Kees Jansen, que estas noticias tranquilizantes no tuvieron ningún efecto sobre los temas de aquel supuesto «desastre de pesticidas» (*pesticide disaster*). Se evidencia que en ningún momento, a nadie se le ocurrió que el factor de dilución de los pesticidas en la masa de agua de las inundaciones fue tan elevado que resulta perfectamente lógico que de ellos no se encuentre ningún rastro; y que por lo tanto, era altamente improbable que jamás tuvieran el menor efecto sobre el medio ambiente o la salud de quien fuera. No fue sino muy discretamente, en el marco de entrevistas confidenciales con Kees Jansen, que algunos responsables hondureños avalaron esa evidencia. Mientras tanto, «el sentimiento de una crisis potencial se mantenía intacto en los diversos informes y simposios oficiales, donde nadie se atrevió a sugerir

que la ayuda financiera movilizada por este asunto podría reorientarse mejor hacia otras necesidades más urgentes».

De estas observaciones, nuestro colega holandés saca la conclusión de que esta aberrante eficacia del «discurso de crisis» está en relación directa con la debilidad del Estado. En su opinión, el Mitch de ningún modo perturbó -más bien reforzó- la manera habitual de administrar los asuntos públicos en Honduras, puesto que en este tipo de país muy pobre, el modo de gestión normal del Estado consiste en una gestión perpetua de la crisis. La inexistencia de una real capacidad de la élite dirigente para asegurar la protección de sus conciudadanos frente a los riesgos mayores y de lograr que su nivel de vida se mejore mientras no hay una catástrofe de por medio, no deja otra opción a esta élite que la de difundir perpetuamente un discurso de crisis con el fin de asegurar su nivel de legitimidad, indispensable para mantener el orden social y salvaguardar su propia hegemonía. De hecho, al oír un discurso de crisis, uno se siente espontáneamente llevado a cooperar con quien lo emite, como si la urgencia de la situación obliterara cualquier posibilidad de sospechas respecto a las buenas intenciones de los que claman en ayuda a favor de las víctimas.

El estudio de Kees Jansen también pone en evidencia el dudoso carácter del peritaje internacional que, en ese juego de la política interna en período de crisis, puede gustosamente cumplir un papel de fiador o de cómplice. Y nota además que, a despecho de su postura de sistemáticos oponentes, los «intelectuales de izquierda» (*progressive intellectuals*) pueden asumir en la elaboración de ese discurso de crisis una participación directamente útil a los grupos de poder que ellos mismos critican. Para que se desarrolle tan extraña convergencia entre el oportunismo de los medios gubernamentales, el hipercriticismo de los defensores de la «sociedad civil» y la febrilidad caritativa de la ayuda humanitaria internacional, hace falta que se divulgue la retórica de un motivo poderosamente federador. La alerta por los pesticidas correspondió a tal criterio. No importa que dicha alerta fuera sin objeto: se logró mantenerla al rojo vivo todo el tiempo que pareció útil.

La demostración de Kees Jansen pone claramente en evidencia que un país devastado por una «catástrofe natural» no es como un buque desamparado, bamboleado por el mar y titanizado en la mudez de su infortunio. En todos los casos, su cooperación en la definición de la desgracia que lo toca se revela indispensable. Conviene además que, en los ojos del exterior, esta definición revista las apariencias de un consenso unánime entre el gobierno y su oposición, por el bien de las víctimas inocentes. En fin, para lograr una buena sintonización emocional con los «buenos samaritanos» de la ayuda internacional, es igualmente indispensable que el motivo de alerta escogido, además de parecer convincente en el medio local, coincida con uno de los temas estampillados como mobilizadores por el cenáculo intelectual-político-

mediático que actúa como árbitro de las elegancias ideológicas en los países del Norte. Evidentemente, el caso de la fobia a los pesticidas era todavía, en 1998, una de las más persistentes trivialidades que trastornaban a la «ambientalistas», a la espera de que el tema de la lucha contra los organismos genéticamente modificados (OGM) venga a disputarle la hegemonía.

En cambio, como lo hemos señalado más arriba, otros dos motivos de indignación colectiva (el de las minas antipersonales y el de las quemas del bosque) fracasaron en suscitar esta convergencia Norte-Sur, indispensable para el nacimiento de un verdadero discurso de crisis. Una de las razones radica en el hecho de que, a pesar de su tendencia mecánica a propagarse de Norte a Sur, el conformismo pacifista-ambientalista-humanitario, cuyo alarmismo denunciador encuentra tan fácilmente eco en los medios del Norte, puede enfrentar localmente unas resistencias inesperadas. Fue así que, en Honduras tanto como en Nicaragua el rumor relativo a una eventual dispersión de minas antipersonales fue incapaz de suscitar un espanto consensual. No solamente porque la amenaza evocada era inexistente (lo era igualmente en el caso de los pesticidas), sino porque se relacionaba con unos conflictos recientes, mal cicatrizados. Fue por eso que este tema de inquietud, a pesar de suscitar a una ardiente militancia en los países del Norte, no tenía ninguna probabilidad de suscitar escándalo en Centroamérica.

La recíproca también es cierta: aún si *a priori* todo el mundo está de acuerdo para desaprobando la destrucción de los bosques, la proposición local de condenar el cultivo de roce y quema practicado por los campesinos, no tenía nada para seducir a la bien pensante clase ideológica de los «burgueses bohemios» del Norte, entre los que se considera de buen tono el enternecerse frente a las prácticas «tradicionales», consideradas como espontáneamente «culturales y ecológicas». En los países del Sur en cambio, las élites ricas que se consideran «cultas» se ponen fácilmente de acuerdo con las clases medias de sus propias sociedades para considerar que aquellas prácticas sólo representan factores de retraso y estigmas de la pobreza, doblemente repudiados por esos motivos...

Todo lo que precede refuerza la hipótesis según la cual, pesando tal vez menos que el discurso que se desarrolla respecto a ellos, los hechos sólo existen para que la gente se los cuente. De esta verbalización se desprende la lógica de las acciones que se emprenden para hacer frente a las situaciones de emergencia. Lo que vamos a exponer a continuación tiende una vez más a confirmar este postulado.

Capítulo 4

CARIDADES MAL ORDENADAS, RECONSTRUCCIONES MUY SELECTIVAS Y UNA TRANSFORMACIÓN POLÍTICA EN LA EXPECTATIVA

Hemos visto en qué condiciones las destrucciones ocasionadas por el Mitch en Centroamérica fueron llevadas al conocimiento del mundo por una mediatización tardía, muy distante en relación a la realidad de los hechos y, por añadidura, referente a una región del planeta acerca de la cual la mayor parte del público internacional sólo tiene una imagen muy aproximativa, desconoce su realidad geográfica, ignora su historia y no sabe nada de su situación política.

Una razón coyuntural (momentánea ausencia de guerras, de atentados terroristas, de matrimonios de príncipes o de eventos deportivos de mayor cuantía) contribuyeron a que una ventana mediática se abriera repentinamente, a finales de 1998, sobre la desgracia ocurrida en Centroamérica, dando nacimiento a un impresionante despliegue internacional de ardor «humanitario». Considerables sumas empezaron a fluir hacia determinadas cuentas bancarias y una agitación febril se apoderó de las dirigencias de todos los organismos que se agrupan bajo el lema de «sin fronteras».

Mientras que, en el Norte, la gente se apresuraba a rellenar contenedores con toda clase de «ayudas de emergencia», a toda prisa se despacharon hacia el escenario de la catástrofe las primeras escuadras de especialistas en causar espantos compasivos, listos y preparados para redactar informes que lanzan el grito de alarma sobre cualquier cosa. En el capítulo precedente, con los ejemplos de la minas antipersonales y la cuestión de los pesticidas del río Choluteca, vimos que no escatimaron sus esfuerzos en esa materia. Aquella vanguardia de la acción humanitaria tuvo, sin embargo, que compartir la visibilidad mediática con una serie de personalidades de más alto vuelo que vinieron a disputarles, bajo el ojo de las cámaras, el trofeo a la mayor celeridad en la exhibición de la compasión caritativa.

Los más prestos en este tipo de ejercicio, fueron el presidente francés Jacques Chirac (quien había precipitadamente reciclado su programa de

visitas oficiales a México y a Guatemala en una gira de condolencias por Centroamérica); el Sr. Michel Camdessus, también de nacionalidad francesa, entonces presidente del Fondo Monetario Internacional; y la primera dama de los Estados Unidos, la Sra. Hillary Clinton. Para estos tres personajes, grande fue la sorpresa de toparse, los unos con los otros, en la pista del aeropuerto de Managua. Optando por regocijarse de esta coincidencia, el presidente Chirac (que ya acababa de tener la desfachatez de decretar soberanamente —como si este dinero le perteneciera personalmente— la cancelación de la deuda bilateral que los países damnificados tenían con Francia) sorprendió aún más a su entorno por esta inesperada declaración: «¡El hecho de que estemos los tres representantes aquí, en este lugar, es un buen signo para Nicaragua y una buena razón para que este país no esté inquieto!»¹

Se notará sin embargo que, a la fecha de ese lunes 16 de noviembre, en el momento en que Nicaragua se veía invitada a sentirse reconfortada por el aterrizaje sobre su suelo de esos tres buenos apóstoles de la ayuda financiera internacional, *no menos de diez y ocho días ya habían transcurrido desde que sobrevinieron los peores estragos atribuibles al fenómeno Mitch* (las destrucciones causadas, el 30 de octubre, en Honduras, por el desborde del río Choluteca y, en Nicaragua, por el desplome del volcán Casita), y ya hacía *más de tres semanas* que inundaciones habían comenzado a desolar el norte de Honduras.

En el entretanto, por supuesto, las poblaciones locales ya habían tenido todo el tiempo necesario para enfrentar al desastre. Y nunca se celebrará suficientemente cuánto supieron hacerlo con calma, valentía y dignidad. También con una cierta eficacia: no hubo movimientos de pánico inconsiderado y las solidaridades pragmáticas supieron expresarse discreta y eficazmente, de vecino a vecino, de ciudadano a ciudadano, en una reinvencción sutil y espontánea del sentido cívico y de la solidaridad humana. Fue así como, por ejemplo, en ese país de inseguridad crónica —donde los índices de criminalidad son habitualmente muy inquietantes—, los robos, las vendettas y otros desbordamientos sangrientos se suspendieron por un tiempo, como si los pandilleros hubiesen optado por una suerte de tregua, silenciosamente pactada en razón del estado de peligro global.

Con la misma discreción que corresponde a la eficacia, la solidaridad internacional también se había expresado a nivel intracontinental con el envío de socorros. Éstos habían llegado ya, desde

¹ Declaración publicada en *Le Monde* del 18 de noviembre de 1998.

el 29 de octubre, a San Pedro Sula y, desde el 2 de noviembre, a Tegucigalpa. De todo esto, aun desde Francia, un observador acucioso hubiera podido darse cuenta nada más al leer en el diario *La Croix* del 13 de noviembre, la relación de una entrevista realizada en Honduras con el Arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, entonces Presidente de la Conferencia Episcopal Latino Americana (CELAM).

En esta entrevista, después de manifestarse muy satisfecho por la manera «muy positiva» con la cual sus conciudadanos habían reaccionado ante la catástrofe, el prelado expresaba su reconocimiento a la cooperación del gobierno cubano por el envío, por vía aérea, de un hospital de campo con todo su equipo de médicos y enfermeras. Del mismo modo, la gratitud del arzobispo se dirigía a los Estados Unidos y a México por haber puesto a disposición de Honduras los helicópteros indispensables para superar los inconvenientes generados por la destrucción de la mayor parte de la red de carreteras. A nivel centroamericano, tampoco había faltado la solidaridad: Caritas de Costa Rica, de México y de Panamá se habían afanado en hacer llegar socorros en materia de alimentos, medicamentos y agua potable hacia las zonas devastadas de Honduras.

En resumen, si en los medios de prensa internacionales, las visitas «sobre el terreno» del presidente Chirac, del Sr. Camdessus y de la Sra. Clinton pudieron celebrarse como sensacionalmente precoces con respecto al desarrollo de la catástrofe, esa «precocidad» sólo fue correlativa, no con los hechos reales, sino con el relato retardado que los medios de prensa internacionales divulgaron en el exterior del país.² Se pone además en evidencia que, a mediados de noviembre, nada todavía se había hecho para desengañar al público internacional en cuanto a la cronología real de los hechos. Por el contrario, burdos artificios periodísticos se afanaban en mantener la confusión. Es así, por ejemplo, que en el semanario *Paris Match*, con fecha del 26 de noviembre de 1998³ la foto y el texto relativos a la llegada a Centroamérica del presidente Chirac colindaban con un reportaje sobre las devastaciones causadas por Mitch en la isla de Guanaja, induciendo al lector a acoger la idea de una cuasi-simultaneidad de estos dos sucesos, separados por más de tres semanas en la realidad (puesto que Guanaja fue devastada el 27 de octubre y el presidente Chirac llegó a Centroamérica el 16 de noviembre).

2 Véase la demostración que hicimos de eso en el capítulo 2.

3 “Chirac: le coeur sur la main”, in: *Paris Match* n° 2583, 26/11/98. pp. 44-51.

Actúa todavía en ese mismo sentido de confirmar la inscripción de la catástrofe en un pasado apenas acaecido, la publicación en *Le Monde* con fechas del 15 y 16 de noviembre de 1998, de un artículo en el que se dan a conocer las direcciones electrónicas de los diferentes sitios web hondureños, en los que el lector francés estaba invitado a depositar su óbolo “en tiempo real”, con el objetivo de permitir la compra de «artículos de primera necesidad», tal como «carpas, frazadas, ropa, velas, picos y palas»⁴. Ahora bien, sabemos que, en aquel momento, la fase de emergencia ya se había superado desde mucho tiempo en el escenario de la catástrofe.

El gran desorden de los donativos caritativos

A consecuencia de aquel desajuste cronológico entre la información mediática y la realidad de los hechos, las ayudas que se estaban recolectando con tanta prisa en los países del Norte no podían sino llegar a Honduras con un correlativo desajuste en relación a las necesidades del momento. Y con mayor razón si consideramos que, al retraso inicial de la fecha de embarque, se va a tener que agregar el tiempo necesario para que los contenedores llenos de «ayudas» lleguen a Honduras por la vía marítima⁵. La mala suerte quiso además que los envíos provenientes de Europa y de América del Norte se desembarcaban en Puerto Cortés, cuando las zonas de mayores destrucciones se encontraban a una distancia de entre 300 y 450 km del puerto (con la circunstancia agravante de que, en aquel momento, la red de carreteras, devastada por la catástrofe, sólo se había reparado de manera muy somera). Por fin, bien se sabe que si las organizaciones caritativas del Norte toman a su cargo el costo del flete desde su punto de partida hasta su llegada al país destinatario, una vez que los donativos son recibidos allí, consideran que el problema del transporte ya no es de ellas, sino de las organismos locales.

4 Cf: Stéphane MANDARD: “Au secours du Honduras. Les victimes de l'ouragan Mitch en appellent à la solidarité cybernétique”, in: *Le Monde*, suplemento Radio-Télévision, 15-16 de noviembre de 1998.

5 Beneficiada de una mejor visibilidad mediática y, también, de una mejor accesibilidad por vía aérea, Nicaragua recibió más precozmente los donativos humanitarios, al punto de despertar la sospecha de querer monopolizarlos en detrimento de su vecino hondureño. Ya señalamos más arriba que, hacia el final de noviembre, esto pudo provocar una sobrepuja en la dramatización de la situación por parte de las autoridades hondureñas.

Ya en condiciones normales, el transporte de un contenedor, de Puerto Cortés a Tegucigalpa, no es nada gratuito. Ahora bien, si consideramos que el tránsito carretero sólo había podido restablecerse mediante peligrosos desvíos para rodear los derrumbes y con arriesgados pasos por el lecho de los ríos para superar la destrucción de los puentes, está claro que en tales condiciones los transportistas no podían más que cobrar un sobreprecio justificado por la lentitud obligada del viaje y por la exposición de sus vehículos a importantes riesgos y desgastes. De modo que, en aquellas fechas, no se podía trasladar un contenedor de Puerto Cortés a Tegucigalpa por menos de 20,000 lempiras (alrededor de 1,450 dólares).

Muchas veces esta suma superaba el valor de la carga. De todas maneras, las organizaciones locales no pueden dedicar tanto dinero al transporte de donativos de dudosa utilidad, mientras que ya escasean los recursos para necesidades más urgentes. Fue por eso que una buena parte de los contenedores de ayuda humanitaria empezaron a amontonarse en los muelles de Puerto Cortés, en inmensas y absurdas pirámides que entorpecían gravemente el funcionamiento del puerto⁶. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, aun en las peores situaciones de crisis, los flujos de importación-exportación no desaparecen por completo y que las aduanas no pueden dispensarse de registrar y clasificar las mercancías, con el fin de determinar si deben pagar derechos y cuánto. Los retrasos ocasionados a estas operaciones de control por la acumulación de los contenedores acarrear, entre otros efectos nocivos, la dificultad de identificar, en ese estado de confusión general, los envíos de ayudas que son realmente de urgencia.

¿Cuál fue el destino final de aquellos contenedores de ayuda caritativa intempestivamente acumulados en Puerto Cortés? Más vale, probablemente, no indagar demasiado este tema. Cuando visitamos Puerto Cortés, en el mes de febrero de 1999, las autoridades portuarias, ante la necesidad de poner fin a este insoportable embotellamiento de sus zonas de almacenaje, proyectaban emplazar a los destinatarios de estos envíos para que vinieran a retirar sus pertenencias en un plazo de diez días. En el caso de que ellos no cumplieran, se pediría a las Fuerzas Armadas que despejasen el terreno. ¿Sucedió finalmente

6 Hacia el final de diciembre, el número de contenedores amontonados en las áreas de almacenamiento de Puerto Cortés se elevaba a 400. Un mes más tarde, continuaban llegando al ritmo de 300 por día, y el desorden se había vuelto tal que los destinatarios que venían para retirar lo suyo, experimentaban las mayores dificultades para localizarlo en el amontonamiento general.

esto? Lo ignoramos. Lo que sí sabemos es que, apenas se supo, a fines de enero, que una nueva catástrofe había enlutado a Colombia, las autoridades hondureñas, en un gran gesto de solidaridad hacia ese país amigo, decidieron obsequiarle la totalidad de los contenedores de ayuda humanitaria inicialmente destinada a Honduras, que todavía se encontraban en tránsito en los puertos de Estados Unidos.

Se comprende mejor este afán de deshacerse de esta ayuda en especies no solicitadas, cuando uno tuvo la oportunidad de observar qué pasa cuando se abre uno de aquellos famosos contenedores. Fue así, por ejemplo, que pude asistir, en Choluteca, con una temperatura de 35° C en la sombra, al desembalaje de fardos de ropas usadas provenientes de Canadá. Entre los donativos se encontraban un buen número de abrigos polares así como lotes de zapatos de dama, con tacones altos, de medidas 38-39. A lo largo de toda una tarde, esto fue un motivo de diversión para un grupo de pequeñas mujeres de alrededor de 1.55 m. que, cuando no caminan descalzas, usan sandalias de plástico de medida 34. Adueniéndose de estos exóticos cachivaches, evidentes residuos de una sociedad de alto consumo, se disfrazaron con ellos, protagonizando una especie de carnaval que duró hasta el anochecer. Pero muy pocas fueron las que, finalmente, se llevaron algo realmente útil a sus casas.

Los donativos de alimentos también suscitaron perplejidades. Muy frecuentemente consistían en conservas o víveres secos que no correspondían a los hábitos alimenticios de la población hondureña, que es a base de frijoles, arroz y tortillas. Sabiendo esto, hubiera sido útil que se mandara frijoles, arroz y maíz de buena calidad y variedades convenientes. Todo estuvo alejado de las necesidades reales y concretas. Así, algunos beneficiarios de la ayuda internacional no disimularon su decepción y hasta su cólera, cuando por ejemplo se dieron cuenta de que el maíz que se les había enviado era ¡maíz para aves de corral! Por otra parte, algunos cargamentos sí contenían maíz para el consumo humano, pero que se prestaba mal para la preparación de tortillas. El mismo problema hubo, algunas veces, con el arroz y, especialmente, con unos arroces precocidos, particularmente inapropiados para la manera local de cocinar⁷.

En otras circunstancias cuando, por ejemplo, no se sabe por qué milagro llegaron hasta Tegucigalpa unos contenedores refrigerados llenos de carne

7 A veces el humorismo negro parece haberse sumado a la torpeza. Fue así que, entre los primeros socorros enviados a los pescadores del Golfo de Fonseca (a quienes se les había prohibido la pesca en el mar, y que por lo tanto se hallaban sin

congelada, pudo parecer a primera vista que, esta vez, estos donativos no se exponían a la crítica de que se mandaban cosas de las que los consumidores del Norte aprovechaban la circunstancia para deshacerse, ni tampoco consistían en víveres despachados sin que nadie se preocupara de averiguar si correspondían, o no, a los hábitos locales de consumo.

No obstante, la llegada inopinada de tanta cantidad de carne generó problemas insolucionables. En efecto, desde que se abre un contenedor para repartir su contenido, la cadena del frío se encuentra irremediablemente rota. Enterados de eso, los responsables de la repartición se arrancaban los cabellos: ¿Hacia qué destino estarían llevando sus raciones de varios kilos de carne los que se beneficiaban de la repartición? ¿Acaso disponían de lo necesario para cocinarla? ¿A falta de eso, cuánta parte de esa carne se destinaría, posteriormente a su descongelación, a aprovisionar no se sabe qué clase de carnicerías improvisadas y de restaurantes callejeros? ¿Y todo eso con qué garantías de prevención contra riesgos sanitarios?...

Sin duda, hubiera sido preferible, opinaban los responsables, vender en subasta esos cargamentos de carne a los supermercados, que disponen de los medios necesarios para procesarla conforme a los imperativos sanitarios y al mantenimiento de la cadena del frío. Con el producto de esta venta, se podría comprar, en el mercado local o el de los países vecinos, productos de consumo adecuados con los hábitos de la alimentación popular en Honduras. Pero ¿cómo proceder a tales operaciones de venta y compra sin automáticamente dar pie a sospechas de favoritismo y de corrupción?

En suma, el sentimiento que prevalecía entre los encargados de distribuir las ayudas caritativas, era que los socorros que éstas pretenden aportar, por una parte, no siempre son apropiados y, por otra parte, la imposibilidad en la que uno se halla de negarse a recibirlas contribuye a acrecentar la desorganización, en un país trastornado por la catástrofe. No hay duda de que la mejor opción sería la de mandar dinero, con el fin de poder adquirir localmente lo exactamente necesario para alimentar y socorrer a las poblaciones. Desgraciadamente, desde que las ayudas dejan de consistir en donativos en especies, la fama de corrupción de las élites locales hace que los donantes se han puesto tan desconfiados que se niegan a liberar donativos en dinero, salvo cuando se trata de proyectos muy precisos y claramente presupuestados.

recursos a la espera de que, por fin, los análisis certificaran que las aguas del Golfo no estaban contaminadas), se descubrieron ¡500 latas de sardinas en aceite!

A su vez esto entraña efectos nocivos. Fue así que se pudo comprobar, en Honduras, que en las semanas que siguieron a la catástrofe, toda la capacidad de trabajo de los diferentes sectores de la administración pública se desvió de las tareas de su incumbencia... ¡para sólo dedicarse a la elaboración de proyectos! Así se evidenció, una vez más, que al imponer soberanamente su ley, sin posibilidad de no plegarse a ella, la ayuda exterior se revela, muy frecuentemente, al fin de cuentas, más nociva que útil.

El opaco misterio de las ayudas financieras

Acabamos de recoger la opinión según la cual una ayuda financiera hubiera podido substituir ventajosamente un buen número de donativos en especies efectuados en el marco de la ayuda de emergencia. Entre éstas, también habría mucho que comentar acerca de la ayuda alimenticia, muchas veces dominada por la voluntad de deshacerse de los excedentes de la producción agrícola, copiosamente subvencionada, de los países del Norte. Al saturar los mercados de los países asistidos, los donativos internacionales de alimentos suelen provocar el desplome de los precios agrícolas, con la consecuencia de estorbar la reactivación de la producción local⁸. Sin embargo, al cabo de cierto tiempo, la ayuda en especies se va reduciendo mientras que, en la fase siguiente del proceso asistencia, la ayuda financiera accede al primer plano. Es sobre ésta que vamos a ahora orientar la mirada.

La primeras preguntas que vienen a la mente respecto a la ayuda financiera internacional son éstas: ¿a cuánto se elevó el total de las

⁸ Habiéndose difundido a través del Internet, en abril del 2002, un rumor según el cual «un inicio de hambruna» se estuviera produciendo en en las zonas fronterizas de Honduras con El Salvador y con Nicaragua, fuimos allí para realizar una encuesta. Si bien es cierto que no había «hambruna» propiamente dicha, estaba a la vista que, aun cuando ya estábamos al final de la estación seca, los agricultores no habían preparado los terrenos. No habría pues, ese año, ni siembra ni cosecha. Las razones eran elocuentes: aun teniendo en cuenta el nivel muy bajo de retribución de la mano de obra local, los productores de granos básicos no tenían ninguna perspectiva de poder competir con los precios practicados en las pulperías, en donde se revendían los productos de la ayuda alimenticia. Cansados de producir con pérdidas, los campesinos emigraban, contentándose con dejar algún pariente encargado de cuidar su propiedad, a la espera de que, algún día, la explotación de ésta pudiera volver a ser rentable.

sumas prometidas –y eventualmente giradas- por la comunidad internacional para compensar los perjuicios provocados por el Mitch? ¿Y estuvo dicha dádiva a la altura de la magnitud del suceso? La respuesta a estas dos preguntas no es nada evidente. La evaluación misma del perjuicio ya pone problemas, aunque ya vimos que en el seno de los organismos internacionales, muy pronto se estableció un consenso para estimar que las pérdidas ocurridas en Honduras, con ocasión del Mitch, equivalían, con mucha precisión, al 81% del PIB. No obstante, no faltan quienes afirman que esta estimación era bien inferior a la realidad, cuando otros por el contrario la consideran notoriamente excesiva.

Nunca nadie podrá hacer que una evaluación sea más que aproximada. Y cada cual que una vez sufrió un siniestro no se sorprenderá de que la estimación de los daños ocurridos raramente equivale al costo real del reemplazo de los enseres deteriorados. Por otra parte, es común que uno trate de aprovechar un desastre para reconsiderar la utilidad de lo que fue destruido y que generalmente no se reconstruirá en la misma forma. Estas verdades muy generales se aplican, evidentemente, en el caso de Honduras, donde lo menos que se puede decir es que la situación anterior al Mitch no era ideal. De ahí que, en muchos aspectos, después de la catástrofe, no se tratará de restaurar el país tal como estaba antes, sino de reedificarlo sobre nuevas bases. Todo el mundo coincidía con este planteamiento muy general. Pero otra cosa era decidir cuáles serían aquellas «nuevas bases»...

La urgencia del momento no se prestaba para que se procediera a una vasta consulta democrática sobre las opciones que se presentaban para la reconstrucción nacional. Además nadie jamás se atrevió a emitir semejante sugerencia... Por lo tanto, las pautas en esta materia sólo podían sugerirse desde el exterior y, particularmente, desde ese club de donantes que conforman los países del Norte, proveedores de ayudas bilaterales, y las instituciones de Bretton Woods (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial), principales operadores de la ayuda multilateral.

A partir de los años 90, con la terminación de la guerra fría, esta cohorte de entidades benévolas tomó el hábito de organizarse en «grupos consultivos regionales» cada vez que uno o varios países en situación difícil manifestaban la intención de pedir socorros a la comunidad internacional, ya sea para hacer frente a una contingencia, o para financiar un «desarrollo» que, en adelante, siempre se deberá calificar de «sostenible». A nombre de ese bello objetivo, los «grupos consultivos» siempre cantan el mismo refrán: se explica a los países demandantes que el financiamiento de sus necesidades sólo podrá aprobarse con la

condición de suscribir un cierto número de compromisos para «el fortalecimiento de la democracia».

Esta nueva exigencia se fundamenta en un sofisma, cuyas premisas son:

- que los países pobres son generalmente gobernados por dirigentes poco o nada democráticos, cuando no francamente antidemocráticos;
- y que la democracia sólo se encuentra consolidada en los países económicamente prósperos.

Por lo tanto se presume que la adopción de un régimen democrático es condición previa para el arranque del desarrollo.

Tal aseveración, sin embargo, resiste mal a la demostración de los hechos. Para convencerse de ello, basta recordar que, en América Latina, un desarrollo económico considerable tuvo lugar en Chile bajo el régimen dictatorial de Pinochet; lo mismo en Brasil, con el régimen militar. Esto sugiere que de las premisas arriba mencionadas, es perfectamente posible sacar una conclusión opuesta a la que sostienen los organismos proveedores de ayudas financieras. O sea, que la democracia, en lugar de constituir el prerrequisito del desarrollo económico, más bien suele implantarse cuando un cierto nivel de prosperidad ha sido logrado. En tal hipótesis, la emergencia de comportamientos democráticos corresponde a la necesidad de preservar, fortalecer y hacer fructificar ese primer nivel de desarrollo, logrado fuera de la democracia.

Indiferentes a este tipo de objeción, las *task forces* del desarrollo neoliberal y postmoderno se muestran incommovibles en su voluntad de exigir que los programas de ayuda que dependen de su benevolencia (y cuyo objetivo prioritario, solemnemente enarbolado desde 1998, consiste en «la reducción de la pobreza») se condicionen por la adopción, por parte de los gobiernos de los países asistidos, de toda una serie de compromisos referentes a: la consolidación de la democracia y del Estado de derecho; la lucha contra la corrupción, la generalización de la «transparencia» y un mayor respeto de los derechos del hombre, de la mujer, de la infancia, del medio ambiente, etc.

En realidad, estas condicionalidades se resumían en la voluntad de propagar lo que se llamó el «Consenso de Washington», en el cual los países asistidos de este continente estaban invitados a alinearse en una ciega aceptación de los imperativos del mercado, admitiendo que para tener acceso a la prosperidad económica y al bienestar social, la única vía consiste en aplicar masivas desregulaciones fiscales y laborales, en privatizar todas las empresas públicas rentables, en reducir drásticamente el papel del Estado, en mandar definitivamente al olvido la noción misma

de lucha de clases y en someterse a una retórica *new-look* en la que la «buena gobernabilidad» y el «desarrollo sostenible» se deducen mecánicamente de un crecimiento especulativo del «capital social»⁹.

Esas fueron las disposiciones en las que se constituyó, para reunirse una primera vez en Washington al comienzo de diciembre de 1998, el «Grupo consultivo regional» destinado a hacerse cargo de la situación de los países devastados por el huracán Mitch. Se decidió que los donantes que lo conformaban se reunirían en Estocolmo, del 25 al 28 de mayo de 1999, junto con las delegaciones nacionales de los países damnificados. Para esa fecha, éstos últimos debían elaborar, en concertación con su «sociedad civil», un «plan maestro de reconstrucción y de transformación nacional», en el cual la determinación de las necesidades de ayuda se acompañarían por una serie de compromisos apuntando simultáneamente a reducir la pobreza y a fortalecer la democracia, en el marco de una «Estrategia para la promoción de un desarrollo equitativo, sostenible y participativo».

En el transcurso de los primeros meses de 1999, la redacción de ese Plan maestro dio lugar en Honduras a innumerables componendas, en las que las instancias del gobierno hicieron todo lo posible para tratar de apartar a los representantes de la «sociedad civil» de la redacción del documento que se llevaría a Estocolmo. Pero esto fue en vano ya que, eficazmente reagrupadas en distintos «foros» y respaldadas por una opinión pública muy vigilante sobre este asunto, las organizaciones de la «sociedad civil» no cesaron de mobilizarse para lograr que se integrara en el

9 Popularizada por los escritos del politólogo estadounidense Robert Putnam y respaldado por la entusiasta promoción que le asegura la abundante literatura de la ONU y de las instituciones de Bretton Woods, la noción de «capital social» ha invadido la retórica de las relaciones internacionales. Resumida a lo esencial, esta noción se refiere a *los acuerdos espontáneos que, ignorando el intermediario institucional, resultarían de relaciones asociativas no jerarquizadas, productoras de una generalización de confianzas recíprocas*. Metaforizada bajo la forma de un «capital» que, bien administrado (en el marco de una «buena gobernabilidad»), puede generar intereses que lo hacen prosperar indefinidamente, esta visión cuantitativa, tecnicista y despolitizante de los procesos sociales, carga al Estado de todos los males y niega la pertinencia de las luchas motivadas por la exigencia de una redistribución social más equitativa. No podía más que seducir a los partidarios del neoliberalismo y servir para instrumentalizar sus discursos sobre el «desarrollo». Inútil es decir que esta noción de «capital social» ha sido blanco de críticas muy acerbas. Ver principalmente: John HARRIS, *Depoliticizing development. The World Bank and Social Capital*. Wimbledon Publ, Anthem Press, 2002.

documento lo esencial de sus reivindicaciones en materia de reformas políticas y sociales a ejecutarse en el país.

Obligadas a por lo menos fingir plegarse a esas exigencias, las élites políticas, cuyo interés se concentraba esencialmente en los miles de millones de dólares que la cooperación internacional prometía derramar sobre el país, aparentemente tenían por descontado que, en Estocolmo, una vez que sólo estén reunidas con «gente seria», el debate podría reconcentrarse sobre «lo esencial». Pero tuvieron que desilusionarse: en la capital sueca, la presión unánime de los entes donantes forzó al presidente Flores a dialogar con los representantes de la «sociedad civil» que se habían hecho presentes en el lugar. Fue así que, finalmente, pudo presentarse al grupo consultivo un plan concertado que traducía, de manera más o menos equilibrada, las voluntades del poder, orientadas hacia a la *reconstrucción*, y los deseos de la «sociedad civil», intransigentes en sus exigencias de *transformación*.

Las delegaciones gubernamentales de los demás países damnificados fueron objeto de presiones similares. De modo que la Conferencia de Estocolmo pudo desembocar sobre la adopción de una declaración común que ligaba explícitamente el financiamiento de la reconstrucción a la necesidad de llevar a cabo, en cada uno de los países afectados, un conjunto de reformas estructurales. Las recomendaciones adoptadas al respecto dejaban claramente entender que, si las poblaciones pobres habían sido las principales víctimas de la catástrofe, la culpa incumbía fundamentalmente a los gobiernos del pasado, por haber mantenido sus sociedades en niveles tan extremos de desigualdad que, si esto no se remediara como primera prioridad, las vulnerabilidades tanto ecológicas como sociales que de eso se derivan, no faltarían de hacer que se repitieran, a más o menos corto plazo, catástrofes semejantes al Mitch.

Las condicionalidades de la ayuda, habiéndose enunciado con esta claridad, permitió el anuncio del monto total de dinero que la comunidad internacional estaba dispuesta a dedicar a la «reconstrucción y transformación» de Centroamérica: se trataría de 9,000 millones de dólares. Pero nada más concreto se especificaba en cuanto a cómo se repartiría esta fabulosa suma, en términos de beneficiarios y de objetivos.

Cinco años más tarde, persiste la misma falta de claridad sobre este tema. Indudablemente, en vista de las realizaciones (de las que haremos el balance más adelante), no hay duda de que sumas considerables han sido giradas y utilizadas. Sin embargo, el intento de enterarse, tal vez no de los detalles, pero sí de las grandes líneas de este asunto, resulta desesperante para el investigador, sumergido por la avalancha de

estadísticas –invariablemente llenas de lagunas y de contradicciones– que publican, cada uno por su cuenta, los diferentes donantes internacionales (países amigos, organizaciones internacionales, ONG, fundaciones privadas, etc.), así como también de los beneficiarios locales, tanto públicos como privados.

Gracias al minucioso estudio efectuado entre febrero del 2001 y marzo del 2002 por dos consultoras independientes, Sylvie Robert y Annick Jeantet, se puede comprender mejor por qué el balance de esas ayudas financieras es imposible de establecer y por qué seguirá siéndolo para siempre. Encargado y financiado conjuntamente por la Fondation de France¹⁰ y por el Alto Comisionado de la Cooperación Internacional,¹¹ en un afán de informarse acerca de la eficacia de la ayuda internacional en cuanto a la reducción de la pobreza, el estudio en referencia tenía por objetivo:

- proceder al análisis de los compromisos contraídos y de los anuncios hechos en materia de ayuda financiera internacional destinada a remediar las destrucciones del huracán Mitch en Centroamérica;

- y evaluar la eficacia política de la ayuda que se proporcionó, teniendo en cuenta las condicionalidades con las que dicha ayuda había sido otorgada.

Cuando las dos investigadoras terminaron de entregar el resultado de su trabajo, los organismos comanditarios de esta encuesta se negaron a que fuesen publicados bajo su tutela. Hasta ahora, sólo las conclusiones más generales salieron a la luz pública en un breve artículo de síntesis¹².

10 Organismo privado e independiente creado en 1969 con el fin de alentar el mecenazgo en todas sus formas, la Fondation de France desarrolla un papel de comunicador, incentivador y armonizador para proyectos manejados por organizaciones asociativas de modesta talla. Como principal apoyo a éstas, la Fondation de France ofrece una escrupulosa auditoría, sobre el terreno, de las acciones que ellas patrocinan. En el cumplimiento de sus misiones, la Fondation de France creó, en 1997, un Observatorio de la Género sidad y del Mecenazgo.

11 Instituido por un decreto con fecha del 10 de febrero de 1999, el Alto Comisionado para la Cooperación Internacional ofrece un espacio de diálogo en el que las diversas organizaciones y personalidades representativas de la sociedad civil francesa pueden, en un objetivo de transparencia y de información al público, debatir con el Estado las orientaciones y métodos de las acciones de cooperación, tanto públicas como privadas, que Francia realiza en el extranjero.

12 Cf. JEANTET (Annick) y ROBERT (Sylvie): «Après Mitch, une reconstruction bâclée» in: *Volcans* n°50 (París, invierno 2003), pp 28-30.

Sin embargo, gracias a la amabilidad de sus autoras, hemos podido tener acceso al documento en su totalidad¹³.

En aquel estudio, Sylvie Robert y Annick Jeantet se interesan primero en la suma global que, al acabarse la reunión de Estocolmo a fines de mayo de 1999, la comunidad internacional se declaró dispuesta a poner a disposición de la «reconstrucción/transformación» de Centroamérica. Se supone que aquel monto debe corresponder a la suma de las promesas y anuncios de ayuda que, en la emoción de los primeros días después de la catástrofe, llovieron sobre Centroamérica (un poco a la manera de lo que pasa en los teletones en donde eufóricos animadores registran, de hora en hora, la vertiginosa subida de las promesas de donativos, sin que nadie pueda averiguar cuántos se concretizarán en el futuro). Ahora bien, hasta Estocolmo, medio año después del Mitch, las promesas de los unos y los otros ya habían tenido tiempo de reiterarse una y otra vez, sin que siempre se pudiera determinar claramente si los nuevos anuncios sólo confirmaban los anteriores, o si se debían sumar. Por lo tanto, no estaba de más que el Grupo consultivo se dedicara a poner un poco de orden en aquel derroche de compromisos. En definitiva, dictaminó que el total de la ayuda se elevaría a 9,000 millones de dólares.

Sylvie Robert y Annick Jeantet explican que, a pesar de haberse nombrado un comité de seguimiento (integrado por Suecia, Alemania, España, Estados Unidos y Canadá), encargado de vigilar la ejecución de los acuerdos aprobados en Estocolmo, nunca no se sabrá con exactitud de qué manera esta suma global debía repartirse entre los diversos países de la región, afectados de manera notoriamente desigual por los rigores del Mitch¹⁴. Tampoco se sabrá cuál fue la proporción del monto anunciado que realmente dió lugar a giros de fondos.

13 Cf. Sylvie ROBERT & Annick JEANTET, consultoras independientes: *Étude «post-Mitch» – Amérique Centrale. Annonces, Engagements financiers & Conditionnalités dans le cadre de la reconstruction «post-Mitch» au Nicaragua et au Honduras. L'attitude des bailleurs de fonds. Octobre/novembre 2001. Documento de trabajo* (125 p. dactilografiadas); y Annick JEANTET & Sylvie ROBERT, consultoras independientes: *Étude «post-Mitch» – Amérique Centrale. Synthèse du document de travail. Mai 2002. Annonces, Engagements financiers & conditionnalités dans le cadre de la reconstruction «post-Mitch» au Nicaragua et au Honduras. Un essai de "transformation politique" sous la pression des bailleurs de fonds* (30 p. dactilografiadas).

14 Honduras que, en Estocolmo había solicitado 3,675.5 millones de dólares (1,475.1 a título de préstamos y 2,200.4 como donativos), logró solamente que se le atribuyeran 2,763.4 millones, de los cuales 1,685 provendrían de fuentes multilaterales y 1,978.4

Y se ignorará para siempre en qué medida la repartición que se hizo respetó las condicionalidades suscritas en Estocolmo, de las cuales podemos suponer que no todas se han cumplido.

El desglose del estupefaciente total de 9.000 millones de dólares sume a las consultoras francesas en la perplejidad: resulta imposible, aseguran ellas, identificar en esa suma global lo que corresponde: al monto de la ayuda humanitaria, a las condonaciones de deudas, a los donativos

de fuentes bilaterales. Cabe notar además que dichas sumas incluyen la reprogramación de donativos y préstamos aprobados desde antes del Mitch, así como nuevos créditos o financiamientos otorgados en la época inmediatamente posterior al Mitch. (Fuente: Víctor MEZA: Honduras en la fase post-Mitch. El papel de la cooperación internacional. Ponencia presentada en la Casa de América, junio 2000. Seminario sobre desastres naturales y ayuda internacional en Centroamérica. Tegucigalpa, CEDOH, documento mimeografiado).

Dos años después de la catástrofe, comunicando a la prensa el balance de la contribución de la ayuda internacional a la reconstrucción del país, el Ministerio de Finanzas de Honduras comprobaba que los montos recibidos hasta la fecha se elevaban a «alrededor de 700 millones de dólares» (450 en 1999, y 250 en 2000), o sea la cuarta parte de los 2,763.4 millones de dólares prometidos en Estocolmo. Este monto representa un poco más de la mitad de lo que Honduras esperaba, sabiendo que, según el calendario previsto, el monto liquidado debería haberse elevado, en ese momento al 45% del total prometido. Por otra parte, al anunciar que esperaban la entrega de 30% adicionales en 2001 y otros 24% en 2002, las autoridades hondureñas ya parecían resignarse a recibir otra vez menos que lo que se les había prometido...

A la expresión de esta decepción en cuanto al cumplimiento de las promesas de Estocolmo, se añadía la incapacidad de dar cuentas del total de las sumas traspasadas a título de ayuda de emergencia inmediatamente después de la catástrofe. Si el Ministerio de Finanzas estima el aporte entonces recibido de la cooperación internacional en 97.3 millones de dólares (no incluidos en los 700 millones mencionados arriba), en cambio se declara incapaz de precisar el monto de la ayuda *directamente* girada a varias organizaciones de la sociedad civil, acerca de la cual no se dispone de ningún informe. Pero se calcula que podría ascender a 170 millones de dólares.

La estupefaciente imprecisión de la información oficial encontró su confirmación en la declaración de la Ministra de Finanzas, Gabriela Núñez Reyes, cuando confesó públicamente que ella «desconoce qué cantidad de los desembolsos corresponde a préstamos y a donativos, ya que mucha de la ayuda está siendo ejecutada directamente por los países amigos, por ejemplo Suecia y Japón están construyendo varios puentes en el territorio nacional. Asimismo, parte de los recursos externos son manejados por organismos como el Programa Mundial de Alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y otros.» (Cf: LARN: «Desembolsos para la reconstrucción ascienden a 700 millones de dólares», in: *El Herald* del 31 de octubre del 2000).

específicos y a las reasignaciones de líneas de crédito ya existentes antes del Mitch. Con la consecuencia de que es fácil que un mismo monto pueda «ser anunciado dos veces y pagado una sola vez». La imprecisión se agrava por la falta de distinción entre lo que son donativos y préstamos (¡lo que, desde luego, no es lo mismo!), y por lo borroso de la información sobre los plazos de ejecución y las tasas de interés de los préstamos, sobre las fechas de liquidación de los fondos, y sobre la eventual doble inscripción de las ayudas “bilaterales” que los Estados hacen transitar por las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Trust Funds, etc. Contribuyendo todo esto a que una sola cifra pueda sumarse varias veces para alcanzar el fabuloso total.

En resumen, asustadas por las contradicciones que ellas detectan en las cifras y por la comprobación de que tantas promesas se transformaron «en realidades menores» (las que, además «pudieron, algunas veces, adoptar «el giro de una ayuda ligada, ya que el sector privado hace prevalecer sus intereses, teñidos de oportunismo político»), las dos investigadoras no pueden hacer otra cosa que llegar a la conclusión de que «la imposibilidad de hacer un balance de los compromisos de Estocolmo deja sin respuesta algunas preguntas tan cruciales como: ¿Cuántos fondos anunciados fueron realmente abonados? y ¿Cómo fueron utilizados?».

Cuando, en octubre del 2001, el Grupo consultivo regional se reunió de nuevo, esta vez en Madrid, se hizo evidente que ninguna evaluación había sido hecha desde Estocolmo y que, en realidad, nadie más se preocupaba por eso. Muy activos en la capital sueca, en donde su presencia había grandemente contribuido a que los objetivos de «transformación» de la sociedad quedaran inscritos en la declaración final, los representantes de la «sociedad civil» centroamericana esta vez pudieron ser mantenidos a distancia, operación desgraciadamente facilitada por el desinterés de sus homólogos del Norte que podrían haber sido sus aliados. En resumen, la preocupación humanista que había impregnado la reunión de Estocolmo había cedido el terreno ante la prioridad dada a las políticas de inversión y de privatización. La mejor prueba de esto fue que en la reunión de Madrid ni siquiera dio lugar a la redacción de una declaración final...

Cabe notar que el grado de confusión respecto al monto global de las ayudas financieras concedidas a Centroamérica después del Mitch, se había incrementado más todavía cuando, unas semanas después de la reunión en Estocolmo, en julio de 1999, el G7 reunido en Colonia (Alemania) prometió nuevas medidas de alivio de la deuda. De igual modo, la relativa claridad de las condicionalidades impuestas en Estocolmo

se hizo más borrosa al tener que sufrir la competencia de los «Cuadros Estratégicos de la Lucha contra la Pobreza» (CELP), nuevas «herramientas de desarrollo internacional» que, en septiembre de 1999, fueron definidas en las asambleas anuales del Banco Mundial y del FMI., propiciando nuevos marcos conceptuales en los que Annick Jeantet y Sylvie Robert sólo ven una simple reconducción de los antiguos planes de ajuste estructural.

Irrealistas desde el principio en razón de una sobrestimación flagrante de las tasas de crecimiento que se proyectaban, los programas y proyectos propuestos en esos nuevos «cuadros» tienen además que confrontarse con una doble inercia: la de la «sociedad civil» por una parte, pero también la del gobierno, poco entusiasta para implementar políticas de las que el control se le escapa y que, infaliblemente, lo condenarían a la impopularidad. En resumidas cuentas, «puede concluirse, escriben Annick Jeantet y Sylvie Robert, que los CELP, tal como se propusieron a Honduras y a Nicaragua, sólo son un instrumento más en manos de las instituciones financieras internacionales para mantener las políticas nacionales bajo control y no una herramienta para que los gobiernos nacionales puedan conducir una política de desarrollo».

En conclusión, si no subsiste gran cosa del efímero «espíritu de Estocolmo», la responsabilidad parece incumbir tanto a la incoherencia y a la duplicidad de los actores internacionales como a la incompetencia y a la corrupción de los dirigentes centroamericanos. Cabe notar al respecto que, aun cuando las condicionalidades de la ayuda financiera se justificaban, en principio, por la voluntad de combatir la corrupción de los gobiernos, la indefinición, la confusión así como la falta de control de los mecanismos de entrega y de gasto de las ayudas financieras, tuvo por resultado el poner sumas considerables a disposición directa de la corrupción. Si bien es cierto que mucho dinero ingresó en Honduras –indudablemente menos de lo anunciado, pero mucho sin embargo- y si nadie (ni los oficiales, ni los expertos, ni con mayor razón la ciudadanía) está en condiciones de dar cuenta de quién pagó cuánto, cuándo y a quién, está claro que una parte de ese dinero no podía hacer otra cosa que dirigirse hacia el bolsillo de unos beneficiarios ocultos.

En esas condiciones, intentar interrogarse sobre la eficacia de las condicionalidades que encierra la ayuda financiera internacional y sobre su capacidad de controlar las artimañas de las élites gobernantes y de los grupos especuladores, resulta grotesco. El informe redactado por Sylvie Robert y Annick Jeantet no deja ninguna duda al respecto. Frente al preocupante cuadro que ellas dibujan, se puede comprender porqué

los organismos que patrocinaron de su estudio optaron finalmente por no publicarlo.

Desde el interior de Honduras, el acta que levanta Julio Escoto no es más optimista que las consultoras francesas. En una columna publicada en ocasión del quinto aniversario de la catástrofe,¹⁵ ese ilustre escritor hondureño que hace alarde de encarnar la conciencia cívica en su país, recuerda que «los diarios de aquella infausta época retratan una increíble danza de millones prometidos, ofrecidos o cumplidos por diversas naciones y organismos, de los cuales jamás se produjo el inventario definitivo». Y sin disimular su sospecha de que una parte de esos fondos pudieron haber sido malversados, Julio Escoto reclama de urgencia – pero a decir verdad sin mucha ilusión de ser escuchado - «la emisión de un informe acabado (más amplio que el de Setco¹⁶), donde se exponga y detalle cuál fue el monto global de aportes en metálico y bienes que hicieron llegar a nuestras desoladas tierras esos pueblos [extranjeros], el destino de los mismos, las organizaciones e instituciones que los manejaron y sus frutos materiales y espirituales»¹⁷.

15 Julio Escoto: “Hace cinco años” en: *El Heraldo*, 27 de octubre de 2003.

16 Con ocasión del traspaso de poderes de la administración del presidente Flores a la de Ricardo Maduro, la Sra. Glenda Gallardo, a cargo de la Secretaria Técnica de Cooperación (Setco), ofreció una conferencia de prensa en la que declaró que: «La mitad de los fondos que se otorgaron como préstamos no reembolsables, ya fueron ejecutados en los procesos de reconstrucción en proyectos de la primera etapa, cuya duración para su culminación es de un año; en la segunda etapa se han gestionado los recursos restantes, y ya se han obtenido las respuestas, que son muy positivas», (Cf. “El gobierno de Flores recibió 1,450 millones de dólares en ayuda externa”, in: *El Heraldo* del 13 de enero del 2002). Presentando como un éxito el hecho que, durante los cuatro años de ejercicio la administración de Flores se pudo resolver la obtención de 1,450 millones de dólares de ayuda internacional (es decir: un poco más de la mitad de los 2.766 millones de dólares solicitados en Estocolmo), la Sra. Glenda Gallardo no decía nada respecto al uso que se reservaría a los fondos “restantes”: ¿seguirán afectados a los “procesos de reconstrucción” aquellos fondos que la Sra. Gallardo clasifica en la extraña categoría de “préstamos no reembolsables”?...

17 Resulta muy evidente que ese balance nunca fue - y jamás será - hecho. A finales de diciembre del 2004, cuando el tsunami que devastó el Sur de Asia, despertó la memoria de los medios a propósito del tratamiento de las catástrofes precedentes, dos periodistas del *New York Times*, Ginger Thompson y Nazila Fathi, publicaron el 11 de enero del 2005, un artículo titulado: «For Honduras and Iran, World's Aid Evaporated», en el que se señala que la mayor parte de las ayudas prometidas a esos dos países no se habían cumplido. Traducido al español,

La invasión de las ONG desbarata la capacidad de acción del Estado

En esta nebulosa de «organizaciones e instituciones» a la que alude Julio Escoto, no sólo figuran entes del Estado. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) también cumplieron un importante papel en el mantenimiento de la opacidad alrededor de los montos reales de la ayuda, y de cómo ésta fue utilizada.

Al inicio, en su mayoría, las ONG sólo eran organizaciones filantrópicas de pequeña escala, cuya acción reposaba sobre la dedicación benévola de sus miembros. Pero a continuación las ONG crecieron al punto de revestir, a partir del final de la guerra fría, una importancia cada vez mayor, gracias a la convergencia de sus acciones con la desconfianza obstinada de los neoliberales con respecto al Estado, y con su voluntad de eximirse de su autoridad cada vez que fuera posible.

El aumento del poder de las ONG también resultó de la progresiva fagocitación de la antigua política de «cooperación al desarrollo» (que originalmente implicaba relaciones de Estado a Estado) por la expansión de la *acción humanitaria*, que trasladó las acciones de desarrollo al campo de la iniciativa privada. No hace mucho, en el marco histórico de la guerra fría, el desarrollo (que se presentaba como alternativa funcional a la Revolución) era obviamente de naturaleza política. Ahora, por el contrario, reenfocadas bajo su nuevo disfraz «humanitario», esas mismas acciones de cooperación se inscriben bajo la égida de la solidaridad compasiva. Esta reconversión a la moda del momento permitió a las ONG drenar hacia sus presupuestos una buena parte de los recursos otrora dedicados a las políticas de desarrollo.

En efecto, bajo el pretexto de ponerse a salvo de las garras de la corrupción local y, sobre todo, con la preocupación de no dejarse empantanar en las situaciones políticas embarazosas que no faltarían de producirse al asumir directamente la conducción de sus acciones sobre el terreno, es cada vez más frecuente que los grandes proveedores de ayuda internacional opten por subdelegar la ejecución de sus programas a las ONG¹⁸. Al generalizarse, esta práctica dio nacimiento a una

ese resonante artículo se publicó en Honduras, en *El Herald* con fecha del 12 de enero del 2005, bajo el título: «Se evaporó la ayuda mundial a Honduras».

¹⁸ Los efectos de esta práctica están bien descritos en el editorial titulado «La Reconstrucción», publicado en *El Herald* del 2 de mayo del 2000, en donde el

proliferación de monstruos institucionales que en los medios internacionales se designan irónicamente con el nombre de GONGO's (*Governmental Non-Governmental Organizations*), entes teóricamente «no gubernamentales», ¡pero cuya mayor parte - cuando no la totalidad - del financiamiento proviene de los gobiernos!

Esta manera de actuar multiplica las posibilidades de reiteración de anuncios de ayudas que, en realidad, se desembolsan una sola vez y que además solamente llegan de manera parcial a los países destinatarios. En efecto, parte del financiamiento global se evapora:

- en gastos de administración; - en partidas de comunicación y de propaganda para el levantamiento de fondos (*fund raising*);
- en compras de equipos y maquinarias, adquiridos en el extranjero;
- en fletes, viajes y viáticos;
- en el sueldo de los expertos extranjeros que trabajan sobre el terreno, y del personal de apoyo que se queda operando en los países del Norte;
- y en los inevitables derroches de todo tipo a los que da lugar la extraña complejidad de tales montajes institucionales.

Con todo esto, es muy común que sólo una parte minoritaria de los fondos mencionados sea realmente invertida en acciones sobre el terreno. El hecho de que las organizaciones «no gubernamentales» oportunamente situadas en posición de operadores a la salida de esa mecánica asistencial, sólo suelen designarse por una formulación negativa, pone en relieve cuán difícil es definir positivamente lo que son. Entre ellas, en efecto, se encuentra de todo, y hasta lo contrario de todo: organizaciones de gran tamaño y otras muy pequeñas; venerables instituciones a veces pluriseculares (la Cruz Roja, la Orden de Malta) y oportunistas montajes de duración efímera; estructuras profesionalizadas con personal debidamente remunerado y otras solamente basadas en la benevolencia; unas laicas y otras religiosas; nacionales e

redactor observa que esa mezcla de atribuciones no actúa a favor de la claridad, ni de una a mejora de la eficacia de las acciones de reconstrucción: *«Hasta el momento no hay un informe detallado sobre las obras concluidas, las que están ejecutándose y la inversión hecha en ellas. Es más, el pueblo hondureño desconoce el monto global de la ayuda externa que ha ingresado al país para la reconstrucción nacional, porque se ha dispersado a través del gobierno y la sociedad civil vía Organizaciones no Gubernamentales (ONG). En el gobierno, cada secretaría de Estado y demás instituciones manejan fondos por separado para ese propósito, haciendo difícil establecer un monto global, pero a nivel de la sociedad civil resulta más complicado o casi imposible tener una cifra de cuánto han recibido en total, porque no hay un registro oficial».*

internacionales, ONG del Norte y ONG del Sur... El mismo eclecticismo se encuentra en los objetivos, donde coexisten lo cultural y lo caritativo; el feminismo y el ecologismo, el cooperativismo, el higienismo y, de una manera muy general, todo lo que pueda pasar por defensa de alguna buena causa: la protección de los niños, la lucha contra el SIDA, la promoción de los paneles solares, o la divulgación del Internet...

En última instancia, este conjunto de iniciativas heteróclitas se repone en un zócalo ideológico esencialmente constituido por una *aversión declarada hacia el papel del Estado*, y una *desconfianza aún mayor hacia todo lo que podría evocar el debate contradictorio*, y sobre todo la *lucha de clases*. Resulta bastante revelador, por ejemplo, que el virtuoso mundo de las ONG se aviene muy mal con la militancia de los sindicatos. En principio sin embargo, parecería que ambos justifican su existencia por la denuncia de los malos tratos sufridos por las mismas categorías sociales, y por la voluntad de remediarlos. Pero divergen y entran en contradicción sobre la manera de enfocar sus acciones: las ONG optan por impartir socorros inspirados por la caridad, en oposición a la agresiva defensa de derechos legalmente definidos como lo hacen los sindicatos. En otros términos, las ONG repugnan traducir las miserias populares en reivindicaciones, opción que implica que se diferencien radicalmente de los sindicatos de los que, en realidad, ambicionan captar la clientela.

Esta inclinación que empuja las ONG a suavizar las tensiones sociales y a vaciar de contenido el debate político, induce una profunda distorsión entre la realidad de las acciones de las ONG y su constante sermoneo en pro de la democracia. En efecto, cada quien sabe que no puede haber democracia sin debate contradictorio y posibilidad de alternancia en el poder. Por otra parte, el mero hecho de atender la queja de los desheredados, aunque sea con benevolencia y sinceridad, de ninguna manera puede asegurar el progreso social cuando dicha atención sólo se fundamenta en utopías vagas y edulcoradas. Al fin y al cabo, el carácter fundamentalmente conformista, por no decir reaccionario, de las ONG se pone crudamente en evidencia por la identidad de los adversarios que ellas mismas se asignan: el Estado y los sindicatos, o sea exactamente los mismos blancos de los ataques del neoliberalismo, cuyos preceptos sin embargo, son objeto de un retórico repudio por la vehemente militancia de las ONG¹⁹.

19 No es solamente sobre este punto que las acciones de las ONG están en flagrante contradicción con las intenciones que pregonan. Así, por ejemplo, al observar cómo se inicia una ONG se ve que lo más frecuente es que se vaya armando alrededor de un personaje provisto de una gran libreta de direcciones y de una buena aura mediática

Es más: se puede sostener la idea de que el efecto desestructurante del Estado que resulta de las acciones manejadas por las ONG en los países del Sur se revela más sistemático y decisivo que la hostilidad frontal de los turiferarios de la doctrina neoliberal²⁰ y esto, a pesar de que, sobre

y propiciador un “concepto” a la vez simple y generoso. Para comenzar, dicho personaje procurará rodearse de un grupo de íntimos y de simpatizantes que cumplirán el papel de Consejo de administración. A continuación, para que su ONG acceda a la efectividad, va a necesitar fondos. Para este fin, la cooperación de los medios de comunicación será indispensable. Para lograrla, habrá que presentar al público una imagen mediáticamente incitante de la situación-blanco, y por lo tanto generalmente distante de la realidad. Si eso funciona, en el mismo movimiento destinado a levantar fondos, se podrán reclutar miembros (que serán los mismos donantes).

Cada cual notará que todo este proceso se desarrolla exactamente al revés de lo que implicaría un proceso democrático, cuyas virtudes sin embargo las ONG no cesan de recomendar. De hecho, en el proceso que acabamos de describir, es la «base» lo que se recluta por último, y nunca será convidada a debatir el programa de los dirigentes. Desde el principio, éstos son autodesignados, y prácticamente inamovibles.

Una misma observación se impone a propósito del control de las finanzas de las ONG. Al respecto, si tenemos en cuenta:

- la desenmarañable complejidad de sus entradas de fondos (cotizaciones, donativos, legados, subvenciones públicas, beneficios de conciertos de rock y de teletones, a lo cual se suma el aporte no despreciable de las exenciones de impuestos y otras desgravaciones fiscales);
 - el carácter multinacional de las operaciones de las ONG (con lo que esto implica de posibilidades de manejo con las tasas de cambio);
 - la «fuga hacia adelante» de la gestión presupuestaria a la cual los equipos de terreno son perpetuamente obligados (puesto que, si fuera necesario esperar confirmación de los financiamientos para emprender o continuar una acción, jamás se ejecutaría ninguna);
 - y los inevitables escapes y despilfarros de dinero que implica la naturaleza de las situaciones en las cuales las ONG acostumbran intervenir,
- resulta absolutamente evidente que aun las ONG más innegablemente escrupulosas y que divulgan los discursos más radicales en cuanto al rechazo de la corrupción y la exigencia de transparencia financiera, serían *incapaces de presentar un balance preciso de sus finanzas*. Sus dirigentes argumentan que si las ONG debieran prestarse a una auditoría constante de sus acciones, sería necesario que ellas dediquen a ello lo esencial de su tiempo y la mayor parte de sus recursos, no sobrando casi nada para la realización de sus objetivos. Eso es cierto. Pero queda obvio que, en materia de transparencia financiera así como de democracia interna, aquí se comprueba el dicho: «Hagan lo que estoy diciendo, pero no lo que estoy haciendo».

20 De hecho, la hostilidad que el neoliberalismo manifiesta contra el Estado es más ideológica que efectiva. En efecto, como lo demuestra brillantemente el diplomático peruano Oswaldo de Rivero, el neoliberalismo es un *falso liberalismo*, sabiendo que el «libre mercado» al que tanto alaba, en realidad no es tan libre como se dice, puesto que no se permite la libre circulación de todos los factores de

el terreno, los ejecutantes de las acciones de las ONG casi siempre son personas obviamente llenas de compasión y generosidad, pero cuya pureza de intenciones contribuye a que permanecen ciegos ante el hecho de que sus acciones concurren obstinadamente a desacreditar al Estado, al invadir sistemáticamente sus dominios de responsabilidad y al deteriorar sus capacidades de acción.

De hecho, las ONG concentran esencialmente sus actividades:

- sobre temas de educación y de salud;
- sobre la construcción de infraestructuras y la implementación de equipos de interés colectivo (carreteras, puentes, escuelas, centros de salud, pozos, sistemas de riego y de conducción del agua, letrinas, lugares de vida comunitaria, etc.);

- sobre la promoción y el apoyo a actividades económicas orientadas para beneficiar a los más pobres, particularmente en el dominio de la agricultura y la artesanía;

- y por fin, sobre las acciones destinadas a subsanar el déficit de sentido cívico que resulta de los prejuicios desfavorables a las mujeres, a las etnias, a los inmigrantes, a los refugiados, a los discapacitados y, de una manera general, a todas las categorías sociales marginalizadas. Actuando de esa manera, las ONG usurpan sistemáticamente algunas de las funciones más esenciales del Estado. (Entre éstas, sólo la defensa nacional parece escapar completamente al intervencionismo de las ONG).

Cuanto más débil y desorganizado esté el Estado—como en este caso la Honduras severamente golpeada por la calamidad del Mitch—tanto menos éste se halla en la posibilidad de resistir a esta intromisión de las ONG en los asuntos que normalmente deberían de ser de su incumbencia. Más bien, la misma debilidad del Estado lo va a inclinar a empeñarse en atraer hacia su territorio el mayor número posible de ONG. Aprovechándose de la dimisión del Estado, éstas podrán entonces emprender, con toda

desarrollo. Entre éstos (que básicamente son tres: el capital, el recurso humano y las tecnologías), el capital es el único que circula libremente por todo el planeta, ahora a la velocidad de la luz. Al contrario, lejos de ser libres, la circulación del recurso humano y la disponibilidad de las tecnologías se encuentran trabadas por las severas restricciones que se imponen a las migraciones, o por la «protección de la propiedad intelectual» (eufemismo para designar el conjunto de prohibiciones que condicionan el acceso a las tecnologías más avanzadas, ahora sobre todo en materia de tecnologías de la información y de la comunicación). Para hacer respetar esas prohibiciones, los adeptos del neoliberalismo requieren la autoridad del Estado, cuya colaboración se obtiene manteniéndolo bajo influencia, mediante la intimidación y la corrupción. (Cf. Oswaldo de RIVERO: *EL mito del desarrollo, los países inviables en el siglo XXI*. Lima, Fondo de Cultura Económica, 2001).

independencia, en cualquier lugar, cualquier tipo de acción, según el método, y por el lapso que les convenga. Es así que se las podrá ver, aquí y allá, construir un puente o una escuela ; desarrollar una campaña de vacunaciones, de alfabetización o de divulgación de la contracepción; promover una horticultura supuestamente biológica o propiciar la fabricación artesanal de sombreros de paja o de cualquier otra baratija; todo esto en la más grande anarquía y, además, sin ninguna garantía de duración, puesto que el agotamiento de su financiamiento o la súbita revelación de una urgencia mayor en otro lugar del planeta, pueden hacer que, en un instante, sin previo aviso y sin que nadie establezca el balance de lo realizado, las ONG pongan fin a sus acciones y se manden a largar para otro sitio.

La intempestiva invasión de las ONG en los asuntos que competen fundamentalmente a la autoridad de los poderes públicos (salud, educación, infraestructuras, promoción del sentido cívico, etc.) no puede menos que introducir desórdenes y perturbaciones. La autoridad del Estado –único depositario posible de una visión de conjunto, y con suficientes perspectivas hacia el porvenir para que los diversos tipos de acciones puedan converger en realizaciones concretas a largo término- se encuentra evidentemente menoscabada por esta proliferación de iniciativas improvisadas y dispersas. Pero lo más grave es que, cuando se trata de un Estado débil, su capacidad de acción -que ya de por sí tendría gran necesidad de ser reforzada- se encuentra, al contrario, desbaratada por esa proliferación no concertada de acciones asistenciales.

La primera razón de esto es que las ONG –que generalmente son muy competentes en la especialidad que han escogido- seleccionan, para la ejecución de sus acciones, los lugares que mejor se prestan a ello, dejando, como consecuencia, al Estado, la carga de intervenir allí donde es más dificultoso hacerlo: en las zonas de situación geográfica desfavorable o con evidentes carencias en materia de cohesiones sociales o políticas. Con el resultado de que, por contraste con la visible eficacia de las ONG allí donde éstas optaron operar, el fracaso de las acciones manejadas por el Estado en las zonas difíciles tiende a confirmar a la población en su convicción de la incapacidad fundamental de éste..

Además, esta cruel demostración de las insuficiencias del Estado en ausencia del apoyo de la ayuda internacional, arrastra mecánicamente el siguiente efecto nocivo: cada alcalde, cada elegido de cualquier nivel, pronto se da cuenta de que, en vez de recurrir a los poderes públicos, es mejor salir a cazar ONG, con la esperanza de conseguir una que, aportando una solución a uno que otro problema local, proveerá, al político que

demonstró su habilidad al atraerla, argumentos (y a veces medios financieros) muy útiles en la perspectiva de su reelección.

Ese reemplazo general de la capacidad de administrar por la habilidad de captar la ayuda exterior surtió efectos calamitosos, de arriba hasta abajo, en toda la cadena de decisión política. Se vio en efecto que el equipo gubernamental en el poder en la capital tenía interés en actuar de tal manera que la intervención de las ONG se concentrara en los municipios donde los «correligionarios» (como se dice en Honduras para designar a los miembros de su propio partido) ejercen el poder local. Y, por supuesto, esas «condiciones políticas favorables» cuentan entre los factores que contribuyen a guiar a las ONG en la selección de las situaciones en donde su acción tendrá las mejores perspectivas de éxito.

No estamos insinuando que las ONG se apoyan en la corrupción para poder operar. Pero viene a ser algo semejante. Puesto que, evidentemente, el éxito y la eficacia de la acción de las ONG son directamente correlativos a la debilidad del Estado y al entreguismo de sus élites políticas. Y por otra parte porque, sabiendo que las acciones de las ONG están en principio sometidas a la ley nacional del país en donde operan, las ONG, embriagadas por su moralismo libertario, se sienten automáticamente inducidas a ir a desarrollar sus actividades en los países en donde la ley nacional se aplica con la mayor laxitud.

Las ONG en Honduras, después del Mitch

En Honduras, una de las consecuencias más espectaculares del Mitch fue la extraordinaria proliferación de ONG. Después de una primera fase de entusiasmo para esas organizaciones, el desbarajuste de su desempeño terminó por despertar la sospecha de la prensa y una cascada de recriminaciones en diversos sectores de opinión.

Al final del 2001, el periodista Jhonny José Lagos publicó, en el suplemento económico de *El Heraldo*, un artículo muy documentado para llamar la atención de las autoridades y de la «sociedad civil», sobre la necesidad de exigir rendiciones de cuentas por parte de aquel sinnúmero de ONG, estimando, en ese momento, que algunas 1,500 se habían oficialmente autorizado para operar en el país. Deplorando fuertemente que sólo 150 de ellas se encontrasen inscritas en los registros de la Federación de Organizaciones Privadas para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDE), el periodista retaba al gobierno para que éste publicara la

lista de las ONG oficialmente autorizadas para desarrollar actividades en el país²¹.

Ninguna satisfacción le fue dada. Sino cuando, cerca de año más tarde, a la estupefacción general surgió la información de que ¡no menos de 5,186 ONG habían sido revestidas de personalidad jurídica! Imposible sin embargo de saber cuántas de entre ellas todavía funcionaban, ni cuántas podían eventualmente estar operando sin jamás haber obtenido –ni a veces solicitado– una acreditación. Esta revelación de la Secretaría de Gobernación se acompañaba del anuncio de la organización de una Superintendencia específicamente dedicada al monitoreo de esa maraña de organizaciones, con el fin de incitarlas a reagruparse y articular sus acciones en estructuras estratégicas de segundo nivel, capaces de inducir las a más eficacia y más transparencia²².

Esas medidas daban seguimiento a la multiplicación, a lo largo del año precedente, de una serie de rumores que cuestionaban severamente la acción de las ONG. Además, una reforma, intervenida al principio de febrero del 2002, del Artículo 222 de la Constitución había encargado a la Contraloría General de la República monitorear el uso de fondos, bienes y recursos de cualquier entidad pública o privada que recibiera o administrara recursos públicos provenientes de dentro o fuera del país. No se trataba de poca cosa, puesto que en aquel momento se estimaba que las ONG operando en Honduras disponían anualmente de unos 1,200 millones de lempiras (70 millones de dólares), representando esta suma el total de lo que recibían directamente de los donantes extranjeros y de lo que el gobierno ponía a su disposición por el intermedio del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

¿Hasta qué punto iban las ONG someterse al control ordenado por el Congreso? Era difícil emitir un pronóstico al respecto, tan grande era la variedad de su situación legal... e incierto su grado de buena voluntad para plegarse a la supervisión de los poderes públicos. Algunas, de entre

21 Jhonny José LAGOS: «Gobernación debería publicar lista de ONG y fundadores», en: *El Herald Económico*, 11 de diciembre del 2001.

22 Cf. Jhonny José LAGOS: «5,000 ONG operan sin control en el país», y Sammy CASTRO EMME: «ONG serán investigadas», en: *El Herald*, respectivamente del 25/11/02 y del 3/12/02. Cotejando varias fuentes de información, Alfredo Stein estima que al principio de la década del 1990, 125 ONG operaban en Honduras (Cf: Alfredo STEIN: «Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y su rol en el desarrollo social de América Latina», in: *Pensamiento latinoamericano* n°19, Enero-junio de 1991).

ellas, ya espontáneamente reagrupadas en estructuras de segundo nivel, tales como la ASONOG (Asociación Nacional de las ONG), o el Foro Social de la Deuda Externa y del Desarrollo de Honduras (FOSDEH), se declararon encantadas de las medidas promulgadas, enfatizando que ellas no habían esperado a que la ley las obligara a someterse a la supervisión de la Contraloría General de la República, para ya empezar, de su propia voluntad, a justificar su gestión ante el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presidido por el Cardenal Rodríguez.

Sin embargo, todas las ONG no manifestaron disposiciones tan favorables. Así, a mediados de abril del 2002, el vicepresidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tegucigalpa se ahogaba de indignación delante de la prensa, preguntando ¿con qué moral un gobierno, en seno del cual tanta corrupción está reinando, venía a exigir que las iglesias rindieran cuentas? Y dejaba a entender que sólo aceptaría someterse a ese control hasta que los funcionarios del gobierno revelen qué uso hicieron de las finanzas públicas que pasaron por sus manos. Era como para decir: nunca.

Poniendo una vez más en evidencia la relación de causa y efecto que hay entre el activismo de las ONG y la inoperancia del Estado, esta declaración no podía más que avivar la molestia del público con respecto a aquella anárquica y turbulenta nebulosa de las ONG. Una buena parte del sentimiento de reprobación que inspiran éstas proviene de que en su entorno prospera todo un avispero de aprovechadores locales, cuyos despilfarros se suman a los de los expertos y técnicos extranjeros que, entre salarios y *per diem*, pueden cobrar hasta 20,000 dólares mensuales (con el resultado de que los fondos de los donantes van a parar —y a menudo sin jamás haber salido de sus arcas— a los bancos de los países del Norte).

Esa lamentable evaporación de los recursos de la «ayuda» no debe hacer olvidar que, a nivel personal, el medio de las ONG constan, en su mayor parte, de gente muy sacrificada y bien intencionada, con una generosidad personal incontestable, íntimamente convencida de asumir la defensa de la «sociedad civil». Ahora bien, paradójicamente, la irritación que suscitan las ONG resulta tal vez más del activismo de esas buenas gentes que de la inevitable proliferación de oportunistas y timadores que gravitan a su alrededor.

Ya hemos visto que las ONG suelen concentrar su intervención en lo que normalmente debería competir sólo al Estado: la educación, la salud, la vivienda, el bienestar social, la administración territorial, la construcción y mejoramiento de las infraestructuras, las reformas institucionales e, incluso, la promoción del espíritu cívico. Y no se puede evitar que las

ONG hagan lo suyo cada una en su sector de especialidad, según el método que juzguen conveniente, allí donde lo decidan, y para la extensión de tiempo que les venga a bien (sabiendo además que la duración de su intervención depende, al final de cuentas, de la reconducción, siempre aleatoria, de un financiamiento extranjero).

Es así que, después del Mitch, se ejecutaron, en Honduras, en un ambiente de apresuramiento de lo más irreflexivo, programas:

- de reconstrucción de viviendas;
- de restauración de puentes y carreteras;
- de creación de escuelas y centros de salud;
- de excavación de pozos y canales de riego;
- de promoción de letrinas o de instalación de paneles solares (algunas veces para poner en funcionamiento algunas donativos de televisores y computadoras)...

A lo que se suma, en ese mismo clima de efervescencia:

- acciones a favor de las mujeres y de la protección de la niñez;
- campañas de rastreo de enfermedades y de vacunación;
- distribución de preservativos para luchar contra el SIDA ;
- la promoción de tal o cual tipo de crianza de animales o de cultivos caseros, prometedores de un mejor porvenir;
- ardientes alegatos en pro de la democracia, de la justicia social, de la protección del medio ambiente y de los derechos humanos; y, por fin,
- intervenciones directas en la enseñanza escolar;

todo esto impregnado de una mezcla de proselitismo religioso o semireligioso y de motivaciones utilitarias cuando no mercantiles. Sabiendo además que todas estas acciones son susceptibles de cesar en cualquier momento sin previo aviso y que las ONG operan en ausencia de una planificación global y de perspectivas a largo término, que sólo se pueden esperar de un ejercicio prudente de la potencia pública...

Trastornada en todas partes por la febrilidad de las ONG, la acción de los poderes públicos, lejos de verse reforzada, se desarticula por la diversidad de esas intervenciones que no puede controlar, y que generalmente ponen en juego medios financieros muy superiores a los del Estado. Y éste ni puede pensar en poner el alto a eso, sabiendo que la recepción de esas generosidades extranjeras y la orientación más o menos acertada que alcanza a imprimirle, le permiten disfrazar su propia inoperancia y camuflar la renuncia a sus obligaciones. Es así que, de más en más abiertamente reducido al no tener otro rol que el de repartir el dinero proveniente de agencias extranjeras, este Estado, que tanto

necesitaría ser reforzado, moralizado, mejorado, pierde, por el contrario, cada vez más, su sustancia y su dignidad.

Hay algo peor y más concreto todavía: el hecho que las ONG presentes en el país proveen empleos a numerosos profesionales hondureños es percibido, por éstos, como una bendición. En efecto, aunque muy inferiores a las del personal extranjero, las remuneraciones que son ofrecidas al personal local son mucho más elevadas que los salarios nacionales, en una proporción que puede alcanzar seis o siete veces. Además, las condiciones de trabajo son más atractivas: las oficinas son limpias y bien acomodadas, con equipos que responden al último grito del modernismo y en óptimas condiciones de uso. En resumen, todas las condiciones están reunidas para que un profesional hondureño pueda hacer gala de sus capacidades, mejor que en el sector local correspondiente (la administración de los diversos ministerios, los tribunales, los hospitales públicos, las universidades, etc.).

Además –y esto no es poco- trabajar en las ONG es moralmente gratificante: allí sólo se codea con personas simpáticas, motivadas por nobles objetivos y que, a su calidad ética, suman el culto de la eficacia. Por fin, al profesional local se le abre un campo de acción liberado de las insistentes presiones que los «correligionarios», parientes, amigos, vecinos, paisanos y compadres de toda clase ejercen sin cesar sobre el funcionario hondureño, induciéndole constantemente al favoritismo y a la concusión.

En resumen, el trabajo en las ONG es tan atractivo que drena hacia él lo mejor de las competencias profesionales y de las capacidades éticas latentes en el cuerpo social. Por consiguiente, éstas hacen tanto más falta en los diversos campos del servicio público, tales como por ejemplo los de la enseñanza y de la justicia, cuyo rendimiento todo el mundo sabe que sería urgente mejorar para darle al país mejores oportunidades de acceder al nivel de prosperidad material y de madurez social al cual cada quien aspira.

La fagocitosis de la administración pública por el sector no gubernamental, se agrava aun más por el hecho de que, a falta de lograr empleo en alguna ONG extranjera, numerosos profesionales y funcionarios hondureños se han dedicado a crear ONG, en las que de alguna manera privatizan el cumplimiento de las tareas que normalmente incumben a los servicios del Estado. ¿Cómo sorprenderse, entonces, de que lo que subsiste mal que bien de la administración pública, consciente de su ineficacia, ceda al descorazonamiento hasta el punto, a veces, de enviar hacia las

ONG que les hacen competencia, la atención de algunos casos de los que la potencia pública debería normalmente hacerse cargo?²³

En fin ¿cómo no sospechar que en un país como Honduras -en donde sobreabundan los capitales de origen inconfesable, como resultado de múltiples actividades ilícitas entre las cuales predominan el contrabando y el narcotráfico-, la existencia, fuera de todo control, de millares de estructuras improvisadas (las que, a veces, cubren las acciones de un solo individuo), ávidas de privilegios fiscales y que pueden desaparecer de un día para el otro sin dejar más rastros que el recuerdo de los recursos que se esfumaron al mismo tiempo que ellas, no constituya un medio sin igual para el lavado de dinero? No hay duda de que tal sospecha pueda considerarse insultante para las decenas de ONG honestas que desarrollan sus actividades a plena luz. Sí, pero en su sombra protectora, hormiguean las demás²⁴.

Lo más y lo menos en la restauración de las infraestructuras

Vayamos ahora al análisis de las acciones de reconstrucción que fueron llevadas a cabo. Las destrucciones provocadas por el Mitch se reparten en dos categorías globalmente contrastadas:

- una parte en el sector de las infraestructuras viales y eléctricas, esencialmente relacionadas con el servicio público;

23 Recibí de un colega sociólogo que en esa época trabajaba en una ONG dedicada a la asesoría jurídica, una anécdota que ilustra perfectamente esta actitud de renuncia. La acción de esa ONG consistía en informar acerca de sus derechos a los individuos en posición débil (mujeres, menores, analfabetas, campesinos, etc.) víctimas de un abuso cualquiera, y en acompañarlos delante de la instancia pública (comisaría, tribunal, etc.) de la cual ellos probaban lo difícil que es hacerse atender, a fin de exigir que se les prestase el servicio debido al ciudadano. La mala suerte quiso que un día el carro del colega le fuera robado. Habiéndose dirigido a la comisaría para sentar denuncia, preguntó al policía que la registraba, ¿qué investigación se iba a hacer para tratar de encontrar su vehículo? «Ninguna, le constestó el policía. Usted sabe muy bien que la policía no tiene ni el tiempo, ni los medios, ni las ganas de perseguir ladrones de vehículos». Y como el sociólogo se mostraba irritado por esa situación (bien conocida por todos, pero a la cual él no llegaba a resignarse), el policía, muy servicial, le aconsejó recurrir... ¡a la misma ONG de asistencia jurídica en la que el sociólogo trabajaba! «Tal vez, le sugirió el policía, allí puedan hacer algo para usted...».

24 Cf. Pablo CARÍAS: "El mundo de las ONG", in: *El Heraldo* del 24/1/2003.

- y la otra por el sector de los bienes privados, que abarca la vivienda y las unidades de producción.

El primer contraste entre esas dos categorías es cuantitativo. Según los cálculos de la CEPAL, cerca de la mitad de las destrucciones ocasionadas por el Mitch (48.9% exactamente) conciernen al «sector productivo» (la CEPAL considera bajo este rubro: la agricultura, la ganadería, la piscicultura y la pesca y el corte de madera). En cambio, los mismos expertos estiman que las destrucciones causadas a la red de carreteras no sobrepasan el 17.8% de los daños ocasionados por el Mitch. Sin embargo, posteriormente al objetivo absolutamente prioritario que fue el arreglo de la red eléctrica, será sobre la restauración de las carreteras y de los puentes que van a concentrarse los esfuerzos del gobierno, con el efecto de gastar en ello la mayor parte de los fondos destinados a la reconstrucción.

Esas dos categorías (privada/pública) de destrucciones causadas por el Mitch difieren también por la naturaleza de los operadores llamados a intervenir en las acciones de reparación. Las ONG nunca serán sino excepcionalmente implicadas en la restauración de las infraestructuras viales y eléctricas: y cuando se dió el caso, sólo fue de manera puntual y local, en proyectos de modestas dimensiones. En efecto, los medios técnicos de gran envergadura que se necesitan para la reconstrucción de esa clase de infraestructuras fueron esencialmente los de operadores públicos como la ENEE y SOPTRAVI, o de compañías privadas de ingeniería civil, generalmente en manos de gente muy cercana al personal político en el poder, y que tanto más fácilmente triunfaron en las licitaciones que, con el pretexto de la emergencia, el gobierno autorizó que se aligeraran los trámites.

El resultado más especular de esta opción que dio prioridad a la restauración de las infraestructuras viales, es que Honduras dispone hoy en día de una red de carreteras principales de una calidad muy superior a la que tenía antes, permitiendo, de ahora en adelante, tránsitos rápidos y cómodos entre las instalaciones portuarias (Puerto Cortés en el norte y San Lorenzo en el sur) y el valle de Choloma, San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa, o sea todos los lugares en donde están (o estarán pronto) implantadas las maquiladoras, esas plantas de procesamiento *off-shore* que, como se recordará, sólo sufrieron muy pocos daños por el Mitch.

El gobierno hondureño no podía indicar más claramente la orientación de sus prioridades en materia de programación económica y social: menos damnificadas que el resto del sector productivo (y especialmente menos que el sector agrícola), las maquiladoras van a sacar el máximo beneficio

de la reconstrucción. Además, la preferencia dada a las reparaciones infraestructurales corresponde a la voluntad de participar activamente en la concretización de dos objetivos prioritarios en materia de integración centroamericana:

- el establecimiento de un corredor vial transístmico (habitualmente designado bajo el nombre de «canal seco») permitiendo la unión de Puerto Cortés y Puerto Barrios con un terminal portuario salvadoreño situado en el Pacífico;

- la interconexión de las redes eléctricas de los diversos Estados de la región, para compensar la fragilidad de sus respectivos medios de producción y de distribución de energía eléctrica.

No se puede negar que el gobierno hondureño disponía de sólidos argumentos para justificar esta preferencia dada a la restauración de las infraestructuras, públicamente argumentada por la necesidad de restablecer, con toda prioridad, las vías de acceso a las zonas de producción. Pero no era inevitable que eso implicara el abandono de la agricultura y la ganadería, visiblemente excluidas de lo que se consideró como prioridades. De hecho, si la red principal de carreteras recibió, como ya lo señalamos, reparaciones rápidas y de calidad, no se puede decir lo mismo a propósito de la red secundaria, deliberadamente dejada en el abandono²⁵. En este sector, las reparaciones fueron lentas y tardías (algunas regiones las estaban esperando todavía, cinco años después de los hechos), hundiendo partes del territorio en un aislamiento que condena a la muerte sus actividades productivas, privadas de la posibilidad de despachar sus productos; y deteriora el nivel de vida de sus habitantes por el alza de los precios de los productos de consumo cotidiano, gravados por el elevado costo de los fletes, como consecuencia del estado lastimoso de los caminos²⁶.

25 Cf. Faustino ORDÓÑEZ BACA: «Carreteras de tierra no corren con la suerte de las pavimentadas», en: *El Heraldo* del 6 de marzo del 2000, que precisa que la red de carreteras de Honduras se componía, en esa fecha, de 2,400 kilómetros de vías asfaltadas, y de 11,000 kilómetros de red secundaria no pavimentada.

26 Esta situación se ilustra perfectamente por las dificultades sufridas en el sur del Departamento de Francisco Morazán por los municipios de Reitoca, Curarén, Alubarén, San Miguelito y La Libertad. La relativa proximidad de esos pueblos con Tegucigalpa les permitió atraer el interés de la prensa sobre sus problemas (Cf. el reportaje de doble página de Xiomara BÁRCENAS en *El Heraldo* del 1ro de marzo del 2000: «En el sur de Francisco Morazán, 69 mil personas están sumidas en la miseria y el abandono estatal»). Como consecuencia de esta denuncia pública, la acción combinada del SOPTRAVI y de diversas ONG

La combinación de aquellos factores tuvo como resultado acelerar la migración de las poblaciones de esas zonas campesinas abandonadas hacia la periferia de las ciudades, contribuyendo de esa manera a la aglomeración de una fuerza de trabajo barata, eventualmente utilizable para actividades industriales de bajo nivel de calificación. Desgraciadamente, aun en el mejor de los casos, esas nuevas fuentes de empleo no bastarán para absorber esos nuevos flujos de migrantes, la mayoría de ellos irremediamente condenados al desempleo y a la precariedad.

Por otra parte, la buena calidad general de las reparaciones efectuadas sobre la red principal de carreteras, no puede disimular ni excusar el hecho de que otras reparaciones de infraestructuras –de una necesidad no menos urgente- sólo se ejecutaron de una manera tardía y negligente. Es así que, en septiembre-octubre de 1999 –a casi un año después del Mitch- un episodio lluvioso, importante pero que no excedía lo normal en aquel momento del año, puso cruelmente en evidencia la superficialidad y la inquietante fragilidad de las reparaciones hechas en materia de:

- protección de los vertientes en las cuencas fluviales;
- dragado y canalización de los principales ríos;
- construcción de diques de contención en los lugares de riesgo;
- mejora de los sistemas de drenaje en medio urbano;
- y regulación (o prohibición) de la ocupación humana en las áreas con potencialidad de inundaciones.

Esas carencias fueron sacadas a la luz por el hecho de que nuevos daños, particularmente graves en términos de destrucciones de viviendas y pérdidas de cosechas, tuvieron que deplorarse en el valle del Ulúa y en la ciudad de El Progreso, como consecuencia de los bruscos desastres que se tuvieron que practicar en la represa de El Cajón. En ese mismo momento, en la región de Tocoa, los ríos crecidos destruían sin piedad ¡los mismos puentes que apenas se acababan de reconstruir! Otros daños de importancia se habían también registrado en otros diversos puntos del territorio, principalmente en el valle de Sula y en la capital, demostrando una vez más la mala calidad de trabajos efectuados por las compañías

permitió remediar – por lo menos parcialmente- los disgustos de esos cinco municipios, amenazados por la desertificación. Desgraciadamente, otros lugares, más apartados todavía, no tuvieron tal oportunidad de hacer escuchar su voz, y entraron, en silencio, en la ruina que provoca la emigración de sus habitantes.

contratistas, así como el laxismo del control ejercido sobre ellas por las autoridades del gobierno.

Logros y fracasos en el realojamiento de los damnificados

No obstante, fue en el sector de la reparación de las destrucciones afectando la vivienda popular que las acciones de reconstrucción conocieron las peripecias más diversas, numerosas y duraderas. Al momento de redactar estas líneas, cinco años después de la catástrofe, todavía falta mucho para que este asunto pueda considerarse resuelto.

La verdad es que el reto era considerable, si no insuperable. Antes del Mitch, el déficit habitacional en las capas populares de Honduras se evaluaba entre 700 y 800,000 viviendas. Posteriormente al Mitch, este déficit se había elevado a un millón de unidades, si no es más. De esas cifras, se deduce fácilmente que una competencia considerable no podía dejar de darse entre los damnificados, directamente víctimas del Mitch, y una enorme masa de gente (los «damnificados permanentes») no específicamente afectada por el Mitch, pero que padece igual grado de indigencia. La aceleración de las migraciones del campo hacia la ciudad agudizó todavía más el clima general de pánico habitacional.

Pasó algún tiempo hasta de que esta situación liberase su potencial de acritudes, celos y violencias. Durante la fase aguda de la catástrofe, en efecto, la desgracia colectivamente vivida suscitó, al principio, admirables manifestaciones de solidaridad y de ayuda mutua, que contribuyeron mucho a que la población saliera del evento sin presentar una sobreincidencia notable de traumatismos mentales²⁷.

Pero una vez pasado ese período de tregua cuando predominó la abnegación, cada cual empezó a darse cuenta de que una catástrofe como el Mitch hace pesar la amenaza de un trastorno general en la

27 Contrariamente a lo que pasa en «el norte» cuando suceden procesos catastróficos de la importancia del Mitch, ninguna asistencia psicológica fue brindada a los damnificados, que aparentemente no la necesitaban tanto, pues todo parece indicar que las solidaridades entre ellos bastaron para que se reconfortasen mutuamente. Si también es cierto que en las semanas que siguieron a la catástrofe, se encontraron por las calles algunos individuos, en número relativamente moderado, desorientados y huraños, rondando sin rumbo por aquí y por allá, parece sin embargo que en la mayor parte de los casos, se trataba de disturbios psíquicos preexistentes a la catástrofe.

repartición social de los espacios. Los «verdaderos» damnificados (de quienes las inundaciones o los derrumbes habían destruido sus viviendas) no se encontraban por azar en donde la catástrofe los atacó (las riberas inundables o las escarpadas vertientes de los cerros): se trataba, por lo general, de los últimos llegados entre los emigrantes atraídos por la vida urbana. En consideración de lo cual, en el parecer de sus predecesores, éstos se encontraban «en el lugar que les corresponde», es decir: el más desfavorable y el más precario.

Veamos ahora la paradoja: la catástrofe, después de haberlos golpeado duramente, parece prometer transformarse en una gran oportunidad para los que sobrevivieron. En efecto, en buena lógica, no se les puede reubicar en el mismo lugar en donde la catástrofe les maltrató (además, en muchos casos, esto sencillamente no es posible, puesto que allí donde estaban sus moradas, el terreno desapareció). La compasión de la que son acreedores los «damnificados» implicaría, por el contrario, que se les reubique en lugares menos expuestos a los riesgos, es decir «mejores» y «socialmente más ventajosos». Y es allí justamente donde el problema se complica.

En efecto, ¿dónde realojarlos en realidad? No habiendo sufrido destrucción alguna, los barrios de clase acomodada no tienen espacios disponibles. Y, sobre todo, es allí donde la intransigencia social llega a su clímax. Sin embargo dicha intransigencia no es menor en las colonias de clase media o media baja, cuyos habitantes están curando sus propias heridas, con el disgusto de comprobar que, en comparación con la espectacular desgracia de los que perdieron todo, los infortunios que ellos sufrieron no les abren ningún derecho a la conmiseración general.

Para reasentar los damnificados no quedan más que los barrios populares de la periferia de las ciudades, allí donde la población apenas acababa de recibir los servicios elementales (agua corriente, electricidad, alcantarillados, etc.) y de adquirir los primeros signos de confort doméstico (casa de material noble, algunos muebles y artículos domésticos; una bicicleta, un televisor, etc...). Para los que allí viven, no puede ser cuestión de que los damnificados se asienten en el vecindario de sus espacios todavía frágiles. Nadie discrepa con que los damnificados son acreedores de derechos legítimos a la solidaridad, pero cada cual puede notar que a los «verdaderos damnificados» se les agregaron masas de aprovechones y malandrines, ávidos de acortar los caminos del ascenso social, cuando no son simplemente portadores de intenciones criminales. De todos modos, la inoportuna llegada de tanta gente no podría más que sobresaturar las capacidades, de por sí ya

insuficientes, de los equipamientos y los servicios públicos de reciente instalación en esos espacios periurbanos, trayendo consigo el encarecimiento del costo de vida y aportando la inseguridad. Por tal razón, la reubicación de los damnificados en esas colonias populares es unánimemente vista como una calamidad, a la cual urge oponerse por anticipadas protestas.

En definitiva, nadie sabe en dónde realojar a los damnificados. Mientras tanto, la impaciencia crece y el ambiente se pone tenso. A partir del mes de enero de 1999, varias revueltas estallan en diferentes puntos del país, como expresión del descontento de los desalojados. Éstos incriminan a la inercia de los poderes públicos y exigen rápidas soluciones para su problema. Cansados de fracasar en hacerse escuchar, grupos de desalojados optan por recurrir a la fuerza e invaden terrenos privados... de donde la policía pronto los expulsa, a veces con brutalidad, sin poder evitar que a poco tiempo esos invasores repitan su acción, en el mismo lugar o en otro sitio... Por fin, allí donde subsisten —o por lo menos eso es lo que se cree²⁸— espacios públicos disponibles en la periferia de las ciudades, son las poblaciones ya establecidas en esos parajes que, movidas por las razones que ya mencionamos, organizan manifestaciones para oponerse a la llegada de los damnificados.

A esta presión sobre los espacios se agrega la angustia del tiempo que pasa. Recordemos que cuando la catástrofe sobrevino, los niños prematuramente enviados a vacaciones, habían liberado locales escolares para que una buena parte de los refugiados pudiera ser acogida. Ahora, resulta imperativo que dichos locales sean evacuados, a fin de que los 1,400,000 niños en edad escolar con que cuenta Honduras, puedan reiniciar sus clases, al más tardar en el mes de marzo. Por otra parte, aun si la urgencia no es igual, importa que los demás lugares públicos en donde se albergaron los damnificados, también puedan volver a su uso normal: aquí mercados, allá locales parroquiales o

28 En Honduras, donde la información catastral es frecuentemente muy insegura, operaciones dudosas no faltaron de multiplicarse en relación con los terrenos próximos a urbanizarse en la periferia de las ciudades. Es así que en varios casos, cuando las municipalidades adquirieron terrenos con el fin de lotizarlos para los programas de reconstrucción en beneficio de los damnificados, se vieron de repente surgir antiguos propietarios que consideraban haber sido ilegalmente despojados de su propiedad por las personas a las cuales la municipalidad compró el terreno. Todo esto con el resultado de paralizar las acciones a favor de los desalojados...

comunitarios, acullá parques públicos y hasta un estadio olímpico, como es el caso en San Pedro Sula.

La urgencia hace ley: se inicia, a toda prisa, la fabricación de enormes barracas llamadas *macroalbergues*. Para colocarlos, los terrenos serán un poco menos difíciles de encontrar, puesto que sólo se trata de ocuparlos de manera provisional y que, en razón de la extrema concentración en la que los refugiados estarán albergados, las superficies que se necesitan son menos extensas que lo que implicaría su realojamiento definitivo.

Construidos mediante el ensamblaje de elementos prefabricados, montados en serie, esas barracas de madera son construcciones modulares de dimensiones variables en función de la configuración del terreno, de su relieve y de sus dimensiones. Ciertos campamentos contarán hasta una quincena de esas barracas. Las más grandes se componen de dos filas de 16 cubículos de 4 metros por 4. El techado de zinc hace que en ellas reine un calor insoportable desde que el sol arde. En cada uno de los cubículos se amontonan familias, en el sentido amplio de la palabra, ya que muy frecuentemente se aumentan por la presencia de parientes o amigos, en visita más o menos prolongada. Cuando ciertas familias particularmente extensas, lograron hacerse censar como tales antes de la repartición de los sitios, pudo ser que dos cubículos contiguos les fueran atribuidos. Pero aun así, la promiscuidad es muy grande, dentro de los cubículos como al exterior de éstos.

Por la noche, la luz es parsimoniosa: para alumbrar los cubículos, sólo un paliducho foco eléctrico cuelga de un cordón que baja del techo. Por supuesto, los más habilidosos no tardaron en acomodar tomas múltiples que hacen funcionar, cuando se los tiene, un televisor o un ventilador. Pero las sobrecargas que de eso se derivan hacen que de repente todo el albergue se encuentra sumido en la oscuridad.

Las instalaciones higiénicas igual se reducen a lo más esencial. Al comienzo, sólo se trataba de un par de grifos colectivos en las dos extremidades del edificio. Con el tiempo, ese punto de agua pudo verse equipado de un fregadero, de una lavadero público y, en algunos casos, de duchas. En cuanto a los sanitarios, cada quien prefiere, evidentemente, que se sitúen a buena distancia de sus narices. Pero en esta materia, tampoco es posible satisfacer a todo el mundo. En ciertos campamentos en donde se disponía de espacios suficientes, los refugiados pudieron descubrir la exquisita novedad de *letrinas aboneras*, que luego de cierto tiempo se desplazan de un sitio a otro en el terreno disponible, para que éste se abone con los desechos humanos. Dichas letrinas presentaban la particularidad de repartirse en cuatro categorías, definidas por el sexo de los usuarios y la clase

de la necesidad que en ellas se iban a satisfacer. Poéticos letreros, como por ejemplo: DAMAS SÓLO PUPÚ, reglamentaban los accesos.

Pensando hacer el bien, los organizadores de ciertos campamentos mandaron edificar cocinas colectivas en las extremidades de los albergues, al lado de los puntos de agua. Pronto pudieron darse cuenta de que eso no funcionaba: cada familia prefería seguir cocinando frente a su cubículo sobre un comal improvisado hecho de un pedazo de lata o de una tapadera de tonel de gasolina. Desgraciadamente, la leña para cocinar no tardó en escasear y si subsistía algún árbol en la proximidad, sólo fue por poco tiempo...

A esas múltiples factores de incomodidad se agregaron las inconveniencias de la promiscuidad. De hecho, a la hora de repartir los alojamientos, no siempre fue posible darle a cada cual los vecinos que quería. A menudo, parientes o amigos con quienes se hubiese podido cohabitar con agrado se encontraban desparramados por aquí o allá, y a veces muy lejos. Esclavos de sus listas preestablecidas, los administradores de los macroalbergues se resistían obstinadamente a las solicitudes de mudanzas, sobre las cuales, en verdad, bien difícil hubiera sido que todos se pusieran de acuerdo. Muy rápido, en efecto, apareció que, por múltiples razones (orientación geográfica, ruidos, olores, relativa proximidad de los equipos colectivos, inseguridad, etc.) ciertos lugares estaban mejores -o en todo caso menos inapropiados- que los demás.

Lo más duro de soportar, al final de cuentas, son las tensiones que reinan en los macroalbergues. Allí también se han metido las maras, que tratan de imponer su control sobre los territorios. Exaspera igualmente, por lo menos a quienes se niegan a ceder a su lancinante proselitismo, una cantidad de sectas de iluminados, empedernidos en predicar sus doctrinas y reclutar sus adeptos. Todo esto genera una atmósfera de impaciencia y de violencia mal contenida, que constantemente amenaza con desembocar en riñas y enfrentamientos sangrientos. Para no llegar a tal extremo, cada uno se empeña en conservar la calma, concentrado en la esperanza de poder algún día salir de allí hacia la tan anhelada casa personal, cuya promesa no cesa de brillar.

Cansados de luchar sin embargo, algunos refugiados terminan por abandonar el campamento para ir a alojarse en casa de familiares que se aprietan un poco más para darles lugar o se regresan a los mismos sitios de donde los derrumbes o las inundaciones los han expulsado²⁹.

²⁹ Poco atraídos por la vida en los macroalbergues, algunos damnificados optaron de entrada por realojarse en el lugar donde estaban antes de la catástrofe: preferían

Los demás se arraigan en los macroalbergues, donde lo provisional tiende a convertirse en permanente, pero siempre aferrados a la esperanza de verse cumplir la esperanza de un realojamiento personalizado.

Finalmente sí, hubo programas de reconstrucción. Regados por todo el país: en grandes conjuntos o en pequeñas unidades; en la periferia de las ciudades o en el campo raso (¡Hasta pude ver una pequeñita lotificación perdida al fondo de un bosque, sobre la vertiente de una montaña desolada, a buena distancia de cualquier lugar frecuentado!). En total, ¿cuántas reconstrucciones hubo? El balance es difícil de establecer, y seguramente no se hará jamás. Es con mucha razón que, un año después de los hechos, el jesuita Ricardo Falla manifestó su enojo contra un informe del gobierno que entre otras cosas proclamaba que 59,000 viviendas estaban en vías de construcción³⁰. El religioso recalca atinadamente que esta información global sólo se podría verificar si se publicara un descuento preciso especificando, lugar por lugar, el número de casas construidas. Así sería posible comprobar si lo que se dice es verdad o no. A falta de eso, cada cual se ve reducido a evaluar, a partir de lo que puede comprobar en su inmediato entorno, cuál es la real importancia de lo hecho o no hecho.

Indiscutiblemente, el acierto más espectacular en materia de reconstrucción fue la resurrección de Morolica, enteramente reedificada en los cerros, a seis kilómetros del lugar donde, en una funesta noche, la crecida la había borrado del mapa. Fortalecido por las relaciones que tenía en el medio de las organizaciones humanitarias y religiosas, su industrioso alcalde, Ramón Espinal, lideró las operaciones con mano maestra. No sólo salvó la vida de sus conciudadanos, les hizo reconstruir en lugar seguro, una Nueva Morolica, realojando en ella a una comunidad con una cohesión preservada, cuidando

contar con las solidaridades locales, a costa de sacrificarles el cuidado de su seguridad, y la utópica esperanza de ganar una mejor suerte en la lotería humanitaria. Es así, por ejemplo, que una pequeña acción benévola ejecutada por los profesores del Liceo Franco Hondureño, se contentó con proveer a los habitantes de un barrio inundado, los materiales indispensables (madera, láminas, clavos, etc.) para reconstruir sus barracas, allí donde la inundación las había destruido.

30 «En el informe el gran héroe de la película es el gobierno. Dice que hay 59 mil viviendas en construcción, como si eso fuera mérito del gobierno, cuando todos sabemos que el gobierno durante este año no ha puesto un bloque. Se han hecho viviendas, se han terminado y están en proceso de construcción, pero han sido obra de las iglesias y de las ONG» (Cf. Ricardo FALLA sj: «Informe del gobierno», in: *El Herald*, 4 de noviembre de 1999).

proveerla de todo lo necesario en materia de edificios públicos y equipos colectivos. La única decepción del visitante es que no se puede decir que el nuevo pueblo sea verdaderamente bello: las calles son demasiado anchas y geométricas, las casas uniformes y el silencio es lúgubre en esos lugares artificiales. Todas las inconvenientes así como la falta de encanto hoy en día todavía visibles en Nueva Ocotepaque, cerca de 70 años después de una reconstrucción igualmente precipitada, están aquí reunidos. El Mitch se ha cobrado la belleza de Morolica y quedará para siempre deudor de ella.

En todos los demás sitios en donde la reconstrucción no presentó el carácter global que tuvo en Morolica, se tropezó con el mismo obstáculo: la escasez de terrenos. Numerosos fueron los donativos extranjeros para la construcción de viviendas que quedaron en el aire y finalmente sin ejecución, en razón de la incapacidad de encontrar un lugar para implantar las viviendas que querían financiar. Generalmente imposibles de encontrar en las ciudades (por las razones que expusimos más arriba), aquellos lugares de implantación, cuando se terminó por encontrarlos, no están a salvo de críticas generalmente esquizofrénicas: o bien aquellos lugares no corresponden a ninguna perspectiva de empleo para sus futuros habitantes, o por el contrario se explican por la evidente intención de concentrar masas humanas llamadas a convertirse en mano de obra cautiva para las maquiladoras que se van a abrir en aquellos lugares.

Cada vez que pudimos observar el desarrollo de programas de realojamiento, constatamos que las opciones que se ofrecen a los promotores se resumen, casi siempre, en un horroroso dilema entre el hacer mal y no hacer nada. Ya vimos que, desde el principio, no es fácil conseguir terrenos disponibles para iniciar tales proyectos. Cuando al fin esos terrenos se encuentran, es común que se trate de una siniestra y árida planicie de polvo y rocas, sin un solo árbol a la vista, situada a unos cuantos kilómetros de una ciudad, fuera del alcance del transporte urbano y lejos de cualquier fuente de trabajo existente o previsible... En tales condiciones, ¿hay que decretar lúcidamente que este lugar no vale nada para realojar a miles de refugiados? o por el contrario ¿conviene aprovechar sin demora cualquier oportunidad de «ir adelante», y de «hacer algo» en beneficio de los desalojados?

Es en ese momento, además, que uno se da cuenta de que no se sabe nada acerca de éstos, aparte de que son numerosos, mucho más numerosos en todo caso, que los que se podrán realojar. Por ahora, están atorando las escuelas, ocupando ilegalmente mercados cubiertos, rondando en los parques públicos y amontonándose en los alrededores de los estadios y

de los edificios religiosos. La urgencia de la situación prohíbe emprender ahora los censos y estudios sociales que anteriormente nunca se han hecho. Por lo tanto, el único método posible para seleccionar los beneficiarios consiste en invitar a todos los que se consideran «damnificados» a reportarse como tales ante las autoridades. Y como ningún otro criterio parece aceptable para establecer entre ellos un orden de prioridad, se procederá a una rifa para designar a quienes se beneficiarán de un realojamiento. Los que no sacarán premio en esta primera lotería, tendrán que esperar hasta otra oportunidad, si es que la hay...

¿Cómo proceder de otra manera, sin entrar en estériles parloteos para determinar quiénes son los «verdaderos» damnificados y, entre éstos, quiénes deben considerarse más gravemente damnificados que otros? En efecto, se encuentra de todo entre los reclamantes. Los más convincentes parecen ser los que, siendo dueños de su vivienda, residían en ella: al perderla, lo perdieron todo. Pero ¿cuántos de entre éstos estarían en medida de justificar legalmente la posesión de su fundo? Por otra parte, los inquilinos también son damnificados, aunque solamente afectados en sus bienes muebles. Pero en este caso también faltaría que puedan presentar un contrato de arriendo y justificar el pago regular de sus alquileres para demostrar que no fueron ocupantes precarios o abusivos... Y si se trata verdaderamente de inquilinos regulares, ¿cómo decidir que los daños que sufrieron son iguales, superiores o inferiores a las pérdidas experimentadas por los propietarios que, aunque no residían en las zonas devastadas, por cierto también son «damnificados», pero no «desalojados»?

La verdad es que solamente mediante una rifa se puede resolver tal rompecabezas y hacer que se pase sin mayor demora a la fase ejecutiva del proyecto: los fondos están a disposición y ¡piden urgentemente ser gastados! A esta altura, nuevos dilemas se presentan una vez más: ¿Conviene regalar las viviendas que se van a construir, o exigir que los beneficiarios paguen? ¿Pagarían el costo real o solamente una parte? ¿Por adelantado? ¿Al contado? ¿Al crédito? ¿Eventualmente mediante prestaciones de trabajo? ¿Trabajo de hombres, de mujeres, niños, ancianos y enfermos, todos confundidos? ¿Obrando sólo en su propia casa, o contribuyendo en la reconstrucción colectiva? ¿Tendremos que aceptar que ciertos beneficiarios, incapaces de poner manos en la obra o no deseosos de hacerlo, puedan contratar a otros para trabajar en su lugar? Y por fin: ¿Quién recibirá el título de propiedad de la casa? ¿Será este documento individual o por familia (sabiendo que en la mayoría de los casos, las parejas, aún con niños, no están formalmente casadas)? ¿No

sería preferible practicar una discriminación positiva otorgando sistemáticamente el título de propiedad a las mujeres?

Cada una de estas preguntas – y otras más - darían materia a interminables coloquios, en los cuales no faltarían argumentos pertinentes para las opciones más contradictorias. Ahora bien, a falta de tiempo, las decisiones han de tomarse osadamente en un sentido o en el otro, para poder pasar sin más pérdida de tiempo a la acción efectiva. Pero allí surgen otros dilemas más: ¿Hay que viabilizar los lotes (poniendo electricidad, agua corriente, desagüe, etc.) antes de ponerse a construir casas y así retrasar otro tanto el realojamiento de los damnificados? ¿O correr a resolver lo más urgente, dejando todo lo demás para después? Otra cosa: siendo lo que es la superficie de la lotización, ¿optaremos por hacer el mayor número de casas que se pueda sobre parcelas forzosamente más pequeñas o edificaremos menos casas sobre lotes menos exiguos? Movidos por la voluntad de aumentar el número de beneficiarios, generalmente se optará por la primera opción, con el pretexto de que estamos en urgencia, y no en la complacencia...

Produce estupefacción comprobar con qué ingenua espontaneidad, cuando se trata de atender la desgracia de los pobres, los especialistas de lo caritativo (no importa que sean norteamericanos, financiados por el BID, o proselitistas religiosos), redescubren el encanto en las soluciones estalinianas. No importa que anteriormente nadie nunca se preocupara por informarse de la igualdad o la desigualdad de condiciones entre los damnificados. Todo será hecho para vigilar que los alojamientos que se les ofrecen ¡sean rigurosamente idénticos! Todas las casas, con un diseño uniformemente rudimentario, serán militarmente alineadas sobre superficies milimétricamente iguales, en un ordenamiento que acentúa aún más, si es posible, la deprimente fealdad de esas deplorables casuchas hechas de grises bloques de cemento.

Por el lado de la calle se ve una triste sucesión, a intervalos regulares, de fachadas todas iguales. La vista es aun peor por el lado interior, donde una doble fila de letrinas, todas coronadas por un alto tubo de PVC blanco para el escape de los gases de las fosas sépticas, ocupa la línea de demarcación entre los patios traseros, allí donde los habitantes suelen cocinar y consumir sus comidas. (Dato que los diseñadores de las casas se mostraron incapaces de tomar en cuenta: nunca nadie utilizó las cocinas acondicionadas en el interior de las casas). Mientras cenan, los beneficiarios de aquellas viviendas pueden divertirse observando las idas y venidas de las personas del vecindario que acuden a las letrinas...

Cuando uno no comparte la inocente euforia de los caballeros blancos de lo humanitario (que hacen visitar esa clase de lotización con un sentimiento de triunfo apenas matizado por una delicada modestia), uno no puede más que sentirse abrumado por la repugnante fealdad de todo esto y, más que todo, por la innoble falta de respeto por la intimidad familiar. Pero el visitante que se atreviera a esbozar esta observación, se haría prontamente replicar que el número de damnificados es tan elevado que esto prohíbe concebir la reconstrucción en términos de estética y de confort... y que de todas maneras los que se benefician de esas viviendas están «muy contentos», ya que en todos los casos, están «mejor» allí que en los cuchitriles de las periferias urbanas o en las rudimentarias casas rurales, en donde residían antes del desastre.

Cabe mantener dudas sobre si la gente está tan «contenta». Una encuesta a profundidad mostró realidades que obligan a matizar este optimismo. Es cierto, por supuesto, que nunca se vio a nadie que se negara a recibir una casa: a caballo regalado no se le mira el diente... Sin embargo, entre los mismos beneficiarios, las recriminaciones abundan, especialmente en lo que se refiere a la relación entre gratuidad y equidad.

Antes de todo, hay que darse cuenta de que las intenciones groseramente igualitarias de los reconstructores de viviendas están sistemáticamente puestas en jaque por la geografía: en despecho de sus dimensiones idénticas, el interés que presenta una casa situada al lado de la carretera, o muy al fondo de la lotización, a dos kilómetros de allá, al pie de la montaña, es forzosamente muy desigual. Así mismo, en una misma manzana, el valor de una casa que se encuentra en el medio de una cuadra es muy diferente de una igual casa situada en la esquina, allí donde todo invita a que se convierta en un bar o una pulpería.

La gratuidad constituye otro rompecabezas. Ya vimos que la exigencia mínima de que los atributarios pongan mano a la obra prestando trabajo voluntario, choca con la evidencia de que las poblaciones damnificadas no se componen uniformemente de trabajadores manuales, aptos para hacer de todo con sus manos. Entre ellos, también hay ancianos, enfermos, lisiados, niños y mujeres, mujeres con cargo de hijos... Se encuentran también personas menos pobres, dedicadas a oficios no manuales. Y también existen –hay que decirlo– haraganes y malandrines, más listos para protestar que para el trabajo colectivo... Por fin, en cuanto a los que están realmente en condiciones de cooperar activamente en las tareas de reconstrucción, su preocupación del momento es más que nada de negociar sus talentos a cambio de una remuneración efectiva. Para ellos, en este momento, las oportunidades abundan: hasta en su misma lotificación, donde

los que no pueden -o no quieren- trabajar... ¡ofrecen pagarles para hacerlo en su lugar!

El asunto se complica todavía más cada vez que los responsables de un programa de reconstrucción exigen de sus adjudicatarios una participación financiera, aún modesta. No faltan legítimas razones para harcelo. Primero porque se sabe que no es más que una minoría de los damnificados que podrán recibir una vivienda. ¿Acaso sería normal que ésta les caiga del cielo como una ganga, mientras que el resto de los damnificados tendrán que arreglárselas con la solidaridad de sus parientes, pobres igual que ellos, obligados a sacrificarse para ayudarlos?

Por otra parte, si bien es cierto que la cuasi totalidad de los programas de reconstrucción fue financiada por el extranjero, la ayuda en cuestión nunca se extendió a la compra de terrenos, ni a la extensión de los equipos públicos y de los servicios básicos hacia las urbanizaciones nuevas. De hecho, los realojados se beneficiarán, directa o indirectamente, de una participación de las finanzas públicas en la buena suerte que les toca. No habría, como consecuencia, nada de escandaloso en que una contribución les sea pedida, siempre y cuando ésta corresponda a sus posibilidades económicas. En todos los casos, sin embargo, esta exigencia despertó una viva oposición, rápidamente llevada a un nivel de protesta contra las autoridades locales, invariablemente sospechadas -no siempre sin razón- de haber malversado los fondos de la ayuda extranjera.

En resumen, en cuanto a saber si los beneficiarios de un realojamiento están «contentos», lo están ciertamente, pero de manera gradual, según las características de la casa otorgada: si ésta es grande y de buenos acabados, sobre una parcela de adecuadas dimensiones, convenientemente viabilizada y rodeada de servicios públicos, y si por añadidura todo eso es gratuito, tanto más contentos serán...

Queda por fin, la cuestión del vecindario. Antes de la catástrofe, los barrios devastados por el Mitch no eran forzosamente siempre tan socialmente homogéneos como muchos piensan. Ya se encontraban constituidos entre ellos unos *ghettos* fuertemente criminalizados en donde abundaban los malandrines, las prostitutas y los drogadictos. También había traficantes y malhechores, frecuentemente organizados en bandas peligrosamente armadas. Cada vez que los lotes en las áreas de reconstrucción se repartieron al azar o por sorteo, esto engendró forzosamente la mezcla de esos tipos de indeseables con personas de buena moralidad, irritadas por el vecindario que se les imponía e incapaces de protegerse de él. De manera que si a nadie se le ocurrió rehusar la buena suerte de verse favorecido por la atribución de una casa, los mejor afianzados económica y socialmente

nunca se fueron a habitar en aquellos lugares, prefiriendo poner inquilinos en sus casas, para que no queden vacías, y no correr el riesgo de perder su propiedad. En cuanto a los adjudicatarios de condición más modesta, sin otra posibilidad que la de ir a residir en las casas que se les atribuyeron, tuvieron que conformarse con la idea de convivir con las verdaderas mafias que pronto tomaron el control de esas urbanizaciones nuevas, en donde después del anochecer más vale para mujeres jóvenes no aventurarse solas por las calles.

Felizmente, todas las situaciones no corresponden a este desolador cuadro. En ciertos casos, para evitar recurrir al método del reparto de lotes por favoritismo o por sorteo, los promotores de la acción humanitaria practicaron abiertamente la selección de sus beneficiarios. Generalmente esta opción fue tomada por organizaciones religiosas, para favorecer el reagrupamiento de sus feligreses. En tal caso, la cohesión social facilita la movilización de las contribuciones voluntarias, en trabajo o en dinero. Muy frecuentemente también, la concepción de la lotificación es más inteligente y las casas de mejor calidad. Las superficies liliputienses que se encuentran en otros asentamientos (de 20 a 33 m²), aquí alcanzan frecuentemente hasta 50 m². Y además las viviendas, más espaciadas, se rodean de parcelas suficientemente amplias para permitir que se personalicen por la agregación de colgadizos u otras construcciones adicionales. Allí también se puede plantar una o más matas de árboles y criar algunas aves de corral o un puerco.

En el diseño de programas habitacionales de esta clase, también pudo suceder que se tomara en cuenta, por ejemplo, la sinuosidad de un riachuelo para darle al plano general de la futura colonia una figura más vistosa que la geometría ortogonal del cuadrilátero urbano. En las lotificaciones de iniciativa religiosa, la prioridad, advertida desde el principio, de proveer la población de locales de interés colectivo (iglesia, escuela, sala para reuniones y fiestas, etc.) contribuyó grandemente a la estructuración de una vida social activa. Entre los no católicos, el hecho de que los pastores y demás guías espirituales residan en el seno de la población contribuye también mucho al mantenimiento del orden moral y de la paz social. Evidentemente, el precio a pagar por esos beneficios es la concentración de personas de una misma confesión en entidades residenciales religiosamente homogéneas. Lo cual implica una acentuación del separatismo socioreligioso, dadas las tendencias al sectarismo de ciertos grupos «protestantes», y su relativa intolerancia hacia los que no comparten sus creencias.

Conscientes de la improcedencia de aquel *apartheid* religioso (que ellas critican por parte de sus «hermanos separados», evangélicos y

pentecostales), las autoridades católicas insisten en no comprometer directamente personal religioso en la administración de las lotificaciones, prefiriendo confiarla a un patronato³¹. Esta voluntad de delegar la conducción de las lotificaciones al autogobierno local no siempre caminó sin problemas. No faltaron casos en los que los habitantes de las lotificaciones se dieron cuenta –y denunciaron aparatosamente– que los responsables del patronato se aprovechaban de su posición para acaparar, para ellos mismos y sus allegados, los lotes mejor situados. Y cuando las autoridades de tales patronatos fueron destituidas por los pobladores, sucedió frecuentemente que fueron reemplazadas por otras... ¡que se apresuraron de actuar en la misma forma! Con gran decepción de las buenas almas, católicas o no, ingenuamente convencidas de que basta ser pobre para ser honesto...

Esas peripecias, todas referidas a las fuertes disparidades de localización, tamaño, comodidad, atractivo y, en última instancia, valor relativo de las viviendas construidas, dieron nacimiento a un gran diversidad de situaciones. No todos los damnificados encontraron compensación de sus pérdidas. Muchos impostores lograron infiltrarse en el sistema a fin de beneficiarse de los programas de realojamiento. Pero al final de cuentas, trátase de «verdaderos» damnificados o no, se puede comprobar que muchos adjudicatarios optaron finalmente por no residir en el bien que lograron hacerse atribuir, prefiriendo alquilarlo en vez de habitarlo. También se observa que ya se están iniciando movimientos de compra y venta, constituyéndose así un nuevo mercado inmobiliario. Sólo se maravillarán de esto los que tienen una visión puramente idealista de lo que es una sociedad, y subestiman sus capacidades de reconstituir sus hábitos y de reconfirmar sus jerarquías después de un gran trastorno.

Apertura del debate político: una reconstrucción ¿con o sin transformación?

La catástrofe del Mitch no tardó en revelar su dimensión política. Ya desde el lunes 9 de noviembre de 1999, como resultado de una cumbre apuradamente reunida en Comalapa, en los salones del aeropuerto

³¹ Este tipo de organización, intermediaria entre una asociación de vecinos y un ente de decisión local, es muy difundida en Honduras, donde los 298 municipios son de una extensión tan enorme (375 km² en promedio) que no se prestan para una verdadera gestión de proximidad, salvo en el centro de la cabecera municipal, cerca de la alcaldía.

de San Salvador, los dirigentes políticos de la región (los cuatro presidentes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala) habían emitido una declaración solemne en la cual proclamaban que «las dimensiones de la tragedia comprometen el futuro de la región». A continuación, haciendo muestra de una extraña precipitación, esos dirigentes puntualizaban que la tragedia no tenía nada que ver con «el modelo de desarrollo vigente». Y para que no hubiera equivocación al respecto, se regocijaban de que «los importantes avances que habíamos logrado en la región son una muestra de que el modelo de desarrollo que hemos estado implementando [es decir: el modelo neoliberal] es acertado y garantiza un crecimiento sano y sostenido de nuestras economías». Por fin, al cabo de una lista de pedidos dirigidos al gobierno de Estados Unidos,³² esos dirigentes definían como meta de su estrategia luego del Mitch: «la reconstrucción de una Centroamérica fortalecida y moderna, que ofrezca más y mejores oportunidades al comercio y a la inversión».

El carácter abiertamente adulador y pedigüeño de esta Declaración de Comalapa ponía en evidencia la propensión de los gobiernos centroamericanos a arrodillarse automáticamente ante de las intimidaciones convergentes de las instituciones financieras internacionales y de los Estados Unidos. Esto actuó como un aguijón sobre todo porque la sociedad hondureña, al margen de los que gravitan en la órbita de los partidos tradicionales, cuenta con intelectuales no conformistas, escritores y artistas revoltosos, curas y pastores con ideas progresistas, dirigentes sindicales y asociativos, políticos miembros de partidos «emergentes», y algunos empresarios cuya sensibilidad social no está completamente anestesiada.

32 En esta lista de súplicas a Washington, a las inevitables solicitudes de créditos para la reconstrucción, y a las demandas de moratorias y renegociaciones de deudas, se añadían insistentes pedidos para que se aceleren las negociaciones para la conclusión de un Tratado de Libre Comercio que ponga a los países de Centroamérica en condiciones iguales a las de que México se beneficia en el marco del Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano (ALCNA). A la espera de que esto sea posible, los dirigentes centroamericanos pedían una ampliación de las facilidades de acceso al mercado interior americano definidas por la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. En fin, una amnistía general era reclamada para todos los centroamericanos ilegalmente inmigrados a los Estados Unidos, haciendo observar los signatarios de la Declaración Conjunta de Comalapa que el repatriamiento de aquellos ilegales agravaría aún más la difícil situación en la cual se encontraban sus países.

Incapaces de hacer escuchar su voz en el concierto político habitual, estas diversas categorías de ciudadanos «comprometidos» aprovecharon la ocasión que se les ofrecía de irrumpir ruidosamente en el escenario público. El lodo de las inundaciones no había tenido tiempo de secarse hasta que, rompiendo las barreras de los múltiples pequeños cenáculos en los que hasta entonces sus diatribas se dispersaban, empezaron a reunirse en fervorosas asambleas llamadas «de la sociedad civil». Unidos por una común desconfianza hacia las autoridades oficiales, todos los participantes se daban por convencidos de que la corrupción y la incompetencia de los poderes públicos sólo podrían aprovecharse de la coyuntura en pro de la satisfacción de los apetitos de los habituales «caciques» y de la preservación de sus intereses clánicos, de tal modo que las aspiraciones a una reconstrucción orientada hacia el bienestar nacional no podrían sino defraudarse una vez más.

Para evitar eso, los miembros de la «sociedad civil» planteaban que, esta vez, la reconstrucción no se debía enfocar con el objetivo de devolver el país a su estado anterior, pero sí, aprovechando la magnitud inaudita del desastre, con la voluntad de *transformarlo* radicalmente. Pareciera que para los elementos más pugnaces de este «movimiento de la sociedad civil», el Mitch fuera algo como *una revolución caída del cielo* (esa misma revolución con la cual ellos habían soñado toda la vida, pero sin jamás poder –y tal vez sin jamás haberlo querido verdaderamente- ponerla en ejecución).

Conscientes de que la dispersión no podía más que debilitar su voluntad de actuar a la vez como un lobby y como ente de control de las acciones del gobierno, la mayoría de los diversos foros de discusión y otras asambleas informales febrilmente constituidas después de la catástrofe, no tardaron en reagruparse en una estructura federativa llamada *Interforos*, con la intención de oponer un frente único a las instituciones del Estado encargadas de enfrentar las consecuencias de la catástrofe, y de canalizar las ayudas extranjeras.

La pertinaz presión de la «sociedad civil» logró que, en la reunión del Grupo consultivo de Estocolmo de mayo de 1999, se impusiera el concepto que la reconstrucción de Honduras no podía enfocarse sin la perspectiva de una «transformación nacional». La declaración final de esta conferencia dictaminó alto y fuerte que el financiamiento internacional de la reconstrucción estaría, en adelante, supeditado a la aplicación de reformas estructurales para;

- mitigar las fragilidades ecológicas de Honduras frente a los riesgos de catástrofes,
- reducir la pobreza de las masas,

- y acelerar decididamente el proceso de transición a la democracia.

Desgraciadamente, como ya tuvimos la oportunidad de mostrarlo,³³ a falta de una instancia de evaluación y de control, esta declaración solemne se quedará sin efectos. En víspera del segundo aniversario de la catástrofe del Mitch, a fines de octubre del 2000, todas las ilusiones al respecto ya se han esfumado. El 30 de ese mes, el editorialista del suplemento económico de *El Heraldo* expresa su desencanto al advertir que la impresión que prevalece es que la ocasión de promover una verdadera transformación en el país ya se perdió. Si en algún momento se pudo esperar que algo positivo resultara de la tragedia del Mitch, como por ejemplo que se produjera un cambio de mentalidad en los hondureños, esa esperanza ya se frustró. Al contrario, prosigue el editorialista, los vicios del pasado demostraron estar tan profundamente arraigados que no hay indicio de que las cosas puedan cambiar a corto o medio plazo. Ni el gobierno, ni la empresa privada, ni la autotitulada «sociedad civil» dan signo de asumir de manera verdaderamente responsable el papel que les corresponde en la situación que vive el país: cada uno está al acecho de las ventajas que se pueden acaparar para beneficio propio, o del grupo al que pertenece. Mientras tanto, sigue aumentando el número de los hondureños que se hunde en la pobreza...

Los últimos en sorprenderse de la situación que describe el periodista de *El Heraldo*, son los representantes de la «sociedad civil organizada», que ven confirmarse los sombríos pronósticos que ellos emitían desde antes del inicio del proceso de reconstrucción, vituperando que éste nunca podría realizarse para beneficio de la nación, mientras su conducción siga dependiendo sólo de la acción del gobierno.

¿Debemos concluir que las precoces advertencias de los órganos de la «sociedad civil», la multiplicación de sus proposiciones alternativas, y la constante vigilancia ejercida sobre el proceso de reconstrucción, quedaron finalmente sin ningún efecto? O acaso ¿podemos considerar que, a falta de esa insistente mirada inquisidora de la «sociedad civil» tanto nacional como internacional, las acciones de la reconstrucción hubieran podido ser aún más lentas, más torpes, más desbaratadas por la corrupción?

En cuanto a los cambios de mentalidad, que el editorialista de *El Heraldo* deplora no poder comprobar a la hora en que escribía, nos parece irrealista suponer que hubieran podido cuajarse, durante la fase más aguda del proceso catastrófico, cuando todas las energías estaban

33 Cf. en ese mismo capítulo: «El opaco misterio de las ayudas financieras», pp. 152-163.

movilizadas para enfrentar las consecuencias más brutales del suceso. No se puede excluir sin embargo que, ya desde aquel momento, los elementos de una mutación estaban subrepticamente a la obra, preparando el florecimiento de nuevas actitudes...

Las entrevistas que llevamos a cabo en el medio popular hondureño ofrecían algunas razones de optar por este optimismo mesurado. De manera inesperada en efecto, se manifestaba entre nuestros interlocutores un extraño ánimo de confortación, en contraste con la gran dificultad de las situaciones que estaban viviendo, a pesar de las frustraciones provocadas por la lentitud y la ineficacia de las acciones de socorro y de reparación. Las causas de este paradójico buen humor radicaban en la feliz sorpresa experimentada por la opinión hondureña frente a la ayuda extranjera. Por muy tardía e inapropiada que fuera ésta -y tal vez en razón misma de su relativa inutilidad- dicha ayuda inspiraba, a la par de la gratitud, un contentamiento conmovido, como producto de una revelación fabulosa: ¡Honduras por fin existía a la vista del mundo!

Para comprender este inesperado regocijo ante la llegada de la ayuda extranjera, hay que recordar cuánto, hasta ese final del siglo XX, la falta de visibilidad de Honduras ante los ojos del mundo tuvo como contraparte la ausencia de visibilidad del país para sus propios ciudadanos. A decir verdad, nada espectacularmente sublime en la historia del país, nada brioso tampoco en el vivir cotidiano, podía dar motivo a la exaltación patrioter. Y tampoco ningún sentimiento de rebeldía jamás había dado señas de formularse contra la mediocridad del papel atribuido a Honduras en la geopolítica continental. Los únicos lazos identificatorios observables en el país siempre habían sido de naturaleza fragmentaria, referidos a solidaridades parceladas: familiares, locales, regionales, o supeditados a la pertenencia a uno de esos dos partidos que, en un libro anterior describí como «etnias políticas». Lo sorprendente en este caso fue que la ocurrencia de un desastre que dejó maltrecho todo lo que este pobre país había logrado hacer de sí mismo, pudiera dar nacimiento a una mutación psicosocial orientada hacia la consolidación de la identidad nacional.

Si el ciclón Fifi de 1974 —de una violencia parecida a la de Mitch— no tuvo efecto parecido, es porque habiendo esencialmente atacado la región norte del país (que en ese entonces todavía tenía figura de enclave extraterritorial), el desastre no había revestido el aspecto de una catástrofe realmente nacional afectando simultáneamente casi toda la extensión del territorio. Por otra parte, en vista de las condiciones de mediatización existentes en la época, y en razón de las divisiones geopolíticas derivadas

de la guerra fría, la ayuda internacional, esencialmente norteamericana, no había tenido ese carácter universal, abigarrado, caótico, multicontinental, y sobre todo políticamente desinteresado, simpático y casi al límite de lo irracional, que iba a revestir, en 1998.

Finalmente, aparece que la ayuda que se aportó a las poblaciones de Honduras fue más de eficacia moral que materialmente útil. Si los que la recibieron se sintieron colmados de consuelo y de un insólito contento, en parte fue porque el carácter tardío de la llegada de los socorros, con su cariz a veces extravagante, permitió que se respetara -sin duda involuntariamente- lo que debería ser el principio rector de toda ayuda humanitaria: *no privar a las poblaciones damnificadas de la satisfacción de demostrarse a sí mismas que son capaces de enfrentar la desgracia sin ayuda de nadie*. Sobre ese orgullo fundamental se injertó en Honduras, después del Mitch, la grata sorpresa de ver acudir desde todos los confines del planeta, amables socorristas que hacían concretamente palpable la existencia de un mundo exterior espontáneamente benévolo, y aportaban la demostración de que una desgracia ocurrida en Honduras era capaz de suscitar un impulso universal de compasión y solidaridad. En Honduras, esta revelación tuvo como efecto dopar la autoestima: a la par que la conmovida gratitud hacia los socorristas, la representación de sí mismos de los socorridos se estaba reforzando en sus propios ojos.

La irrupción de los «humanitarios», generalmente jóvenes, idealistas a veces al límite de la inconsciencia, que se desparramaron hasta en las capas más profundas de la sociedad hondureña, no sólo tuvo el efecto de producir esta bocanada de autoestima. Su presencia más o menos prolongada sobre el terreno, conviviendo con la gente, tuvo también como consecuencia introducir los gérmenes de una renovación inesperada del discurso político. En éste último, la referencia a la «democracia» -que desde hacía dos décadas se había convertido en Honduras en algo mecánicamente ritual, con la sola referencia a procedimientos electorales- de repente se revistió de atractivos novedosos, por el hecho de ligarse con las realidades de la vida cotidiana. En lo sucesivo la definición de la democracia tenderá a asociarse con la preservación del medio ambiente, con las mejoras a aportar al trato de las mujeres y de los niños, y con la práctica de una ciudadanía activa marcada por la voluntad de hacerse escuchar en la toma de las decisiones locales.

Cada vez que esa gente joven y simpática, venida de lejos, evocaba aquellos nuevos horizontes sociopolíticos, lo común es que lo hacían en un español tan vacilante que no siempre se comprendía exactamente el alcance de lo que querían decir. Y aun cuando sus interlocutores hondureños creían captar el significado de las palabras que utilizaban,

inevitablemente las revistían de implicaciones diferentes de las que tenían en mente los que las aportaban. Es así que, por adaptaciones progresivas a la sensibilidad y a los anhelos locales, se estuvo operando una transubstanciación del lenguaje de la «sociedad civil» de los países del Norte, en formulaciones caseras que, si bien es cierto no restituyen exactamente la intención original, por lo menos se mantienen en resonancia con su orientación general. De esta suerte entraron en uso, en las capas modestas de la sociedad hondureña, nuevas expresiones políticas que, a pesar de las aproximaciones acumuladas en el intervalo, recurren a una fraseología más o menos homóloga de la de los intelectuales ciudadanos, cuyo discurso anticonformista también se formuló por mimetismo -aunque sobre un registro diferente- con respecto al lenguaje de la «sociedad civil» del Norte.

Fue así como, de manera rebuscada y confusa, se bosquejó la dinámica de una comunicación política transversal, potencialmente capaz de desembocar en una convergencia entre las aspiraciones del pueblo y las protestas de los intelectuales urbanos. Notemos bien sin embargo que todo eso se estuvo operando a espaldas de éstos últimos, que mientras tanto seguían rabiando ante su incapacidad de forzar las autoridades a tomar en cuenta sus recomendaciones, se indignaban ante la falta de transparencia de las acciones que se están llevando a cabo y se escandalizaban por la negativa que el gobierno oponía a la apertura de un «diálogo sincero, público y debidamente informado» sobre el tema de la reconstrucción.

Desde la «sociedad civil organizada» no dejan en efecto de llover denuncias y protestas:

- los compromisos contraídos en Estocolmo permanecen sin efecto;
- la estrategia de reducción de la pobreza sigue impotente ante el hecho que, según estimaciones de la CEPAL, los 30% más ricos de la población urbana continúan disponiendo de 63.7% de los recursos del país;
- de diciembre de 1998 a junio del 2000, la deuda externa de Honduras se aumentó en 1,200 millones de dólares;
- las reconstrucciones físicas y los programas de asistencia son de una eficacia dudosa y de una durabilidad incierta;
- la inseguridad pública se agrava, y los disturbios sociales se multiplican en todo el país, mientras que por otra parte la seguridad alimenticia se comprueba comprometida. Escaseces de alimentos se han declarado en ciertas regiones apartadas, especialmente en las donde predominan las poblaciones indígenas (la Mosquitia, la región de los Tawahkas, la Montaña de la Flor);

- en vez de abrirse a la concertación, el Estado se aprovechó de los sucesos para reforzar el carácter piramidal de su estructura de decisión, sin definir con claridad el diseño de un proyecto nacional;

- actuando con perezosa lentitud, el Congreso retrasa hasta no se sabe cuándo la adopción de medidas legislativas tan indispensables como:

- la reforma del sistema judicial;
- una legislación sobre el agua y los sistemas de saneamiento ambiental;
- la administración del territorio y la conservación de los bosques;
- la reglamentación de la producción eléctrica;
- el establecimiento de un servicio civil;
- la reforma de los bancos, del sistema de pensiones, de la seguridad social...

Sin embargo, las esferas gubernamentales no prestan más que una atención distraída a esta avalancha de recriminaciones. Mejor dicho, no les hacen caso.

Para justificar su sordera ante los clamores que protestan contra la omnipresencia del sectarismo partidario, la falta de seguridad jurídica, el desgaste del modelo electoral, la absurda politización de la administración pública y la paralización de todo progreso hacia una democracia más participativa, las instancias del gobierno disponen de una réplica contundente: ¿De qué representatividad puede valerse esta «sociedad civil organizada», solamente compuesta de protestadores egocéntricos, autodesignados y desprovistos de cualquier legitimidad otorgada por el sufragio universal?

Al acercarse el año electoral 2000, esas querellas entre el gobierno y la «sociedad civil» van a verse relegadas a un segundo plano por la lucha que se está entablando por la conquista del poder político. El tema del Mitch ya parece definido: la Reconstrucción avanza dando tumbos, y la Transformación sencillamente no se hará. El bullicio revoltoso de la «sociedad civil» no habrá servido para nada. De cierta manera, es normal: desde el principio se veía claramente que la llamada «sociedad civil» no ambicionaba más que invadir el campo de incumbencia de la esfera política, con el fin de infiltrarse en ella y de substituir a los que la manejaban. No había por qué esperar que los poderosos del momento accedieran inocentemente a una oferta de «concertación» que sólo apuntaba a despojarlos del poder que tenían. En buena lógica, tenían que ganar los que tenían la sartén por el mango.

No obstante, no podemos dejar de tomar en cuenta el encaminamiento subterráneo, todavía casi imperceptible, de una articulación entre las aspiraciones de la clase popular y la retórica corrosiva de los intelectuales contestatarios. Volviéndose manifiesta, esta convergencia conferiría a la

lucha que se está entablando por la conquista del poder político. El tema del Mitch ya parece definido: la Reconstrucción avanza dando tumbos, y la Transformación sencillamente no se hará. El bullicio revoltoso de la <<sociedad civil>> no habrá servido para nada. De cierta manera, es normal: desde el principio se veía claramente que la llamada <<sociedad civil>> no ambicionaba más que invadir el campo de incumbencia de la esfera política, con el fin de infiltrarse en ella y de substituir a los que la manejaban. No había por qué esperar que los poderosos del momento accedieran inocentemente a una oferta de <<concertación>> que sólo apuntaba a despojarlos del poder que tenían. En buena lógica, tenían que ganar los que tenían el sartén por el mango.

No obstante, no podemos dejar de tomar en cuenta el encaminamiento subterráneo, todavía casi imperceptible, de una articulación entre las aspiraciones de la clase popular y la retórica corrosiva de los intelectuales contestarios. Volviéndose manifiesta, esta convergencia conferiría a la <<sociedad civil organizada>> una representatividad por ahora inexistente, dándole por el hecho mismo una autoridad suficiente para mantener a raya la arrogancia de las facciones políticas tradicionales y hasta ponerlas a la defensiva. La aparición de ese fenómeno será el tema de nuestro último capítulo. Previamente a eso, para terminar de hacer el inventario del estado en el que se encuentra Honduras después del Mitch, nos queda poner en claro las grandes mutaciones sociológicas que, a partir de la catástrofe y parcialmente a consecuencia de ésta, se afirmaron en la Honduras contemporánea.

Capítulo 5

CONSECUENCIAS SOCIOLOGICAS: UNA DESALENTADORA GENERALIZACIÓN DE POBLACIONES “EN ELAIRE”

Tierra tradicionalmente de minería ecléctica, de ganadería y de vagabundaje, la Honduras moderna nació, en las postrimerías del siglo XIX, como república minera. Luego, en el siglo XX, se iba a convertir en el arquetipo de una república bananera.

Ya pertenecen al pasado aquellas mutaciones que, mediante concesiones a empresas extranjeras, entrañaban la valorización de vastas partes del territorio nacional. Se acompañaban con la aparición de novedosas formas de trabajo que, suscitando profundas transformaciones de la vida cotidiana, resultaban muy atractivas para las poblaciones lugareñas -y tal vez más todavía para aquellas que, seducidas por las perspectivas que se les ofrecían, venían a unirseles. Cada una de esas fases históricas aportó su contribución a la formación del paisaje nacional, impulsando el desarrollo de sus principales ciudades. Es así que Tegucigalpa se benefició de la actividad minera y San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba del auge de la producción bananera. Es de temer que el presente deje de producir aquellos efectos positivos.

Hoy, la impresión que prevalece ya no es que uno se encontraría en víspera de algún nuevo «boom» llamado a favorecer la modernización de tal o cual parte del territorio nacional, sino más bien que los segmentos sociales que las circunstancias actuales ponen en movimiento ya no pueden asentarse en ningún lugar, viéndose condenados a quedarse para siempre «en el aire», sin sostén en el suelo,¹ a la imagen de esas formas de agricultura en invernaderos donde las plantas ya no crecen en tierra sino en algún tipo de soporte artificial. Siendo además todo este aparato tecno-productivo expuesto a ser trasladado, de un día a otro, sin siquiera dejar una verdadera cicatriz en el paisaje.

Lo que la Honduras de ahora se ve inducida a poner a disposición de la economía globalizada, ya no es tal o cual parte de su territorio (con las

¹ El autor desarrolla una metáfora con los cultivos hidropónicos, que en francés se designan como *cultures en hors-sol* («cultivos fuera de suelo»).

poblaciones que allí viven, o con las atraídas por la perspectiva de aprovecharse de algunas migajas de la aventura productiva a desarrollarse), sino solamente algunos fragmentos de su sociedad, condenados a una irremediable precariedad y a un desarraigamiento perpetuo, a merced de los tipos de actividades que la nueva división internacional del trabajo todavía consiente en concederles.

Esas poblaciones «con los pies en el aire» se reparten en dos categorías:

- la abundante mano de obra, principalmente femenina, de las maquiladoras que, en su mayoría, procede de migraciones internas;
- y la no menos abundante fracción de la población hondureña que ya optó por la emigración hacia los Estados Unidos.

Ni los unos ni los otros parecen llamados a reimplantarse de manera permanente sobre el suelo hondureño, pareciendo además la primera categoría no tener más opción que la de convertirse tarde o temprano en parte de la segunda.

Por ahora, son estos segmentos desarraigados de la sociedad hondureña los que contribuyen a asegurar a Honduras la apariencia de una viabilidad económica. Pero resulta pavoroso comprobar que la participación de esas dos categorías en la sobrevivencia nacional no presenta ninguna garantía de durabilidad sino, en el mejor de los casos, de una manera ineluctablemente decreciente.

Del banano a las industrias de ensamblaje

En el transcurso de la primera mitad del siglo XX, la explotación bananera tuvo como principal efecto el permitir incorporar la región litoral del Caribe al espacio nacional y estimular el dinámico crecimiento de San Pedro Sula, ahora convertida en la segunda ciudad del país. Las bananeras también ofrecieron a la historia social del país su acontecimiento emblemático: la gran huelga del 1954, durante la cual los trabajadores de las plantaciones mantuvieron en jaque, durante 66 días, a la poderosa United Fruit Co., llevándola finalmente a ceder (o por lo menos a simular ceder) ante los reclamos de sus empleados hondureños.²

2 Para interpretar correctamente el desarrollo y las consecuencias de la huelga del 54, se debe tener en cuenta que en aquel momento la posición de la United Fruit se encontraba debilitada por estar confrontada, en los Estados Unidos, a acciones judiciales en su contra, por motivo de infracciones a la legislación anti-trust. Para un análisis más completo del contexto de la época y de las consecuencias de esta gran huelga de 1954, ver nuestra obra: *Honduras. Difícil emergencia de un Estado, de una Nación*, pp. 254-259.

Cimentada por este episodio heroico, que desde entonces adquirió una dimensión cuasi mítica, la tradición de un sindicalismo popular poderosamente estructurado permaneció en Honduras, de una forma mucho más tenaz que en la mayoría de los demás países de la región. La implantación prioritaria de ese sindicalismo siempre permaneció concentrada en el campo bananero, aunque este sector de producción se hallaba sometido —y esto desde antes del 1954— a un ineluctable proceso de decadencia. De hecho, se ha visto a Honduras deslizarse del primero al segundo, y de allí al tercer lugar en el ranking de los productores mundiales de bananos (superada sucesivamente por Ecuador y por Costa Rica), a la par que la importancia relativa de la producción bananera en las exportaciones nacionales no cesaba también de declinar, viéndose superadas por el café.

Sin embargo, en los momentos que preceden inmediatamente al huracán Mitch, a pesar de estar confrontada a la intransigencia de las multinacionales que controlan la comercialización del banano, y de las medidas proteccionistas tomadas por Europa a fin de favorecer los productores de las Antillas y del África, la posición del sector bananero en Honduras parecía, todavía, inexpugnable. En un estudio redactado en víspera del huracán Mitch, nosotros mismos opinábamos que, en la misma medida que el café, el banano seguía siendo «un inamovible cultivo de exportación», aun cuando ambos ya eran objeto de competencia por parte de los cultivos «no tradicionales» (melones y camarones principalmente) y por las maquiladoras. Sumando sus ingresos, aquellos nuevos sectores ya habían reducido al banano y al café a un poco más del 40% del total de las exportaciones nacionales (19.7% y 21.6% respectivamente).³

En aquel momento, nadie podía predecir que, al año siguiente, más del 80% de las plantaciones bananeras de Honduras serían destruidas por las inundaciones, llevando al desempleo a la casi totalidad de los trabajadores del sector. Si bien es cierto que una parte de ellos será prontamente recontratada, sólo fue para tareas de mantenimiento y de reparación de las instalaciones, y no para reiniciar la producción. (Ésta sólo se reanudará bastante más tarde, y de manera parcial, pues algunas superficies no serán rehabilitadas o se verán dedicadas a cultivos diversificados: caña de azúcar, palma africana, piñas, cítricos, etc.).

Consecuentemente a eso, iba a ocurrir, en el 2001, que Honduras, antiguo líder mundial en materia de producción bananera, ¡estaría importando bananos! El público hondureño recibió con estupefacción la noticia de que hileras de camiones introducían discretamente, por la frontera con Guatemala, bananos

³ Cf: *Honduras: de un liberalismo a otro*. Tegucigalpa, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Boletín Especial n° 82, Mayo del 1999, p. 13.

cosechados en las plantaciones rápida y eficazmente restauradas en ese vecino país, y esto no solamente para enfrentar las necesidades del consumo corriente, sino con el fin de mantener en actividad a las plantas de tratamiento y embalaje de San Pedro Sula.⁴ Fue sólo a partir del año siguiente que Honduras volvería a alcanzar niveles aceptables de producción bananera, aunque siempre muy por debajo de lo que habían sido en épocas anteriores.

Las razones de esta profunda crisis del sector bananero radican en el hecho de que, tomando en cuenta el monto de los salarios y de los beneficios sociales, el precio de coste de los bananos hondureños dejó de poder competir con los bananos producidos de manera «desregulada» en otros países y, principalmente, en el Ecuador, donde el nivel de los salarios es muy bajo y la organización de sindicatos prácticamente prohibida.⁵ En esas circunstancias, una buena parte de los trabajadores hondureños del sector bananero jamás volverán al empleo: las mismas compañías están ofreciendo ventajosos préstamos a sus antiguos asalariados... ¡para que vayan a reintegrarse en la agricultura campesina tradicional!

Inútil es decir que, a pesar de la inquietud manifestada por numerosas ONG, principalmente escandinavas, era inevitable que, privándolos de cotizantes, el deterioro de las bananeras acarrearía el derrumbe de los sindicatos. Actualmente, la tasa de sindicalización entre los productores independientes no alcanza el 5%. En cambio, enorgulleciéndose de enarbolar la bandera de un gran país democrático, la Chiquita y la Dole (las dos más grandes multinacionales disfrazadas localmente bajo los apellidos de

4 Cf. Luis COSENZA JIMÉNEZ: "Importaciones de bananos", en: *El Heraldo* del 2 de abril del 2001; y Manuel ACOSTA BONILLA: "¡Importadores de banano!", in: *El Heraldo* del 31 de mayo del 2001.

5 En unas entrevistas realizadas en el 2001 y el 2002, en La Lima, con Justo Pastor Reyes y Germán Zepeda, dirigentes de la COSIBAH (Coordinadora de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales de Honduras), éstos me plantearon que era entonces posible comprar en Puerto Cortés, al precio de 3.50 \$ por caja, bananos que habían sido pagados entre 1.80 y 2.00 \$ al productor ecuatoriano. Al mismo momento, el precio de esta misma caja de bananos se negociaba entre 4.75 y 5.00 \$ en Honduras. Esta diferencia de precios se daba fundamentalmente por el hecho de que los jornales de los trabajadores hondureños ascendían a entre 8.00 y 10.00\$, cuando apenas alcanzaban 1.50 \$ en Ecuador, país en el cual Germán Zepeda señalaba que sólo estaban sindicalizados –en tres sindicatos diferentes– 600 trabajadores bananeros, de un total de 180,000 que contaba entonces Ecuador... En ese mismo momento, se mantenían en actividad menos de 10,000 trabajadores del banano en Honduras.

Tela Rail Road Company y de Standard Fruit), se someten a la obligación de que sus trabajadores (ahora los pocos que ellas siguen empleando en actividades extremadamente reducidas), estén sindicalizados en un 100%; sus cotizaciones se descuentan en las planillas. ¿Pero de qué real margen de negociación disponen organizaciones sindicales cuyo financiamiento se asegura de ese modo?

Los líderes sindicalistas que entrevistamos en el curso de nuestras encuestas no se ilusionan al respecto, observando con amargura que lo que subsiste ahora del sector bananero hondureño se encuentra en vía de «maquilización» acelerada. De hecho, se reproduce en él lo que es habitual en el sector de la maquila donde, como lo mostraremos más adelante, sin que esto esté explícitamente prohibido, resulta imposible formar sindicatos. Confirma el desencanto de los sindicalistas bananeros el deber constatar que, a pesar de un ligero repunte de la producción bananera, todo indica que, como consecuencia de las opciones adoptadas después del Mitch en la reconstrucción de las infraestructuras, la maquila definitivamente suplantó a la antigua base agrícola como eje vital de la economía nacional.

Esto acarrió una mutación radical de la categoría emblemática de la clase obrera hondureña. Tradicionalmente, los rasgos que la identificaban eran: ser del sector agrícola, masculina, adulta y adepta al sindicalismo. Ahora sus características devinieron: ser del sector industrial, juvenil, masivamente femenina, absolutamente precario y flexible, y en donde los modos de solidaridad y organización, cuando todavía logran expresarse, ya no son de naturaleza sindical. Dicha mutación, cuyos efectos a largo plazo no pueden dejar de revelarse importantes, figura entre las consecuencias más espectaculares y decisivas que el Mitch introdujo en la ecología social y política de Honduras.

La república de las maquiladoras

El concepto de maquila no es una novedad. No podía dejar de surgir en un mundo en el que el Norte está poblado de consumidores ávidos de productos siempre más numerosos, de obsolescencia siempre más rápida y de precios siempre más cómodos, mientras que el Sur desborda de míseros mantenidos al límite de la supervivencia. Para complacer a los primeros, la presión es muy fuerte para bajar el coste de las materias primas que provienen de los segundos. Sólo en caso de guerras mundiales las materias primas producidas en los países del Sur pueden ser motivo de riqueza. Ahora bien, desde 1945, no hay más guerras mundiales, pero sí una

subida continua de la prosperidad en el Norte, donde la voracidad consumidora crece de manera exponencial.

Para satisfacer este crecimiento, de pronto la presión para mantener los precios bajos de las materias primas no fue suficiente. Para sostener los precios bajos de los artículos ofrecidos a los consumidores, hace falta intervenir también sobre los costes de producción. Ahora bien, éstos no se pueden comprimir en el Norte, en donde no es posible bajar los salarios, ni tampoco los impuestos y otros gravámenes que pesan sobre las empresas, sin automáticamente comprometer el poder de compra y la sostenibilidad de las protecciones sociales de la misma población a la cual se destinan los bienes de consumo.

Sabiendo además que la mecanización favorece la fragmentación de los procesos de producción en etapas simples e independientes y que la rapidez de los transportes internacionales crece al mismo ritmo que su valor de compra no deja de declinar, viene espontáneamente a la mente que deslocalizar una parte de la producción es realmente la solución. Sobre todo si se trata de tareas arduas y/o peligrosas, y que no requieren capacidades sofisticadas por parte de los trabajadores. Estas últimas formas de trabajo se reservan para el Norte, donde se las puede remunerar tanto más generosamente que el coste del trabajo tosco exportado hacia el Sur se habrá reducido al mínimo.

Por el lado de los países del Sur, particularmente en América latina, el proyecto de adherirse al movimiento hacia la modernidad aprovechando el producto de la venta de sus materias primas para promocionar, al amparo de sus fronteras, industrias sustitutivas de las importaciones (ISI), e intentar acceder, de esta manera proteccionista, a un desarrollo autónomo, fracasó por la estrechez y la falta de solvencia de sus mercados internos y por la calidad generalmente mediocre de la producción de las ISI. Luego, la trampa se cerró: al salir de la Guerra fría, forzados a renunciar al espejismo de un desarrollo nacional autónomo, estos países no tuvieron más opción para ubicarse en el mercado mundial que la de negociar sobre éste lo que se ha tomado en costumbre de llamar sus *ventajas comparativas*.

En la medida en que, evidentemente, la demanda del Norte condiciona la oferta del Sur, dichas ventajas comparativas consisten esencialmente en poner a disposición de las industrias cuya producción se destina a los mercados del Norte:

- una mano de obra barata, y tanto más dócil que numerosa y, por tanto, fácilmente sustituible;
- una gran flexibilidad en cuanto a imposiciones legales y administrativas;
- y una exención general de toda clase de impuestos.

De ese modo se puede reducir al mínimo las cargas que pesan sobre los empresas.

Los que el discurso local califica de «inversionistas de la maquila» sólo son inversionistas en un sentido muy restrictivo de la palabra. En efecto, para mantener a sus socios hondureños bajo la presión de la competencia con otros países del Sur, sólo se afincan en el país mediante instalaciones ligeras y fácilmente desarmables, para poder trasladarlas de un día para el otro, hacia cualquier otro país capaz de ofrecer mayores «ventajas comparativas». Con esta manera de actuar, las empresas de la maquila se merecieron el sobrenombre de *industrias golondrinas*: anuncian la primavera cuando llegan, pero no vacilan en alzar el vuelo hacia otro sitio cuando se dan cuenta de que el clima se está poniendo menos favorable para ellas.

Abrir una maquila es la cosa más simple del mundo. Basta que baje del avión algún *empresario de maletín*, portador del número adecuado de miles de dólares para negociar el alquiler de una determinada superficie en uno de esos vastos galpones que el capital local ha edificado en espacios cerrados, totalmente desprovistos de habitantes permanentes, eficazmente protegidos por un cerco infranqueable, y provistos de todos los servicios necesarios (vías de acceso, agua, electricidad, teléfono, etc.). Encontrado esto, solo faltará al mencionado empresario negociar con las autoridades locales las modalidades mediante las cuales se podrá instalar en esos galpones algún material liviano,⁶ y reclutar la mano de obra necesaria para hacer funcionar un taller de ensamblaje de piezas semi-terminadas, importadas con franquicia dentro de contenedores sellados. Después de habérseles añadido una o más operaciones para avanzar hacia su estado final, esos productos serán reexportados, nuevamente en contenedores sellados, eventualmente hacia talleres de otros países si se trata de productos semi-terminados, o empacados y remitidos hacia los mercados de consumo si el proceso de fabricación ha sido llevado hasta su etapa final.

Empresas con tales características se implantaron primero, a partir de los años 60, en México, cerca de la frontera norteamericana. A las consideraciones expuestas más arriba, se agregaba la esperanza de que las maquilas pudieran frenar el movimiento migratorio de los mexicanos hacia los Estados Unidos. A partir de 1965, algunas se instalaron en Nicaragua bajo el régimen de Somoza. Honduras tardó hasta el año 1976 para tratar de meterse en esa clase de negocios, cuando el gobierno del general Melgar promulgó una ley eximiendo de impuestos (de aduana, sobre la renta, etc.) a las empresas industriales y comerciales, tanto nacionales como extranjeras, que vendrían a implantarse en la Zona Libre de Puerto Cortés, creada con esa intención. Una revisión de esa ley, en 1979, extendió el concepto de «zona libre» a los municipios de Amapala, Tela, Omoa, Choloma y La Ceiba.

6 En la maquila textil, la única prácticamente que existe en Honduras, se trata fundamentalmente de máquinas de coser, planchadoras, botoneras, etc.

Dichas leyes surtieron pocos efectos hasta que, el 20 de diciembre de 1984, al final de su administración, el presidente Suazo promulgó una ley referente al «régimen de importación temporal». Al presidente Azcona, sucesor del presidente Suazo, le correspondió reglamentar dicha ley con mayor precisión. También fue bajo la administración de Azcona que el Congreso Nacional aprobó, en 1987, la ley que estableció las «zonas industriales de elaboración para la exportación», localmente conocidas bajo la sigla de ZIP (Zonas Industriales de Procesamiento). Contrariamente a las «zonas libres» que las leyes de 1976 y 1979 mantenían bajo el control del Estado, las ZIP son de propiedad y administración privadas. En eso reside, indudablemente, el factor que permitió su expansión.

A partir de 1990, la maquila proporcionó trabajo a más de 9,000 personas en Honduras. Y el movimiento siguió en constante expansión hasta 1998, en víspera del Mitch:

1990:	9,030 empleos
1991:	20,121 empleos
1992:	27,217 empleos
1993:	33,331 empleos
1994:	42,541 empleos
1995:	54,995 empleos
1996:	65,950 empleos
1997:	83,464 empleos
1998:	102,675 empleos

A ese número de empleos directos (de operarios, manipuladores, empaques, controladores de calidad, personal de mando medio, etc.) que se ofrecían en 1998 en unas 180 empresas repartidas en 14 parques industriales, deben sumarse, si acreditamos las estimaciones de la Asociación Hondureña de los Empresarios de la Maquila, algunos 500,000 empleos indirectos en el sector del comercio y de los servicios. Es decir: un indispensable balón de oxígeno para este país, otrora esencialmente rural y ahora desolado por un desempleo angustiante.

Por lo tanto, ¿Fue el impacto de la maquila sobre la economía nacional tan beneficioso para el país como lo proclaman sus turiferarios? No hay duda que el monto de las exportaciones aumentó espectacularmente, permitiendo a Honduras enorgullecerse de haberse convertido, a partir de 1995, en el primer exportador de prendas de vestir de Centroamérica y uno de los treinta primeros a nivel mundial.⁷ Conviene sin embargo guardar en

⁷ La mayor parte de las de prendas de vestir exportadas por Honduras va dirigida hacia los Estados Unidos (81.2% en 1995). En cambio, las importaciones de piezas provenientes de Honduras sólo representaban en 1990 el 0.49% del total de la ropa

memoria que el 80% de esas exportaciones consiste en reexportaciones de insumos ensamblados en el país, sin utilizar ninguna materia prima local. Es la diferencia entre el valor de los productos importados y su valor como reexportación que constituye el valor agregado a su paso por el país.

Sabiendo que no hay cobro de impuestos sobre la renta ni sobre las transferencias financieras y que hay una desgravación completa de los derechos de aduana y de impuestos locales, el aporte de esa clase de empresas a la economía del país se resume:

- al pago del alquiler de los locales en los parques industriales,
- al monto de los salarios devengados por los trabajadores (que equivalen el 60% del valor agregado);
- y al pago, frecuentemente con tarifas preferenciales, de diversos servicios como agua, electricidad, teléfonos y transportes.

Constituida de esta manera, la contribución de la maquila a la balanza de pagos se elevó en 1998, según datos del Banco Central de Honduras, a 436 millones de dólares, o sea aproximadamente el doble de lo que había sido dos años antes, en 1996 (219.4 millones de dólares).

El crecimiento del sector de la maquila fue poco o nada afectado por la catástrofe del Mitch. Las razones de ello son muy evidentes. La ligereza de los equipos, fáciles de poner en seguro para salvarlos de la inundación y la poquísima cantidad de las mercaderías almacenadas hicieron que las empresas sólo sufrieron pérdidas mínimas. La reparación de los daños ocurridos en las infraestructuras correspondieron más bien a los poderes públicos, que se vieron obligados a apresurarse a rehabilitar las externalidades (carreteras, puertos, aeropuertos, equipos urbanos, centros comerciales, bancos, etc.) de las que la industria de la maquila se beneficia... sin soltar un solo centavo. En particular, se pudo ver con qué prisa el gobierno se dedicó a rehabilitar el eje vial que une las maquiladoras con las instalaciones portuarias de Puerto Cortés.⁸

importada por los Estados Unidos. En 1997, ese porcentaje se había elevado al 3.78%. Ese mismo año en Honduras, las reexportaciones de la maquila representaban el 61.1% del total de las exportaciones. En esa misma fecha, la mayor parte (36%) de los capitales extranjeros invertidos en la maquila hondureña eran de origen estadounidense, siendo los demás inversionistas extranjeros, por orden de importancia: coreanos (21%); asiáticos, principalmente taiwaneses (10%); y otros no asiáticos (1%). El resto de los capitales invertidos (32%) eran hondureños.

⁸ Los muelles de Puerto Cortés están en capacidad de recibir simultáneamente hasta 10 barcos, y de asegurar 48 movimientos de contenedores por hora (contra 12 en Puerto Barrios, el vecino puerto guatemalteco), o sea con la posibilidad teórica de manejar hasta 450,000 contenedores/año. Inicialmente desarrolladas en función del sector bananero, esas instalaciones portuarias (que son las más importantes de

Las reparaciones fueron de tal calidad que la red de carreteras principales es ahora considerablemente mejor que lo que jamás fuera en el pasado.

Apuntado a reducir al mínimo la suspensión de las actividades de las industrias de ensamblaje, el apresuramiento puesto por las autoridades en reparar las infraestructuras indispensables para el funcionamiento de las maquiladoras fue recompensado por la continuación de su crecimiento:

- en cuanto al número de empleos directos (120,000 en 1999 y 126,000 en el año 2000);

- y en cuanto al monto del valor agregado de las mercaderías al término de su paso por el país (551.8 millones de dólares en 1999, y 662 millones de dólares en el año 2000).

En ese mismo lapso la agricultura, que todavía ocupa el 60% de la población activa, vió su participación en el PIB de Honduras reducirse del 23% en 1997 al 13.7% en el año 2000. El abandono del modelo agro-exportador a favor de la estimulación de las exportaciones manufactureras por una vigorosa promoción de los talleres *off-shore* constituye una de las mutaciones más radicales que resultaron del huracán Mitch en Honduras. Esto tuvo como corolario un cambio radical del tipo de empresas multinacionales que orienta la vida económica y social del país: al modelo otrora ilustrado por la Standard y la United Fruit se ha substituido el de empresas al estilo Nike o Reebok. Y la vieja república bananera se ha convertido en la república de las maquiladoras.

Unas condiciones de trabajo muy duras, para una mano de obra esencialmente femenina

Afligida por altos niveles de pobreza y por una tasa de desempleo estimada en 55% de la población activa, la mano de obra hondureña presentaba, a principios de los años 90, todos los atractivos requeridos por las industrias *off-shore*. Por otra parte, el pasado histórico reciente del país, mucho menos políticamente turbulento que sus vecinos guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses (en parte como resultado de una mayor habilidad de la clase dirigente hondureña para conformarse con el hegemonismo estadounidense y con los intereses extranjeros en general), parecía constituir

Centroamérica) jugaron un rol capital en el desarrollo de las maquiladoras. Si por ellas sólo transitan un poco más de la mitad del total de las exportaciones hondureñas (incluidos el café y el banano), en cambio el 95% de los productos de la maquila entran (y vuelen a salir) por Puerto Cortés.

otro factor de atracción para los candidatos-inversionistas, generalmente desconfiados ante los riesgos de inestabilidad política y de posibles confrontaciones sociales y sindicales.

En esos aspectos, Honduras parecía ofrecer las mejores garantías: no solamente su gobierno se encontraba dispuesto a satisfacer el criterio de base que consiste en reducir al mínimo las cargas fiscales para las industrias de ensamblaje; además se podía presagiar que mostraría la misma flexibilidad para que los empresarios pudieran gozar de todas las facilidades que ofrecen las infraestructuras y equipos públicos del país con pocas reservas en cuanto al respeto del medio ambiente, sabiendo cerrar los ojos frente a los eventuales abusos y estragos en esa materia.

En cuanto a la paz social, ésta parecía fluir automáticamente desde la composición misma de la clase laboral prometida a las maquiladoras. Además de ser la menos cara del mundo occidental, tiene por particularidad la de ser *masivamente femenina* (la tasa de feminización, que se elevaba al 80% en 1990, disminuyó ligeramente desde esa fecha para situarse ahora aproximadamente en el 70%). Esta fuerte sobrerrepresentación de la mano de obra femenina constituye una novedad importante en Honduras, donde anteriormente el trabajo asalariado era privilegio masculino (con la sola excepción del trabajo doméstico, que más atañe a relaciones paternalistas y clientelistas que al asalariado propiamente dicho).

La razón fundamental de esta extrema feminización del trabajo en las *maquiladoras* reside en que en Honduras, con muy raras excepciones, las fábricas son del sector textil. Por lo tanto necesitan habilidades (principalmente en materia de costura y de planchado)⁹ que tradicionalmente pertenecen a las mujeres. Esas mismas tareas, a la inversa, resultan muy poco atractivas, por no decir repulsivas, para la mayoría de los hombres. De modo que el reclutamiento de mujeres era casi automático para todo lo referente a la producción. En otras tareas (manutención, embalaje, mecánica, control visual de la calidad, administración, etc.) se reclutaron empleados masculinos,

⁹ Una de las tareas más insólitas que pudimos observar en una *maquiladora* hondureña fue el coser etiquetas con la mención *Made in USA* sobre un *stock* de camisetas cuya elaboración se había concluido allí. Se puede suponer que aquellas etiquetas se referían al origen de la materia prima.

reequilibrándose así, hasta cierto punto, la distribución del empleo entre ambos sexos.

Varios analistas emitieron el concepto de que la intensa feminización del personal de las maquiladoras resulta de la intención de privilegiar sistemáticamente el reclutamiento de una mano de obra más «dócil». Esta hipótesis responde a la creencia de que :

– las mujeres acostumbran tradicionalmente doblegarse a la autoridad de los hombres (y especialmente en «países del Sur» como Honduras donde, de hecho, hasta ahora, la retórica feminista sólo hizo pocas adeptas y únicamente entre las intelectuales de la burguesía acomodada);

– y que la mano de obra femenina, en razón de su aparición tardía en el escenario salarial, no puede ser heredera de la belicosidad sindical desarrollada desde mucho tiempo por los trabajadores masculinos de las bananeras.

Obviamente, tal razonamiento procede de prejuicios trasnochados. En efecto:

– tal como y lo señalamos anteriormente, el reclutamiento casi exclusivo de mujeres en la manufactura textil responde, antes que todo, al hecho de que ellas son hábiles en trabajos manuales que los hombres no quieren aceptar;

– y, en cuanto a la supuesta «docilidad» de las trabajadoras, el conjunto de las medidas que condicionan el acceso al empleo y la posibilidad de conservarlo en las maquiladoras hondureñas pone en evidencia que esta docilidad no es «genérica» ni «cultural», pero sí resulta de la práctica sistemática de una serie de abusos y coerciones.

Al respecto, hay que resaltar que, al momento de hacerse contratar en las maquiladoras, era común que las mujeres debieran certificar que no estaban encinta. La entrega de su contrato de trabajo se supeditaba a la firma de una carta de renuncia con la fecha en blanco, que automáticamente se exhibiría a la firmante en el caso de que ella se embarace. Además, se solía imponer a las trabajadoras análisis periódicos de orina, para verificar que no disimulaban un estado de gravidez (lo que podría obligar a la empresa a concederles permisos de maternidad y, previamente a esto, el goce de un aliviamiento de sus condiciones de trabajo, conforme a las leyes nacionales).

Es la intensa competencia para conseguir empleo la que, al momento de hacerse contratar, lleva a las mujeres a una docilidad sin límites, hasta el punto de aceptar cualquier tipo de imposición, sin importarles que esto infrinja las leyes del país. Por ejemplo:

– era frecuente que, a manera de garantía, las trabajadoras fuesen obligadas a dejar su primer salario semanal en depósito en las cajas de la empresa;

- sus eventuales días de ausencia por enfermedad no serían remunerados, y por un solo día de ausencia en la semana automáticamente se les anularía el pago del séptimo día;

- en fin, también era común que la carta de renuncia cuya firma se exigía de la trabajadora a la hora de ser contratada, simplemente sirva para despedirla justo antes del vencimiento del plazo que les abriría el derecho al pago de vacaciones, a un aumento por antigüedad, o a cualquier otro beneficio legal.

A esos procedimientos destinados a evadir obligaciones derivadas del Código Laboral hondureño, se añaden condiciones laborales extremadamente penosas:

- los horarios de trabajo son de 9 horas por día, generalmente comprendidas entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, con una pausa de una hora para el almuerzo;

- a esas 50 horas de trabajo semanales (siendo normalmente libre el sábado por la tarde), se suman, según las circunstancias y por decisión soberana de la empresa, un número indeterminado de horas adicionales, las cuales son absolutamente obligatorias y sólo darán lugar a remuneración si las normas de producción son sobrepasadas.

En cerca del 90% de los casos en efecto, la remuneraciones son por la tarea realizada y con fuertes exigencias en materia de ritmo de trabajo. El procesamiento de 800 a 900 piezas diarias es una meta corrientemente impuesta, lo que implica, para cada trabajadora, teniendo en cuenta las inevitables pausas, un ritmo de 3 a 4 piezas por minuto.

Además, se impone a las trabajadoras una exigencia retóricamente expresada en términos de «cultura del cero defecto». Este requisito se impone a equipos generalmente compuestos de 8 obreras, colectivamente responsables de la calidad irreprochable del trabajo producido. Esta diabólica organización del trabajo hace que la presión de la empresa se incorpore en el seno mismo de las ejecutantes, inducidas a vigilarse las unas a las otras, puesto que la calidad general del trabajo del equipo (y por lo tanto el monto de su remuneración) sufre a causa del rendimiento de las trabajadoras más débiles e inexpertas. A consecuencia de esto, es frecuente ver a éstas últimas esforzarse desesperadamente por escapar a las recriminaciones de sus compañeras, llegando a la fábrica más temprano o saliendo más tarde, prestando de esa manera unas horas de trabajo gratis, con el único fin de poner su rendimiento al nivel de sus colegas más hábiles. Esta constante presión interpersonal lleva a las trabajadoras a niveles muy elevados de estrés, de modo que no es raro que esto las conduzca a la depresión pura y simple. Es así que el malestar psicológico viene a sumarse a las penalidades físicas del trabajo femenino en la maquila textil hondureña.

Cuando se visita este tipo de talleres, lo que más impresiona, aparte del ruido lancinante de las máquinas de coser y la cruda iluminación que dispensan los neones, es la permanente neblina de fibras textiles que satura el ambiente. Impregnado de los colorantes químicos imprimidos en las telas, ese *tamo* irrita los ojos y la garganta, provocando conjuntivitis y alergias respiratorias. Cuando sucede que se encuentran instaladas unas aspiradoras gigantes que se empeñan en evacuar aquel irritante polvo, el mugido que produce su arranque aumenta más aún el nivel del ruido ambiente. Un mismo dilema ocurre con la temperatura: si bien es cierto que, en ausencia de aire acondicionado, el calor que reina en los talleres es asfixiante, la climatización, al poner el aire agresivamente frío, no es más apreciada por las obreras. Raramente se encuentra el punto ideal entre esos dos inconvenientes. En tales condiciones, no es sorprendente que las obreras salen de su trabajo tosiendo, con los ojos irritados y atolondradas por el ruido que han soportado durante todo el día, a la vez que agotadas por la intensidad del esfuerzo visual, aquejadas de fuertes dolores de cabeza.

Aquel desolador cuadro de lo penoso del trabajo en las maquiladoras se agrava al observar que el aspecto ergonómico deja mucho que desear. Algunas tareas obligan a permanecer de pie gran parte del tiempo. Otras actividades se realizan sentados, pero en asientos muy poco confortables por no estar específicamente concebidos para la tarea en cuestión. En todos los casos, mantener el cuerpo todo el día en la misma posición produce una fatiga considerable, que al final de la jornada se traduce en dolores musculares y, a largo término, en la aparición de males permanentes (artritis, reumatismos, ciáticas, etc.) que se suman a todas las patologías ligadas con las condiciones de trabajo que ya mencionamos más arriba: alergias, cefaleas, depresiones nerviosas, conjuntivitis, alteración prematura de la agudeza visual, sin olvidar otras patologías propiamente femeninas que afectan la salud de las obreras: las cistitis como consecuencia de las escasas pausas que se les concede para ir al baño y los falsos partos, que por lo menos dispensan de hacerse abortar para conservar su empleo...

Para colmo de la desgracia, a esos sufrimientos, que resultan de las condiciones de trabajo, pueden sumarse malos tratos por parte del personal de mando medio, generalmente masculino y a veces extranjero. Los supervisores y los capataces asiáticos, especialmente los coreanos, tienen particular mala fama entre las trabajadoras, heridas en su dignidad por las griterías y los insultos racistas que les son propinados en razón de su pretendida torpeza y de su supuesta pereza en el trabajo. En ciertos casos, especialmente indignos, ocurre que esos vejámenes se acompañan con violencias físicas, tal como coscorriones y otros maltratos. De parte del personal de supervisión y

vigilancia de nacionalidad hondureña, es común que el acoso moral sea igualmente de carácter sexual.

Unas protestas exteriores a veces disparatadas

Hemos visto que las trabajadoras de la maquila hondureña aceptan con fatalismo la manifiesta iniquidad de sus contrataciones, así como la dureza de sus condiciones de trabajo. En cambio, se les acaba la paciencia ante los malos tratos que acabamos de exponer. El personal de las bien intencionadas ONG que pululan alrededor de las obreras de la maquila, recoge sus quejas con diligencia para darles publicidad en el exterior, en los países de donde provienen sus financiamientos. En más de una oportunidad, la difusión de tales denuncias suscitó en los Estados Unidos unos escándalos muy sonados, cuando algunas quejas llegaron a elevarse hasta el Senado, o provocó un enorme barullo mediático en grandes programas de televisión.

Dos observaciones se imponen a propósito de la divulgación, por iniciativa de las ONG internacionales, del carácter inaceptable de las condiciones morales y materiales en las que se desarrolla el trabajo de las mujeres en las maquilas del Tercer Mundo. La primera es francamente positiva: sólo este tipo de llamado de atención a la opinión pública de los países del Norte permite mantener la esperanza de que se produzcan cambios positivos en una situación aparentemente insoluble en el terreno, debido a la resignación de las trabajadoras ante los tratos inicuos que les son impuestos en términos de todo o nada: ellas deben someterse, so pena de perder su empleo, tan angustiosamente codiciado.

Las opiniones públicas del Norte provienen de personas que, a la vez, son teleespectadores y consumidores. Las grandes marcas internacionales de vestuario (las mismas que suelen reducir sus costos de producción por la deslocalización de sus procesos de fabricación hacia las maquiladoras del Sur), saben muy bien que si se merecen la reprobación de la franja más emotiva de sus consumidores, esto puede traducirse en pérdidas de mercados que, a la larga, podrían resultar fatales para la salud financiera de sus empresas. Es por eso que, apenas se vieron tomadas como blanco por la acción mediática de las ONG, estas firmas se apresuraron en suscribir unos «códigos de buena conducta» visiblemente destinados a tranquilizar a sus clientes y disuadirlos de dejar de comprar sus artículos de lujo, asegurándoles que el proceso de fabricación, en adelante, sería intachable.

Al generalizarse el hábito de poner el buen cumplimiento de aquellos códigos de buena conducta bajo el control de comisiones auténticamente independientes, tuvo por efecto que, por lo menos cuando se trata de empresas

de capital norteamericano y de firmas de renombre mundial, mejoraron las condiciones de trabajo en los talleres *off-shore*, de donde se eliminaron los abusos más escandalosos. La situación, sin embargo, se mantiene crítica por cuanto se trata de marcas de menor notoriedad, y del sector subcontratista en general.

Este cuadro globalmente positivo no excluye que, en muchos casos, las vituperaciones acusadoras de las ONG se dejan arrastrar por el sensacionalismo de la comunicación mediática. Todo trayendo agua al molino del escándalo, cuanto más exagerada es una denuncia, tanto más impacto va a tener en la opinión pública, en detrimento de la objetividad. Además, las situaciones económicas, sociales y culturales son tan diferentes que lo que se considera evidente de un lado del río Grande, muy bien puede no serlo del otro. No tener esto en cuenta puede hacer que algunas denuncias espectaculares, por bien intencionadas que sean, traigan consecuencias negativas para quienes se pretende ayudar. Dos ejemplos ilustrarán esta paradoja.

La acusación, según la cual, algunos anticonceptivos hubieran podido suministrarse, sin que se den cuenta, a las obreras de las maquiladoras hondureñas, mezclándolos con el café que les es regalado, suscitó un revuelo considerable en la opinión pública norteamericana, en donde impactó fuertemente, por razones obviamente diferentes, tanto en los círculos religiosos como en los cenáculos feministas. Ahora bien, las encuestas hechas en el lugar no permiten, de ninguna manera, verificar este rumor, que más bien parece desprovisto de cualquier fundamento. Y esto por razones muy evidentes. Primero, raras son las empresas cuya exquisitez llegaría hasta ofrecerles café a sus empleadas. Además, no se ve por qué razones las empresas se tomarían la molestia –y el riesgo– de tomar a cargo el control de la fecundidad de su personal femenino, sabiendo que las mismas trabajadoras se encargan de hacerlo, al no poder ignorar que, para ellas, preñez y despido del trabajo serán sinónimos...

Hay algo peor todavía: teniendo el activismo denunciador de las ONG el hábito de concentrarse en los temas más chocantes para las mentalidades del Norte, puede suceder que esto las lleve a lanzarse en unas campañas mediáticas... ¡cuyo efecto final resulta en una agravación de la situación de quienes se quiere socorrer! Es así, por ejemplo, que los escándalos suscitados en el Norte (pero, notémoslo bien, poco o nada respaldados por los movimientos locales) acerca del «trabajo infantil» en las maquiladoras de Honduras, tuvieron por consecuencia que se vedara la contratación en la maquila de cualquier menor de 18 años. ¡Extraordinario logro si

consideramos que, bajo modalidades precisas y mediante el acuerdo de los padres, la ley hondureña autoriza formalmente el trabajo de los menores!¹⁰

Llama la atención, en este caso, la gran diferencia retórica y de carga emotiva de los términos que se utilizan en los respectivos discursos: la misma realidad que en el Norte se califica como «trabajo infantil» (sobrentendiéndose que se trataría de un trabajo forzado de *niños*, legítimo objeto de reprobación), se expresa en el Sur en términos de posibilidades de acceso para los *menores* a un trabajo, tan ansiosamente anhelado por ellos como por su entorno familiar. Observemos además que un joven trabajador y, sobre todo, una joven trabajadora hondureña de 16 o 17 años, muy difícilmente pasaría por «infante» ante los ojos de un observador venido del Norte. Menos aún si sabemos que, a esa edad, no es raro que las jóvenes ya son madres...¹¹

Ahora bien, oficialmente prohibido bajo la presión de un consenso «humanitario», el trabajo de los menores no ha dejado de existir: mediante falsas declaraciones, la falsificación de sus papeles de identidad o el préstamo de documentos de parientes o amigas con más años, numerosas menores continúan, como en el pasado, trabajando en la maquila. Desgracia para ellas si, como es frecuente el caso, la superchería que les permitió hacerse contratar viene a ser del conocimiento de sus superiores: para evitar que éstos las denuncien (lo que, además del despido inmediato, les valdría el disgusto de tener que enfrentarse con la policía por el delito de usurpación de identidad, o falsificación de sus documentos), esas menores se hallan indefensas ante todo tipo de coacciones y de chantajes: imposición de trabajo suplementario a cualquier hora, extorsión de parte de sus salarios, acoso sexual y demás diversos abusos. En resumen: su situación se ha vuelto peor que si fueran contratadas de manera oficial, conforme a la ley nacional.

10 El artículo 31 del Código Laboral estipula que el joven hondureño adquiere la capacidad de suscribir un contrato de trabajo a la edad de 16 años. El artículo siguiente prohíbe toda forma de trabajo para los menores de 14 años. Entre los 14 y 16 años, se especifica que la duración de la jornada de trabajo del menor no puede exceder 6 horas.

11 En un artículo titulado «Les enfants travailleurs d'Amérique du Sud s'organisent» (en: *Volcans* n° 48, Verano 2002, pp. 6 y 7), Bernadette FIEUX hace observar que «las reivindicaciones de los niños trabajadores organizados contradicen los postulados de las ONG occidentales». «¿Pero quién se preocupó alguna vez de preguntar a los interesados lo que opinan al respecto?» interroga la autora.

Impotencia sindical y resignación social

Viene ahora esta pregunta: ¿Por qué no se impone, sencillamente, el cumplimiento de la legislación nacional? ¿Y en particular, cómo puede ser que las organizaciones sindicales permanecen mudas a la hora de exigir que se haga caso a las disposiciones del Código Laboral? La respuesta es muy simple: los sindicatos están prácticamente ausentes del universo de las maquiladoras, en donde es de conocimiento público que, al igual que la preñez, la inclinación a meterse en la militancia sindical es motivo de despido inmediato... y absolutamente definitivo. En efecto, los dueños de empresas se comunican sus listas de «elementos indeseables», condenando así al que habría sido despedido por ese motivo, a no encontrar nunca más trabajo en cualquier fábrica.

Algunos dirigentes del movimiento sindical, tradicionalmente bien fortalecido en el sector bananero, no faltaron en levantar la voz para manifestar la necesidad de expresar su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la maquila, elevando protestas contra los abusos que se cometen con ellos. Dos factores los disuadieron. Primero, siendo los sindicatos organizados por «ramas», sus propios colegas bananeros les objetaron: «¿Para qué dispersar la acción sindical en otros frentes, cuando la situación ya es tan crítica en el mismo sector agroindustrial?» Además, de una manera más general, con la reducción de la actividad en el sector bananero y dramáticamente restringido el número de trabajadores sindicalizados, la parte de las cotizaciones que normalmente llega a las Federaciones también disminuyó estrepitosamente y más todavía las que se destinan a las Centrales. Por lo tanto, el funcionamiento de la cúpulas sindicales se ha vuelto problemático... ¡y siempre más dependiente de los subsidios que le proporciona el gobierno!¹² En esas condiciones, la

12 Sobre este punto, la situación de Honduras no es única en el mundo. En marzo del 2002, una encuesta publicada en París por la revista *Capital* puso en evidencia que, en Francia, sólo entre 15 y 20% de las rentas de los sindicatos resultan de las cotizaciones de sus afiliados. El resto proviene, directa o indirectamente, del Estado y de las empresas, cuando no resulta de un cierto número de financiamientos ocultos. Esta situación se relaciona con el hecho de que la tasa de sindicalización en Francia (9%) es la más baja de Europa. A tal punto que la proporción de los trabajadores no sindicalizados de Francia supera el número de los que en Dinamarca pertenecen a un sindicato (87.5%). En los países de Europa del Norte, las organizaciones sindicales no tienen problemas para financiarse exclusivamente por las cotizaciones de sus afiliados.

necesidad de no desagradar al poder político se vuelve imperativa: hacer lo contrario haría peligrar la supervivencia del *establishment* sindical...

Posteriormente a la catástrofe del Mitch, la incentivación de la maquila se convirtió en el eje prioritario, por no decir único, de la política del Estado. Quien eleva la voz para oponerse, automáticamente se ve acusado de traición a la noble lucha contra la pobreza y el desempleo. Esto basta para cerrar la boca a cualquier intento de crítica. Sólo se escuchan protestas en escenarios exteriores, donde numerosas ONG reprochan al Estado hondureño el incluir entre las ventajas comparativas ostentadas para atraer las maquiladoras hacia el país, la garantía de irrespetar el Código Laboral y de olvidarse de todas las disposiciones reglamentarias en materia de seguridad y de higiene en el trabajo.

Varios militantes sindicales, entre los que entrevistamos, opinaron que esas protestas son la mera repetición del refrán que los mismos sindicatos se empeñan en difundir para disimular las verdaderas razones de su silencio frente a los abusos que se cometen en las maquiladoras. Ningún Estado soberano, aseveraban ellos, puede ofrecer el irrespeto de sus propias leyes. En cambio, lo que el Estado hondureño está en condición de garantizar a los inversionistas, es la inercia de los sindicatos nacionales, eficazmente mantenidos a raya por la debilidad de su influencia y, más aún, por su insolvencia económica. Y ya no hay chance de que esto se modifique en un futuro previsible. Más bien vemos que, a imitación de lo que ya se había hecho hace tiempo en el seno de las multinacionales bananeras, las dirigencias de las maquiladoras menos despóticas (principalmente las que tienen un «código de buena conducta») toman la iniciativa de propiciar la formación de sindicatos caseros: unos esquirols únicamente destinados a «mantener la concordia» en el seno de la empresa.

Tenemos pues que reconocer, como realidad duradera, la aceptación tácita, por parte de la población, del carácter ineluctable de las condiciones de vida que la maquila reserva a los que se meten en ella. Al respecto, lo que predomina en la opinión hondureña, en adhesión total con los objetivos que pregona el gobierno, es la satisfacción ante la capacidad de las maquiladoras de proveer trabajo a las masas afligidas por el desempleo. A esto se suma la esperanza de que esta oferta de trabajo no deje de seguir creciendo en el futuro. Al respecto, los 15,000 empleos creados en la maquila durante el año consecutivo al Mitch fueron recibidos como una bendición.

Para la inmensa mayoría de las familias pobres de Honduras, no cabe duda que hacerse contratar en una maquila constituye, por ahora, la única perspectiva de mejorar su nivel e vida. Se tiene clara consciencia de que las protecciones sociales ya no son lo que fueron otrora en el sector bananero. Pero los salarios que se ofrecen en la maquila, aun si parecen bajos si los comparamos con los salarios internacionales, resultan superiores en

Honduras a lo que se puede encontrar en cualquier otro sector de actividad. Esta consideración hace pasar todo lo demás a un segundo plano.¹³

Las trabajadoras de las maquiladoras en su medio ambiente mediocre y precario

La población de las mujeres, cuya irrupción en el mercado del trabajo representa uno de los efectos más espectaculares de la vigorosa expansión de la maquila, presenta unas características muy marcadas. Primero se nota que es una población extremadamente joven: 21.4 años, en promedio. Más de los dos tercios de esas trabajadoras son solteras; 33% tienen niños, pero ese tercio no coincide con el tercio que vive en pareja, pues aproximadamente la mitad de las madres tienen hijos no reconocidos o que fueron abandonados por su progenitor, quedando la madre sola a cargo del mantenimiento y la educación del niño.

Sólo un tercio de las obreras son originarias de la zona donde se encuentran implantadas las maquiladoras. Los otros dos tercios son migrantes provenientes de diversos lugares, generalmente rurales. El nivel escolar de las obreras de las maquilas es particularmente elevado en relación con las normas locales. Entre ellas, la tasa de analfabetismo no pasa del 4%, en comparación con el 42% de mujeres analfabetas de las regiones rurales. Sabiendo que la mayor parte de las trabajadoras son originarias de esas mismas zonas rurales, se deduce de esas cifras que *la maquila absorbe, para dedicarla a tareas no calificadas, a la parte más escolarizada de las jóvenes del campo.*

De esto se derivan varias consecuencias que alteran fuertemente los rasgos tradicionales del paisaje social hondureño. Una de ellas es la desafección hacia el empleo doméstico, que anteriormente absorbía buena parte de la migración de las mujeres del campo hacia la ciudad. Por otro lado, al aumentar considerablemente ese movimiento migratorio, la atracción de las maquiladoras acentúa el contraste ciudad/campo en detrimento de este último, por el hecho

¹³ En 2002, los ingresos anuales medios de un trabajador de la maquila hondureña se elevaban a 3,300 dólares. En la misma fecha, no sobrepasaba los 700 dólares para el promedio de los demás trabajadores hondureños. En términos de remuneración horaria, el salario en las maquiladoras (que era del orden de 0.50 dólares/hora una docena de años antes, al inicio del auge de la maquila), había subido, en 2002, hasta alrededor de 1.25 dólares/hora. El nivel medio de 1 dólar/hora había sido alcanzado hacia el final del año 2000.

de privarlo, más aceleradamente que nunca, de sus elementos más calificados y emprendedores.

En cambio, asistimos a la generalización, en zonas neourbanas precariamente acomodadas, de la novedosa figura de una mujer joven, liberada del confinamiento ancestral en el cuidado del hogar y a quien los recursos obtenidos por su trabajo procuran una gran autonomía en la conducta de sus acciones y de su vida afectiva. En efecto, este nuevo tipo de mujer popular goza de una legitimidad social sin precedente: habiendo roto el estrecho cerco de sus antiguas relaciones familiares y vecinales, ensancha sin cesar la red de sus afinidades amigables y sociales. Por ello, no pierde el aprecio de sus allegados que se han quedado en el campo. Éstos, que no pocas veces reciben de ella unos socorros en dinero, no se sienten en nada propensos a desaprobar o a menospreciar su nuevo estilo de vida.

En el plano de las relaciones dentro de la pareja, también se afirman unas evoluciones, aun si cabe recalcar que estas nuevas mujeres asalariadas demuestran una gran moderación con su cónyuge. Frecuentemente privado de trabajo y de entradas fijas, es común que éste vea su aporte a la economía del hogar volverse inferior al de su compañera. Sin embargo, las nuevas trabajadoras suelen mostrar el mayor cuidado para conservar a su compañero el estatus de «jefe de hogar», tanto más importante en lo simbólico, que éste se ha vuelto menos real en la realidad. Esto no excluye que se note el esbozo de una tímida redistribución de las tareas y de los papeles en el seno de la familia, por ejemplo al implicarse un poco más el acompañante de la nueva obrera en el cuidado de los niños y en la ejecución de algunas tareas hasta ahora consideradas como exclusivamente femeninas.

Este tipo de evolución se observa sobre todo en los hogares de las mujeres que son originarias de los lugares en donde se implantaron las maquiladoras, por la sencilla razón de que generalmente disponen de viviendas suficientemente amplias para desarrollar la vida familiar. Las condiciones son más difíciles para las migrantes del campo, que difícilmente encuentran donde ubicarse en el entorno de la maquiladoras. Éste, a decir verdad, da pesar verlo. Una de las «ventajas comparativas» que atrae a las empresas de ensamblaje son los desgravamientos fiscales que implican, entre otras cosas, que las maquiladoras no pagan impuestos locales. Por lo tanto, los municipios en los que se instalaron las fábricas no se benefician de ningún recurso adicional que les permita aguantar el impacto de las poblaciones migrantes que la llegada de la maquila atrajo sobre su jurisdicción.

Es así, por ejemplo, que un pequeño municipio como Choloma, hasta hace unos pocos años todavía enteramente dedicado a la agricultura y a la ganadería, se ha bruscamente convertido en la cuarta ciudad del país, sin que

el nivel general de sus infraestructuras haya acompañado el ascenso.¹⁴ A medida que uno se aleja del centro de la ciudad, sólo se ven calles no pavimentadas, lodosas o polvorientas según los caprichos del clima. La red de distribución de agua también es notoriamente insuficiente. En cuanto al tratamiento de las aguas usadas, sus deficiencias se agravan por el hecho de que las fábricas vierten sus efluvios, frecuentemente cargados de colorantes químicos, directamente en las cunetas, sin importarles el daño causado a las aguas superficiales y a las capas acuíferas.

La oferta de servicios públicos es igualmente pobre. Si bien es cierto que aumentó el suministro de electricidad, fue esencialmente para suplir las necesidades de la maquila. Otrosí, la creación de escuelas y de centros de salud, así mismo como la ampliación de las redes de transporte urbano no están, de ninguna manera, a la medida del incremento de la población.

Por el hecho de no recurrir a la subcontratación de empresas nacionales, las maquiladoras, encerradas en sus ZIP, no desarrollan en su entorno ninguna actividad capaz de favorecer el empleo local. Es así que en Choloma la implantación de la maquila sólo dio nacimiento a una pululación de microempresas oportunistas e informales, ávidas de drenar hacia ellas la mayor parte posible de los salarios devengados en la maquila. La más jugosa de esas actividades consiste en la construcción precipitada de cuarterías, muchas veces implantadas en zonas inapropiadas o inundables y en las cuales los cuartos, aglutinados alrededor de instalaciones higiénicas colectivas reducidas al mínimo, no pasan de los cuatro metros cuadrados. Es en ese tipo de hospedaje que las obreras migrantes deben alojarse. Sus obligaciones horarias –teniendo además en cuenta las variaciones imprevisibles de horarios a las que les obligan las horas suplementarias inopinadas– no les dejan otra opción: ir a hospedarse más lejos aumentaría la duración y el costo de los transportes...

Con el propósito de reducir sus gastos de alquiler, es común que las trabajadoras solteras decidan compartir entre dos o tres un solo cuartucho. Esta concentración puede tener por efecto que en la cuartería no se disponga más que de un solo baño para unas treinta personas... Por otra parte, el poco salario de las operarias se ve confrontado al alto nivel de los precios locales en todos los rubros que hacen prosperar negocios

¹⁴ En el censo de 1974, Choloma contaba sólo con 9,161 habitantes. Este número pasó a 37,194 en 1995, cuando se inició el «boom» de la maquila. De allí, Choloma triplicó su población hasta el final del 2002, fecha en la cual el Instituto Nacional de Estadísticas la evaluaba en 126,402 habitantes. Entre éstos, se notaba un claro excedente de población femenina (66,568 mujeres vs. 59,834 hombres). La tasa actual de crecimiento anual de un 10% hace presumir que Choloma podría contar con 206,000 habitantes en 2006.

informales: alimentación, transporte y otros diversos servicios tales como el cuidado de los niños durante las horas de trabajo. Las organizaciones de mujeres calculan que para una obrera madre soltera, la suma del alquiler, del costo de sus pasajes para ir y volver del trabajo, del almuerzo rápidamente tomado en una glorieta de la calle y del cuidado diario de su niño, representan el 80% de su salario.

Con esto, no les queda mucho dinero para vestirse y esparcirse. Sin embargo, las obreras siempre se esmeran en lucir elegantes. Lo que les permite lograrlo es la ayuda mutua que se desarrolla entre ellas en materia de peinados, trabajos de costura y otros cuidados de la apariencia. El desarrollo de esas redes femeninas de amistad y de ayuda mutua es uno de los efectos sociales más innovadores introducidos en Honduras por la expansión de la maquila. Esta nueva clase de obreras femeninas, la mayor parte soltera gasta buena parte de su tiempo libre en reuniones asociativas y en asambleas religiosas —principalmente evangélicas—, nuevos espacios de experimentación de la palabra pública que, en la formación de la consciencia colectiva de esa nueva clase de trabajadoras, llena espontáneamente el espacio dejado libre por la prohibición de la acción sindical. Si les sobra tiempo disponible, casualmente los domingos, las obreras se dedican a pasearse en grupo y a visitar amigas. Lo que, además de no costar nada, consolida todavía más esas nuevas sociabilidades interfemeninas.

Para esas mujeres valientes, no se puede decir que la vida sea feliz. Pero sí: independiente. Y esa nueva independencia, adquirida con el precio de su penosa labor, la disfrutan con un apetito tanto más vivo que nadie puede predecir lo que les depara el porvenir. Lamentablemente, la precariedad del presente no permite augurar ningún futuro promisor...

Unas perspectivas inseguras para el porvenir de las maquiladoras

Las industrias *off-shore* pueden representar una verdadera solución para el desarrollo de los países en los que se implantan, siempre y cuando se inscriban en un movimiento que, al mismo tiempo que vincula las maquiladoras con los demás sectores de actividad económica del país, supone la disponibilidad de niveles de calificación crecientes de la mano de obra, de modo que los salarios puedan progresivamente elevarse hacia niveles parecidos a los de los países avanzados.

En México, país receptor de maquiladoras ciertamente mejor preparado que Honduras para sacar provecho de ellas, la implantación de éstas fue más precoz. La observación de su evolución a lo largo de los años permite desglosar tres fases:

- la primera (que corresponde a lo que se ha descrito en las páginas precedentes) se caracteriza por un volumen muy importante de mano de obra débilmente calificada y dispuesta a aceptar resignadamente condiciones muy rigurosas de trabajo; implica también, por parte del país receptor, la oferta de un nivel de salarios sistemáticamente minorizado y una gran laxitud en materia de respeto de las normas sociales, laborales y ambientales;

- la segunda generación de maquilas se apoya progresivamente en una mayor racionalización de las formas de trabajo, suponiendo el empleo de un personal mejor formado, capaz de tomar a cargo tecnologías más complejas, exigidas por la creciente automatización de la producción;

- la tercera, en fin, generaliza el recurrir a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC) y sólo se apoya en una mano en obra local altamente calificada.

A esta evolución de la demanda de mano de obra (hacia trabajadores cada vez más especializados y mejor remunerados), corresponde una mutación de lo que se procesa en la maquila: el ensamblaje de materias enteramente importadas (que es la regla en las maquiladoras de primera generación) se va substituyendo por el tratamiento de productos elaborados por la industria nacional, adquiridos en el mercado local por las industrias deslocalizadas.

¿Tiene ese cuadro teórico posibilidades de realizarse en Honduras? Se puede temer que no. En efecto, la observación del estancamiento estructural de la maquila hondureña induce al pesimismo: desde su implantación, prácticamente no hubo ninguna diversificación en la producción; tampoco se nota un esfuerzo significativo para desarrollar conexiones entre la maquila y las estructuras productivas locales.

La relación del sector maquilero con el mercado de trabajo se mantiene también inalterablemente fiel a lo que fue al inicio. El persistente llamado a una mano de obra dócil y no especializada hace que la oferta de empleos por parte de la maquila se mantenga siempre muy por debajo de la demanda pública, dando a los empleadores la constante facilidad de renovar su personal por *turn over*. La única evolución positiva que se nota consiste en una relativa progresión de los salarios, ampliamente justificada por un indiscutible aumento de la productividad. Reconfortante por ahora, esta evolución favorable de los salarios no deja, sin embargo, de ser preocupante para el futuro, puesto que compromete a mediano plazo la competitividad de la mano de obra hondureña, sabiendo que, por una productividad igual o tal vez superior, las remuneraciones que están a la orden del día en Asia y principalmente en China, son -y seguirán siendo- muy inferiores a las que se pagan en Honduras.

Por otra parte, sabiendo que la mano de obra femenina actual se recluta en la fracción con el mayor grado de educación de las capas rurales y

populares, no se ve de dónde podría aparecer una nueva generación de candidatos o candidatas a empleos más calificados, aptos para acompañar la evolución de la maquila hacia formas de producción industrial tecnológicamente más sofisticadas. Ninguna dinámica de formación laboral se ha iniciado. Además, teniendo en cuenta los horarios de trabajo de las obreras de la maquila, el carácter agotador de las tareas que les son impuestas y la mediocridad de sus condiciones habitacionales, queda claro que no están en capacidad de dedicar parte de su tiempo para formarse en capacidades susceptibles de permitirles acceder, algún día, a empleos más calificados.

Las organizaciones femeninas observan con mucha razón que, a esta ausencia de formación de las trabajadoras actuales, se suma otro factor, más alarmante todavía: la próxima generación parece, desde ahora, sacrificada. En efecto, los hijos de las empleadas de la maquila disponen de pocas posibilidades educativas en el medio ambiente precario donde su madre está obligada a residir. Y cuando -como sucede con frecuencia-, los chicos son despachados al campo, confiados al cuidado de sus abuelas y tías, en los rincones más apartados del país, las posibilidades de que reciban una educación de calidad resultan más remotas todavía.

Este conjunto de hechos hace pronosticar que desgraciadamente, en Honduras, el nivel de la industria maquilera nunca se elevará más allá de lo que es hoy en día: un expediente oportunista que, mientras permita a algunos empresarios enriquecerse cómodamente explotando formas de trabajo rudimentarias, sólo representa una solución oportunista y muy frágil para los problemas de desempleo de que el país adolece. Todo eso es muy circunstancial y expuesto a derrumbarse de un momento a otro, a imagen y semejanza de los demás rubros de prosperidad coyuntural que, en el pasado, marcaron la historia del país.

En el 2001, una primera alerta puso en evidencia la débil reactividad de los maquiladores hondureños frente a la crisis: lejos de manifestar cualquier aptitud para inventar soluciones dinámicas, lo único que la Asociación Hondureña de Maquiladoras (AHM) se mostró capaz de proponer frente a una contracción de su actividad, fue recomendar aumentar aún más el grado de complacencia con los inversionistas extranjeros.

Recordemos los hechos. Cuando, en el año 2000, el Congreso norteamericano ratificó una extensión de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe garantizando que, en adelante, los países de esta región verían aplicar a sus exportaciones de textiles hacia los Estados Unidos la misma tasa cero autorizada por el Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano (ALCNA), esto hizo presagiar que se iba a producir en Honduras un fuerte crecimiento de la actividad maquiladora. Lamentablemente, en los meses

siguientes, se produjo todo lo contrario. Primero, un súbito enfriamiento de la economía estadounidense provocó una sensible reducción de la demanda. Y la situación se agravó todavía con los atentados del 11 de septiembre 2001, que añadieron un toque trágico a ese clima de recesión económica.

Todo esto hizo que 2001 fuese muy desfavorable para la maquila hondureña. A tal punto que, al final de ese año, la AHM tuvo que publicar este desolador balance: de enero a noviembre de 2001, 32 empresas habían cerrado sus puertas y otras 22 tuvieron que reducir seriamente el volumen de sus actividades. Esto arrastró la desaparición de más de 20,000 empleos, sólo parcialmente compensados por la creación de unas pocas nuevas empresas. Total: en noviembre del 2001, no quedaban más que 112,361 trabajadores en la maquila hondureña, es decir un descenso de 11% con respecto a los 126,000 empleos censados por la AHM al final del año anterior.¹⁵

A mediados del año 2001, esa tendencia al desplome produjo un movimiento de pánico en el medio de la maquila hondureña, suscitando una cascada de proposiciones desmedidas, poniendo crudamente en evidencia la extrema fragilidad de ese sector, así como su incapacidad de evolucionar en sus argumentos de competitividad.

A contrapelo de su inclinación habitual a ignorar o imponer el silencio al Estado cada vez que éste quiere hacer uso de su autoridad para cobrarles impuestos o exigir que se respeten las leyes y normas laborales, los angustiados empresarios recobraron de pronto el reflejo de llamar al gobierno en socorro. Más que a una baja—con todo evidente—de la demanda comercial en los Estados Unidos, los jefes de la AHM insistían en atribuir la crisis de la maquila textil hondureña a una disminución del atractivo de Honduras con respecto a otros países y especialmente a la vecina Nicaragua. Más específicamente, para la AHM, no cabía duda que la disminución de la actividad maquilera en Honduras se debía esencialmente al aumento de la inseguridad pública! Era cierto que, en fechas recientes, se habían producido unos robos de contenedores de mercancías en las carreteras y que varios dirigentes de empresas habían sido víctimas de raptos para pedir un rescate. Eso bastó para que los mandamases de la maquila se atrevieran a exigir del Estado, como solución de la crisis de su negocio, restaurar sin tardar un clima de confianza para la inversión, al emprender una lucha sin piedad contra la criminalidad.

El colmo de lo irracional de las demandas dirigidas al Estado fue alcanzado el 2 de junio de 2001 cuando, a manera de medida clave de una estrategia

15 Cf. "Industria de la maquila redujo más de 20 000 empleos el año pasado", in: *El Heraldo* del 8/1/2002.

nacional para salvar la maquila, el gerente de la AHM, Jorge Interiano, propuso que el gobierno de Honduras ya no se contente con garantizar a las maquiladoras una total exoneración de impuestos, sino que vaya hasta *favorecer la implantación de nuevas empresas ofreciéndoles subvenciones!* Actuando de esta manera, aseveraba el Sr. Interiano, Honduras no haría otra cosa que seguir las huellas de lo que ya se estaba haciendo en México, en Nicaragua y, sobre todo, en el vecino El Salvador donde, para reactivar el sector maquila, «el gobierno está subsidiando con 50 dólares durante seis meses cada nuevo puesto de trabajo que generen los inversionistas y con 3 dólares por pie cuadrado durante seis meses el arrendamiento de las naves industriales». «*Lo cual es propio de un gobierno visionario*», exclamaba el Sr. Interiano.¹⁶ Visión absolutamente surrealista de un Estado que, no contento de desistir de toda regulación, se ve llamado... ¡a contribuir financieramente a su propia destitución!

Emitidas, en una coyuntura de desasosiego, tales proposiciones revelan que el empresariado maquilero de Honduras no dispone de ninguna otra perspectiva que la de reforzar, hasta lo absurdo, sus «ventajas comparativas», por el abaratamiento del costo de la mano de obra y la acumulación complaciente, por parte del Estado, de toda clase de favores para atraer a los inversionistas extranjeros. Esto se confirmó una vez más, a principios del 2004, con la puesta en discusión de un proyecto de reforma del Código Laboral, que consistía en autorizar a las maquiladoras emplear hasta el 30% de su mano de obra mediante contratos precarios de duración limitada. Actuando en el sentido de una acentuación de la flexibilidad en la utilización de la fuerza de trabajo, se calculaba que dicha medida permitiría a los empleadores ahorrar 30 millones de dólares en tres años. Para los trabajadores hondureños, en cambio, esto significaría, además de la erosión de la ya muy relativa seguridad del empleo, una importante reducción de las cantidades percibidas a título de salarios y de aguinaldos de fin de año... además de un mayor déficit de cotizaciones para el sistema de seguridad social. No hace falta decir que ese proyecto fue recibido con hostilidad, tanto por los sindicatos como por las ONG con preocupación social.

Desgraciadamente, sólo es al precio de este tipo de concesiones que el sistema de la industria maquilera puede darse chance de resistir durante algún tiempo todavía a la competencia asiática, notablemente la de China, países en donde la mano de obra, igual o más calificada que la hondureña, se satisface

16 Cf. “Usufructos y subsidios podrían frenar emigración de maquilas a Nicaragua”, in: *El Heraldo* del 3 de junio de 2001.

con salarios aún menores. Si en Honduras una ligera recuperación del sector maquilero se pudo esbozar después de la crisis del 2001, haciendo subir los efectivos en el 2003 a entre 117,000 y 121,500 empleos (según diversas estimaciones), ese nivel de actividad seguía, de todas maneras, inferior al número récord de 126,000 empleos logrado en el 2000 y hace dudar del optimismo de la AHM que promete 140,000 puestos de trabajo para el 2004.

En México, el ocaso de la industria textil y de vestuario ya es cosa confirmada: entre junio del 2001 y octubre del 2003, el número de maquiladoras dedicadas a ese tipo de producción se ha reducido a la mitad, pasando de 1,190 a 666.¹⁷ En cuanto a Honduras, el hecho de que el precio de una docena de camisetas a la exportación, que era de 3.70 dólares en el año 2000, haya caído a 2.85 dólares en el 2003 (es decir: una baja del 23%)¹⁸ manifiesta concretamente la presión de la competencia asiática. Queda claro que, a pesar de los sacrificios exigidos a sus trabajadores, las maquiladoras centroamericanas del sector textil no podrán sobrevivir por mucho tiempo y que ineluctablemente se concretará el pronóstico de deslocalización Sur-Sur que, ya en 1999, Michael Mortimore pronosticaba en la revista de la CEPAL:

«Se preven consecuencias nefastas para los exportadores de vestuario que no tengan en marcha un proceso local de industrialización cuando expire el Acuerdo Multifibras en 2005, auspiciado por el Acuerdo textil y del Vestuario de la Ronda Uruguay del GATT.[...] Lo más probable es que se derrumben al enfrentar a la aplanadora asiática.»¹⁹

Lamentablemente, una reducción de la actividad de las maquiladoras condenaría irrevocablemente al desamparo a decenas de millares de trabajadores y trabajadoras, afectando por lo demás a todo el medio social que es tributario de ellos: sus familias, que se acostumbraron a recibir alguna ayuda; y todo el colmenar de actividades informales que zumba alrededor de ellos, libando sus salarios. Todo aquel frágil equilibrio en los confines de la precariedad se echaría a perder, sin dejar a esta gente que hace poco la expansión de la maquila desarraigó de las zonas rurales, otra solución que la de avanzar de una casilla más en el desarraigamiento, al

17 Cf. Gabriel LEOST: «Le Mexique pleure les belles heures des maquiladoras», en: *Le Monde* del 24 de febrero de 2004.

18 Cf. OXFAM: *Trading away our rights. Women working in global supply chains*, Oxford, Oxfam internacional, 2004, p. 54.

19 Cf. Michael MORTIMORE: «Industrialización a base de confecciones en la cuenca del Caribe ¿Un tejido raído?», en: *Revista de la CEPAL* n°67 (Santiago de Chile, Abril de 1999), p. 130.

unirse con ese segmento de sociedad definitivamente «fuera de suelo» que constituye la emigración.

El emigrante: en adelante primer rubro de las exportaciones hondureñas

Por mucho tiempo, la cuestión migratoria pareció no tener nada que ver con Honduras. Haste hace poco, los únicos que viajaban al extranjero -y eventualmente pensaban en establecerse allá-, eran miembros de la clase media o superior: diplomáticos, artistas, estudiantes, negociantes, profesionales, etc. Para las capas populares en cambio, los Estados Unidos se veían como algo muy lejano. Además, los lazos sociales, familiares y vecinales seguían siendo tan fuertes y exigentes que a nadie se le ocurría distanciarse de su tierra. Faltaba que ocurriera la coincidencia de una brusca ola de desruralización con las dificultades económicas de los años 90 para que por fin se esboce en Honduras un movimiento de emigración popular clandestina rumbo a la frontera del Norte, a la imagen de lo que ya existía desde hace tiempo en países como México y El Salvador.

Los factores demográficos también concurrieron al fenómeno, siendo ahora Honduras uno de los países latinoamericanos y del Caribe que presentan el más importante crecimiento poblacional, combinado, en el caso de Honduras, con uno de los más fuertes índices de juventud (51.6% de la población son menores de 19 años).²⁰ Este crecimiento poblacional se concreta de la manera siguiente:

- de 1990 al año 2000, la población total del país pasó de 4,757,800 a 6,597,100 habitantes, o sea un crecimiento de 39%, con una media anual de 3.5%;

- durante este mismo lapso, la población económicamente activa pasó de 1,463,267 a 2,226,643 individuos; o sea un crecimiento de 52.1%, con una media anual de 4.8%.

²⁰ Según datos del UNPFA (Fondo de las Naciones Unidas para la Población y la Familia), el fuerte índice de crecimiento poblacional que conoce la Honduras contemporánea (2.8% en el año 2000) es producto de una disminución de la mortalidad (5.4%), y de una natalidad que se mantiene muy alta: 33.5‰ (207,000 nacimientos fueron registrados en el 2000, a un ritmo de 24 nacimientos por hora). A título de comparación, este organismo hace observar que en la Honduras del año 1930, la tasa de natalidad era de 46‰ y la mortalidad de 22‰, lo que entonces limitaba la tasa de crecimiento anual a 2.4%.

Sabiendo que en este mismo lapso, el PIB de Honduras creció en un 33.5% con una media anual de 3%,²¹ se puede observar que esta alza quedó por debajo del ritmo de crecimiento de la población y que el aumento numérico de la fuerza de trabajo (763,376 nuevos individuos potencialmente activos) también es muy inferior al número de los empleos creados por la maquila, aún cuando prácticamente fue ésta el único sector en contribuir al crecimiento de la oferta de trabajo. He aquí porqué la tasa de desempleo real de la población activa se estima ahora en alrededor del 55%. Si a esto agregamos que la mayoría de los que componen la fuerza de trabajo no tiene educación escolar más allá de la primaria, se tendrán en mano todos los ingredientes para comprender las causas y la conformación de la emigración hondureña hacia los Estados Unidos.

Por supuesto, tratándose de una emigración clandestina, no disponemos de estadísticas verdaderamente precisas acerca de ella. En el año 2000, un estudio del UNPFA la estimaba en algunos 500,000 individuos. Ese mismo año, con motivo de un proyecto de ley entonces en debate, a propósito del otorgamiento del derecho de voto a los ciudadanos residentes en los Estados Unidos, los congresistas de Tegucigalpa basaron sus cálculos en 200,000 votantes susceptibles de venir de esta manera a sumarse al padrón electoral. En todo caso, esos números se inscriben en fuerte aumento con respecto a las estadísticas publicadas en octubre 1996 por el Servicio de Migración y Naturalización (INS) de los Estados Unidos que, entre los 5 millones de inmigrantes ilegales residiendo en los Estados Unidos, sólo mencionaban 90,000 hondureños.²²

No hay duda de que el choque causado por la catástrofe del Mitch obró como un potente acelerador sobre el movimiento de migración hacia los Estados Unidos. Claro indicio de eso es que, en el mes de diciembre de 1998, las autoridades mexicanas afirmaron haber detenido a 5,900 hondureños que intentaban cruzar la frontera hacia el Norte. En el mismo mes del año anterior, sólo se habían reportado 2,500 arrestos.²³ Por su parte, las autoridades norteamericanas a cargo del control de la inmigración estiman en 55,000 el número de emigrantes hondureños

21 Datos del Banco Central de Honduras, abril 2001.

22 El 54% de esos inmigrantes ilegales se componía de mexicanos. Las demás naciones latinoamericanas significadamente representadas eran, por orden de importancia: El Salvador (6.7%), Guatemala (3.3%), Honduras (1.8%) y Nicaragua (1.4%).

23 Cf. "Masiva oleada de emigrantes hondureños hacia los EE.UU", en: *Hablemos claro*, 19-25/1/1999.

que, en 1999 y en el 2000, lograron introducirse sin documentos en los Estados Unidos.²⁴ Muchos expertos internacionales opinan que ese número podría ser aún más elevado: según ellos, hasta unos 100.000 hondureños podrían haberse introducido en los Estados Unidos en los meses consecutivos al ciclón.

Otro indicador del brusco aumento del movimiento migratorio reside en la importancia de las remesas que los emigrantes mandan a los miembros de sus familias quedados en Honduras. Ya en el momento inmediatamente anterior al Mitch, el monto de esas transferencias de divisas no era nada despreciable: se evaluaba entonces a la altura del 3% del PIB, cerca del doble de lo que había sido en 1993 (1.6% del PIB). Posteriormente a la catástrofe, la importancia de esos envíos de dinero va a aumentar explosivamente, para situarse en el 2002 en alrededor del 10% del PIB, o sea 670 millones de dólares, puesto que el PIB se elevó ese año, a 6.7 mil de millones de dólares.

Anteriormente a eso, en 1999, el BID estimaba el total de las remesas en 368 millones de dólares. En el 2000, el Banco Central de Honduras lo evaluaba en 410 millones de dólares, cifra que en esa fecha ya superaba la suma de los beneficios aportados por el café y el banano. Según ese mismo organismo, ese monto habría progresado hasta cerca de 510 millones de dólares en el 2001. No obstante cuando, en enero del 2002, justo antes de asumir el poder, el presidente Maduro se fue de visita a los Estados Unidos, el informe que presentó a las autoridades norteamericanas mencionaba 600 millones de dólares como saldo de las remesas enviadas a Honduras en el 2001.

Y ese monto no deja de progresar: en el 2002 el total de las remesas oscilaba, según varias fuentes, entre 650 y 700 millones de dólares. Una vez más, las estimaciones personales del presidente Maduro se situaban en un nivel superior: en abril del 2003, evaluaba en 800 millones de dólares el monto de los envíos de dinero efectuados por los emigrados hondureños en el curso del año anterior. Para el 2003 en cambio, todas las estimaciones coinciden para considerar que, elevándose en 750 millones de dólares, el volumen de las remesas ya superaba el monto del valor agregado aportado por las maquiladoras. Definitivamente, las remesas se han convertido en la principal fuente de divisas para el país. Algunas voces ya murmuraban que el dinero que los emigrantes envían a sus familias podría ahora aproximarse a los mil millones de dólares...

24 Cf. THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, *EIU Country Report*, January 2001, p.33.

Impresionante es esta cantidad de dinero, cuando la relacionamos con el probable número de migrantes que viven en los Estados Unidos (alrededor de 500,000). De esto se deduce que el promedio de sus remesas anuales oscila entre 1,500 y 2,000 dólares. Para apreciar su esfuerzo en su justo valor, hay que considerar que esa población de migrantes se compone de jóvenes (de 18 a 30 años esencialmente), sin carga de hijos, todos ávidos de trabajar, pero que generalmente se desempeñan en empleos precarios y mal remunerados:

- de operarios temporales en la agricultura o en la construcción (albañiles, carpinteros, etc.);
- de cocineros, camareros y personal de servicio en los restaurantes y la hostelería;
- de hazmelotodo en toda clase de servicios: domésticos, jardineros, repartidores de pizzas, nodrizas, barredores, agentes de seguridad, vigilantes, etc;
- y por fin, de trabajadores precarios en los *sweat shops* (talleres clandestinos); de vendedores de todo tipo de productos, lícitos o ilícitos, cuando no de prostitutas(os) o de ladrones.

Tratándose de inmigrantes indocumentados (que es el caso de la mayoría de entre ellos), la irregularidad y la flaqueza de sus ganancias hacen que, perpetuamente estén en tránsito de un lugar a otro, generalmente no tienen una vivienda permanente. Desprovistos de documentos oficiales, no pueden tener carro. Clandestinos, viven lo más discretamente posible para evitar los controles policíacos. Tampoco están en condiciones para abrir una cuenta bancaria. Durante mucho tiempo, eso frenó las remesas de dólares, teniendo el emigrante que esperar el viaje una persona de confianza para encargarle traer *pisto* a Honduras.

Pero pronto se desarrollaron las empresas de transferencia de divisas (Western Union, Moneygram Payment Services, etc.), dedicadas a asegurar los despachos de dólares. Al principio, tratándose casi siempre de envíos modestos (entre 200 y 300 dólares en promedio), el costo de su intervención podía elevarse hasta el 20% de la suma transferida. Posteriormente, esos gastos se estabilizaron a la altura del 15%. Ahora, como consecuencia de la competencia de los bancos comerciales, que también se metieron en ese negocio, el costo de las transacciones se ha rebajado al 8%. La seguridad acrecentada y el menor costo de esas nuevas soluciones para enviar dinero, ciertamente contribuyeron a aumentar el flujo de las remesas, esencialmente animado por la obligación casi religiosa que sienten los emigrantes de contribuir al bienestar de su familia. Los momentos de fuertes remesas son Navidad y el Día de las Madres. Y también cada vez que sucede un desastre... Cabe señalar, sin embargo, que en muchos casos se trata del pago de una deuda,

adquirida por la familia al momento de juntar dinero para financiar la salida del migrante hacia los Estados Unidos.

Además de arriesgada, la odisea del viaje hacia el Norte es extremadamente cara. Nada más que el paso clandestino de la frontera entre México y los Estados Unidos puede costar 2,000 dólares cuando se recurre a los servicios de algún coyote. No es por nada que el argot local usa ese nombre para designar a los que ejercen esta poco simpática pero muy lucrativa profesión. Cuanto más lejos uno está de la frontera norteamericana, tanto más el recurrir a la mafia transnacional de los coyotes se vuelve indispensable para poder cruzar de manera más o menos segura los territorios de Guatemala y de México (a lo que se suma la travesía por El Salvador cuando el punto de partida se sitúa en el sur de Honduras). Las diversas fronteras deben pasarse a pie y de noche, o pagando dinero a funcionarios cómplices para que se hagan de la vista gorda. En fin, todo cuesta. Más o menos caro, según las condiciones de confort y de seguridad que uno desee: en total, el viaje completo puede costar de 3 a 4,000 dólares y hasta 5,000 dólares, por lo que se cuenta.

La mitad de la suma pactada con el coyote se paga por adelantado, al momento de emprender el viaje. El saldo se cancelará por cuotas, a medida que el migrante, arribado a los Estados Unidos, empiece a ganar dinero. De modo que, al principio, las remesas del emigrado sirven esencialmente para saldar las cuentas con el coyote y para devolver el importe de lo que la familia tuvo que pedir prestado -frecuentemente a tarifas usurarias- para financiar al migrante. Sólo cuando se termine de pagar esas deudas comienzan a notarse unos primeros signos de prosperidad entre los familiares de los emigrantes: primero se les ve con ropa nueva y más elegante, con mejores equipos eléctricos en sus hogares. Al final, en algunos casos, las remesas de los emigrados generan efectos a más largo plazo (creación de microempresas, inversiones en la escolarización de los niños...), contribuyendo de esa manera a reducir la pobreza. Pero por algunos casos exitosos, ¿cuántas frustraciones por el fracaso de los emigrantes, lastimosamente retornados a su país? ¿Cuántos dramas por los que mueren o desaparecen en su intento de pasar al Norte? ¿Cuántas ruinas de sus familiares por las deudas que, aun en tan fatales casos, sí quedan pendientes?

Los coyotes de mayor categoría, que viven en las ciudades, son parte de ese mundo intérlope en el que, por supuesto, no se trafica solamente con migrantes. En el campo se encuentran otros coyotes, de más pequeño calibre, que sirven de ojeadores para esta nueva clase de migrantes que ya no transitan por la ciudad antes de intentar el gran salto hacia el Norte. En los pueblos y caseríos, aquellos coyotes se identifican fácilmente por su nivel de vida, espectacularmente superior a la media del lugar. Lucen vestimenta y zapatos a

la moda de los chicanos de EE.UU., se pavonean en flamantes 4x4 climatizados y sus casas, hechas de material noble, se llenan de aparatos ultramodernos. Se podría suponer que esto los expone a la reprobación del vecindario, frecuentemente muy endeudado con ellos. Sorprendentemente, la actitud frente a ellos es mucho más ambigua: se les admira y se les teme más de que se les maldice. Parecería que, al fin y al cabo, ellos encarnan la ilusión de sustraerse a la condición común y de «salir adelante». De modo que el observador no tarda en comprender que, en el fondo, cada una de sus víctimas, si pudiera, no tendría ningún reparo en hacerse coyote...

Por supuesto, cualquiera puede probar la suerte de migrar solo, sin recurrir al servicio de ningún coyote. Los que más actúan de esta manera son los niños y adolescentes que se van a la buena de Dios, con la ansiedad de reunirse con su madre -más raramente con su padre-, que vive en los Estados Unidos.²⁵ Viajar de esa manera es correr un enorme riesgo, puesto que los coyotes vigilan celosamente el territorio de sus negocios. Aun bajo su protección, el viaje no está desprovisto de peligros... cuando no de la casi certeza de sufrir vejaciones. En abril de 2002, el Embajador de los Estados Unidos en Honduras, Frank Almaguer, planteaba públicamente que un 85% de los que intentan migrar ilegalmente a los Estados Unidos son víctimas de prácticas criminales: robos, violaciones, chantajes, extorsiones, malos tratos de todo tipo... y asesinatos por fin, en números considerables. No es raro que los mismos coyotes libran su clientela a estas atrocidades, sea abandonándola a su suerte en el camino, sea separando de entre ella algunos individuos – y especialmente mujeres jóvenes – para entregarlas a las redes de prostitución.

Todos los testimonios concuerdan: lo más problemático es la travesía de México y, singularmente, la del Estado de Chiapas. Al punto de que esta

²⁵ En el 2003, una periodista de origen argentino, Sonia Nazario, recibió el premio Pulitzer por una serie de artículos publicados en el *Los Angeles Times*. En éstos, relata el viaje que, acompañada por un fotógrafo, hizo de Sur a Norte por el territorio de México, encaramada sobre techos de vagones, en las mismas condiciones que lo hiciera Enrique, niño de Tegucigalpa. Sonia Nazario había recogido su testimonio, en casa de su mamá, en Carolina del Norte, a donde el niño había logrado llegar. Titulado *Enrique's Journey / La Travesía de Enrique*, ese impresionante reportaje da a conocer los riesgos insensatos que deben enfrentar los niños migrantes y la crueldad de los percances y vejámenes que los esperan en el camino. Los motivos de la partida de Enrique son analizadas con mucha fineza; corresponden a lo que es habitual en la materia.

En el mismo orden de ideas, véase también el reportaje titulado "Walking the Line of Death", publicado por Virgil Grandfield en la revista de la Cruz Roja (*Red cross, Red crescent*, Issue 2, 2004, pp. 4-9), en el cual se cuenta la penosa odisea de un modesto hondureño de Tocoa, Antonio Zenón Urquía.

región se ha merecido el calificativo de «cementerio sin cruces»²⁶ desde que los presidentes Vicente Fox y George W. Bush se acordaran implementar un «Plan Sur» que apunta a reducir los flujos de emigrantes, de droga y de armas que cruzan México a partir de Centroamérica. Llamado a cumplir el papel de Estado tapón entre América del Norte y el resto del continente, México se vanagloria de desempeñar diligentemente su cometido. En el 2002, sus servicios de seguridad se enorgullecían de haber arrestado y devuelto a sus países de origen a más de 120,000 centroamericanos entrados ilegalmente en el territorio mexicano. El precio de esta complacencia mexicana es el de poder negociar mayores tolerancias para sus compatriotas que viven en los Estados Unidos.

Las migraciones, pieza en el tablero del ajedrez diplomático y medio de presión política

Lo que precede demuestra cuánto la cuestión de las migraciones se ha vuelto crucial en materia de relaciones internacionales, considerando además cuán peculiares son éstas en esta parte del mundo, en la que cada país es objeto de una política distinta por parte de los Estados Unidos, en función del tipo de relaciones que el país mantiene con esa inmensa potencia continental y mundial. Acabamos de evocar México. Conviene mencionar también a Cuba y a Nicaragua, cuyos inmigrantes ilícitos gozan de un recibimiento privilegiado en el territorio norteamericano, en virtud de consideraciones evidentemente relacionadas con los antagonismos de la Guerra fría. Y es bien conocido que los vaivenes de la política estadounidense con Haití, responden fundamentalmente a la preocupación de mantener bajo control el flujo de los *boat people* haitianos hacia las costas de Florida.

Consecutivamente al Mitch, a manera de contribución a la reconstrucción de Honduras, los Estados Unidos concedieron a los inmigrantes indocumentados de este país (así como de El Salvador) el privilegio de un Estatuto de Protección Temporal (*Temporary Protected Status*, abreviado TPS). Gracias a éste, los emigrantes indocumentados llegados a los Estados Unidos antes del 30 de diciembre de 1998, y que ejercen una actividad regular, podían, siempre y cuando tengan una buena conducta y se hagan registrar oficialmente, verse favorecidos por el otorgamiento de un permiso de trabajo temporal, que les da acceso a los beneficios del sistema de salud y les garantiza

26 Cf. Hervé REVELLI: “Le ‘cimetière sans croix’ de la frontière sud”, en: *Le Monde diplomatique*, julio 2003.

no ser objeto de una expulsión hasta la fecha del 5 de julio 2000. Ese año, 89,000 emigrantes hondureños se beneficiaron de esta regularización temporal.

La prórroga del TPS (cuyo beneficio se extendió progresivamente a más de 100,000 emigrantes hondureños) es anualmente objeto de ásperas negociaciones en las cuales las más elevadas autoridades del Estado y del empresariado hondureño argumentan que, en la hipótesis de un eventual cancelación del TPS por parte de los Estados Unidos, el país se hundiría irremediabilmente en el caos social y económico.

Es así que, en enero 2002, una de las principales razones que el presidente electo Ricardo Maduro tenía para ir a Washington en víspera de su toma de posesión era solicitar una cuarta prolongación del TPS, haciendo observar al presidente George W. Bush que, de ninguna manera Honduras estaría en condiciones de reintegrar a más de 100,000 de sus ciudadanos acogidos en los Estados Unidos bajo las disposiciones del TPS.²⁷ Apesar de esta temprana peregrinación de Maduro a Washington, tres meses más tarde, ninguna decisión había sido tomada todavía por la administración Bush, elevando hasta niveles muy altos la angustia entre las autoridades hondureñas y los parientes de los emigrados. Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), no expresaba otro sentimiento al afirmar públicamente que ni se podía imaginar lo que pasaría si toda esa gente se regresara: sabiendo que la economía hondureña se hallaba en recesión, resultaría, decía él, «una convulsión social».²⁸

Finalmente, la extensión del TPS fue cada vez arrancada *in extremis*, no sin haber puesto a ruda prueba la paciencia de los diplomáticos... y la independencia política de Honduras. Al inicio del año 2002, por ejemplo, los Estados Unidos, molestos ante la intención declarada del presidente Maduro de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, lo chantajearon con la amenaza de no prorrogarle el TPS. Esa vez sin embargo, Honduras se mantuvo firme. Pero no hay duda de que, al año siguiente, la necesidad de obtener una nueva ampliación del TPS pesó mucho sobre la decisión tomada por Tegucigalpa de adherirse a la Coalición, y de mandar tropas a Irak.

Bajo la anterior presidencia de Carlos Flores Facussé, el chantaje por la renovación del TPS ya había permitido a los Estados Unidos conservar el

27 Cf. "Maduro a presidente de EEUU: Honduras no está preparada para recibir a 100,000 compatriotas", en: *El Heraldo*, 18/1/2002.

28 Cf. Iris CARDOZA RECONCO: "El Canciller exhorta a los empresarios hondureños: Que pidan el apoyo de sus homólogos de EE.UU. para ampliación del TPS", en: *El Heraldo*, 24/4/02.

beneficio de uno de los principales medios de control geoestratégicos negociados en el marco de la vigilancia anticomunista, pero de los que se podía suponer que habían perdido toda razón de ser con la terminación de la guerra fría. Por ejemplo, uno podía pensar que la base aérea de Palmerola, puesta a disposición de las fuerzas norteamericanas desde 1983, en aplicación del Acuerdo bilateral de asistencia militar de 1954, sería devuelta a Honduras para usos civiles, considerando además que Honduras tiene gran necesidad de un aeródromo de esa talla en esa parte de su territorio.

Sin embargo, la restitución de Palmerola nunca tuvo lugar. Interrogado sobre este punto en una entrevista concedida, el 25 de abril del 2002, al diario *El Herald*o, el embajador de los Estados Unidos, Frank Almaguer, reconoció que la presencia del personal militar norteamericano en Palmerola carecía de respaldo legal y que sólo se perpetuaba en una forma amistosa e informal. Y el embajador concluía señalando que si algún día esta situación planteara un problema de soberanía para los hondureños, bastaba que se lo dijeran. Pero el problema, justamente, es que hasta el momento, nunca los responsables hondureños encontraron el momento oportuno para decírselo...²⁹

Más formalmente explícitos fueron los acuerdos suscritos el año anterior entre el presidente Flores y las autoridades estadounidenses, otorgando a éstas el derecho de perseguir e interceptar, sin solicitar autorización previa, en aguas territoriales así como dentro del territorio terrestre de Honduras, a todas las aeronaves y embarcaciones que se consideren sospechosas. La razón invocada para ello reside en la necesidad de mantener bajo control el narcotráfico entre Colombia y los Estados Unidos. No es dudoso que en las negociaciones que precedieron a la firma de este acuerdo, el beneplácito de Honduras le mereció una nueva extensión del TPS y una promesa de rebajar los aranceles para el ingreso en EE.UU. de los textiles manufacturados en las maquiladoras hondureñas.

Vemos que, con esas medidas que se suman a la libre disposición de la base aérea de Palmerola, los medios de presión de que disponen los Estados Unidos le permiten perpetuar en el territorio hondureño un grado de control geoestratégico equivalente al que tenía en la época de la Guerra fría.

29 En el pasado la base aérea Palmerola, con una superficie de 100 manzanas, albergó hasta 3,000 militares estadounidenses. Al principio del 2003, ese contingente se había reducido a 600. Posteriormente a 1999, fecha en la que las tropas americanas tuvieron que salir de Panamá, Honduras se ha convertido en el último país de Centroamérica en mantener en su territorio una base militar con fuerzas estadounidenses. En flagrante contradicción con el Acuerdo general de paz, que estipula que, en adelante, no se tolerará la presencia de ninguna fuerza extranjera en ningún país de la región.

Simplemente, el pretexto de la lucha contra la subversión marxista ha sido substituido por la temática del control del narcotráfico. No obstante, teniendo en cuenta esta presencia militar así como la sofisticación de los medios de detección de que disponen los Estados Unidos, uno puede admirarse ¿de que tanta droga siga transitando por el territorio hondureño!³⁰ ¿Conviene aceptar la explicación según la cual, utilizando una red con mallas anchas que deja escapar los peces pequeños, se posibilita seguirles observando, con el propósito de pescar a los más grandes? En todo caso, la triste verdad es que, estos últimos años, la considerable expansión del narcotráfico y del narcomenudeo en Honduras ha causado enormes daños: actúa como un veneno sobre la vida social y la moral del país y desnaturaliza profundamente su economía por el lavado de dinero y por la proliferación de los negocios ilícitos que suelen prosperar en torno al tráfico de las drogas.³¹

A la inquietante elevación de la inseguridad pública como resultado de lo que precede, se agregan otras perturbaciones vinculadas con el tema de la emigración. En efecto, la prórroga del TPS (que sólo se otorga a los emigrantes que, solicitando el beneficio del estatuto temporal, aceptaron salir de la clandestinidad) nunca significó que las autoridades estadounidenses renunciaran al derecho de expulsar a otros migrantes indocumentados, especialmente a los que ellas consideran indeseables. Es así que los servicios estadounidenses comunicaron oficialmente que entre el 1º de abril de 1997 y el 12 de diciembre del 2000, deportaron a 17,340 hondureños, entre los cuales el 90% tenían menos de 30 años. La misma fuente señala que esos retornados incluyen 10% de indeseables, implicados en el tráfico de drogas o culpables de diversos crímenes.³²

No se podía indicar con mayor claridad que, en menos de cuatro años, algunos 1734 traficantes y criminales familiarizados con los usos y

30 En febrero del 2002, el embajador estadounidense Frank Almaguer evaluaba en más de 100 toneladas por año las cantidades de cocaína que transitaban por Honduras. Una parte de esta droga entra por la frontera con Nicaragua, país en el que la droga, proveniente de las islas San Andrés, de soberanía colombiana, se desembarca en las cercanías de Bluefields. Otra parte de la droga que transita por Honduras proviene de los desembarques efectuados entre La Ceiba y la Mosquitia y de frecuentes aterrizajes de avionetas, que traen la cocaína directamente de Colombia.

31 Particularmente devastadora para la salud y la moral pública es el hecho de que los traficantes acostumbran pagar a sus cómplices con cuotas de droga que dichos cómplices en parte consumen y el resto lo comercializan en el mercado local, suscitando un consumo siempre creciente.

32 Cf. THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT: *Honduras. EIU Country Report*, January 2001, p. 33.

prácticas del hampa estadounidense, fueron devueltos a Honduras. Aureolados por la experiencia adquirida en las pandillas callejeras y en las penitenciarías de Los Ángeles y otras ciudades de EE.UU., esos expulsados no podían dejar de convertirse en ardientes difusores de la subcultura de la delincuencia juvenil estadounidense en Honduras, en donde hasta la fecha sólo existían unas pequeñas pandillas a nivel de barrios. Bajo la influencia y, sobre todo, bajo el mando de los delincuentes norteamericanizados, esos pandilleros locales no tardaron en aglomerarse en cofradías de maleantes conocidas bajo el nombre de *maras*.³³

El asunto de las maras se articula de otra manera más con el problema de la emigración. En efecto, buena parte de los jóvenes que se meten en las pandillas son hijos de padres salidos «pa'l Norte». Zafándose del control de quienes habían recibido el encargo de atenderles en ausencia de sus padres, estos semihuérfanos encuentran en las pandillas un sustituto de su vida familiar perdida. Por otra parte, su encanallamiento en las cofradías del crimen se acompaña por una pueril fascinación por lo que esos jóvenes desamparados imaginan ser el estilo de vida de los latinos en EE.UU., de la que la subcultura de la delincuencia de la calle les parece constituir la síntesis. Es frecuente, además, que los regalos que estos jóvenes reciben de sus familiares emigrados en los Estados Unidos, consistan en elementos de vestuario y en producciones audiovisuales que participan de esta subcultura y contribuyen a su propagación.

Generalización de la violencia y autoterrorismo

Las maras se reclutan al estilo de los grupos de iniciados. La admisión en la pandilla es un ritual muy violento que consiste, para el postulante, en someterse a una paliza colectiva de una duración codificada (trece o dieciocho segundos por ejemplo, según se trate de las maras referidas a la décimo tercera o a la décimo octava calle de Los Ángeles). Más tarde, los tatuajes invadirán, poco a poco, todas las partes visibles e invisibles del cuerpo del marero hasta apoderarse de su rostro, dando así claras e irreversibles evidencias de su

³³ Ese nombre sería la abreviación de *marabunta*, tipo de hormiga amazónica que devora todo a su paso y que fueron popularizadas por una película que tuvo éxito en los años 60. A nivel local, los miembros de esas pandillas suelen más bien designarse bajo el nombre de *clicas*, o simplemente *barrios*, denominación que sigue señalando su fuerte implicación territorial.

incorporación al universo de los maleantes y haciendo definitivamente obstáculo para su reintegración en la sociedad normal.

Una vez cruzado ese punto sin posible retorno, el compartir fusional de la vida de la pandilla no tiene más alternativa para el marero, cuyo modo de vida se caracteriza por la ilustración de dos tipos de valores, de procedencias heterogéneas:

- por una parte, la herencia típicamente «latina» de un machismo duro hasta la maldad, lleno de fanfarronería ante el peligro y la muerte, complacido en la exaltación lírica de la violencia, indiferente al sufrimiento sea éste infligido o sufrido, e impregnado de *guadalupismo* (actitud que combina un desprecio absoluto hacia las mujeres, con una devoción sin límite para las figuras de la Virgen y de la madre);³⁴

- y, por otra parte, un culto exhibicionista para todo lo que se relaciona con el *american way of life*, caricaturezcamente celebrado a través de artículos de consumo: ropa, zapatos y otros atavíos de marcas afamadas, músicas estruendosas, películas con actores súpermusculosos como Sylvester Stallone y Jean-Claude Van Damme; a lo que se agregan los ya mencionados tatuajes, el consumo regular de drogas, la ostentación de armas y el constante uso de códigos gestuales y de un lenguaje argótico atiborrado de modismos anglófonos.

Este orden de valores, que asocia el tropismo hacia Norteamérica con la exhibición de una violencia provocadora, denota una evolución muy significativa con respecto a las características que presentaban las primeras pandillas de menores que se conocieron en Honduras. Como consecuencia del éxodo rural, éstas nacieron a partir de los años 60 en los barrios desfavorecidos de las ciudades hondureñas, y se desarrollaron de una manera relativamente discreta hasta mediados de los años 90, cuando el crecimiento de su nocividad comenzó a atizar la atención de los sociólogos y la inquietud de los poderes públicos.³⁵

La peligrosidad de estas primeras pandillas callejeras, todavía muy impregnadas de los códigos y representaciones mentales del vagabundaje

34 El término *guadalupismo* deriva del nombre de la santa patrona de México, la Virgen de Guadalupe, cuya representación es una de las figuras emblemáticas de la iconografía mural y de los tatuajes de las maras.

35 La supresión del servicio militar como rito de pasaje a la edad adulta, con lo que esto implicaba de camaradería viril, de reparto heroico del esfuerzo físico, de aprendizaje del manejo de las armas y de sumisión ciega a los mandos jerárquicos, indudablemente abrió un espacio para el desarrollo de las pandillas de jóvenes, llamadas a llenar funciones similares, pero en la desviación delictiva.

iberoamericano tradicional y de la lírica del bandido de honor, quedaba muy limitada. En un estudio pionero sobre la «seguridad ciudadana», publicado justo antes del Mitch, en 1998, las sociólogas hondureñas Leticia Salomón y Julieta Castellanos hacían observar que los delitos imputables a estos menores no representaban, en esa época, más que el 4% del total de la criminalidad registrada a nivel nacional.

Indudablemente, el brusco aumento del daño causado a la sociedad por la delincuencia juvenil debe inscribirse entre las consecuencias de la tragedia del Mitch, en estrecha conexión con dos de los factores que el presente capítulo señaló como consecuencias directas de la catástrofe:

- el aumento del desempleo masculino, concomitante con el desarrollo espectacular de la maquila;
- y la intensificación del contacto migratorio con los Estados Unidos.

Reclutando sus miembros entre la población de adolescentes desesperadamente desprovistos de perspectivas en la vida, las pandillas de jóvenes, hasta entonces aisladas cada una en su barrio y amuralladas en una mutua hostilidad, experimentaron una mutación espectacular. Bajo la influencia de los delincuentes retornados de los Estados Unidos, se confederaron en cofradías transnacionales, capitaneadas, en última instancia, por pandillas-madres arraigadas en los santuarios de la delincuencia norteamericana.

El medio de la gran criminalidad (relacionada con el narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero y demás actividades delictivas: prostitución, tráfico de armas, de migrantes, de niños, etc.) no mantuvo, al principio, ninguna relación con las primeras pandillas de jóvenes, no teniendo nada que esperar de su violencia anárquica. Pero no tardaron mucho en darse cuenta del partido que se podía sacar de la nueva estructuración, jerárquicamente disciplinada, de las maras: se volvía posible instrumentalizar su arrogancia provocadora, convirtiendo a una parte de sus miembros, en ejecutores de fechorías al servicio del hampa de cuello blanco. De hecho, a los medios mafiosos de Honduras no les faltan razones de regocijarse ante la generalización de las maras: no sólo pueden sin mucho gasto reclutar sicarios en su seno; pero sobre todo se vuelve más fácil encubrir sus negocios ilícitos a la vista de las fuerzas del orden, mientras el clima general de terror y de intimidación que las maras hacen reinar concentra sobre éstas toda la atención de la opinión y de los poderes públicos.

Fue así que, en el espacio de algunos pocos años, el medio de la delincuencia juvenil conoció una evolución catastrófica en todos los aspectos. De simples consumidores de drogas, los mareros se han convertido en los principales repartidores de estupefacientes a nivel local. Su armamento, que al principio

sólo se constituía de chimbas artesanales, ahora se compone de armas pesadas (FAL, M-16, AK-47, etc.) que les es muy fácil adquirir en esta región centroamericana, recientemente pacificada e imprudentemente desmilitarizada. Avanzando en edad, y más eficazmente estructurado y liderado, este movimiento delincuencial se ha vuelto enormemente peligroso. Por una parte, no se han reducido el nivel de las animosidades mutuas que, día tras día, amontonan cadáveres en los barrios marginales; pero también se está poniendo cada vez más evidente que, en articulación con los carteles de la droga y otras mafias diversas, las maras participan más y más activamente en las operaciones de la gran criminalidad: atracos de bancos, capturas de camiones con su cargamento, raptos y secuestros, tomas de rehenes, homicidios, etc.

Es así que, en poco tiempo, Honduras se ha convertido en uno de los países más violentos y más inseguros del planeta. Una violencia que, en realidad, afecta más que todo a las capas populares, echando a perder las sociabilidades espontáneas, el espíritu de ayuda mutua y el buen humor que hasta ese entonces caracterizaban al pueblo hondureño. Esa tradicional apariencia de buen vivir resiste mal a las condiciones cotidianas actuales, en las que se pierde la cuenta de las víctimas incomprensibles que amanecen tendidas en las cunetas y en las zacateras, segadas por las guerras históricas que se hacen las pandillas, u objetos de las venganzas que se ejercen contra quienes se quejan de sus fechorías y, por ello, se sospechan ser denunciante ante la policía. También existen castigos para los que tratan de sustraerse al dominio de las maras, intimidaciones para los que se niegan a entrar en ellas, violaciones a las niñas que se resistan a someterse a la esclavitud sexual, que de todas maneras les es impuesta si ellas integran las pandillas...

Al complicarse ahora por las afinidades que se traman con la criminalidad organizada, esta violencia omnipresente desestabiliza tanto más a la sociedad hondureña que ésta no puede ignorar que la complicidad de ciertos elementos de la policía llega hasta participar directamente en los crímenes que se cometen (ahora ya no sólo en las colonias periurbanas, sino también en los barrios acomodados de las ciudades y en cualquier parte del país). Esta proliferación de actores del crimen organizado tiene capacidad, para conectarse, para recorrer a los medios de comunicación más sofisticados. Las conexiones por internet, por ejemplo, por un lado permiten a las maras mantenerse en contacto con sus casas matrices en los Estados Unidos (las cuales, entre otras cosas, difunden constantemente nuevas modas, como por ejemplo la de los cultos satánicos); pero también facilitan las comunicaciones con los carteles del narcotráfico que, desde Colombia hasta el Norte, tejen esa triste cadena de crímenes que desola los países de la región, arruinando su paz social y contaminando su vida económica por el continuo aporte de recursos

inconfesables que, al mismo tiempo que mantienen las cuentas nacionales bajo perfusión, las vuelven definitivamente indescifrables.

La población ha llegado a tal grado de exasperación que en adelante el horizonte de la política está totalmente invadido por el tema de la lucha contra la inseguridad. Ningún partido puede apartar la vista de esa obsesión. En el 2,000, uno de los ejes esenciales de la campaña electoral del presidente Ricardo Maduro—más que nadie conmovido por este problema, ya que uno de sus hijos fue asesinado luego de un secuestro—consistió en prometer «cero tolerancia» en la persecución de la delincuencia. Pero ¿qué eficacia puede esperarse de una policía gangrenada por la corrupción y de la cual una parte coopera con los medios del crimen organizado?

Sacando argumento de esto, unas fuerzas extraoficiales decidieron tomar cartas en el asunto. Por un lado comenzaron a proliferar las agencias privadas de seguridad. Pero, por el lado público, también se vio a varias autoridades municipales acostumbrarse a implementar «comités ciudadanos de seguridad». En 1998, inmediatamente después del Mitch, se había pragmáticamente autorizado la organización de tales comités en vista de la necesidad de preservar el orden público allí donde no existían fuerzas policiales en número suficiente. Luego se perpetuaron y generalizaron al punto de constituir una fuerza paralela a la policía local. Se reportan algunos casos en los que, bajo el pretexto de mantener el orden, dichos comités llegaron hasta perpetrar ejecuciones extrajudiciales.

Del mismo modo, en la capital y demás ciudades, elementos de las fuerzas policiales, asqueados por la complicidad de algunos de sus colegas con el crimen organizado, llegaron al extremo de formar «escuadrones de la muerte» para poner fin, liquidándolos, a la impunidad de los delincuentes. Esto multiplicó el número de los cadáveres que amanecen tirados en la calle, muchos de ellos muy jóvenes. Casa Alianza (importante ONG norteamericana dedicada a la protección de la infancia desamparada) calcula que, entre 1998 y 2003, 2,125 jóvenes de 3 a 23 años fueron asesinados; casi todos varones y la mitad de ellos con menos de 18 años. Las autoridades oficiales aseveran que se trata de víctimas de las guerras entre las pandillas. Para los defensores de los derechos humanos en cambio, esta explicación sólo vale para menos de la quinta parte del número total de las víctimas...

La verdad es que, si la policía cumpliera su tarea como debe, el resultado no podría ser otro que el encarcelar a los mareros en prisiones ya sobrepobladas, en donde cada quien sabe que los maleantes no tardan en someter los demás presos a su ley. Se vive muy mal y se muere mucho en las penitenciarias hondureñas. Ya en dos oportunidades, por causas mal definidas (incendios debidos al mal mantenimiento de los locales, motines, tentativas de evasión o enfrentamientos entre grupos de detenidos notoriamente bien

provistos de drogas y armas...), se han producido hecatombes de prisioneros: el 5 de abril del 2003, 68 mareros, casi todos miembros de la mara 18, perecieron quemados vivos o por balas en la penitenciaría El Porvenir, cerca de La Ceiba. Un año más tarde, el 17 de mayo del 2004, 104 presos (esta vez casi todos miembros de la mara Salvatrucha) murieron asfixiados o quemados vivos en el incendio de la prisión de San Pedro Sula, de una capacidad teórica de 800 prisioneros, pero donde 2,200 se encontraban reclusos...

La opinión pública recibió estas terroríficas noticias con una mezcla de espanto y de sorda satisfacción. «Después de todo cobraron lo que se merecen», se escuchó murmurar en la población, exasperada por el clima de terror que mantienen las maras. En todo el país, se estima que el número de los mareros podría elevarse a unos 3,000 (según estimaciones de la policía). Pero otros dicen que podrían ser 70,000 o aún 100,000, incluyendo en ese número a todos los que, de una manera u otra, los mareros mantienen bajo su dominio. De esa suerte, se puede decir que las maras someten a la sociedad hondureña a una verdadera forma de autoterrorismo.

Como todo terrorismo, éste encierra la sociedad en un callejón sin salida cada vez que intenta algo para protegerse: cualquier defensa eficaz contra la inseguridad pasa desgraciadamente por una limitación de las libertades públicas y por un debilitamiento de las garantías del Estado de derecho. No obstante, la urgencia pareció tal que la sociedad aprobó, con una satisfacción casi unanime, la adopción de medidas semejantes a las que ya se habían tomado en el vecino El Salvador. En julio del 2003, el Congreso Nacional del Honduras aprobó la ley 332, denominada «ley antimara». Independientemente de la comprobación de cualquier delito, dicha ley penaliza el simple hecho de pertenecer a una pandilla y autoriza la detención de todo sujeto de más de 12 años, que se encuentre portando tatuajes distintivos de su pertenencia a una mara.

Esta actitud deliberadamente represiva, que según las encuestas goza con la aprobación de más del 90% de la población, recibió vigorosas críticas por parte de los defensores de los derechos humanos. En Honduras, éstos se empeñaron en cuestionar la legalidad de la ley 332. Desde el extranjero fluyeron protestas más inmoderadas todavía, clamando que esta ley constituye «una declaración de guerra en contra de los pobres»,³⁶ y se asemeja a una regresión pura y simple a las prácticas de represión arbitraria de los tiempos de la guerra fría.

³⁶ Ver por ejemplo en *Le Monde diplomatique* de octubre del 2004 el reportaje de Raphaëlle Bail titulado: «Guerre contre les pauvres. En toute impunité, le Honduras liquide ses parias».

No cabe duda que las medidas autorizadas por la ley 332 pueden, en lo absoluto, merecer críticas. Pero ¿hasta qué punto debemos aceptar que se las condene sin discernimiento en nombre de preconcepciones completamente fuera de lugar con respecto a la realidad local? Así por ejemplo, establecer una relación entre lo que ellos denominan «la cacería de los tatuados» y lo que en su fraseología los protestadores del Norte califican de «delito de la boca sucia»,³⁷ es introducir una referencia al racismo en un contexto en el que, evidentemente, esa temática no procede. Más grave todavía: proponer la amalgama entre las medidas anti-maras y las eliminaciones extrajudiciales de las que fueron víctimas los «revolucionarios» de las décadas pasadas, es fingir olvidar que éstos fueron perseguidos por sus ideales políticos. Anhelaban una sociedad más libre y equitativa, lo que de ninguna manera es el caso de los mareros. Además, los «subversivos» de antaño no tenían sus convicciones pintadas en la piel, pero sí grabadas en la mente y en el alma. Y justamente, a propósito de los tatuajes, ¿no es razonable y aún lícito considerar que la ostentación de esta clase de signos distintivos constituye un *delito permanente*, puesto que, haciendo deliberadamente alarde de la pertenencia a un grupo notoriamente delincuente, los tatuajes significan para los ciudadanos apacibles una insolente provocación y una intimidación permanente?

Otra cosa es dudar de la eficacia de los arrestos que autoriza la ley 332. En realidad, éstos encierran en un círculo vicioso a un país tan pobre como Honduras, en donde las cárceles son insuficientes, sobrepobladas y mal atendidas. ¿De qué sirve recluir a un número siempre creciente de mareros, sino para exponerlos a otras liquidaciones masivas, que a su vez motivarán nuevas marejadas de «escándalos humanitarios»? Pero ¿qué proponen de concreto aquellos mojigatos del exterior para ayudar Honduras a enfrentar la desgracia de las maras? Raro es que, entre sus ocurrencias estafalarias, todavía no se les ha venido la idea de formar una ONG de «borradores de tatuajes sin fronteras», muy útil por cierto para venir en ayuda de los mareros deseosos de romper relaciones con sus funestas cofradías...³⁸

Otro reproche, éste sí justificado, que se le puede hacer a la ley 332 es que, al concentrar la atención policial sobre el control de los elementos más visibles (los cuales son también los más jóvenes y más comúnmente originarios de las capas más pobres de la sociedad), se hace poco caso de la verdadera peligrosidad de las maras, que reside en los lazos siempre más estrechos que se han generalizado entre estas pandillas de jóvenes (¡cada vez

37 En francés: "le délit de sale gueule".

38 La única manera de escapar a los arrestos que permite la ley 332 es hacerse borrar los tatuajes, por lo menos los que están en las partes más visibles del cuerpo y más que todo en el rostro. Es una operación dolorosa y costosa, que además no deja

menos jóvenes sin embargo, a medida que los años pasan!) y las diversas esferas de la gran delincuencia.

Ya algunas pandillas, potentemente armadas, asumen casi abiertamente la tarea de «mantener el orden» (mejor diríamos: «el desorden») en beneficio de sus socios de la gran criminalidad, dedicándose a «asegurar» las zonas en donde éstos realizan los transbordes de droga y otros tráfico ilícitos. Por el momento, esta toma de control sobre algunas partes del territorio nacional sólo se relaciona con objetivos delictivos. Pero no se puede excluir que en el futuro la idea de valerse de una legitimidad de naturaleza política se abra camino en unas cabezas mal intencionadas, parcialmente inspiradas por la retórica que establece un paralelo entre las medidas de represión legal que se toman en contra de los mareros y la persecución inicua de que fueron objeto los militantes de la izquierda en épocas de la guerra fría. Inútil es decir cuán indecente resulta esta confusión entre «víctimas» tan desemejantes y cuán inapropiado es el honor que así se hace a unos puros delincuentes, que jamás dieron señas de interesarse en la sociedad por otra cosa que para irrespetar sus leyes.

Si desgraciadamente, tal como se puede temer en vista de los datos expuestos en este estudio, la situación económica y social de Honduras se viera llevada a un caos tal que toda autoridad legal se halle desacreditada y deslegitimada; y si, paralelamente a esto, la potencia norteamericana se encontrara paralizada (por ejemplo en razón de un durable empantanamiento en el lodazal irakí), no se podría excluir que, debido al aflojamiento de la vigilancia estadounidense sobre la preservación de la «democracia» en el continente, las condiciones se encuentren reunidas para que surjan en América Latina, con el consentimiento tácito del gran vecino del Norte, unos regímenes «guardianes del orden» que combinen la obsesión autoritaria con el oportunismo mafioso. Para imponer el silencio, por el terror, a la sociedad de su país, esos nuevos tiranos, en vez de recurrir, como lo hicieron las dictaduras del pasado, a las fuerzas armadas oficiales (entretanto desconsideradas y debilitadas), podrían optar por apoyarse en la potencia de fuego de algunos millares de pandilleros y hampones a quienes, a semejanza de los *tontons-macoutes* haitianos, se ofrecería una inmunidad absoluta a cambio de su reconversión en milicia pretoriana al servicio del régimen.

No sería la primera vez que se vería los ladrones repintarse de gendarmes para prestar apoyo a una forma inicua de gobernar. Ojalá no se tenga que descifrar las premisas de tal evolución del crimen hacia lo político

de exponer a los que se someten a ella a las represalias de sus antiguos complices, más temidas aún que las sanciones policiales.

en el hecho de que, al principio del año 2004, se vio a las maras hondureñas (o a los que se expresan en su nombre) afichar la pretensión de erigirse en interlocutores del poder del Estado, dirigiendo mensajes de desafío al presidente Maduro. A imitación de los usos del terrorismo irakí, la autenticación de uno de esos mensajes —en realidad más lleno de insultos que de reales reivindicaciones— consistía en acompañar el documento con la cabeza cortada de una de las víctimas de la ferocidad de las maras.³⁹

*

* *

Quiera Dios que nunca se realicen tan funestas perspectivas y que sean perdonadas a Honduras las calamidades que de ellas derivarían: serían peores que todas las miserias que el Mitch desperdigó sobre el país. Felizmente, no siempre ocurre lo peor, aseguran los optimistas. Sin embargo, los pronósticos son sombríos. Vimos que el porvenir de las maquilas está peligrando frente a la competencia asiática. El futuro de las remesas (cuya contribución a la supervivencia económica del país es por lo menos equivalente a los beneficios de las maquiladoras) corre un riesgo similar. Por una parte, el TPS no se podrá renegociar hasta siempre. Y por otra parte, a medida que se asienten y formen familia en los Estados Unidos, parece inevitable que la generosidad de los emigrantes con sus parientes quedados en Honduras se irá reduciendo... y eso con la condición de que los emigrantes logren seguir incrustándose en Norteamérica.

En efecto, alarmada también por la inseguridad, la derecha norteamericana no abandona el sueño de reenviar hacia sus países respectivos esos 8 a 12 millones de latinoamericanos clandestinos que se han infiltrado en EE.UU. El 7 de enero del 2004, en cumplimiento de una de sus promesas electorales y preparando ya su próxima campaña para la reelección, el presidente Bush propuso otorgar a todos los trabajadores clandestinos que viven en los Estados Unidos un permiso de residencia legal y renovable, pero limitado a tres años (diferente por lo tanto del estatuto de residente permanente, materializado por la célebre *green card* que, en 1986, Ronald Reagan ofreció generosamente a 2.7 millones de inmigrantes ilegales). En efecto, los trabajadores regularizados en la forma que plantea George W. Bush serían expulsables si se hallan sin empleo a la hora de renovar su permiso de residencia. Además, Bush no disimula que, en el sistema que él propone, los emigrantes tendrían de todos modos vocación de regresar tarde o temprano a su país de origen.

³⁹ Cf. Paulo A. PARANAGUA: “En Amérique Centrale, des gangs juveniles défient les pouvoirs», en: *Le Monde* del 14 de abril del 2004.

Los sindicatos estadounidenses y el Partido Demócrata no ven el asunto con los mismos ojos. Preconizan una regularización masiva de los indocumentados, siempre y cuando éstos residan desde cierto tiempo en los Estados Unidos, tengan un empleo y no se hayan hecho culpables de ningún delito. Hay un punto sin embargo, sobre el cual todo el mundo está de acuerdo: la inmensa cantidad de inmigrantes de todo tipo, que sólo para el año 2002 transfirieron hacia América Latina la prodigiosa suma de 32 mil millones de dólares, obra como un potente imán que atrae hacia el Norte flujos siempre recientes de migrantes latinos indocumentados y esto no puede durar más tiempo.

¿Qué pasaría si las autoridades americanas decidieran realmente parar la llegada de los emigrantes y despachar a todos los indocumentados hacia sus países de origen? En un país como Honduras, en el que los únicos crecimientos a la vista son los de las actividades ilícitas y de la inseguridad y donde la falta de empleos en las ciudades, combinada con el abandono de las actividades agrícolas, condena a masas de gentes a nada más que tratar de sobrevivir, la desaparición de esta válvula de escape que es la ilusión de migrar hacia el Norte, no les dejaría otra perspectiva que la de abandonarse desesperadamente a la embriaguez de una violencia sin límites.

Capítulo 6

ESPERANZAS, LÍOS Y SINSABORES DE LA TRANSFORMACIÓN POLÍTICA

La inseguridad judicial es el factor fundamental de todos los males de Honduras. En este país, cada quién sabe a ciencia cierta –y frecuentemente por experiencia- que todo pleito judicial se puede solucionar sumariamente en favor del más poderoso, dándole la razón al mejor postor. También se sabe que la honorabilidad personal, muchas veces real, de los profesionales del derecho no es ninguna garantía contra la corrupción generalizada. De hecho, para defenderse contra los corruptos, uno está obligado a valerse de artimañas que, lejos de contrarrestar la corrupción, hacen que se perpetúe. Al fin y al cabo, todo nos remite a este círculo vicioso: aquí, actuar al margen de la ley es la vía normal para solucionar problemas.¹

Cediendo a la moda actual de ajustar los planteamientos a la retórica ultraliberal, algunos no vacilan en legitimar este estado de cosas, alegando su eficacia. Se argumenta que, «engrasando los engranajes», la corrupción favorece el quehacer de la economía al permitir que las empresas ahorren un tiempo precioso evadiendo tramitaciones inútilmente complejas. De ese modo se efectúa, dicen, una selección casi natural: siendo las más aptas para pagar sobornos, las empresas más rentables son las mejor situadas para conquistar mercados.

La corrupción, ¿fenómeno cultural?

Otros prefieren extasiarse ante las regulaciones sociales que, según ellos, suelen desprenderse de una práctica generalizada de la corrupción.

¹ En febrero del 2001, una encuesta presentada a la Comisión Nacional Contra la Corrupción sacaba a la luz que el 80% de los hondureños considera que para obtener la resolución rápida de un conflicto ante un tribunal, es indispensable pagar sobornos. La misma encuesta también revelaba que el 14% de las personas, y el 9% de las empresas que, en el transcurso de los años precedentes, había sido confrontada a desavenencias que normalmente competieran a los tribunales, prefirió apelar a arreglos extrajudiciales para resolver sus litigios.

En efecto, explican, si aceptamos no repudiarla a priori tachándola de *immoral*, la corrupción no constituye más, en el fondo, que un medio de redistribución social entre muchos otros, con su lógica propia, normalmente orientada hacia la perpetuación de las jerarquías y la protección de la armonía social.² Así enfocada como una práctica enmarcable en la problemática del *relativismo cultural*, la corrupción eludiría cualquier apreciación ética, pues sólo podría condenarse en nombre de conceptos *etnocéntricos*, arbitrariamente proyectados sobre una situación totalmente ajena a quien formula el juicio.

Discrepamos totalmente de este tipo de sofisma, que también podría llevarnos, por ejemplo, a considerar que la pobreza y la opresión serían nociones relativas, a falta de poder desmotrarse la universalidad de la aspiración a la igualdad y a la justicia social. Ahora bien, si desistimos de las elucubraciones abstractas para atenernos a realidades concretas, veremos que hay una contradicción insuperable entre el ideal democrático y las regulaciones sociales que se derivan de una generalización de la corrupción. En efecto, desmenuzando el cuerpo social en círculos de complicidad y en redes de clientelas rivales, la corrupción entorpece la concepción de una colectividad apta para idearse como un cuerpo político unificado: un *pueblo* con una *ciudadanía* capaz de afirmar su soberanía y de elegir en su seno los representantes a quienes se pueda razonablemente confiar la defensa del interés común.

A esta paralización de lo político, como consecuencia de la desarticulación social, se suman otros efectos desastrosos desde el momento en que el desarrollo de la economía rebasa el nivel del trueque, de los intercambios a simple vista. Nivel en el que, sin poder sustraerse a la mirada de los demás, la presión que se ejerce sobre el individuo para el cumplimiento de sus compromisos, es muy inmediata e imperativa: en caso de transgresiones, la coacción física se ofrece espontáneamente como modo de sanción y de restauración del orden.

Esto deja de ser posible cuando el desarrollo demográfico y la complejidad de la economía despersonalizan las transacciones. A ese nivel, éstas sólo pueden ejecutarse recurriendo a los medios monetarios y a todo un aparataje técnico y jurídico cuya complejidad va siempre creciendo.

² Para un debate detallado sobre este tema, véase el volumen titulado «*Économie politique de la corruption*», en: *Archimède et Léonard. Les Carnets de l'Association Internationale des Techniciens et Chercheurs*, Hors série n° 7/8. Paris, Printemps-Été 1991.

En esas condiciones, los eventuales desacuerdos sólo pueden resolverse mediante procedimientos judiciales. Cuando sucede que los veredictos que se derivan de éstos no gozan de una autoridad suficiente para apagar los conflictos y permitir que se restablezca la serenidad de los intercambios, se deriva de eso una brutal contracción del volumen de los negocios y un inexorable repliegue de la economía sobre el modelo de operaciones a simple vista descrito en el párrafo anterior. Las redes de confianza vuelven a ser las que se fundamentan en la palabra dada, que sólo pueden funcionar en círculos muy restringidos (en este caso específico, se trata de *mafias*), en el seno de los cuales cualquier incumplimiento del compromiso verbal da automáticamente lugar al ejercicio de la violencia para resolver los conflictos.

Se deduce de lo anterior que, en ausencia de seguridad judicial, sólo pueden emprenderse acciones económicas a muy corto plazo, atraídas por beneficios inmediatos y muy elevados, estando las ganancias que se esperan a la altura de los riesgos incurridos. Se tropieza con el mismo inconveniente al momento de buscar socios exteriores: ¿Qué inversionista extranjero que no esté motivado por la rapacidad, sería tan tonto como para venir a arriesgar sus capitales y sus medios técnicos en iniciativas a largo plazo y con beneficios moderados, en un país donde no se puede ignorar que no hay protección contra la probabilidad de hacerse estafar y robar?

Al respecto, la gravedad de la situación de Honduras se reveló crudamente ante los ojos del mundo cuando, en 1998, la organización Transparency International, cuya autoridad en sus evaluaciones es universalmente reconocida,³ la situó en el tercer lugar mundial (detrás

3 Creada en 1993, y dirigida desde esa fecha por el ex-director del Banco Mundial, el alemán Peter Eigen, la ONG Transparency International se da por objetivo la lucha contra la corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Por haber, desde el principio, dado fundamento a la sospecha de que los grandes organismos financieros internacionales (el FMI y el Banco Mundial) no siempre se han mantenido al margen del sistema de corrupción generalizada, la creación de Transparency International fue, en un primer tiempo, bastante mal acogida por Washington. Esto no impidió que, con el único recurso de las cotizaciones de su membresía, esta ONG con sede en Berlín, no dejó de crecer, pudiendo contar, en 2003, con 80 secciones nacionales y decenas de millares de miembros individuales, muchos de ellos dotados de muy altas calificaciones profesionales (personal político, financieros, juristas, dirigentes de empresas, etc.). Para compensar la falta de datos oficiales (cuya opacidad es directamente proporcional a la sospecha de corrupción que pesa sobre quienes las elaboran), el método

de Camerún y Paraguay y justo delante de Nigeria y Tanzania) en el ranking de la percepción del nivel de corrupción del país, en opinión de los profesionales del comercio internacional.

Unas primeras reformas meramente técnicas no suscitan más que indiferencia

Publicada el 22 de septiembre de 1998, esta lastimosa información se adelantó apenas un mes a la devastación de Centroamérica por la catástrofe del Mitch. Luego, ya sabemos que, bajo el nombre de "Grupo consultivo de Estocolmo", un cartel de donantes internacionales se mostró dispuesto a financiar la reconstrucción de los países damnificados, siempre y cuando cada uno de éstos acompañara su plan con un programa de transformaciones estructurales apuntando a reducir el nivel de vulnerabilidad ambiental, y enrumbando el país hacia un «desarrollo sostenible». Nadie se sorprenderá de que, en materia de reformas indispensables, la del Poder judicial se señaló con especial prioridad.

Consciente de la necesidad de ofrecer garantías a la comunidad internacional, el gobierno hondureño decidió emprender una serie de reformas técnicas, teóricamente destinadas a «modernizar» el ejercicio de la justicia. Fue así que, en un primer momento, se decidió sustituir el tipo de proceso penal vigente, que era escrito e *inquisitorio*, por otro que sea oral y *acusatorio*.⁴

ideado por Transparency International consiste en basar sus diagnósticos, no sobre los datos oficiales, sino sobre la percepción que tienen los profesionales del ramo (dirigentes de bancos y de empresas, analistas financieros, abogados, gabinetes de auditores, etc.) del nivel de la corrupción que se practica en tal o cual país. La autoridad adquirida en este ejercicio permitió que Transparency International se haya convertido hoy en día en el socio privilegiado de la OCDE en materia de lucha contra la corrupción. El mismo Banco Mundial presta ahora un oído muy atento a las evaluaciones del organismo patrocinado por su antiguo director.

4 En un sistema inquisitorio, el juez desarrolla un papel activo en la conducción de todos los actos del proceso, desde la demanda hasta el juicio. En cambio, el sistema acusatorio supone la *pasividad del juez*, cuyo papel solamente consiste en arbitrar entre la acusación y la defensa. En esta última forma de enjuiciamiento, que se caracteriza por su carácter oral y público y por la garantía de presunción de inocencia ofrecida al acusado, el demandante no sienta su queja ante el juez, pero sí ante el Ministerio público. En tal caso, se excluye que el juez participe en la investigación: su papel se limita a sentenciar y hacer ejecutar la sentencia.

En reemplazo del código aprobado en 1984 (luego de la restauración del gobierno civil que puso fin a la era de los regímenes militares), el nuevo Código Procesal Penal fue puesto en vigencia en febrero del 2002. Complacientemente presentada, por sus promotores, como marcando un hito decisivo en la vía de la instauración de una justicia segura, rápida y equitativa, esta iniciativa sólo suscitó indiferencia por parte del público. Y con razón: difícilmente mediatizable, el carácter meramente técnico de esta reforma no tenía nada para seducir a la opinión. Y sobre todo, estando cada quien convencido de la debilidad del personal jurídico ante las tentaciones de la corrupción, resultaba evidente que, cualquiera fuera la norma vigente, un cuerpo de magistrados integrado por los mismos personajes que antes, siempre sabrá arreglárselas con la legalidad formal.

De su lado, los jueces y magistrados no se mostraban más entusiasmados. Cada uno se preguntaba ¿cómo iba a operarse la transición entre el antiguo sistema y el nuevo? ¿En qué condiciones serían formados los magistrados y los jueces para su nuevo modo de actuar? Y sobre todo ¿con qué medios? Éstos siempre hicieron falta y no hay dudas de que las disfunciones de la justicia hondureña siempre fueron, por lo menos en parte, el producto de esta carencia de medios. No se podía imaginar que el simple hecho de cambiar el código procesal sea capaz de remediar este inconveniente. Era más bien de temer que lo agrave...

Por fin, en un plano más general, la verdad obliga a decir que el debate teórico entre los sistemas acusatorio e inquisitorio no se puede dar por universalmente definido. Nada indica, de manera decisiva, que ninguno de los dos tienda mejor que el otro hacia la eficacia y la equidad en la administración de la justicia. Hay grandes democracias que se conforman muy bien con el proceso inquisitorio. Ciertamente, el hecho de auditar a un acusado, presumido inocente, en libertad y con la presencia de un abogado, así como limitar el encarcelamiento preventivo a casos específicos y claramente definidos (riesgos de huida, de presión sobre los testigos o de destrucción de pruebas), abogan por el procedimiento oral y acusatorio, que parece presentar mayores garantías para el acusado que el proceso escrito e inquisitorio, en el cual la prisión preventiva puede decretarse por una simple sospecha.

Todo eso es verdad, pero extremadamente distante respecto a las realidades de un país tan desprovisto, como lo es Honduras. Así por ejemplo ¿cómo podemos imaginar que se garantice a todo ciudadano hondureño la asistencia de un abogado, cuyo costo no pueden asumir la inmensa mayoría de los acusados? Y si el abogado defensor está

designado de oficio ¿cómo se retribuirían sus servicios? En resumen, empujados por la obligación de reformar, parece que los reformadores, una vez más, recurrieron al cómodo artificio de atribuir al sistema los vicios de quienes lo ponen en práctica. Es cierto que la refinada competencia de los especialistas del derecho se deleitó dándose la figura de remediarlo todo con medidas puramente técnicas. Pero éstas no engañaron a la opinión pública, sabida de que son las maneras de actuar de los jueces las que se deben reformar y no solamente las normas abstractas del derecho, cuando las posibilidades de hacer trampas con ella permanecen idénticas.⁵

Una implicación inesperada de la «sociedad civil» en el proceso de reforma de la Corte Suprema de Justicia

En el lado opuesto de lo que sucedió con la reforma del proceso penal, el debate sobre el modo de designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia iba a despertar un fuerte interés en el público. Esta vez, lo que está en juego es efectivamente de gran importancia, puesto que se relaciona con lo más fundamental en la concepción de la democracia: la *separación de los poderes*.⁶ Asunto particularmente peliagudo en Honduras donde, si bien es cierto que dos partidos políticos se alternan pacíficamente en el poder desde 1981, esta

5 En El Salvador vecino, las reformas técnicas similares acaecieron más precozmente, luego de los Acuerdos de Paz firmados en 1992 entre el gobierno y el FMLN. Es así que un nuevo Código Civil entró en vigencia en 1994, reemplazando el que databa de... ;1860! En abril de 1998 también entraron en vigencia un nuevo Código Penal y un nuevo proceso penal que substituía el proceso escrito por un proceso oral y acusatorio. A despecho del apoyo aportado por los organismos internacionales (el BID, entre otros, contribuyó con una subvención de 23 millones de dólares), la puesta en ejecución de esas reformas tuvo que confrontarse con dificultades semejantes a las que iban a suceder en Honduras: falta de recursos, problemas de formación del personal en las nuevas normas, obstrucciones conservadoras, etc.). En todo el país se elevaron nutridas protestas contra esas «leyes hechas en Suiza», que la opinión pública ve inadecuadas para la realidad local.

6 Enfocada desde la época de la Ilustración como la única forma capaz de acabar con la arbitrariedad del poder absoluto, la separación de los poderes consiste en hacer que él que establece la ley (el poder legislativo), no sea el mismo que él que la hace aplicar (el poder ejecutivo) y sea también distinto del que sanciona las infracciones cometidas contra la ley (el poder judicial).

aparición superficial de funcionamiento democrático sólo se ha podido lograr al precio de la sustracción de cualquier contenido realmente político durante el debate electoral.

Esta debilitación de la vida política se debe al carácter muy peculiar del bipartidismo hondureño, en el cual cada ciudadano tiende a concebir su adhesión a tal o cual partido como si se tratara de una pertenencia hereditaria.⁷ Por lo tanto, dicha pertenencia más se asemeja al apego clientelista que a la voluntad de compartir un ideal político. De eso se deriva que la competencia electoral se concentra en el objetivo de hacer acceder al poder a unos «caciques», de los que se espera que, en forma de favores, empleos y canonjías, repartan entre sus «activistas» una parte de las ventajas personales que ellos sacarán de su administración de los asuntos públicos. Funcionando sobre estas bases, el sistema hondureño aporta la demostración de que una democracia electoral formalmente irreprochable no excluye la corrupción. Hasta puede integrarla como modo de actuar cotidiano.

La sucesión muy regular, cada cuatro años desde 1981, de elecciones para todas las autoridades del país (desde el presidente de la República y los miembros del Congreso hasta los alcaldes y regidores en los municipios) no actúa a favor de una desconcentración de los poderes. La simultaneidad de los escrutinios da pocas oportunidades para que se abra una separación entre el ejecutivo y el legislativo, y entre lo nacional y lo local, todos elegidos el mismo día, por el mismo cuerpo electoral.⁸

⁷ Esta visión de las cosas nos fue confirmada de manera contundente el día en que escuchamos al entonces presidente del Congreso, Rafael Pineda Ponce, proclamar orgullosamente en la televisión: «*Yo soy liberal desde el vientre de mi madre!*». En un libro anterior, al observar que en Honduras las casas particulares enarbolan más fácilmente los colores de su partido que la bandera nacional, caracterizamos como «*etnias políticas*» las dos grandes formaciones (liberal y nacionalista) que se alternan al mando de la vida política hondureña. (Cf. A. M. d'Ans: *Honduras. Difícil emergencia, etc...*, pp. 410-412).

⁸ El remedio a esto es más fácil de definir que de poner en práctica. Se podría, por ejemplo, desacoplar las elecciones para el ejecutivo presidencial y para el Congreso legislativo, diferenciando la duración respectiva de sus mandatos. Desgraciadamente, este tipo de solución tropieza con un inconveniente considerable: organizar elecciones cuesta caro y esta carga financiera es particularmente pesada para un país pobre. ¿Debe esto llevarnos a pensar que la democracia es un lujo sólo para los países ricos? Si consideramos en cambio que la ausencia de la democracia contribuye a mantener los países del Sur en la pobreza, esto debería, si realmente se quiere romper aquel círculo

Organizar la independencia del Poder judicial respecto al legislativo y al ejecutivo resulta más problemático todavía. En efecto, dada la tecnicidad de los conocimientos profesionales de los jueces, no se puede imaginar que su designación pueda resultar directamente del sufragio universal. De allí que su legitimidad democrática nunca puede ser más que indirecta, puesto que su nombramiento (por lo menos en los más altos escalones de su jerarquía) forzosamente depende de una concertación entre los elegidos del legislativo y del ejecutivo.

En el caso de Honduras, la Constitución estipula que, al principio de cada legislatura, la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pertenece al Congreso Nacional. Sabiendo que dicho Congreso, producto de las mismas elecciones generales de las que sale elegido el presidente de la República, se sitúa inevitablemente en la misma línea política que la del jefe del Estado, de eso resulta un primer déficit democrático, debido a la ausencia de una real separación entre el Poder ejecutivo y el Poder legislativo. Por lo tanto, no existe ningún freno para impedir -ni siquiera limitar- el detestable hábito de que cada nueva mayoría que accede al poder seleccione a su regalado gusto, para la duración exacta de su mandato, una Corte Suprema de Justicia integrada por magistrados de su conveniencia. En otras palabras: capaces de dilatar, de manera indefinida, cualquier acción judicial que pueda generar molestias para los depositarios de la autoridad pública.

Por el hecho de designarse de esta manera, la cúpula mayor de la jerarquía judicial, es inevitable que el espíritu de conformismo y de servilismo con los poderosos, del que está impregnada la Corte Suprema, se difunda de arriba hacia abajo por todo el aparato judicial, con el efecto de poner los abusos de poder y los casos de corrupción al abrigo de cualquier sanción. De allí se deduce que si se quiere moralizar el funcionamiento de la justicia, resulta obviamente inútil dispersarse en esfuerzos para tratar de corregir las anomalías que se producen en los niveles subalternos: es directamente en la cabeza, es decir al nivel de la Corte Suprema, donde conviene atacar el mal.

Animados por esta convicción, los proyectos comenzaron a fluir por todas partes. Durante la campaña presidencial, el candidato de la oposición, Ricardo Maduro, propuso el suyo. Su competidor del Partido Liberal, Rafael Pineda Ponce, entonces presidente del Congreso, también

vicioso, llevar los países del Norte a reconsiderar el tipo de ayuda que necesitan los países del Sur, privilegiando las acciones en pro de la instauración de la democracia en detrimento de las asistencias económicas.

adelantó sus sugerencias. La Corte Suprema en ejercicio no podía quedarse a la zaga: también emitió su proyectito de «reformas». La verdad obliga a decir que ninguna de esas propuestas se caracterizaba por su audacia: *Reformemos, puesto que hay que reformar, pero lo menos posible*, parecía constituir el lema común de todos aquellos «proyectos».

Avezada a todas las sutilezas del juridismo institucional, ¿iba una vez más a triunfar la vieja clase política, cortando de raíz cualquier esperanza de cambio? Frente a ese peligro, con una agudeza política que le honra, el presidente Flores no se hizo de oídos sordos. El 2 de mayo del 2000, tomando de sorpresa a la clase política, nombró por decreto una *Comisión para el estudio de la problemática que implica la administración de la justicia en Honduras*. Ese mismo día en la Casa presidencial, juramentó los miembros de esa Comisión, de la cual el Jefe del Estado esperaba proposiciones realmente consistentes con miras a una verdadera reforma del Poder judicial. Ningún plazo, ni fecha límite, fueron impuestos a esta Comisión, cuya composición, integrada por 22 miembros, amerita que la detallemos con detenimiento.

Abundaban los participantes de alta categoría en esa comisión, que pronto se popularizó bajo el nombre de «Comisión de Notables». La conformaban: el Ministro de Gobernación y Justicia; el Fiscal General del Estado; la Contralora General de la República; el Secretario General del Foro Nacional de Convergencia (FONAC);⁹ la Vicepresidenta del Congreso Nacional; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; el Sr. Jorge Arturo Reina, Ministro sin cartera (hermano del anterior presidente de la República); una Magistrada de la Corte Suprema de Justicia; el Presidente del Colegio de Abogados, la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y un Diputado del Parlamento Centroamericano. Frente a este impresionante grupo de altos funcionarios en ejercicio, se notaba la presencia de eminentes líderes de la llamada «sociedad civil»: el secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), principal central sindical del país; la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); y el secretario general de INTERFOROS.¹⁰

Al lado de los que preceden figuraban también dos ex-ministros: uno de Salud y otro de Relaciones Exteriores. Con este último, César Batres,

9 Instancia oficial de concertación entre el gobierno, los organismos descentralizados y la «sociedad civil».

10 Instancia en la que se reagrupaban gran parte de los órganos de la «sociedad civil».

miembro del Partido Nacional y suegro del candidato presidencial Ricardo Maduro, se manifestaba la apertura de la Comisión a la oposición. En igual posición se encontraban dos futuros ministros del que ya se perfilaba como el futuro presidente, muy cercanos a él: Jorge Ramón Hernández Alcerro y German Leitzelar.¹¹ Por fin, completaban la comisión, tres grandes empresarios de los medios de comunicación, a los que se agregaba un banquero, Jorge Bueso Arias, sobre quien recayó la responsabilidad de coordinar los trabajos de la Comisión.

*

* *

El Congreso tenía programado el debate sobre la reforma del Poder judicial para la segunda quincena del mes de octubre del 2000. Sin embargo, hasta esa fecha nadie todavía sabía cuál sería el proyecto que serviría de base para la discusión: el que fuera elaborado por la Comisión de Notables o el de la presidencia del Congreso. Ya conocemos que éste último ilustraba la voluntad de cambiar lo menos posible: se limitaba a modificar el número de los magistrados de la Corte Suprema y la duración de su mandato. A este afán de inmovilismo, la Comisión de Notables oponía una visión mucho más intrépida, en la que la propuesta más sobresaliente consistía en la voluntad de introducir un elemento de expresión de la voluntad popular en la designación de los magistrados del Poder judicial.

En apoyo de esta audaz propuesta se iba a desarrollar, durante los meses siguientes, un intenso cabildeo por parte de todos los partidarios de la «sociedad civil». Haciéndose éstos eco de los acalorados debates que se estaban desarrollando en los sindicatos, los grupos asociativos, las ONG y otros cenáculos de reflexión, los portavoces de aquellos diversos grupos multiplicaron declaraciones públicas y proclamaciones en los medios de comunicación, logrando despertar una gran efervescencia en la opinión pública. Bajo la presión de ésta y pensando en las elecciones cuya fecha se estaba acercando, los congresistas se apresuraron de ratificar,

11 Sacando provecho de la existencia de esta Comisión de Notables, el futuro presidente Maduro avalará sus conclusiones. De modo que sólo permanecieron en presencia dos propuestas de reformas: la de la Comisión de Notables y la del adversario de Maduro, Rafael Pineda Ponce, presidente del Congreso, de hecho convertido en el único portavoz de la clase política tradicional.

por unanimidad, el 6 de abril del 2001, un conjunto de reformas constitucionales del Poder judicial, de las que se suponía que representaban el resultado de un arbitraje entre las propuestas de la clase política y de la Comisión de Notables.

De hecho, por una parte, esas reformas recogían las recomendaciones «técnicas» preconizadas por la clase política. Así, el número de los magistrados componentes de la Corte se elevó a 15 (en vez de 9 en la Corte anterior, en la que se acompañaban por igual número de suplentes, que desaparecen en la nueva fórmula). Además, la duración del mandato de la Corte Suprema será en adelante de 7 años (en vez de 4 como lo mandaba la antigua ley). El aspecto positivo de esta última medida es bastante claro: al disociar la duración del mandato de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del calendario electoral que, cada cuatro años, hace cambiar al titular -no reelegible- del ejecutivo y renueva la composición del Congreso legislativo, se imposibilita perpetuar el innoble hábito que tenía la mayoría política en el Congreso de dotarse, por una duración igual a la de su legislación, de una autoridad judicial sistemáticamente favorable y eventualmente cómplice.

Otra garantía contra los excesos del sectarismo político residía en el hecho de que, en adelante, para la designación de los magistrados de la Corte Suprema se requeriría el voto de los dos tercios de los Congresistas, porcentaje al que resulta extremadamente improbable que pueda acceder jamás la representación parlamentaria de un solo partido.

Pero, por encima de esas disposiciones de corte técnico, una espectacular novedad, ideada por la Comisión de Notables, daba una originalidad ináudita al proyecto de reformas avalado por el voto del Congreso. Como fruto de la voluntad de reintroducir un elemento de decisión popular en la designación de los titulares del Poder judicial, se creaba una institución sin precedentes: la *Junta nominadora*.

Fruto de una sorprendente inventividad institucional: la Junta nominadora

Reclutada por el intermedio de los órganos de la «sociedad civil», esta nueva asamblea (cuya completa libertad de acción se decretó al definirla como órgano enteramente independiente y autónomo), tendrá por cometido seleccionar, previamente a la intervención del Congreso, las personalidades admitidas para postular a las más altas funciones de la magistratura hondureña. Sin embargo, poniendo mucho cuidado en no despojar al Congreso de su prerrogativa constitucional de *nombrar* a los magistrados de la Corte Suprema, el número de los candidatos *nominados*

por la Junta deberá ser al menos tres veces superior al número de puestos de magistrados a proveer (o sea: un mínimo de 45 nominados, entre los cuales, en última instancia, el Congreso elegirá a los 15 magistrados de la Corte Suprema).¹²

Otro signo de inteligencia política y de prudencia democrática por parte de quienes concibieron la Junta nominadora fue el legítimo cuidado de evitar el acaparamiento de lo político por la inmoderación de la «sociedad civil» (cuya inclinación para la democracia directa y su consiguiente tendencia a la demagogia no puede ser ignorada). Par tal efecto, se decidió con mucho tino que la Junta nominadora sería una institución *no permanente*, obligada a disolverse en el preciso momento de haber cumplido su cometido. No podía tratarse, en efecto, de instaurar un órgano permanente, especie de «cuarto poder» que tuviera por misión mantener a los otros tres bajo su tutela. Teniendo en cuenta los imperativos del calendario electoral, la fecha límite para la disolución de la primera Junta nominadora se determinó para el 23 de enero del 2002, sabiendo que el Congreso debía proceder a la elección de los magistrados de la Corte Suprema antes del 26 de ese mismo mes, víspera de la toma de posesión del nuevo presidente de la República, elegido en noviembre del 2001.

Demostrándose una vez más la firme intención de evitar cualquier posibilidad de retorno al habitual sectarismo político, se especificó que la Junta nominadora, cuya composición había sido fijada en 7 miembros titulares (más igual número de suplentes), debería tomar sus decisiones por la mayoría de al menos 6 votos.

Habiéndose dictaminado que aquellos siete miembros debían ser la voz de la «sociedad civil», dado el carácter muy flojo de la definición de este concepto, es interesante enumerar los criterios según los cuales serán reclutados:

- Tres de los siete escaños fueron reservados para los especialistas del derecho: un representante del Poder Judicial (primer interesado en este asunto), otro del Colegio de Abogados y otro del cuerpo de docentes universitarios de Ciencias Jurídicas;

- El mundo sindical tiene dos representantes: uno de la organización patronal (COHEP) y el otro de las centrales obreras;

¹² Quede bien claro que, conforme a su denominación, el papel de la Junta Nominadora no es de *nominar* a los miembros de la Corte Suprema, sino de *nominar* una reducida lista de candidatos entre los cuales, en segunda instancia, los laureados serán elegidos, un poco a la manera de lo que se practica para la adjudicación de los oscar de Hollywood, y demás laureamientos del show-business.

- Los dos últimos puestos se repartirán entre: un representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH),¹³ y el otro a cooptarse en medio de la mezcla de agrupaciones de toda clase que se dicen «de la sociedad civil».

La reforma constitucional instaurando la Junta nominadora fue aprobada el 6 abril del 2001. No obstante, se tuvo que esperar hasta la última semana de septiembre para que el Congreso votara -por fin- su ley orgánica (a falta de la cual la existencia de esta nueva instancia seguía virtual). Esa lentitud de los legisladores demuestra su falta de entusiasmo respecto a una institución llamada a convertirse en «el vocero de la sociedad civil». Como prueba de eso, a último minuto los congresistas se las arreglaron para introducir en esta ley orgánica una cláusula nunca evocada en las negociaciones previas: la presidencia de la Junta sería necesariamente ocupada por el representante del Poder judicial.

Esta disposición incomodó fuertemente a todos los que, desde el mirador de la «sociedad civil», seguían con mucho recelo el avance -por cierto muy lento para su gusto- de la reforma del Poder judicial. ¿Cómo es posible, se indignaron ellos, que al momento de crear un organismo supuestamente «independiente y autónomo», se le esté imponiendo por adelantado quién sería su presidente? No obstante, esa estocada de última hora no comprometía, sino de manera marginal, lo que los partidarios de la «sociedad civil» podían considerar como su victoria.

*

* *

Conforme a la ley recién votada, los siete sectores representados en la Junta nominadora se empeñaron en designar a las personas llamadas a asumir dicha representación. Esta selección se llevó a cabo en condiciones muy variadas, desde una sigilosa discreción hasta debates estruendosos. Al final, los siete procesos entregaron el resultado siguiente:

13 El CONADEH es un organismo del Estado, con un estatus equivalente al de ministro para quien lo dirige. Gracias sobre todo a la eminente personalidad del Dr. Leo Valladares Lanza, primer titular de esta función de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el CONADEH adquirió gran autoridad y popularidad en el país, en materia de defensa de la democracia y del estado de derecho. Todo lleva a pensar que fue preponderante la influencia que el Dr. Valladares ejerció sobre los trabajos de la Comisión de Notables.

1. El representante del Poder Judicial (automáticamente llamado por la ley a ejercer la presidencia de la Junta), será el Sr. Darío Humberto Montes, quien había sido miembro de la Corte Suprema durante el mandato presidencial de Carlos Roberto Reina. Por lo cual se puede opinar que es de obediencia liberal;

2. La representante del Colegio de Abogados será la Sra. Rosa América Miranda, entonces Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social. Igualmente de obediencia liberal, ella será titular de una de las dos secretarías de la Junta;

3. El otro secretario será el Dr. Leo Valladares Lanza, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. De supuestas afinidades con el Partido Nacional, este personaje fue miembro de la Comisión de Notables convocada por el presidente Flores.

4. A esta misma Comisión de Notables también perteneció la Sra. Juliette Handal de Castillo, que representará en la Junta al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP): ella también se considera de tendencia nacionalista;

5. De tendencia nacionalista igualmente es el Sr. Renán Sagastume, representante en la Junta del cuerpo de los profesores de Ciencias Jurídicas;

6. Francamente «a la izquierda» se sitúa el Sr. Daniel Durón, designado como representante del mundo obrero por el voto de las tres centrales sindicales del país: la CTH, la CUT y la CGT;

7. De la misma tendencia «izquierdista» es la Sra. María Antonia Martínez, representante en la Junta de la Asamblea de la sociedad civil y del Movimiento de las mujeres, cuya elección se obtuvo por un solo voto en detrimento de la candidatura apoyada por la Federación de las Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), organismo que trata de reagrupar en su seno la proliferación de ONG de todo tipo que han florecido en Honduras después del Mitch.

Se observará que, en términos de equilibrio entre profesionales del derecho y legos en la materia, entre mayoría y oposición política, entre «sociedad civil» y mundo político, «izquierda» y «derecha», y aún entre hombres y mujeres, era difícil realizar mejor repartición. El 15 de octubre de 2001, esas siete personalidades vinieron a prestar juramento ante el presidente del Congreso. En ese momento, les quedaba menos de cien días antes de tener que entregar, a ese mismo presidente del Congreso, a más tardar el 23 enero 2002, una lista de al menos 45 magistrados aspirantes a la Corte Suprema.

Conforme a las disposiciones de la ley, las siete categorías representadas en la Junta fueron invitadas a seleccionar veinte candidatos en sus filas. O

sea un total de 140 candidatos. A éstos podían libremente sumarse un número no limitado de postulantes individuales, con tal que cumplieren con los requisitos exigidos. Se presentaron finalmente 29 candidatos de esta clase, elevándose así a 169 el total de las candidaturas a examinar por la Junta nominadora. En aplicación de la ley, los nombres de los postulantes fueron publicados por los medios de comunicación y se declaró abierto, hasta el 15 diciembre 2001, el plazo durante el cual los ciudadanos estaban habilitados para presentar ante la Junta cualquier tipo de objeción en contra de uno que otro de los candidatos.

Fue en el marco de esta fase del proceso que, el 21 de noviembre de 2001, la antena hondureña de la influyente ONG norteamericana Casa Alianza (que tiene como vocación prioritaria la defensa de los niños de la calle) iba a provocar un enorme escándalo al impugnar la candidatura a la reelección de cinco de los nueve miembros de la Corte Suprema entonces en ejercicio. ¡El mismo presidente de la Corte era uno de los magistrados incriminados por la ONG! La razón de esta impugnación era que, siendo miembros de la CSJ durante el período 1994-97 (correspondiendo a la presidencia de Carlos Roberto Reina), aquellos cinco jueces habían solidariamente emitido, el 16 de enero de 1995, un auto mediante el cual facultaban a jueces con competencia en jurisdicción de menores a remitir niños, niñas y jóvenes de 18 años a los presidios nacionales. Tomada en consideración la inexistencia de establecimientos penales especializados para los menores, esta decisión equivalía a permitir que menores fuesen encerrados en las penitenciarías, en promiscuidad con los detenidos adultos.

Violando la Constitución así como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención Americana de los Derechos Humanos y demás normativas en materia de niñez, esta decisión había dado motivo a que, el 10 de marzo de 1999, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenara al Estado de Honduras, obligándole a pagar una indemnización compensatoria a cada uno de los 800 menores que, a raíz de su encarcelamiento, habían estado expuestos a malos tratos, violencias físicas y sexuales y, en algunos casos, hasta la pérdida de la vida. Además, la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos obligaba al Estado de Honduras a seguir un proceso penal contra todos los funcionarios (magistrados, jueces, directores y personal de las penitenciarías) que, de una manera u otra, se habían hecho cómplices de esas violaciones de la ley. Sin embargo, nunca se tuvo referencia de que esas obligaciones se cumplieron.

Este inesperado ataque manejado por la ONG norteamericana hizo volar en pedazos el frágil consenso que, hasta entonces, bajo la presión

de las circunstancias, los poderes establecidos y los que impulsaban la reforma habían dado apariencias de mantener. Exasperadas y considerándose moralmente agredidas, las fuerzas conservadoras no vacilaron en cuestionar públicamente la legitimidad de una institución como la Junta nominadora que, de esa manera, daba lugar a que se atentara contra la dignidad del Estado. A su vez, al verse cuestionada en sus prerrogativas, la Junta endureció su actitud. Reiterando su intención de ir hasta las últimas consecuencias de su cometido, hizo saber que, en lo sucesivo, no se contentaría con evaluar las cualidades profesionales de los postulantes sino que, atendiendo las quejas que le sean presentadas, también sometería su honorabilidad en la vida corriente «a una verdadera auditoría social».

Un grado superior de tensión fue franqueado cuando la Junta hizo saber que, a fin de cerciorarse de la independencia de los candidatos en relación a los partidos políticos, había decidido descartar de la lista que se debe establecer, no solamente a todos los jueces que en ese momento ocupaban un escaño en la Corte Suprema, sino también a todos los magistrados que, en un momento u otro, habían ejercido un mandato electivo a nombre de tal o cual formación política. Además, lo que en adelante se designa como «limpieza de la lista» consistirá en rechazar a todo candidato sospechado de haber incurrido en atropellos contra los derechos del hombre, de haber estado implicado en actos de corrupción, o de haber participado de alguna manera en las acciones del narcotráfico. Más aún todavía, la reputación comprobada de haber cometido actos reprobables en la esfera privada, tal como violencia doméstica, acoso sexual o falta de pago de alimentos, también será motivo de eliminación.

Alentadas por el anonimato que se asegura a los delatores, las denuncias empezaron a afluir hacia los miembros de la Junta. La mayoría de éstos gozaban de una posición ideal para chequear la veracidad de estas acusaciones: cotejándolas con la documentación acumulada en los archivos de organismos de defensa de los derechos humanos u obteniendo del Ministerio público una comunicación extraoficial de las quejas que algunos jueces acomodaticios dejaron engavetadas.

Al final de noviembre de 2001, exasperada por la agitación mediática suscitada por este asunto, la dirigencia de los partidos tradicionales perdió la paciencia, y decidió que ya había llegado el momento de poner fin a este calamitoso proceso en el que, inicialmente, pensando que podría controlarlo, la vieja clase política había tenido la imprudencia de participar, o por lo menos fingir participar. En el

Congreso saliente (que seguía legalmente en funciones durante este período transicional), los representantes del Partido Liberal y el sector más conservador del Partido Nacional (que habían, los dos, salido mal parados en las elecciones recientes) unieron sus esfuerzos para exigir que «por esta vez» se suspendiera la ejecución de las reformas constitucionales (¡que el mismo Congreso al que pertenecían había votado!), por el motivo de que el plazo muy breve que quedaba hasta la entrada en función de los nuevos elegidos no permitía que el proceso previsto por la reforma se desarrollara en su debida forma.

Esto no era más que un pretexto: la verdadera razón era que la clase política tradicional estaba ahora bien convencida de que, si no se detenía el proceso en curso, éste iría inexorablemente a parar en la escogencia de una Corte Suprema que, a su entender, sólo se compondría de «incapaces e izquierdistas». Para evitar esto, convenía que, por lo menos «por esta vez», se volviera a seguir el procedimiento anterior a las reformas constitucionales.

El presidente electo, Ricardo Maduro, así como la fracción más modernista del Partido Nacional en la que él se apoya, no comparten esa manera de ver. Cuidadoso de no enajenarse la benevolencia de los organismos internacionales que patrocinan la reconstrucción (¡y la transformación!) de Honduras, el futuro Jefe de Estado reafirma claramente su voluntad de que se ejecute el proceso de reformas que en su campaña prometió apoyar e impulsar. De su lado, enterados de la intención de bloqueo que anima a la clase política tradicional, los órganos internacionales de financiamiento y, especialmente la Agencia Americana de Desarrollo (USAID) y el gobierno español, amenazan con suspender de inmediato su ayuda a Honduras en el caso de que el Congreso dé seguimiento a sus veleidades de hacer marcha atrás en el proceso de las reformas.

Aprovechando ese clima de tensión, la Junta nominadora arrecia más todavía sus posiciones, reiterando públicamente la invitación a los ciudadanos para que presenten sus quejas contra los candidatos que no les parecen dignos de confianza. Aunque de muy antigua afiliación liberal, el presidente de la Junta hace agriamente saber a la dirigencia de su partido que de ninguna manera se considera obligado a seguir sus directivas. Por lo tanto, él ignorará las presiones y las zalamerías. Por su parte, puesta en sobresalto por la acritud de la confrontación, la Asamblea de la sociedad civil, reunida en sesión de emergencia el 3 de diciembre, se declara en estado de alerta. Una semana más tarde, se declarará en sesión permanente hasta la completa culminación del proceso de designación de los nominados a magistrados de la Corte Suprema.

Frente este calentamiento del debate, el Congreso decidió finalmente desistir de sus acciones, no osando las cúpulas de los dos grandes partidos a exponerse a la desaprobación de la opinión pública. Prefieren quedarse a la espera de que un motivo legítimo les permita contrarrestar las inoportunas decisiones de la Junta nominadora. De su lado, la Corte Suprema saliente trata afanosamente de encontrar un motivo de nulidad sobre el terreno de la formalidad del derecho. Por ejemplo, se buscan argumentos con el fin de impugnar la presencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el seno de la Junta nominadora. Más consistentes, sin embargo, parecen ser las acusaciones que la Corte dirige al Ministerio Público, reprochándole –no sin razón– de haber dejado, en evidente violación de la ley, filtrar en dirección de la Junta nominadora informaciones normalmente protegidas por el secreto de la instrucción y el respeto de la presunción de inocencia.

Pasaron las fiestas de Navidad y del fin de año sin disipar el clima de tensión. Más bien éste llega a su paroxismo al acercarse la fatídica semana del 21 al 26 enero de 2002, al cabo de la cual debe necesariamente hacerse, de una manera u otra, la elección de los miembros de la Corte Suprema. El lunes 21, adelantándose cuarenta y ocho horas a la fecha tope que había sido fijada para el día 23, el presidente de la Junta nominadora viene solemnemente a entregar el resultado de los trabajos de la Junta en manos de Rafael Pineda Ponce (el candidato del Partido Liberal perdedor en la elección presidencial, pero que por algunos días todavía seguía fungiendo como presidente de la Comisión permanente del Congreso Nacional).

Habiendo decidido la Junta atenerse al número mínimo estipulado por la ley, el documento presentado consiste en la simple lista, por orden alfabético, de los 45 postulantes cuya candidatura recibió el aval de la Junta. Además, de conformidad con las exigencias de la ley, al mismo tiempo que entrega la lista, Darío Montes puso su dimisión así como el acto de autodisolución de la Junta que presidió. De esa manera, él mismo y los demás miembros de la Junta nominadora se vuelven a convertir, en ese instante, en simples ciudadanos, definitivamente relevados de la función que acaban de cumplir.

Psicodrama en torno a las decisiones de la Junta nominadora

Tan pronto como al día siguiente, martes 22 de enero, un rumor se filtra entre los «medios bien informados»: *¡la lista establecida por la*

Junta sería nula y sin efecto por no haberse entregado a su destinatario legal! Tal es, por lo menos, la interpretación que desarrolla un ex-presidente de la Corte Suprema de Justicia, fundamentándose en el hecho de que, algunos minutos antes de que el presidente de la Junta depositara el documento en manos de Rafael Pineda Ponce, los diputados del nuevo Congreso elegido en las elecciones del mes de noviembre, habían procedido a la escogencia de un directorio provisional, presidido por Porfirio Lobo Sosa (presidente del Congreso en la legislatura siguiente).

Consecuentemente, era a éste y no a Rafael Pineda Ponce, que el documento de la Junta debió haberse entregado. Este error de procedimiento autorizaría al Congreso a tener a la Junta nominadora por incumplida en la ejecución de su misión. Y como ya se ha autodisuelto, dicha Junta no estaría en capacidad de corregir su error. Por lo tanto, tal como lo estipula la ley, al no haber cumplido su papel la Junta nominadora, el Congreso se encontraría automáticamente habilitado a volver al antiguo y tradicional modo de designación de los miembros de la Corte Suprema.

Este rumor suscitó una emoción considerable. El presidente electo, Ricardo Maduro, reafirmó con solemnidad su negativa de ver invalidado el trabajo de la Junta nominadora, e instó a los que apoyaron su candidatura para que, de todos modos, acatasen el resultado de sus trabajos. Eso no impidió, a los sectores más conservadores de su propio partido, como a los de la oposición, clamar alto y fuerte su convicción de que la inexperiencia, la incompetencia y el izquierdismo era lo que más abundaba en la lista de los nominados por la Junta y que eso constituía una razón suficiente para desestimar sus decisiones.

Otro rumor circulaba: que los trabajos de la Junta estarían manchados por numerosas irregularidades. Así por ejemplo, sus decisiones, supuestamente tomadas por una mayoría de un mínimo de seis votos, habrían sido frecuentemente logradas por 4 votos contra 3. Debido a la confidencialidad que protege los trabajos de la Junta, que le prohibía polemizar públicamente, el ex-presidente de la Junta, el honorable Darío Montes, no estaba en condiciones de desmentir semejantes acusaciones.

¿Estaba el proceso de la Junta nominadora a punto de naufragar? Ya nadie sabía qué pensar. No parecía seguro que los congresistas del Partido Nacional estuvieran listos para declararse en contradicción abierta con el presidente electo y la fracción del partido que lo apoya. Muestra de eso era que, mientras que algunos de sus colegas persistían en una actitud de rechazo radical del trabajo de la Junta, ya se veían un buen número de los diputados ponerse a escudriñar la lista de los 45 nominados, para identificar

en ella los simpatizantes de sus respectivos partidos, cuya elección como miembro de la futura Corte suprema podrían finalmente apoyar con su voto. Muchos nombres circulaban, hasta se podían leer en los periódicos.

Fue en esta atmósfera de intrigas, de rumores y de dudas cuando de repente, el día miércoles 23, se difunde otra pasmosa noticia: en la tarde del lunes 21, el mismo día en que la lista de los 45 era entregada al Congreso, un candidato a título personal, cuyo nombre no había sido incluido en lista de los 45, había introducido ante la Corte Suprema saliente (la del mandato 1998-2002, que seguía legalmente en función hasta que se elijan los miembros de la próxima Corte), un recurso de amparo contra la lista de los 45 nominados. En su acto, el demandante solicitaba la suspensión de las decisiones de la Junta hasta que la Corte emitiera su fallo al respecto.¹⁴

La argumentación del jurista en cuestión no carecía de fundamento. Por una parte, él exigía que se le comprobara que su candidatura fue examinada en buena y debida forma. Por otra parte, teniendo en cuenta los criterios públicamente enunciados por la Junta, y considerando que éstos hacen pesar sobre los candidatos no seleccionados la sospecha, sea de su incompetencia profesional, sea de una honorabilidad personal dudosa, él se consideraba en derecho de pedir reparación por no haberse beneficiado, ni de la garantía de la presunción de inocencia, ni del derecho de defenderse contra los efectos de una eventual delación.

Con evidente satisfacción, la Corte Suprema saliente decidió admitir este recurso de amparo, acordando por el mismo hecho «especial y absoluta suspensión del acto reclamado». En otros términos ¡se encontraban suspendidos los efectos de la famosa lista de los 45! Y, peor aún, teniendo en cuenta los plazos de rigor para el examen del recurso de amparo, ¡esta suspensión equivalía a una anulación pura y simple del trabajo de la Junta!

En efecto, sabiendo:

- que, en cuanto la Corte Suprema termine de juntar los antecedentes del caso -solicitándolos al Congreso nacional y a la Junta nominadora-, deberá dar vista de ellos al recurrente para que, en el término de 48 horas, éste formalice el recurso;

- que igual procedimiento y término deberá cumplir el Fiscal para la Defensa de la Constitución para emitir su opinión previamente a que el

¹⁴ Un *recurso de amparo* es un recurso que se introduce ante la Corte Suprema, con motivo de una alegación de inconstitucionalidad contra una medida que lesiona los intereses de un particular.

Tribunal Supremo pueda abrir el caso a pruebas por el término de ocho días;

- que, una vez concluido este período probatorio, la Corte Suprema deberá poner los autos a disposición de las partes por el término de 24 horas para que presenten sus alegatos;

- y que sólo después de todo eso estaría la Corte en condiciones de pronunciar sentencia otorgando o denegando el recurso de amparo; todo el mundo se da cuenta de que esas trámitaciones llevarían el caso mucho más allá del 26 de enero, víspera de la toma de posesión del presidente y fecha impostergable en la cual el Congreso debe elegir a los magistrados de la nueva Corte Suprema.

Se inicia entonces un extravagante psicodrama colectivo, en el que veremos el moralismo desafiar al legalismo. Por un lado, los partidarios de la «sociedad civil» se sienten engañados, trampeados, frustrados y furiosos. En un dos por tres deciden recurrir a la calle, mandando una delegación de manifestantes frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia. Pero esta gesticulación para nada sirve frente al impecable juridismo de la opción tomada por los magistrados de la Corte. Por el lado de los políticos, nadie se sabe qué partido tomar. Algunos se ríen para sus adentros de la mala pasada que se está jugando a la Junta y a sus partidarios. Pero ¿cómo hacer para no prestar atención a lo que se empeñan en hacer entender al presidente electo y a los hombres de influencia que lo rodean (Luis Cosenza, Porfirio Lobo y Jorge Ramón Hernández Alcerro, principalmente)? Éstos plantean que el Congreso podría perfectamente, por su propia voluntad, escoger los magistrados de la Corte en la lista de los 45 nominados elaborada por la Junta - tenga ésta valor legalmente obligatorio o no -, y que esta manera de respetar el espíritu de la ley sería la única actitud moralmente admisible por la opinión pública.

Frente a los que esta argumentación hace vacilar, los sectores más intransigentes del mundo político tradicional se atienen a la exigencia de un estricto respeto a la legalidad formal (¡que en este caso les conviene muy bien!). Entre esas dos opciones, los más cautelosos alegan que se podría muy bien conservar, por pura buena voluntad, la lista de los 45 nominados establecida por la Junta, pero agregándole algunos nombres de candidatos a título personal (¡con la seguridad de que el voto del Congreso favorecería necesariamente a estos «agregados», ironizan los partidarios de la lista!). En resumen, el mundo político se ve trastornado de pies a cabeza, la confusión reina en los corredores de los partidos, la opinión pública ya no sabe a qué santo remitirse, y los defensores de la «sociedad civil» siguen hirviendo en cólera.

En la tarde del jueves 24, los líderes de las principales organizaciones defensoras de la «sociedad civil» estaban, una vez más, sesionando en reunión de crisis. Se encontraban presentes, rodeando al ex-presidente de la Junta y a algunos de sus miembros más influyentes tales como Leo Valladares y Juliette Handal: los principales dirigentes de las centrales sindicales, los de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), los del FONAC, y otros representantes de diversos foros dedicados a la defensa de la democracia y del desarrollo sostenible; cuando, ante esta asamblea, de repente compareció el secretario privado del Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, portador de un mensaje que éste, para entonces ausente del país, le había encargado que venga a leer.

En este país profundamente marcado por la tradición católica, el arzobispo de Tegucigalpa es, sea cual sea quien ocupe el cargo, un personaje de gran consideración. Monseñor Rodríguez lo es más todavía desde que su elevación al rango de Cardenal llenó el país de orgullo (por primera vez tenía Honduras un Cardenal), y más todavía desde que se sabe que los rumores vaticanos, gustosamente divulgados por la prensa nacional e internacional, hacían de él uno de los candidatos mejor posicionados para la sucesión de Juan Pablo II.¹⁵

Ahora bien, ¿qué escribía el Cardenal en su epístola? Tomando la precaución de subrayar de entrada que sólo se expresaba a título personal sin comprometer la posición de la Iglesia, el prelado no se andaba con chiquitas para decir que lo actuado por la Corte Suprema al dejar en suspenso la lista de los 45 nominados escogidos por la Junta «*ponía al país en vergüenza nacional e internacional, defraudando al pueblo hondureño y degradando una vez más a la nación*».

A continuación, escudado en la eminencia de su autoridad moral, el Cardenal instaba a los entonces miembros del Poder judicial «*excusarse ante el pueblo hondureño por su actuación y por no haber procedido de acuerdo a los sentimientos de la ciudadanía*». Destacaba que con su manera de actuar la Corte «*había estado contribuyendo al retroceso de las pocas conquistas en el proceso de democratización*».

15 Nacido en Tegucigalpa, el 29 de diciembre de 1942, ordenado sacerdote en 1970, miembro de la congregación salesiana, Monseñor Óscar Andrés Rodríguez fue nombrado obispo auxiliar de Tegucigalpa en 1978. Es arzobispo desde el 8 de enero de 1993. Sucesivamente secretario general, luego presidente del Consejo Episcopal Latinoamericana (CELAM), fue elevado al purpurado cardenalicio el 21 de febrero 2001.

de la justicia que se había venido obteniendo». Alababa en cambio la posición del presidente electo, Ricardo Maduro, por haber pedido a los diputados que, para elegir a los nuevos magistrados, se apeguen a la lista propuesta por la Junta nominadora. En efecto, «era de su conocimiento que en la Junta nominadora siempre había prevalecido el total respeto a la independencia de criterios y que su selección fue de personas idóneas».

Abordando ahora el fondo de las objeciones jurídicas que apuntaban a invalidar las decisiones de la Junta por el motivo de que éstas habrían violado las reglas en materia de derechos de la defensa y de respeto de la presunción de inocencia, el Cardenal hacía valer primero que:

«Debe quedar claro que la Junta no es un tribunal de justicia. No juzga a las personas ni conoce asuntos para que ese proceder se declare con derecho o se resuelva su improcedencia: se trata de un órgano de confianza de la sociedad civil».

En cambio, poniendo en relieve que, habiendo sido la candidatura de cinco miembros de la actual Corte desechada por la Junta, esto les hacía interesados en el asunto, descalificándolos por ser, a la vez, jueces y parte en el caso.

Y el Cardenal remataba su condena al proclamar que:

«Si hay un pie del que hemos cojeado de manera permanente en el país, ese ha sido el que se apoya en la administración de la justicia, convirtiéndose una vez más en el talón de Aquiles del sistema democrático en que vivimos, tanto por su atraso conceptual o en sus formas de proceder, como por el enorme grado de corrupción que en torno a ella siempre ha girado».

En cuanto a los políticos de la partidocracia hondureña, el prelado les reprendía también sin la menor indulgencia:

«Es inaudito que algunos miembros de partidos políticos que han manipulado la administración de la justicia protesten porque sus allegados no fueron nominados en esta lista, ellos que a través de sus elecciones de magistrados han enlodado y llenado de cieno el Poder judicial, deben llamarse al silencio».

Divulgada por los periódicos del día siguiente,¹⁶ esta filípica produjo un enorme impacto en la opinión pública. Las voces más autorizadas del medio evangélico no tardaron en unirse a la del Cardenal, al unísono de todo lo que existe en el país en materia de instancias morales e intelectuales

¹⁶ Cf. «Según el Cardenal, fallo de la Corte pone en vergüenza al país», en: *El Herald*, 25 de enero del 2002.

independientes. Parece que del cuerpo social entero surgiera un enorme clamor de reprobación en contra de la clase política tradicional, de la cual se encontraba puesta al desnudo la increíble porfía de seguir cometiendo sus abusos con toda sinvergüencería. El sentimiento de escándalo público era tanto más vivo que en el se mezclaba la desesperación de ver que, a pesar de haberse puesto en alerta la opinión nacional y la vigilancia de la mirada internacional, parecía que la habilidad maniobrera de la clase política iba, una vez más, salir ganando, haciendo culminar la tecnicidad jurídica por encima de las legítimas expectativas de la sociedad.

Consecuencias y enseñanzas de un desenlace sorpresivo

En ese momento, cuando todo indicaba que la batalla estaba perdida sobre el terreno del derecho, sobrevino un rebote sensacional: el jueves 24 de enero de 2002 a eso de las 10 de la noche, el abogado que al introducir su recurso de amparo ante la Corte Suprema había provocado el «congelamiento» de la nómina de candidatos para la Corte, decidió repentinamente apersonarse en la iglesia de uno de los pastores evangélicos cuya predicación, coincidente con la del Cardenal, había contribuido a rematar la censura pública. Allí, en términos no desprovistos de énfasis, dicho abogado anunció el retiro de su demanda:

«Siento el mensaje del Pastor Evelio Reyes que ha tocado las ondas más sensibles de mi ser... Y encaminé mis pasos a esta iglesia para anunciarle al pueblo hondureño que mañana voy a retirar el recurso de amparo, porque yo no quiero ser semilla de discordia ni piedra de tropiezo».

Por la mañana del día siguiente, viernes 25 de enero, el arrepentido cumplió su promesa. Automáticamente su renuncia ponía fin a la invalidación de la lista de los 45. De modo que, ese mismo día, el Congreso se encontró en condición de proceder a la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema, conforme a la ley, es decir: escogiendo entre los 45 nominados que la Junta había seleccionado. Ya ninguna voz se hizo escuchar para reclamar que se actúe de otra manera.

Los preparativos de la elección fueron rápidamente tomados a cargo por una «concertación interpartidaria» en la que sólo figuraban los dos grandes partidos tradicionales. Pero nadie protestó por parte de los tres pequeños partidos representados en el Congreso. Al cabo de una noche de negociaciones reñidas pero breves, el sábado 26 de enero de 2002, a las 4:30 de la mañana, se pudo proceder a la elección de los quince

magistrados de la Corte Suprema. Ocho de ellos se beneficiaron con el aval del Partido Nacional, y los demás siete, del Partido Liberal.¹⁷

Ese mismo día 26, se juramentaron los magistrados de la nueva Corte Suprema. Acto seguido, ésta procedió a la elección de su presidente, cargo que, por primera vez en la historia de Honduras, recayó en una mujer: la Sra. Vilma Cecilia Morales Montalbán. En consideración del resultado de las últimas elecciones, ya reflejado por la mayoría dada al Partido Nacional en la composición de la nueva Corte, la presidenta fue escogida entre los magistrados simpatizantes del Partido Nacional.

Fue así que, a último momento, todo se arregló: la toma de posesión del presidente Maduro podrá celebrarse por la mañana del día siguiente, en un recobrado clima de serenidad y de regocijo. La «sociedad civil» no ocultaba su satisfacción ante la victoria obtenida sobre el entercamiento de la clase política. Una victoria sin embargo algo mitigada, puesto que, como acabamos de verlo, el bipartidismo tradicional terminó teniendo la última palabra (luego, es cierto, de haber tenido que renunciar a impedir que la «sociedad civil» se inmiscuyera en asuntos que, hasta ahora, la clase política consideraba como de su exclusiva incumbencia).

¿Débense compartir las reservas de algunos prosélitos de la «sociedad civil» quienes, en su ansia de acabar cuanto antes con lo que ellos llaman la «politización» de la vida pública en Honduras, consideran que sólo se trató de una victoria a medias, tan frágil que se podía temer que en cualquier momento se la pudiera impugnar? ¿O por el contrario, debemos opinar que esta despolitización, tan impacientemente codiciada por la «sociedad civil», constituye un objetivo contradictorio con el legítimo deseo de extender la participación en la toma de decisiones públicas a una parte cada vez más ancha de la sociedad? En otras palabras ¿no implica la

17 A las dirigencias de los dos partidos de gobierno no les había sido difícil identificar un número suficiente sus "correligionarios" en la lista de los 45 nominados por la Junta. Más complicada en cambio debió ser la escogencia interna, en ambos partidos, de los magistrados a quienes darían su aval. A prueba de eso, se notará que de los 8 nombres de nominados citados por la prensa del 23 de enero como «asegurados de salir electos» por parte de su respectivo partido (en la hipótesis de que su escogencia se opere en la lista de los 45 nominados por la Junta), solamente cuatro (3 sobre 5 entre los simpatizantes del Partido Nacional, y 1 sobre 3 en el Partido Liberal) se volvieron a encontrar, tres días más tarde, en la lista de los elegidos.

instauración de la «democracia» un esfuerzo para «politizar» más la vida pública, y no lo contrario?¹⁸

A los que, como respuesta a esta objeción proponen substituir la palabra *despolitización* por *despartidización*, se les recordará que en una democracia representativa, la política se opera normalmente por medio de *partidos*, instancias de reflexión y de militancia política en el seno de las cuales se definen las grandes opciones que se han de someter al voto de los ciudadanos. A falta de programas claramente planteados y públicamente defendidos por los partidos, el recurrir a las elecciones sólo puede tener como objetivo la defensa de intereses particulares, sectoriales o personales. En tal caso, el horizonte político se encoge a la dimensión del clientelismo, que es precisamente el vicio del que padece, desde siempre, la vida pública hondureña. Por lo tanto, en la óptica de un verdadero progreso hacia la democracia, la incitación a la «despartidización» parece, ni más ni menos, tan inapropiada como el llamado a la «despolitización»: las dos vienen a ser, en el fondo, la misma cosa.

Se ve muy bien por qué razón los que aspiran al advenimiento de la democracia en Honduras sienten tanta hostilidad contra los dos partidos de gobierno. Completamente desprovistos de ideal propio (¡al punto que, a los dos, se les ve dispuestos a adoptar cualquier ideología de turno, que generalmente es la misma para los dos; hoy en día: la neoliberal!), estos dos partidos no son más que simples maquinarias para la conquista del poder por sus respectivos «caciques». Sin otro mérito que el ostentarse como herederos de posiciones pasadas, éstos no tienen más perspectivas para ofrecer a sus activistas que la de esperar la redistribución de favores y prebendas.

Esta situación llevó a muchos analistas a considerar que la causa profunda del mal del que Honduras adolece reside en el bipartidismo. No obstante, se puede observar que en el mundo contemporáneo, grandes democracias se conforman muy bien con el bipartidismo. Cierto es que el multipartidismo parece ofrecer mayores oportunidades

18 Una observación semejante se aplica a las reticencias de la «sociedad civil» frente a la «mundialización». Al ver con qué entusiasmo los que más inmoderadamente se oponen a ella... mundializan su protesta, uno puede preguntarse hasta qué punto se oponen verdaderamente a ella. La cordura parece indicar que, si bien es cierto se debe cuestionar la manera con que la mundialización se extiende hoy en día, hay que concentrar los esfuerzos, no para rechazarla, sino para que se encamine de otra manera.

para la expresión de toda la gama de los anhelos políticos. Sin embargo se constata regularmente que, al momento de definir cuál será la fórmula del gobierno, la dispersión de las opciones se encuentra mecánicamente llevada a reducirse a una división binaria, propia para delimitar una mayoría y una oposición, claramente definidas por una cesura clara: izquierda/derecha, liberal o antiliberal, centralizadora o descentralizadora, etc.

Se comprueba por lo tanto que el bipartidismo no constituye necesariamente un mal en sí. Incluso se puede pensar que el bipartidismo podría ofrecer la fórmula ideal para la democracia representativa, con la condición de que cada una de las dos formaciones rivales mantenga en su seno un espacio de debate abierto para una multiplicidad de corrientes, cuya diversidad corresponda al abanico de las aspiraciones latentes en el cuerpo social. La ventaja de un bipartidismo así concebido reside en que la necesaria reducción de la variedad de opiniones internas a la síntesis operativa de un programa de gobierno (o de las bases de una oposición coherente) resulta de un debate interno, idealmente público y transparente, previamente al momento de la elección. En el multipartidismo, por el contrario, la necesaria síntesis destinada a deslindar claramente una mayoría gobernante y su oposición, sólo puede resultar de arreglos interpartidarios. Operados con posterioridad a las elecciones, dichos conciliábulos pueden distorsionar gravemente las intenciones que los ciudadanos quisieron expresar con su voto.

La viva desaprobación que se expresa en Honduras a través de los llamados a la «despolitización» o a la «despartización» de la vida pública y en acerbas críticas en contra del bipartidismo, se dirige, en realidad, al sectarismo oportunista de los aparatos partidarios y al cinismo de los caciques que los manejan. Pero se puede conjeturar que un eventual cambio del bipartidismo al multipartidismo no solucionaría nada. Es el estado de ánimo general, y sobre todo el comportamiento de las élites que se deben cambiar; no necesariamente la estructuración del sistema político.

Ahora bien, la generalización en el seno del movimiento «democrático» hondureño de un discurso desilusionado respecto a los aparatos partidarios no deja de preocupar, en la medida que podría ser el indicio de una peligrosa tendencia a una desestimación general de lo político. En tal caso, se podría temer que la impaciencia ante la lentitud e insuficiencia de las reformas termine por expresarse en pronunciamientos airados y simplificadores que, al acaparar fácilmente el potencial de movilización de la opinión pública, podrían preparar el terreno para un posible retorno a las demagogias populistas y a los gobiernos autoritarios. Esto generaría

situaciones peores que las que el movimiento «democrático» pretende ahora subsanar.

Sobre el particular, conviene recalcar cuán particularmente hábil y apreciable, por parte de los conceptores del dispositivo de la Junta nominadora, fue lograr reintroducir el control de los ciudadanos sobre la designación de los magistrados del Poder judicial, *sin despojar las instancias democráticamente elegidas de su legítimo poder de decisión*. En efecto, si realmente se pretende impeler a la representación política para que se moralice, conviene abstenerse de desconsiderarla, al privarla de sus atribuciones o de humillarla al colocarla bajo la tutela de una instancia de control (de la que, además, nadie puede garantizar que, a las finales, sería necesariamente más «democrática» que una representación resultante del sufragio universal).

Al haber logrado sabiamente limitar su intervención, colocándola en una etapa previa a lo que compete a los representantes elegidos de la nación, la institución de la Junta nominadora logró, sin lesionar la autoridad del Congreso legislativo, forzarlo a volver a tomar en cuenta la voluntad popular, en un dominio del que la práctica de una democracia puramente formal -consensual en Honduras desde hacía más de veinte años- había logrado eliminar cualquier control por parte de la ciudadanía.

Si este proceso de reformas pudo finalmente cumplirse, al cabo de acaloradas polémicas y de una serie de rebotes rocambolescos, fue porque esta acción se inspiró esencialmente de un empirismo que ne se dejó detener por la evidencia de que la invención de la Junta no siempre fue exenta de imperfecciones formales y de unos arreglos insólitos al límite de la ortodoxia jurídica. ¿Hubiese sido posible hacer algo mejor? Algunos, poco adictos al oportunismo jurídico y a la elasticidad institucional, opinarán que sí. Pero también se puede considerar que una actuación más rígida hubiese necesariamente conducido el proceso al fracaso.

Por una parte, en efecto, los hechos demuestran que en varias oportunidades se estuvo rozando peligrosamente con los límites de la anuencia al cambio por parte de las fuerzas en el poder. Pasar de esos límites, hubiera sido incurrir en el riesgo de llevar la confrontación hasta consecuencias impredecibles. Habiéndose evitado eso, a la hora de evaluar el resultado del proceso, hay que reconocer que los efectos positivos del nuevo modo de designación de los magistrados de la Corte Suprema no aparecen, por lo menos en el corto plazo, tan insignificantes como algunos se complacen en decirlo.

Impresiona primero la acentuada feminización que resultó del proceso de nominación: ya había un 40% de mujeres en la lista

establecida por la Junta (18 entre 45), y esta proporción subió a 60% (9 mujeres entre 15 magistrados) en la composición definitiva de la Corte.¹⁹ Además, por primera vez en la historia de Honduras, una mujer ocupa la presidencia del Poder judicial: una evolución inaudita en un país en el que las figuras tradicionales del magistrado, del juez y del político (así como, hay que decirlo, la fama de corrupción que se ata a dichos oficios), siempre fueron masculinas.

Esta bienvenida novedad, así como las esperanzas que hace despertar, no pueden hacer olvidar, sin embargo, que un cierto número de disposiciones del proceso de selección de los nominados por la Junta suscitan la perplejidad de los juristas y la inquietud de los demócratas. Es así que dan indiscutiblemente pábulo a las críticas:

- el carácter institucionalmente mal definido de los siete sectores representados en el seno de la Junta nominadora, así como lo impreciso del modo de elección de los 20 aspirantes en el seno de cada uno de aquellos sectores;

- la exclusión de cualquier ciudadano que anteriormente hubiera ejercido un mandato electivo a nombre de tal o cual partido: ¿Cómo, en términos de lógica y de derecho, puede alegarse que el honor de haber sido alguna vez elegido por el pueblo, se convierta en impedimento para acceder a otras funciones en el marco del sistema democrático?²⁰

- y la incitación pública a la delación, con la garantía de anonimato brindada a los delatores.

Este último punto tuvo como consecuencia que, para cualquier observador imparcial, el jurista que interpuso un recurso ante la Corte Suprema tenía toda la razón al sostener que las garantías

19 Se cuentan 5 magistradas entre 7 en la elección del Partido Liberal; y 4 entre 8 en el Partido Nacional. A título de comparación, recordemos que fue necesario esperar hasta 1981 para que, bajo la presidencia de Ronald Reagan, una primera mujer, Sandra Day O'Connor, fuera nombrada a la Corte Suprema de los Estados Unidos (donde, a diferencia de lo que sucede en Honduras, las nominaciones son de por vida).

20 Esta disposición difiere radicalmente de la interdicción de acumular mandatos, así como de la no reelección (o reelección limitada) en una función política cualquiera. Si cada uno entiende sin dificultad lo impropio de ser *simultáneamente*, por ejemplo diputado y magistrado de la Corte Suprema, prohibir el acceso a las funciones de magistrado en la Corte Suprema a toda persona que anteriormente haya sido elegido en una titularidad cualquiera, es transformar en oprobio lo que en principio es un servicio brindado a la nación y por ende participar en la satanización de lo político.

constitucionales de presunción de inocencia y de derecho a la defensa le habían sido denegadas. Aún si se perciben muy bien las razones coyunturales que la Corte tenía para regocijarse por ese recurso, la decisión que ella tomó de darle seguimiento, era jurídicamente irreprochable.

En resumen, el proceso de creación de la Junta nominadora se caracterizó por su alto grado de improvisación, resueltamente aproximativo, colindando muchas veces con los límites de lo arbitrario, y solucionándose finalmente por la irrupción de la moral religiosa y de la emoción popular en lo político. Un observador exterior podrá considerar esto como el producto de un barroquismo legislativo al límite de la excentricidad; o quizás con una pizca de ironía, como el resultado de una especie de homeopatía política que consiste en tratar el mal por el mal, substituyendo la arbitrariedad mal intencionada por una arbitrariedad bien intencionada.

Nuestra posición personal no dista mucho de adherirse a este último punto de vista. En efecto, está claro que en una situación caracterizada por la habilidad de los poderosos en atropellar todas las normas legales y, por su astucia, de aprovecharse, con fines personales o partidarias, de todas las lógicas institucionales, resulta evidente que nunca se podrá poner fin a esos malos hábitos por un simple reforzamiento del aparato legal.

De hecho, se puede opinar que la única alternativa a la imposición -autoritaria y muy probablemente inoperante- de normas exteriores, reside en la improvisación de dispositivos imaginativos, pragmáticamente flexibles, institucionalmente improbables, jurídicamente cojos pero politiqueramente realistas, siendo éstos los únicos capaces de dar chance a la satisfacción de los anhelos de cambio latentes en la sociedad. Sólo la puesta a prueba a diario del funcionamiento de la nueva Corte Suprema y su capacidad de resistir crisis, revelarán si acertaron las esperanzas que se pusieron en ella, con miras a una moralización de la justicia y a la liberación del Poder judicial de las malas influencias del sectarismo partidario.

La nueva Corte Suprema a prueba de crisis, primeras averiguaciones

Sobre el particular, los dieciocho primeros meses de existencia de la nueva Corte Suprema ya proporcionaron algunas aclaraciones. Dos primeras crisis marcaron este período: una crisis interna, a fuego lento; y otra externa, breve pero violenta y espectacular.

Hemos visto que sólo se pudo, para salir de apuros, cumplir a último momento con la urgente necesidad de elegir a los miembros de la Corte.

mediante una regresión a los viejos reflejos del bipartidismo tradicional. Por lo tanto, no se podía evitar que se reintrodujeran también en el funcionamiento cotidiano de la Corte los malos hábitos inherentes a ese sistema, marcado a la vez por el aconchabamiento que resulta de la voluntad de preservar la sempiterna presencia de uno de los dos partidos en el poder y por las acritudes que resultan de la impaciencia de hacerse de él en lo inmediato.

Recordemos que, limitados en su libertad de elección por la obligación de escoger los magistrados de la Corte Suprema en la lista de los 45 seleccionados por la Junta nominadora, los diputados de los dos grandes partidos habían tenido que contentarse con identificar sus respectivos partidarios en la mencionada lista. Acordaron entre ellos que el Partido Nacional, vencedor de las elecciones, se beneficiaría con la mayoría de ocho miembros en la Corte, concediéndose los siete escaños restantes al Partido Liberal. Esta mayoría prometía automáticamente la presidencia de la Corte a un magistrado del Partido Nacional, en este caso la Sra. Vilma Morales Montalbán.

Apenas inició sus funciones a principios del 2002, esta nueva Corte Suprema adoptó, en sesión plenaria, una moción dando carta blanca a su presidenta para proceder, en todo el país, a la depuración del sistema judicial suspendiendo, destituyendo o desplazando a los jueces y magistrados que hubiesen faltado a la ética profesional, a fin de reemplazarlos por otros, nombrados por ella. Adoptada por la mayoría de ocho votos contra siete, esta decisión que personalizaba la autoridad del Poder judicial bajo el pretexto de hacerla más eficiente, provocó el descontento de los magistrados liberales, que hubieran preferido que las decisiones de la Corte fuesen tomadas paso a paso, colegiadamente y en sesión plenaria, en vez de depender de la autoridad personal de la presidenta, en cumplimiento de un mandato acordado sólo por los magistrados de su misma obediencia política.

Esas reticencias no frenaron el ardor de la presidenta: en el 2002, luego del primer año de funcionamiento de la nueva Corte Suprema, un centenar de jueces sospechosos ya había sido desplazado y reemplazados por otros. Sin ser públicamente desmentida, la presidenta aseguraba que sólo el afán de moralizar el sistema judicial había motivado sus decisiones.

Fue entonces cuando sobrevino el hecho que iba a ponerle fuego a la pólvora. Desde la conclusión de su mandato en 1994, el ex-presidente de la república Rafael Callejas, del Partido Nacional, había sido objeto de una serie de acusaciones por delitos de corrupción, de favoritismo y de enriquecimiento personal ilícito, cometidos cuando ocupaba el palacio

presidencial. Durante los dos gobiernos siguientes, estando en el poder el Partido Liberal, éste nunca faltó en sacar el mayor beneficio político posible de las sospechas de corrupción que recaían en el régimen del Sr. Callejas. Sin embargo, los hechos incriminados nunca pudieron someterse a los tribunales puesto que, habiéndose hecho elegir diputado del Parlamento Centroamericano al salir de su mandato presidencial, el Sr. Callejas siempre pudo valerse de una inmunidad que le permitía sustraerse a la persecución de los jueces.

Habiendo el Partido Nacional vuelto al poder en 2002, esos viejos asuntos pudieron por fin remitirse a la jurisdicción de un tribunal. El veredicto de éste resultó extraordinariamente clemente: las acusaciones en contra del ex-presidente ¡fueron pura y simplemente desestimadas! Inmediatamente, ese fallo dió motivo a un recurso ante la Corte Suprema. Con una mayoría nacionalista, conforme a la división entre nacionalistas y liberales, ésta dictaminó que las decisiones del tribunal en cuestión no se podían tachar de ningún defecto.

Esto hizo estallar a los magistrados de obediencia liberal en la Corte Suprema, cuyos resentimientos ya se estaban calentando desde hace rato, al intuir que las destituciones de los jueces sospechosos y su substitución por otros a decisión de la presidenta Vilma Morales, lo más frecuentemente se limitaban a sancionar a jueces liberales, mientras que los que se nombraban en su reemplazo parecían simpatizantes del Partido Nacional. A esas recriminaciones, sus colegas de obediencia nacionalista argüían que las decisiones tomadas sólo se justificaban por las normas jurídicas. Así se encontraba resucitada, en el seno de la Corte Suprema, la clásica escena del sectarismo político hondureño; el poderoso del momento imponiendo su arbitrariedad, invocando descaradamente el respeto de la simple formalidad legal.

Las cosas estaban en ese punto, a principios del mes de mayo de 2003, cuando otra crisis, esta vez de origen exterior, vino de repente a reconciliar los magistrados, y reconsolidar la unidad de la Corte Suprema. Una de las novedades de la reorganización de esta instancia había sido la de prever la creación en su seno de una Sala constitucional, principalmente encargada de atender los recursos relativos a la conformidad de algunas leyes con la Constitución. De una manera más general, a esta Sala le corresponde arbitrar los litigios entre los diversos poderes del Estado. Ahora bien, vamos a ver que, a imitación de lo que a veces sucede en las canchas de deporte, puede ser que todas las partes en conflicto se unan en contra del árbitro.

Una de las particularidades del funcionamiento, un poco aproximativo es verdad, de la democracia hondureña era que,

conforme al artículo 205 de la Constitución (en el que se define que la primera atribución del Poder legislativo es «crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes»), el Congreso nacional, considerando que la Constitución es la primera de las leyes, había tomado el hábito, cada vez que le parecía conveniente, de facultarse a «interpretar» la Constitución. Es así que, desde 1982 (fecha de la restauración de una democracia formal en Honduras), los diputados habían reformado la Constitución *nueve veces*, mediante una mayoría simple... ¡como si se tratara de una ley cualquiera!

En algunos casos, esto se reveló útil para apaciguar el debate sobre algunos temas particularmente enmarañados. Es así por ejemplo que una hábil interpretación de la Constitución había permitido acabar con los enojosos cuestionamientos de la nacionalidad del Sr. Maduro, por los cuales algunos de sus adversarios querían cortar el acceso a la presidencia. Aprobada bajo el gobierno precedente, esta «interpretación» de la Constitución fue la última en haberse aprobado previamente a la creación de la Sala constitucional de la Corte Suprema.

La clase política tradicional se sintió particularmente incómoda con ese intento de privar al Congreso de su capacidad de «interpretar» a su antojo la Constitución del país. A manera de precaución, sin embargo, el 20 de octubre de 1999, los estados mayores de los partidos políticos habían hecho avalar por el Congreso un análisis del artículo 218 de la Constitución según el cual las interpretaciones de la Constitución realizadas por el Poder legislativo nunca podrían ser objeto de veto por parte de otro Poder del Estado. Por adelantado, eso cortaba las alas de la futura Sala constitucional de la Corte Suprema.

Por lo que parece, los reformadores se percataron un poco tarde de esta astucia mediante la cual el Congreso había cerrado el paso a toda posibilidad de recurso contra sus «interpretaciones» de la Constitución votadas mediante mayoría simple (es decir, prácticamente, con la sola voluntad del partido en el poder). No fue hasta el 13 de noviembre de 2002, cuando el nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio López, tomó la iniciativa de interponer, en nombre de la «sociedad civil», un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del 20 octubre de 1999. Seis días más tarde, la Corte Suprema hizo saber que aceptaba dar seguimiento a esta demanda del Sr. Custodio.

El veredicto se hizo esperar hasta el 7 mayo de 2003. Ese día, se supo que, por unanimidad, la Sala constitucional había declarado

«inconstitucional e inaplicable» el decreto del Congreso con fecha 20 de octubre de 1999. Esto equivalía a una declaración de guerra entre los poderes legislativo y judicial. Por el mismo hecho, se reavivan las hostilidades entre los defensores de la «sociedad civil» y las élites más reaccionarias de la clase política, espontáneamente reconciliadas por una connivencia que trasciende sus diferencias.²¹

En ambos bandos los ánimos no demoraron en calentarse. Reportadas en la prensa, las declaraciones de los unos y de los otros pronto alcanzaron niveles malsonantes, cada campo maldiciendo al otro en nombre de lo que decía ser la razón. De hecho, las posiciones eran inconciliables. Los veredictos de la Corte Suprema, siendo por definición inapelables, el legalismo formal, tanpreciado por la clase política tradicional, parecía esta vez inclinarse por el lado de la «sociedad civil». Y eso de manera irónica, puesto que convertía en inapelable la anulación de un decreto mediante el cual ¡el Congreso había querido que sus propias decisiones fuesen inapelables! En ese punto, no había más salida que la de entregarse al insulto, a la intimidación y a las amenazas.

Al respecto, muy aplaudida por sus seguidores, la arremetida pronunciada en el Congreso por el ex-presidente de esa entidad, Rafael Pineda Ponce, quedará en las memorias. Ilustra el modo de pensar de la fracción ultraconservadora de la clase política hondureña. Exasperado por la «sociedad civil» (a tal punto que había tomado por hábito llamarla *sociedad civilona*) y por quienes la apoyaban, aquel viejo político llegó hasta arremeter contra el representante del PNUD en Honduras, acusándolo de inmiscuirse en asuntos interiores de Honduras, advirtiéndole que en cualquier otra parte del mundo ya hubiera sido declarado *persona non grata*. Remataba su perorata, exclamándose: «Este señor, y los miembros de la *sociedad civilona*,

21 Enfatizamos una vez más en que la anuencia de la clase política hondureña para someterse a un proceso de «modernización» institucional, de ninguna manera resultó de una aspiración espontánea, pero sí de la presión conjugada de los donantes extranjeros y de una recién incipiente opinión pública. Esta nueva coyuntura modifica radicalmente el trazado de las líneas divisorias de la política hondureña. Dejando de lado sus viejos antagonismos de antaño, las fracciones conservadoras de los dos grandes partidos tradicionales tuvieron que hacer frente común contra las tendencias «modernizadoras», presentes en ambos partidos. Generalmente más jóvenes, los miembros de esas corrientes reformistas prestan un oído aparentemente más atento a las preocupaciones de la «sociedad civil», y se apoyan en esta connivencia para zarandear las viejas elites e tratar de apurar el momento de reemplazarlas en el poder.

deberían de ir a plantear estos asuntos en aquellos países de donde reciben paga para mantener sus ONG». ²²

Irreverentes, inmoderadas, esas palabras demuestran el nivel de impaciencia al que había llegado la clase política tradicional con los organismos de ayuda extranjera y con su determinación de no querer soltar los fondos para la reconstrucción hasta que se evidencien reales progresos hacia la democracia y los objetivos del «desarrollo sostenible». A despecho de sus motivos bien intencionados, esas presiones extranjeras son vistas como insoportables ingerencias por los políticos de viejo cuño, cuyo patriotismo es tanto más ágil para despertarse cuando se alimenta del sentimiento de una violación de su coto reservado. Con esta óptica, la «sociedad civil» —a veces muy apresurada, es cierto, en hacer llamado al supuesto «derecho de ingerencia»²³— se hace sospechosa de «agente del extranjero». De ahí su calificación despectiva como *civilona* que sobreentiende que se la considera, más que como «civil», como «falta de civismo».

Con los cinco magistrados de la Sala constitucional de la Corte Suprema, el resentimiento de la vieja guardia del Congreso es más vivo todavía. Ya que en este caso no se trata de adversarios de alguna manera «naturales», impenitentes soñadores izquierdistas irresponsables, sino de individuos teóricamente ligados por una solidaridad de casta y por ende traidores. Si con respecto a los de la «sociedad civil», los políticos profesionales sólo disponen del arma del sarcasmo y del menosprecio, medios de represalias mucho más consistentes se ofrecen a ellos en contra de estos «perjuros». Sobre quiénes, por ejemplo, se podía lanzar la acusación de violar el juramento prestado el día de su toma de posesión y de haberse puesto en el caso de podérseles aplicar el artículo 375 de la Constitución, según el cual los diputados están facultados a castigar con severidad a cualquiera que se haya hecho culpable de atentar contra los postulados de la ley fundamental. Pronto se diseminó en los pasillos del

²² Cf. «Congreso nacional: Denuncian intromisión foránea», en: *El Herald*, 14 de mayo de 2003.

²³ Cabe notar que que esta fobia de la ingerencia extranjera no era puro fantasma, pues el llamado a apoyos extranjeros se había convertido en un modo habitual de actuar por parte de los defensores de la «sociedad civil». Así por ejemplo, en este conflicto, el nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio López, había echado leña al fuego al amenazar públicamente con llevar el asunto al Colegio Internacional de los Defensores del Pueblo, si la intransigencia del Congreso lograra imponerse por encima de la competencia legal de la Sala Constitucional de la nueva Corte Suprema.

Congreso el rumor según el cual una mayoría estaba constituyéndose para votar la destitución de esos cinco magistrados «desleales» de la Sala constitucional de la Corte Suprema.

Dicha Sala constitucional se componía de tres magistrados nacionalistas y dos liberales. Eso no impedía que todos, sin distinción, fueran puestos en la picota por los estados mayores de los dos partidos, poniendo una vez más en evidencia hasta qué punto las crisis determinadas por el enfrentamiento entre la «sociedad civil» y el pasadismo de las élites políticas, determina solidaridades diferentes de las que define la afiliación partidaria.

Otra ilustración de este mismo hecho: el presidente de la Sala constitucional, Carlos Alberto Gómez Moreno, de afiliación liberal, se había mostrado, poco tiempo antes, virulentamente crítico del supuesto sectarismo partidario de la presidenta de la Corte Suprema.²⁴ Eso no impidió que esta vez la Corte en su conjunto se solidarizara con él, optando por declararse a favor de la «sociedad civil» y buscar apoyo en los que, tanto en el cuerpo social como en el personal político, opinan que el comportamiento intolerante de la viejas élites políticas ya no tiene razón de ser y que el porvenir pertenece a los audaces que no temen tomar partido por las reformas que la comunidad internacional induce adoptar.

Sin embargo, por un lado como en el otro, hay gentes que, a pesar de no querer incomodarse con los viejas cabecillas de su jerarquía, tampoco aprueban su anacrónica intransigencia. Vacilante, entre la audacia y el conformismo, esta fracción de la clase política no conforma un movimiento propiamente dicho; solamente una tendencia, de vagos contornos, más propensa a las avenencias que a las revueltas. Fue a partir de esta franja de congresistas menos radicalmente conservadores que las viejas guardias del liberal Pineda Ponce y del nacionalista Oswaldo Ramos Soto, que por fin se hicieron escuchar unas voces más comedidas. Sin llegar al extremo de desolidarizarse con esos ancianos líderes al punto de desaprobando su condena de la Sala constitucional, se limitaban a lamentar lo absurdo de la situación y a pedir para que se le dé una solución negociada, con el fin de evitar las consecuencias desastrosas que resultarían de una radicalización de la crisis.

Así por ejemplo: si se tuviera que aceptar el planteamiento según el cual las interpretaciones dadas a la Constitución por el Congreso nunca fueron conformes al derecho ¿deberían considerarse caducas las nueve interpretaciones realizadas desde 1982 y entre éstas la que permitió

²⁴ Cf. La doble página de entrevista publicada en *El Heraldo* del 3 de mayo del 2003.

solucionar la disputa acerca de la nacionalidad del presidente Maduro? En tal caso ¿no estaría éste expuesto a volverse legalmente inelegible y, por lo tanto, ilegítimamente elegido? ¿Sería razonable dejar puerta abierta a tamaño lio?

Paulatinamente, las prudentes advertencias de aquellos moderados hicieron bajar las tensiones, trazando el camino para una solución de la crisis. Por otra parte, desde lo alto del Poder ejecutivo, el presidente Maduro nunca desistió de negar que existiera un real conflicto entre los tres poderes del Estado. De su lado, el Presidente del Congreso, Porfirio Lobo, se aplicó en mantener él mismo lenguaje. Igualmente, la Presidenta del Poder judicial evitó contribuir a dramatizar el debate. El Cardenal por fin, una vez más, hizo públicamente conocer su posición al hacer observar que, en su criterio, el Congreso aparecía en esta polémica a la vez como juez y parte, por lo que se descalificaba su actuación. Agregaba que, en los diversos países en los que logró afianzarse la democracia, no es al Poder legislativo sino a una Corte Constitucional a la que corresponde el oficio de interpretar la ley fundamental cuando sea necesario.

Viendo que esas altas autoridades desertaban del campo de batalla, se pudo resolver el problema de manera consensual, regresando todos al sentido común. Al Congreso se le confirmó en su capacidad de revisar la Constitución, con tal que esto se haga según el procedimiento indicado por la misma: aprobándose las reformas con la mayoría de los dos tercios de los votos, y sobre el lapso de dos legislaturas, ratificándose en la segunda lo adoptado en la precedente. Esta satisfacción públicamente concedida al Poder legislativo, encubría que se avalaba la anulación, por la Sala constitucional, del decreto del 20 de octubre de 1999. Y se cerró la caja de Pandora al acordar que dicha anulación no tendría efecto retroactivo. Por lo tanto, no se puede cuestionar la validez de las «interpretaciones» de la Constitución dadas por el Congreso en los anteriores decenios.

A buena distancia todavía de un funcionamiento sosegado de la democracia...

De esas peripecias parece desprenderse la conclusión de que las tendencias más groseramente reaccionarias de las antiguas elites políticas sufrieron una derrota. Sin embargo, nada permite conjeturar que los viejos líderes renunciaron a la lucha, siempre con los mismos reflejos del sectarismo bipartidario, de los que se puede observar que van renaciendo

hasta en el seno mismo de los órganos ideados para neutralizarlos, tal como se averiguó en la Corte cuya composición resultó del nuevo método de reclutamiento.

Se confirma, sin embargo, que las maniobras de la clase política corren al fracaso cada vez que un escándalo público les priva de la discreción indispensable para que sus intrigas sean exitosas. De esto se desprende que la eficacia de la intervención de la «sociedad civil» depende de la constante reiteración de estrepitosas crisis, que llevan al orden institucional al borde del colapso. Lo menos que se puede decir es que todavía se dista mucho de un curso apaciguado de la democracia. Y uno se puede preguntar si esta forma paroxística de debate no va a terminar por cansar la paciencia y provocar el desánimo ante el pertinaz juridicismo, aparentemente más «civilizado» y hasta supuestamente más «patriótico», de las combinaciones politiqueras.

Dos factores, sin embargo, se oponen a esta forma de normalización reaccionaria. El primero se ubica en el exterior del país: se trata de la vigilancia planetaria (paternalista pero desbordante de recursos económicos) que ejercen de manera convergente: los órganos multilaterales de financiamiento, las ayudas bilaterales, los enérgicos celadores de la democracia neoliberal y, para terminar, el exuberante concierto de las militancias «humanitarias» dedicadas a todos los motivos de lucha que pregonan los intelectuales burgueses del Norte (humanitarios, ambientalistas, feministas, ruralistas, culturalistas, anti o altermundialistas, derechos-del-hombristas, etc.). A remolque de este extraño enganche, heteróclito y no siempre desinteresado, se arriman mal que bien las aspiraciones reformistas de la «intelligentsia» hondureña, y de todo lo que subsiste en el país de los movimientos populares progresistas. El carácter desarticulado de sus referencias extranacionales no está sin nexo con el aspecto desbridado de los empujones políticos que resultan del activismo de la «sociedad civil» hondureña y con la dudosa coherencia de los compromisos que de él resultan.

No se puede augurar que ese estado de efervescencia simpática y a veces imaginativa, pueda durar indefinidamente. Tampoco va a perdurar el contexto internacional que la favoreció en el período post-Mitch, cuando las ayudas para la reconstrucción afluyeron, condicionándose por la demostración de visibles progresos hacia la «democracia», la «buena gobernabilidad», el «desarrollo sostenible», y demás eslóganes del momento. Cinco años después de la catástrofe, la fase de la «reconstrucción» está por declararse concluida. Pronto sólo subsistirán de la gestión política del Mitch dos ventajas indirectas deducidas de la

catástrofe: la inscripción de Honduras en la lista de los «países pobres altamente endeudados» con la consiguiente condonación de algunas de sus deudas, y el TPS que suspende temporalmente la expulsión de un buen número de hondureños que residen de manera ilegal en los Estados Unidos.

En esas condiciones, si se quiere que el movimiento de reforma de las instituciones y de enmienda de las costumbres políticas siga adelante en Honduras, en lo sucesivo tendrá que apoyarse cada vez más en las dinámicas locales y, cada vez menos, en el benévolo sostén del exterior. Conscientes de esto y porque no creen del todo en la existencia de sinergias locales capaces de oponerse a su poder sin refuerzos extranjeros, las fuerzas conservadoras no abandonaron el combate, contentándose con mantenerse a la espera del regreso de una coyuntura más favorable para ellas.

¿Triunfarán ellas en las finales? Para hacerse una idea clara al respecto conviene proceder al análisis del otro factor político, interno esta vez, que en el período reciente permitió infligir indiscutibles reveses al oscurantismo conservador de la vieja guardia política. Menos circunstancial que la súbita benevolencia del extranjero a partir de fines del 1998, este factor ya estaba actuando antes de la catástrofe y se puede suponer que sobrevivirá al período post-Mitch.

Ha de notarse que, en la resolución de las dos crisis descritas en el presente capítulo, la intervención del Cardenal se reveló decisiva. Personaje eminente y muy hábil, el arzobispo de Tegucigalpa goza de un prestigio absoluto: Honduras todavía vive en la gloria que derramó sobre ella la elevación de su prelado al purpurado cardenalicio. Más todavía, la reputación de candidato al papado generalmente atribuida a Monseñor Rodríguez permite a esta pequeña nación modesta y desproveída, hasta ahora insegura en su identidad y en su coherencia, mantener fabulosas esperanzas de acceder a la visibilidad mundial, lo que no se pudo esperar, hasta ahora, sino esporádicamente por el fútbol.

En su actuación pública, siempre se esmeró Monseñor Rodríguez en no poner exageradamente en relieve la influencia de la Iglesia católica, insistiendo siempre en el carácter personal —y por lo tanto no institucional— de sus tomas de posición. También demostró un incansable ardor ecuménico en asociar con sus posiciones la autoridad moral de los pastores evangélicos. Sin embargo, esta caritativa prudencia no puede opacar el hecho que, desde hace muchos años, fue el clero católico —a menudo bajo el impulso de unos sacerdotes extranjeros— que, mediante la «pastoral social» desarrollada en lugares potencialmente conflictivos (Choluteca,

Santa Rosa de Copán, El Progreso, Tocoa, Olancho, etc.), logró mantener o reanimar en el país el ardor desvanecido de los movimientos populares, duramente afectados por el hundimiento de los sindicatos y la esfumación de la promesa marxista.

El profundo atavismo de fervor cristiano que existe en Honduras mantiene en las capas modestas de este país un extraordinario potencial de movilización. Para convencerse de ello, basta ver las espectaculares demostraciones de misticismo que se exteriorizan cada año en las procesiones de Semana Santa y en las celebraciones de la Virgen de Suyapa. Esta ardiente religiosidad no constituye en sí un factor propiamente político, pero sí mantiene en reserva un enorme potencial de abnegación y de fervor militante, muy temible para quienes cuya inmoralidad podría ser designada como blanco a la vindicta pública.

Esta herencia de ardor religioso se encuentra hoy en día disputada por dos tipos de apostolados: por una parte, la tendencia extática, fraternizante y utilitarista de una nube de iglesias evangélicas, que los católicos suelen llamar «sectas».²⁵ Por la otra, la fuerte motivación social de la fracción de la Iglesia católica motivada por «la opción prioritaria para los pobres», otrora definida en Medellín. Son éstos últimos, por supuesto, los que se mostraron más activos en el «movimiento de la sociedad civil».

Los más intransigentes pilares del cinismo político en Honduras no albergan dudas al respecto: para ellos, el verdadero peligro reside en la posibilidad de ver esta minoría de activistas religiosamente motivados arrastrar tras de sí a la inmensa mayoría del viejo fondo católico de la sociedad hondureña. Resulta entonces esencial para ellos evitar ese deslizamiento de lo religioso hacia lo político. Fue porqué, a falta de poder enfrentarse directamente con la personalidad del Cardenal Rodríguez cuando éste se incomodó con las maneras de actuar de la clase política tradicional, ésta hizo todo lo posible para intentar alejar al prelado del

25 STOLL 1990, evaluaba la importancia de la comunidad evangélica de Honduras en algún 10% de la población. Ese número debe haberse acrecentado bastante en el transcurso de los últimos años. En 1997, HOKSBERGEN y ESPINOZA MADRID consideraban que más del 75% de las iglesias evangélicas de Honduras pertenecen al movimiento pentecostal, el cual se ve «más propenso en hacer hincapié en la salvación, y no en el desarrollo de alguna visión social» (p. 43). Esos mismos autores agregaban que: «Hay poco apoyo al neoliberalismo entre los evangelistas. La mayor parte de ellos, los pentecostales, son agnósticos en materia de cuestiones económicas y políticas; pero los que hacen escuchar las voces más altas, los radicales, se oponen de manera vehemente a las ideas neoliberales y a los proyectos que se inspiran de ellas» (p. 45).

terreno político. Dos métodos sirven para esto: la intimidación jurídica y la hipocresía que consiste en insistir en la prioridad de lo religioso.

Es así por ejemplo que, en las semanas que siguieron la miniguerra entre el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, insistentes presiones se ejercieron sobre el Cardenal para que éste vaya a justificar ante los tribunales su eventual intervención en el debate acerca de los juicios seguidos en contra del ex-presidente Callejas y en otros asuntos que, directa o indirectamente, ponen en apuros a altos personajes del Estado. Por supuesto, el prelado no fue tan ingenuo como para ceder a esas presiones. Mejor aún: éstas le proveyeron la ocasión de aleccionar a los políticos que le sugerían que mejor haría de dedicarse a las cosas de Dios y no de la política. Contestando a aquellos diputados, el Cardenal expresó que *«con eso lo que dicen es que no son católicos y estoy convencido de que si son políticos, deben dedicarse a la política como Iglesia, de lo contrario no son Iglesia»*.²⁶

Demostrando una vez más la astuta prudencia del Cardenal, esta sibilina respuesta nos remite a la perplejidad ante el involucramiento del apostolado cristiano en la instauración de la democracia, modo de gobierno teóricamente racional y laico, orientado por la preeminencia del individuo y la preservación de sus intereses. ¿Puede lo religioso disolverse en lo político? Es permitido dudarlo. Pero se comprueba que, en Honduras, la vigilancia moral que se fundamenta en el arraigamiento de lo religioso constituye, sin lugar a dudas, y por plazos muy superiores al espacio de resonancia de la catástrofe del Mitch, la más sólida protección contra un sistema de gestión social y política, en el que la arrogancia de los poderosos y sus abusos de poder siempre se han visto como cosas normales.

26 Cf. «Cardenal dice que Congreso no puede ser juez y parte», en: *El Herald*, 20 de mayo de 2003.

ANEXOS

ANEXO 1

**CRONOLOGÍA DE LOS SUCESOS, 18 DE OCTUBRE
30 DE NOVIEMBRE DE 1998****Domingo 18 de octubre**

Lluvias estacionales muy abundantes caen sobre Centroamérica. No cesarán hasta el final del mes.

Miércoles 21 de octubre

Una depresión tropical se está formando sobre el Mar Caribe.

Viernes 23 de octubre

Los medios audiovisuales de Honduras informan a la población acerca del riesgo de un posible huracán.

Sábado 24 de octubre

Siempre situada sobre el mar, la depresión tropical pasa a nivel de huracán y recibe el nombre de Mitch.

Lluvias, todavía independientes del proceso ciclónico, no dejan de caer sobre Honduras.

Domingo 25 de octubre

Por la mañana, el *Fantome*, nave de recreo norteamericana, embarca turistas en Omoa.

El Centro de Ciclones de Miami comienza a emitir mensajes de alerta en dirección a Honduras: sobre el Mar Caribe, a 790 Km al Sudeste de Cozumel y 250 Km al Norte de la Mosquitia, el ciclón Mitch alcanza el grado 4 (sobre la escala de 5 que mide la intensidad de los ciclones) y toma una dirección Oeste-Noroeste, a la velocidad de 13 Km/h, con vientos que alcanzan 240 Km/h y ráfagas de hasta 285 Km/h.

Esa misma noche en Tegucigalpa, el Comité Nacional de Contingencias (COPECO) recomienda a la población tomar medidas de precaución, teniendo en cuenta la amenaza ciclónica que se está perfilando.

Lunes 26 de octubre

Todavía sobre el mar, Mitch alcanza su presión más baja (904 hectopascales). Se le atribuye el grado 5, el más elevado sobre la escala de Saffir-Simpson. Se mantendrá en ese nivel por casi 24 horas.

En las primeras horas de la mañana, el ciclón parece alejarse de las costas hondureñas, pero sus movimientos son erráticos, no pudiendo pronosticarse con certeza su orientación futura. Los meteorólogos estiman que el Mitch debe enrumbarse hacia Jamaica, las Islas Caimán y Cuba, donde ya están cayendo lluvias muy abundantes. Sin embargo, se mantiene el aviso de alerta para Belice, las regiones de Cancún y de Cozumel en México, así como del litoral hondureño.

Al final de la mañana, el *Fantome* desembarca sus pasajeros y una parte de su tripulación en el puerto de Belice. Seguidamente, a las 12h30, la nave zarpa hacia el Este, para dirigirse al sur de Roatán, donde piensa ponerse fuera del alcance del ciclón.

En Tegucigalpa, el legislativo y el ejecutivo se movilizan: mientras el Congreso decide declararse en sesión permanente, el presidente Flores convoca el Consejo de Ministros y decreta el estado de «alerta roja» sobre todo el litoral norte, en donde aguaceros torrenciales no paran de caer. Recomienda además que se tomen medidas preventivas en todo el país. A este efecto, las Fuerzas Armadas son puestas en pie de guerra. Previendo que 60,000 a 80,000 personas podrían ser afectadas, el Ministerio de Salud y los servicios hospitalarios entran en alerta las 24 horas del día.

Martes 27 de octubre

En previsión de la llegada del ciclón (que mientras tanto recayó a nivel 4, con vientos sostenidos del orden de 195 Km/h), se invita a la población de la Isla de Guanaja a buscar refugio en los lugares más elevados de la isla.

Habiendo el presidente Flores puesto todos los medios militares de transporte aéreo al servicio de esta operación, el millar de turistas que se encontraban en los hoteles de las islas pudieron ser evacuados.

En la Costa Norte, se dereta el cierre de los establecimientos escolares y demás servicios públicos. El ejército procede a la evacuación de 5,000 habitantes de las zonas de producción bananera cercanas a El Progreso. Situadas bajo el nivel de las aguas del río Ulúa, éstas se encuentran, en efecto, bajo la amenaza de una ruptura de los bordos.

Aunque el presidente Flores recomienda evitar sembrar el pánico, la prensa nacional se muestra muy alarmista. *El Heraldo* pronostica que el huracán Fifi de 1974 «será poca cosa» en relación al Mitch. Y *La Prensa*, que también invita a sus lectores a prepararse para una inmensa catástrofe, anuncia que en Tegucigalpa unas 20,000 personas que viven en zonas de riesgo deberán ser evacuadas. De su parte, la Iglesia católica de Honduras lanza un llamado a todas sus parroquias a fin de que se movilicen todos los medios humanos y materiales para enfrentarse a la catástrofe.

Hacia el medio día, inexplicablemente, el huracán se inmoviliza cerca la Isla de Guanaja, un poco al este de ésta, donde va a estacionarse durante 39 largas horas.

A las 16h 30, el *Fantome* naufraga frente a Roatán.

Debidas, esta vez, a la proximidad del ciclón, lluvias cuatro veces más abundantes que las que en 1974 acompañaron el huracán Fifi, caen sobre la costa atlántica, provocando crecidas que derrumban puentes y carreteras, aislando las poblaciones del resto del mundo. Tal es el caso de la ciudad de La Ceiba, transformada en una isla por el desplome de todos los puentes. Todo el valle del Río Aguán está inundado. Ahogados o sepultados por el derrumbamiento de sus casas, 300 personas mueren en Santa Rosa de Aguán. Refugiadas sobre los techos de sus casas o en los árboles, otras 3500 aguantan aterrorizadas el incesante asalto de los aguaceros.

Miércoles 28 de octubre

A las 7 de la mañana, en la Barra del Aguán, Isabela Arriola es arrastrada hacia el mar por la crecida del río Aguán.

El Mitch se ensaña sobre Guanaja, cuyas costas son golpeadas por olas de unos diez metros; un 80% de las casas de la isla son destruidas. Marginalmente afectadas por el ciclón, las islas de Roatán y Utila no sufren más que ligeros daños. Como medida de precaución los habitantes de los cayos, de muy escasa elevación sobre el nivel del mar, han sido evacuados hacia las islas principales.

Mientras tanto, 700 mm. de lluvia caen sobre el litoral norte. El presidente Flores decreta el estado de emergencia en los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón, Yoro y Gracias a Dios. Las ciudades de Tela, Puerto Cortés, San Pedro Sula, La Lima, El Progreso, Villanueva, El Negrito y Yoro, así como las regiones que las rodean, son afectadas por el desbordamiento de todos los ríos, donde las crecidas se agravan por el hecho de que la marea ciclónica se opone a su entrada en el mar.

Debido a una ruptura de los bordos del río Chamelecón, dos mil familias deben ser evacuadas. La Lima esta completamente bajo las aguas; 2,000 personas, refugiadas sobre una carretera más elevada, esperan ser socorridas. Cerca de Bellavista, el Río de Piedras también amenaza con desbordarse.

Por la mañana, *El Herald* anuncia que en el sur del país, Choluteca también se declaró «en alerta roja». *La Tribuna*, que informa de vientos de 55 Km/h sobre el interior del país, avisa a sus lectores de un riesgo de inundaciones en toda centroamérica.

Los primeros derrumbamientos se producen en Tegucigalpa.

Jueves 29 de octubre

Al tocar las costas hondureñas, el Mitch pierde rápidamente su energía (cayendo al nivel 2, a las 2h de la mañana, y al nivel 1, a las 3h y media) y regresa al grado de tormenta tropical a mediodía. Esta tormenta tropical transita entonces entre Limón y Trujillo.

La ciudad de La Ceiba, que sigue aislada y en donde 5 puentes intraurbanos también han sido destruidos, está totalmente privada de electricidad. El nivel de las crecidas comienza a bajar en esta ciudad, donde no llueve más y el viento cesó. Por el contrario, Tela, Puerto Cortés, San Pedro Sula y El Progreso sufren inundaciones y no paran de soportar precipitaciones diluvianas. El nivel no cesa de subir en todos los ríos y esto inquieta mucho, pues las previsiones indican que la lluvia no dejará de caer antes de 72 horas.

A medio día, el Comité Regional de Emergencias (CODER II) de San Pedro Sula emite un comunicado de alerta indicando que la situación alcanzará un nivel crítico en el curso de las próximas horas. Todas las poblaciones establecidas en zonas inundables son invitadas a dirigirse, por sus propios medios, hacia lugares más elevados. San Pedro Sula, privado de agua potable y cuyas calles se han convertido en ríos, se llenó de refugiados: 26,310 de ellos se encuentran albergados en 29 centros de ayuda. El aeropuerto de San Pedro Sula ha sido cerrado, convirtiéndose la base norteamericana de Palmerola en el punto más cercano por el cual la ayuda exterior puede llegar, pero con mucha dificultad. El mar ha invadido las calles de Puerto Cortés y los barcos no pueden más atracar en el puerto.

En el centro del país, una avalancha de agua, lodo y piedras arrasó La Libertad (Comayagua). Sembrando muerte y desolación, ese fenómeno prefigura lo que va a pasar dos días más tarde en Tegucigalpa.

Fuertes lluvias se han abatido sobre la región de Choluteca, donde se deploran numerosas destrucciones de casas, dos muertos y 2,000 refugiados.

De visita en San Pedro Sula, el presidente Flores, considerando que la amplitud del desastre sobrepasa las capacidades nacionales de reacción, decide hacer un llamado a la ayuda internacional. Procedentes de los Estados Unidos, veinticinco primeros expertos en ayuda de emergencia llegan ese mismo día a San Pedro Sula.

Viernes 30 de octubre

El presidente Flores decide extender el estado de emergencia a todo el territorio hondureño.

La ruptura, en la noche, de los bordos del río Ulúa, provocó la inundación de El Progreso. Sólo la mitad de la ciudad de San Pedro Sula todavía dispone de electricidad. En el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, el nivel del agua alcanzó el primer piso de los edificios, causando graves daños en los sistemas de control de la navegación aérea.

En la zona norte, las autoridades estiman haber albergado a 150,000 refugiados, pero el número total de los damnificados debe ser mucho más elevado, si se toma en cuenta a los que se han remitido al cuidado de las asociaciones y de personas particulares.

Las lluvias torrenciales no paran de caer sobre el noroeste del país, mientras que la perturbación, cuyos vientos disminuyeron enormemente de potencia, se estaciona ahora sobre el norte de los departamentos de Yoro y de Olancho. Semi inundada e invadida por el lodo, la ciudad de Olanchito está sin electricidad. Un puente caído impobibilita el tráfico entre Juticalpa y Catacamas.

Desde las primeras horas del día, la crecida de los ríos que convergen hacia Tegucigalpa provocó derrumbes y deslizamientos de terrenos, causando un gran número de muertos y damnificados. En el centro de la ciudad, que fue oficialmente declarado en estado de catástrofe, el río Chiquito inunda el viejo barrio de La Hoya. Cerca de allí, un motín se ha declarado en la Penitenciaría Central. Habiéndose asomado para tomar fotos sobre un edificio vecino, al derrumbarse éste, el fotógrafo de prensa Víctor Saucedo desaparece arrollado por las aguas torrentosas. Lo que se supone eran sus restos, sólo serán encontrados en marzo del 2000, en los sedimentos del río Choluteca, a 120 Km de Tegucigalpa.

En Nicaragua un catastrófico deslizamiento se produce a las catorce horas sobre la vertiente sur del volcán Casita, (un primer derrumbe se había producido, sin causar daño, entre las 10h30 y las 11h).

Bajo el efecto de las lluvias, el nivel del Lago de Managua no deja de elevarse. Esta crecida alcanzará 4 metros. A consecuencia de esto, por primera vez, desde 1955, se reestablece una comunicación entre los dos grandes lagos de Nicaragua, creándose un torrente que en su momento más fuerte llegará a acarrear hasta 83 m³/sec de agua.

Los ríos también se desbordan en la Mosquitia, provocando inundaciones en ambos lados de la frontera hondureño-nicaragüense. Entre tanto, la tempestad tropical transita lentamente sobre Olancho, en el centro de Honduras.

Noche del 30 al 31 de octubre

En Tegucigalpa, que desde la media noche soporta lluvias violentas, la desastrosa subida de las aguas de los ríos Grande, Guacerique y Chiquito y sus afluentes se preparan para destruir 11 colonias y 80 barrios. Un primer deslizamiento arrasó unas cincuenta casas de las colonias Satélite y Altos de Loarque, destruyendo el puente que las unía con el resto de la ciudad. En las colonias El Loarque y Nueva Esperanza, unas familias refugiadas sobre los techos de sus casas fueron arrastradas por las aguas a medida que sus casas se iban derrumbando. Otros lugares gravemente siniestrados: las colonias Soto, Kuwait, Betania, Rivera, La Vega, El Progreso, Monterrey Norte, Miramesí, Casandra y Los Encuentros, así como los barrios Las Delicias, San Rafael, La Guadalupe, La Hoya, Barrio Abajo y La Concordia. A las 4 horas de la mañana, la Primera y la Segunda Avenidas de Comayagüela están bajo las aguas, así como los mercados de la Cuarta y Quinta Avenida; los dos pisos del Ministerio de Educación han sido tragados por la inundación.

Devastadora, la crecida se expande hacia abajo por todo el valle del río Choluteca, provocando la destrucción completa de Morolica, municipio de 1,500 habitantes, donde sólo quedan en pie las ruinas de la iglesia. Cinco barrios de Orocuina son también borrados del mapa. Graves daños ocurren también en Marcovia, así como en la ciudad de Choluteca donde se reportan gran número de muertos y 100,000 damnificados.

Entre tanto, la tempestad tropical Mitch cruza por los alrededores de Comayagua.

Sábado 31 de octubre

Duelo Nacional en Honduras. El toque de queda es decretado en Tegucigalpa.

Pasando sobre Gracias, el Mitch se degrada al nivel de simple depresión tropical antes de abandonar el territorio de Honduras para entrar en Guatemala.

Domingo 1° de noviembre

Muerte de César Castellanos, alcalde de Tegucigalpa, y de las tres personas que lo acompañaban en helicóptero para evaluar los daños causados por las crecidas en la capital de Honduras.

Salidos del territorio hondureño, los vestigios del Mitch pasan por el norte de la capital guatemalteca.

Lunes 2 de noviembre

La ayuda internacional comienza a llegar a Tegucigalpa.

Los vestigios del Mitch retoman algún vigor al entrar en el mar, sobre la Bahía de Campeche, en México.

Martes 3 de noviembre

Isabela Arriola es rescatada en el mar.

Llegada a Tegucigalpa del periodista francés Nicolas Poincaré.

Vecino del volcán Casita, el Cerro Negro entra en erupción en Nicaragua. Ese mismo día, como consecuencia de las precipitaciones muy intensas que no dejan de caer, otro deslizamiento de terrenos se produce en la falda Norte del volcán Casita, destruyendo 34 casas, pero felizmente, sin provocar más pérdidas de vidas humanas.

Lunes 9 de noviembre

Precipitadamente reunidos en cumbre en el aeropuerto de San Salvador, los presidentes de los cinco países centroamericanos emiten una declaración solemne en la cual proclaman, de entrada, que el modelo de desarrollo neoliberal seguido en sus países no tiene nada que ver con la catástrofe que se acaba de sufrir. Reiterando que ese modelo de desarrollo es el mejor posible, ellos dirigen una serie de pedidos al gobierno de Estados Unidos. La naturaleza de esos pedidos atestigua su voluntad de reforzar la orientación neoliberal de sus gobiernos.

Lunes 16 de noviembre

Visita del presidente Chirac a Centroamérica. Encuentro improvisado del mandatario francés con la Sra. Hillary Clinton y el Sr. Michel Camdessus, presidente del FMI, en el aeródromo de Managua.

Lunes 30 de noviembre

De regreso a Tegucigalpa, por un complemento de información, el periodista francés Nicolás Poincaré pone aparatosamente en duda el número de víctimas del Mitch, estimando que las cifras fueron al menos multiplicadas por diez por el gobierno hondureño.

ANEXO 2

CLASIFICACIÓN DE LOS CICLONES

La insistencia de los medios de prensa internacionales para categorizar el Mitch como «cuarto ciclón del siglo XX» es, en gran parte, responsable de la comprensión errónea de la verdadera naturaleza de la catástrofe que golpeó a Centroamérica y a Honduras. Primero, porque esta formulación induce en una confusión entre el nivel de presión atmosférica y la violencia de los vientos.¹ Además, como lo puntualizan muy bien HELLIN & HAIGH 1999, se subestima generalmente el potencial destructivo de los ciclones por el hecho de clasificarlos según la escala de Saffir-Simpson, que solamente se refiere a la velocidad alcanzada por los vientos sostenidos más fuertes.² Ahora bien, lo más común es que las consecuencias más graves de un ciclón, en términos de pérdidas humanas y de destrucciones materiales, no son directamente atribuibles a la acción de los vientos, sino más bien -tal como se verificó en Honduras con el Mitch, al igual que con su predecesor Fifi, en 1974- se deben a las consecuencias de las lluvias diluvianas que se desencadenan alrededor de la trayectoria de la perturbación ciclónica propiamente dicha.

1 El cuarto rango atribuido al Mitch sólo toma en cuenta la presión atmosférica más baja alcanzada por el ciclón: 905 milibares (o hectopascales, según la terminología adoptada oficialmente), en igualdad con el ciclón Camilla del 17/8/69, pero menor respecto a los 899 milibares de Allen el 7/8/80, los 892 del ciclón que azotó los Cayos de Florida el 3/9/35, y los 888 milibares de Gilbert el 13/9/88, que constituyen el valor más bajo jamás registrado en la Zona Atlántica. El récord mundial de las presiones más bajas al nivel del mar pertenece al tifón Tip en el Océano Pacífico, con 870 hectopascales el 12/10/79.

2 La escala de Saffir-Simpson establece cinco categorías de ciclones:

- clase 1: con vientos máximos comprendidos entre 118 y 153 Km/h;
- clase 2: con vientos máximos comprendidos entre 154 y 177 Km/h;
- clase 3: con vientos máximos comprendidos entre 178 y 209 Km/h;
- clase 4: con vientos máximos comprendidos entre 210 y 248 Km/h;
- clase 5 (categoría de los súper ciclones): con vientos máximos sobrepasando 248 Km/h.

La extraña e ilusoria precisión matemática de las velocidades de los vientos que definen las clases de ciclones proviene de que se siguen utilizando antiguas unidades de marina en la definición de la escala de Beaufort que sirve para definir la fuerza de los vientos. Los «beaufort» se calculan en millas marinas o náuticas, también llamadas «nudos» (1852 m). Correspondiendo a 34 nudos, el paso de la fuerza 7 a la fuerza 8 en la escala de Beaufort, que marca el umbral entre la depresión y la tempestad, equivale a 63 Km/h separando la tempestad del huracán, el límite superior de la escala Beaufort (fuerza 12) corresponde a 64 nudos, o sea 117 Km/h, y así sucesivamente...

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía general

1. *Sobre Honduras y América Central antes del Mitch*

d'ANS (André-Marcel): *Le Honduras. Difficile émergence d'une nation, d'un État*. Paris, Éd. Karthala, Coll. «Hommes et Sociétés», 385 pp., 1997. Traducción: Honduras. *Difícil emergencia de una nación, de un Estado. Segunda edición enteramente revisada por el autor*. Tegucigalpa, Renal Video Producción, 1999. (Quinta edición: 2007)

d'ANS (André-Marcel): «Honduras: d'un libéralisme à l'autre», en: *Problèmes d'Amérique latine n.s. n° 30* (Paris, La Documentation française, juillet-septembre 1988), pp. 31-57. Traducción: Honduras: *de un liberalismo a otro*. Tegucigalpa, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Documentos de Análisis, Boletín Especial n° 82, mayo de 1999.

ARDÓN (Patricia): *Post-war reconstruction in Central America*. Oxford, Oxfam Working Papers, 1999, 76 p. (Translation of: *La paz y los conflictos en Centroamérica*, Guatemala, CIDECA [Consejo de Investigaciones para el Desarrollo de Centroamérica], 1998).

BINNS (Jack R.): «Policy pathology in Honduras», en: *Foreign Service Journal* (Washington D.C., October 1998), pp. 36-41.

DEWALT (Billie R.), VERGNE (Philippe) and HARDIN (Mark): «Shrimp Aquaculture development and the environment: People, mangroves and fisheries on the Gulf of Fonseca, Honduras », en: *World Development* XXIV,7 (1996), pp. 1193-1208.

ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación) : «Honduras: Un modelo para la pobreza», en: *Envío n° 178-179* (Managua, enero, febrero de 1997), pp. 45-50.

HERNÁNDEZ CHÁVEZ (Alcides): «Honduras: contexto económico y social en la época del ajuste estructural», en: SALOMÓN (Leticia), compiladora: *Gobernabilidad democrática y seguridad ciudadana en Centroamérica: El caso de Honduras* (Tegucigalpa, CEDOH / CRIES, 2000), pp. 19-57.

JANSEN (Kees): *Political Ecology, Mountain Agriculture, and Knowledge in Honduras*. Amsterdam, Thela Publishers, 1998, X + 277 p.

LAMBERT (Denis) et CRABBÉ (Carole): *Chiquita. Révélations sur les pratiques d'une multinationale. Une enquête du journal américain «The Cincinnati Inquirer»*. Bruxelles, Les Magasins du Monde/OXFAM, 1998.

LÓPEZ (R.) and ROMANO (C.): «Rural poverty in Honduras: Asset distribution and liquidity constraints», en: LÓPEZ (R.) and VALDÉS (A.) (eds): *Rural poverty in Latin America* (London, McMillan Press, 2000), pp. 227-243.

NAVARRO (Jorge): «Poverty and adjustment: The case of Honduras», en: *CEPAL Review XLIX* (1993), pp. 91-101.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo): *Informe sobre desarrollo humano. Honduras 1998*. Tegucigalpa, PNUD, 1998.

RUHL (J. Mark): «Doubting democracy in Honduras», en: *Current History* (February 1997), pp. 81-86.

SALOMÓN (Leticia): «Honduras. Los retos de la democracia», en: *Nueva Sociedad* (Caracas, enero-febrero 1996), pp. 10-14.

STONICH (Susan C.): «The promotion of non-traditional agricultural exports in Honduras: Issues of equity, environment and natural resources management», en: *Development and Change XXII* (1991), pp. 725-755.

STONICH (Susan C.): «The political economy of environmental destruction: Food security in Southern Honduras», en: WHITEFORD (Scott) and FERGUSON (Anne): *Harvest of want.. Hunger and food security in Central America and Mexico*. Boulder, Westview Press, 1991, pp. 457-4.

STONICH (Susan C.): «Struggling with Honduran poverty: The environmental consequences of natural resource-based development and rural transformations», en: *World Development XX*, 3 (1992), pp. 385-399.

STONICH (Susan C.): «*I'm destroying the land!*». *The political ecology and environmental destruction in Honduras*. Boulder, Co., Westview Press, Conflict and social change series, 1993.

STONICH (Susan C.): «Development, rural impoverishment and environmental destruction in Honduras», en: PAINTER (Michael) and DURHAM (William), eds: *The social causes of environmental destruction in Latin America*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1995, pp. 63-70.

TORRES CALDERÓN (Manuel): «Honduras. Transición democrática: la historia interminable», en: *Envío n° 190-191* (Managua, enero-febrero de 1998), pp. 27-33.

ZÚNIGA ANDRADE (Edgardo): *Las modalidades de la lluvia en Honduras*. Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, Colección Itzamna (Ciencias), 1990, 141 p.

2. *Sobre las «catástrofes naturales»*

DAVIS (Mike): *Génocides tropicaux. Catastrophes naturelles et famines coloniales (1870-1900). Aux origines du sous-développement*. Paris, La Découverte, 2003. (Traduction de: *Late Victorian Holocausts. El Niño Famines and the Making of the Third World*. Verso, 2001).

DUPUY (Jean-Pierre): *Pour un catastrophisme éclairé. Quand l'impossible est certain*. Paris, Éditions du Seuil, Collection «La couleur des idées», 2002.

JONAS (Hans): *Pour une éthique du futur*. Paris, Éditions Rivages Poche, Petite Bibliothèque, 1999.

LEÓN (Patricio) y GUILLÉN (Maritza): «El Sistema de atención y prevención de desastres en Honduras», en: LAVELL (Allan) y FRANCO (Eduardo), editores: *Estado, sociedad y gestión de los desastres en América latina* (Lima, La Red/ FLACSO/ITDG, 1996), pp. 147-169.

LEPOINTE (Éric): «Le sociologue et les désastres», en: Cahiers internationaux de sociologie, Vol. XC, 1991.

MUSSET (Alain): «Entre cyclones et tremblements de terre: le Nicaragua face au risque naturel», en: DELHOM (Joël) et MUSSET (Alain) éd.: *Nicaragua. En el ojo del huracán/Dans l'oeil du cyclone* (Paris, Travaux et Mémoires de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine, 2000), pp. 19-40

OLIVER-SMITH (Anthony) and HOFFMAN (Susannah M.), eds: *The angry earth: Disaster in anthropological perspective*. London, Routledge, 1999.

PAGNEY BENITO-ESPINAL (Françoise), BRAVARD (Jean-Paul) et JOSEPH (Philippe): «Espaces à risques en milieu tropical insulaire: fragilité physique et actions anthropiques aggravantes a la Dominique (Petites Antilles)», en: *La Géographie/Acta Geographica* n° 125 (n° 1500) (Paris, 2001), p. 7-26.

QUARANTELLI (Enrico): *What is disaster? Perspectives on the question*, London, Routledge, 1998.

VOITURIEZ (Bruno) et JACQUES (Guy): *El Niño. Réalité et fiction*. Paris, Éditions Unesco, COI Forum Océans, 2000.

Bibliografía por capítulos

Capítulo 1

BUESO BUESO (Dr. Saady Óscar): *Mitch. El huracán más devastador del Siglo XX*. Tegucigalpa, Empresa Nacional de Artes Gráficas, 1999.

CABALLERO ZEITÚN (Elsa Lily): «Honduras: Tegucigalpa y el Mitch», en: PROGRAMA «CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO» (CYTED): *Impacto del Mitch en asentamientos humanos a nivel regional: Honduras, Nicaragua, El Salvador*. San Salvador 2001, pp. 213-272.

CABELLO (José María, sj): «El Mitch en Urraco: un trauma y una odisea», en: *Envío* n° 201 (Managua, diciembre de 1998), pp. 41-45.

CARRIER (Jim): *The Ship and the Storm. Hurricane Mitch and the Loss of the Fantome*. New York, McGraw-Hill, 2000.

CHRISTOPLOS (Ian): «Natural disasters, complex political emergencies and public services: re juxtaposing the narratives after Hurricane Mitch», en: Paul COLLINS (ed.): *Applying public administration in development. Guideposts for the future* (Chichester, John Wiley and Sons, 2000), pp. 345-355.

CIIR (Catholic Institute of International Relations): *Honduras: Anatomy of a disaster*, London, CIIR, 1975.

ESCARPIT (Françoise): «Amérique centrale: au Honduras deux mois après Mitch», en: *Politis* n° 528, Paris décembre 1998, pp. 6-8.

FALLÁ (Ricardo, sj): «Primeras reflexiones ante la herida del Mitch», en: *Envío* n° 201 (Managua, diciembre de 1998), pp. 31-40.

GAULLIER (Vincent): «Après le passage de l'ouragan Mitch. Autopsie d'un cataclysme», en: *Sciences et Avenir* (Paris, janvier 1999), pp. 68-69.

HARDY (Sébastien): «Risque naturel et vulnérabilité. Une analyse de la catastrophe de Posoltega (30 octobre 1998)», en: DELHOM (Joël) et MUSSET (Alain) éd. : *Nicaragua. En el ojo del huracán/ Dans l'oeil du cyclone* (Paris, Travaux et Mémoires de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine, 2000), pp. 41-52.

HELLIN (Jon) and HAIGH (M. J.): «Rainfall in Honduras during Hurricane Mitch», en: *Weather* LIV, 11 (1999), pp. 350-358.

INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES: *Hurricane Mitch*. Genève, IFRCRCS, Insight, May 1999.

INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES: *World Disasters Report*. Geneva, IFRCRCS, 1999, 198 p. (Chapter 3: «Mitch, Anatomy of a Disaster»,

pp. 42-54). Résumé en français: *Rapport sur les catastrophes dans le monde. Résumé*. Genève, Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 1999.

JARRY (Irene): *Cyclone de l'enfer*. Paris, Éditions Carnot, Collection Cicéron (Enquêtes, Témoignages, Récits), 2000.

JUÁREZ B. (Ángel Augusto): *El Mitch y yo*. Tegucigalpa, Litografía López, 2001.

MEDINA ZAVALA (Flora Raquel): *Educación ante situaciones de riesgo*. San Pedro Sula, Impresos Comerciales Hernández, 2001.

MORALES ORTEGA (Ninette): «Nicaragua: La avalancha del volcán Casitas», en: PROGRAMA «CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO» (CYTED): *Impacto Del Mitch en asentamientos humanos a nivel regional: Honduras, Nicaragua, El Salvador*. San Salvador . 2001, pp. 141-212.

PROGRAMA «CIENCIA y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO» (CYTED): *Impacto del Mitch en asentamientos humanos a nivel regional: Honduras, Nicaragua, El Salvador*. San Salvador, Imprenta Criterio, 2001.

REVELLI (Philippe): *Le Nicaragua après l'ouragan*. Paris, Les Éditions de l'Atelier/CCFD, 2000.

SERAROLS (Juan Francisco): «El Salvador: El desbordamiento del Río Lempa y su impacto sobre los asentamientos humanos en la cuenca baja de los municipios de Tecoluca y Jiquilisco», en: PROGRAMA «CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO» (CYTED): *Impacto del Mitch en asentamientos humanos a nivel regional: Honduras, Nicaragua, El Salvador*. San Salvador 2001, pp. 39-139.

TORRES (Luis A.): «El enigma del «Fantome» », en *El Herald*, 8/2/2004.

Capítulo 2

BOLTANSKY (Luc): *La souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique*. Paris, Éditions Métailié, 1993.

GUENNEC (Mariannick): «L'ouragan Mitch au Nicaragua a travers la presse costaricienne», en: DELHOM (Joël) et MUSSET (Alain) éd.: *Nicaragua. En el ojo del huracán/Dans l'era du cyclone* (Paris, Travaux et Mémoires de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine, 2000), pp. 53-64.

MEZA (Víctor): «El poder, la democracia y la prensa: una relación contradictoria y difícil», en: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE HONDURAS (CEDOH): *Honduras: Prensa, poder y democracia*, Tegucigalpa, 2001, pp. 5-47.

PAUL (Myriam): *Le traitement d'une «catastrophe naturelle» par les médias. Un exemple: le cyclone Mitch au Honduras*. Université Paris 7 - Denis Diderot, Mémoire de DEA de Sociologie (Directeur de recherches: André-Marcel d'Ans), 2001.

Capítulo 3

ALDER (Dan): «Amarateca: Oportunidad tras el desastre», en: TORRES CALDERÓN et alii: *Descifrando a Honduras. Cuatro puntos de vista sobre la realidad política tras el huracán Mitch*. Cambridge, Ma., Hemisphere Initiatives, 2002, pp. 32-43.

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE): *Impacto económico, político y social del huracán Mitch en Centroamérica*. Unidad de Planificación y Estadística, PLANES-045/98, 1998.

BENDAÑA (Alejandro): «The politics of Hurricane Mitch», en: *Nicaragua Monitor* (Washington, Nicaragua Network Education Fund), December 1998.

BENDAÑA (Alejandro): «Nicaragua's structural hurricane», en: *NACLA Report on the Americas*, vol. XXXIII, 2 «Central America after Mitch» (Sept/Oct 1999).

BOYER (Jefferson C.) and PELL (Aaron): «Mitch in Honduras: A Disaster waiting to Happen», en: *NACLA Report on the Americas*, vol. XXXIII, 2 « Central America after Mitch » (Sept/Oct 1999), pp. 36-44.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe): *Honduras: Evaluación de los daños ocasionados por el Huracán Mitch, 1998. Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente*. México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, LC/MEX/L.367, 26 de enero de 1999, 178 p.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe): *Centroamérica: Evaluación de los daños ocasionados por el Huracán Mitch, 1998. Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente*. México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, LC/MEX/L.375, 18 de mayo de 1999, 44 p.

DELHOM (Joël): «Mitch, l'ouragan libéral », en: DELHOM (Joël) et MUSSET (Alain) éd. : *Nicaragua. En el ojo del huracán/Dans l'oeil du cyclone* (Paris, Travaux et Mémoires de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine, 2000), pp. 65-81.

DELHOM (Joël) et MUSSET (Alain) éd.: *Nicaragua. En el ojo del huracán/Dans l'oeil du cyclone* (Paris, Travaux et Mémoires de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine, 2000), pp. 65-81.

FALLA (Ricardo, sj): «Una organización naciente y un huracán de contradicciones», en: *Envío n° 202-203* (Managua, enero-febrero de 1999), pp. 23-30.

FALLA (Ricardo, sj): «Damnificados: Éxodo en busca de vivienda», en: *Envío n° 205* (Managua, abril de 1999), pp. 29-35.

FALLA (Ricardo, sj): «El éxodo de la vivienda », en: *Astrolabio n° 4* (Tegucigalpa, diciembre de 1999), p. 3-13.

FALLA (Ricardo, sj): «Después del huracán Mitch: una historia no contada», en: *Envío n° 222* (Managua, septiembre de 2000), pp. 32-37.

FALLA (Ricardo, sj): «Comment les dollars transforment un village», en: *Volcans n° 43* (Paris, Printemps 2001), pp. 18-21.

FIEUX (Bernadette): *Six mois apres Mitch... Où en est l'Amérique centrale? Choix de textes et traductions*. Orgelet, chez l'Auteur, mai 1999.

FORO CIUDADANO: *Propuesta para la Reconstrucción y Transformación Nacional*. Tegucigalpa, Centro de Documentación de Honduras/Fundación Friedrich Ebert, marzo de 1999. Reedición: Tegucigalpa, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Documentos de Análisis, Boletín Especial n° 88, diciembre de 2003.

GABINETE ESPECIAL DE LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL DE HONDURAS: *Plan Maestro de la reconstrucción y transformación nacional. Versión ampliada. Reunión del Grupo consultivo, Estocolmo, Suecia, 25-28 de mayo de 1999, 1999*.

GOLDFIEM (Florence de): «Amérique centrale: La fracture économique due a Mitch», en: *Le MOCI* (Moniteur du Commerce Interational) n° 1433 (Paris, 16-22 mars 2000), pp. 15-16.

GILL (C.K.) and SHANDERA (Wayne X.): «The effects of Hurricane Mitch on a Community of Northern Honduras», en: *Prehosp Disast Med XVI*, 3 (2001), pp. 124-129.

HICKEY (Lauren): «Post-Mitch Central America. The U.S. response», en: *NACLA Report on the Americas*, vol. XXXIII, 2 «Central America after Mitch» (Sept/Oct 1999), pp. 26-27.

JANSEN (Kees): «Crisis discourses and technology regulations in a weak State : Responses to a pesticide desaster in Honduras», en: *Development and Change XXXIV,I* (2003), pp. 45-66.

LANGELLE (Orin): «Hurricane Mitch kills 10,000. Deforestation worsens Central America Tragedy», en: *Native Forest Network Bulletin* (Burlington Vt., December 1998/January 1999).

LANGELLE (Orin): *Hurricane Mitch in Nicaragua. Environmental Degradation. Deforestation exacerbated tragedy*. Burlington, V t., ASERCA (Action for Community and Ecology in the Rainforests of

Central America) Special Report: Nicaragua Environmental Justice Delegation findings, January 2000.

LAVELL (Allan) y ARGÜELLO RODRÍGUEZ (Manuel): *Gestión de riesgo: Un enfoque prospectivo. La Naciones Unidas y su respuesta ante el Mitch*. Tegucigalpa, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colección Cuadernos de Prospectiva 3, 2003, 37 p.

MÉDICOS SIN FRONTERAS (MSF): *Tóxicos en Honduras – Huracán Mitch. Diagnóstico de campo*. Tegucigalpa, 1998.

MORRIS (Saul S.), NEIDECKER-GONZALES (Oscar), CARLETTO (Calogero), MUNGUÍA (Marcial), MEDINA (Juan Manuel) and WODON (Quentin): «Hurricane Mitch and the livelihoods of fue rural poor in Honduras», en: *World Development* XXX, 1 (2002), pp. 49-60.

REVELLI (Philippe): «Après l'ouragan Mitch, le cyclone social?», en: *Croissance* n° 421 (Paris, décembre 1998), pp. 6-7.

ROCHA (José Luis): «Posoltega: donde la tierra arde», en: *Envío* n° 207 (Managua, junio de 1999), pp. 12-18.

ROCHA (José Luis): «Posoltega: pecado original de una catástrofe», en: *Envío* n° 208 (Managua, julio de 1999), pp. 12-17.

TELFORD (John), ARNOLD (Margaret) and HARTH (Alberto) with ASONOG: *Learning Lessons from Disaster Recovery. The Case of Honduras*. Washington D.C. The World Bank, Disaster Risk Management Working Paper Series n° 8, June 2004, viii + 66 p.

TORRES (Manuel): *Huracán Mitch 1998-2003. Retrato social de una tragedia natural*. Tegucigalpa, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), 2004.

VARGAS (Oscar-René): *Nicaragua: después de Mitch... ¿qué?* Managua Tegucigalpa, Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) / Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), 1999.

Capítulo 4

d'ANS (André-Marcel): «Nouveaux mouvements sociaux, défense des droits de l'homme, ONG et pouvoirs publics: tensions et complémentarités», en: MAPPA (Sophia) éditrice: *Les métamorphoses du politique au Nord et au Sud* (Paris, Éditions Karthala, 2004, pp. 383-406).

BEIGBEDER (Yves): *Le rôle international des organisations non gouvernementales*. Bruxelles, Bruylant, 1992.

CENTRO DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN (CEDAC): *Mejores prácticas en la reconstrucción de viviendas. Análisis de estudios de casos en Honduras durante el período post-Mitch / Best practices in housing reconstruction. An analysis of case studies from post-Mitch Honduras*. Tegucigalpa, CEDAC/Fundación AVINA, octubre de 2002.

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: *Informe preliminar de la Auditoría Social sobre el manejo de la ayuda internacional a consecuencia del huracán Mitch: Honduras desde la perspectiva de la Auditoría Social*. Tegucigalpa, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), marzo de 1999.

DELER (J.-P.), FAURÉ (Y.-A.) et ROCA (P.-J.): *ONG et développement*. Paris, Karthala, 1998.

GRUNEWALD (François), GEOFFROY (Véronique de) and LISTER (Sarah): *NGO responses to Hurricane Mitch: Evaluations for accountability and learning*. London, Overseas Development Institute, Humanitarian Practice Network, November 2000.

HOKSBERGEN (Roland) and ESPINOZA MADRID (Noemí): «The evangelical church and the development of neoliberal society : A Study of the role of the evangelical church and its NGOs in Guatemala and Honduras», en: *The Journal of Developing Areas XXXII, 1* (1997), pp.37-52.

HOURS (Bernard): *L'idéologie humanitaire ou le spectacle de l'altérité perdue*. Paris, L'Harmattan, 1998.

JEANTET (Annick) et ROBERT (Sylvie): «Après Mitch, une reconstruction bâclée», en: *Volcans n° 50* (Paris, Hiver 2003), pp. 28-30.

JEFFREY (Paul): «Rhetoric and Reconstruction in Post-Mitch Hondurai en: *NACLA Report on the Americas, vol. XXXIII, 2* «*Central America after Mitch*». (Sept/Oct 1999), pp. 28-35.

Mac EOIN (Gary): «Honduras: Corruption hinders Hurricane Mitch recovery», en: *National Catholic Reporter*, 30/4/1999.

MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA SOCIAL: *Población y Desarrollo. Argonautas y caminantes*. Tegucigalpa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Postgrado Latinoamericano en Trabajo Social (PLATS), 2003.

MALDONADO (Victoria): «Surviving Mitch», en: *NACLA Report on the Americas, vol. XXXIII/ 2* «*Central America after Mitch*» (Sept/Oct 1999).

MEZA (Víctor): «Honduras en la fase post-Mitch. El papel de la cooperación internacional». Ponencia presentada en el seminario «Desastres naturales y ayuda internacional en Centroamérica». Madrid, Casa de América, junio 2000.

MORRIS (Saul S.) and WODON (Quentin): «The Allocation of Natural Disaster Relief Funds: Hurricane Mitch in Honduras », in: *World Development XXXI, 7* (2003), pp. 1279-1289.

OXFAM: *Central America after Hurricane Mitch.. Will the donors deliver?* Oxford, Oxfam International Briefing Paper, December 1998.

OXFAM: *Balance del primer año del proceso de reconstrucción de Centroamérica tras el huracán Mitch: ¿La ayuda invisible?* Oxford, Oxfam International, 1999.

OXFAM: *After Hurricane Mitch. United States Agency for International Development, Reconstruction and the Stockholm principles. Report prepared for Oxfam America by Joshua LICHTENSTEIN*. Briefing paper 01, issue#1, 2001.

ROCHA (José Luis) y CHRISTOPLOS (Ian): «Las ONGs ante los desastres naturales: vacíos y oportunidades», en: *Envío n° 212* (Managua, noviembre de 1999), pp. 12-21.

ROCHA (José Luis), MARTÍNEZ (Thelma) y ROCHA (Ximena): «Balance de una tragedia: Lo bueno, lo malo y lo feo del huracán», in: *Envío n° 213* (Managua, diciembre de 1999), pp. 14-29.

RUSSELL (Grahame): «Hurricane Mitch and human rights», en: *Development and Practice IX*, 3 (May 1999), pp. 322-325.

THOMPSON (Ginger): «For Honduras and Iran, World's Aid Evaporated» en: *The New York Times*, 11/1/2005.

TORRES (Manuel): *Huracán Mitch 1998-2003. Retrato social de una tragedia natural*. Tegucigalpa, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), 2004.

VARGAS (Oscar-René): *Nicaragua: después de Mitch... ¿qué?* Managua Tegucigalpa, Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) / Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), 1999.

Capítulo 5

BAIL (Raphaëlle): «Guerre contre les pauvres. En toute impunité, le Honduras liquide ses parias», en: *Le Monde diplomatique*, Octubre 2004.

BROWN (Ed): «Still their backyard? The US and post-Mitch development strategies in Nicaragua», en: *Political Geography XIX* (2000), pp. 543-572.

BUITELAAR (Rudolf M.), PADILLA (Ramón) y URRUTIA (Ruth): «Industria maquiladora y cambio técnico», en: *Revista de la CEPAL n° 67* (Santiago, abril de 1999), pp. 133-152.

CASTRO (Misael) y CARRANZA (Marlon): «Las maras en Honduras», en: ERIC/IDESO/IDIES/IUDOP: *Maras y pandillas en Centroamérica. Volumen I*. Managua, Universidad centroamericana, 2001, pp. 219-331.

CRABBÉ (Carole), DE SCHUTTER (René), LAMBERT (Denis), SCOHIER (Christophe) et THÉAU (Benoît): *La mode déshabillée. 12 Questions sur l'emploi dans la confection textile*. Bruxelles, Les Magasins du Monde/ OXFAM, 1998.

DEL CID (Nelly), CASTRO (Carla) y RODRÍGUEZ (Yadira): «Trabajadoras de maquila: ¿Nuevo perfil de mujer?», en: *Envío* n° 210 (Managua, septiembre de 1999), pp. 35-45.

ERIC/IDESO/IDIES/IUDOP: *Maras y pandillas en Centroamérica. Volumen I*. Managua, Universidad centroamericana, 2001.

FAUX (Frédéric): «La chasse aux tatoués est ouverte», en: *Le Journal du Dimanche*, 2/11/2003.

FLORES (Mima): *Maquila en Honduras. Cronología 1994*. San Pedro Sula, Centro de Estudios de la Mujer - Honduras, 1995.

GRANDFIELD (Virgil): «Walking the Line of Death», in: *Red Cross, Red Crescent. The Magazine of the International Red Cross and Red Crescent Movement*, Issue 2, 2004, pp. 4-9.

HEINLEN (Ingrid): «Das ganze Land eine Maquila. Nach Mitch verstärken Unternehmen Druck auf ArbeiterInnen», en: *Informationstelle Lateinamerika (ILA) n° 224* (Bonn, April 1999), pp. 8-9. Traduction: «Honduras: Faire de tout le pays une gigantesque maquila», en: FIEUX 1999, pp. 8-9.

HERNÁNDEZ (Héctor): *Recopilación de información sobre la industria maquiladora en Honduras*. Tegucigalpa. Instituto de Investigaciones jurídicas y sociales de la UNAH, 1996.

INCAE-SICA/HID-, VINA: «Mitch, deuda externa, desastres, emigrantes, remesas...», en: *Envío* n° 204 (Managua, marzo de 1999), pp. 45-54.

JEFFREY (Paul): «Una mirada introspectiva. La respuesta al huracán Mitch en el Valle del Bajo Aguán», en: TORRES CALDERÓN et alii 2002, pp. 44-55.

KENNEDY (Mirta): «Trabajo y vida cotidiana. Obreras maquiladoras en Honduras». Ponencia para el coloquio «Maquila y equidad genérica», organizado por Christian Aid con colaboración de la UNICEF, Antigua Guatemala, 4-8 de noviembre de 1997.

KENNEDY (Mirta) y CARDOZA (Melissa): *Mujeres en la maquila. El caso de la ZIP Choloma*. San Pedro Sula, Centro de Estudios de la Mujer-Honduras / Editorial-Imprenta Capiro, 1995.

KLIKSBERG (Bernardo): «Somos territorio de delincuencia en ascenso», en: *Envío* n° 242 (Managua, mayo de 2002), pp. 42-47.

LIEBEL (Manfred): «Pandillas y maras: señas de identidad », en: *Envío* n° 244 (Managua, julio de 2002), pp. 42-50.

LUCCHINI (Riccardo): *Femme, violence et identité. Le cas de l'Amérique centrale*. Paris, Éditions L'Harmattan, Collection «Recherches et Documents - Amériques latines», 2002.

MEJÍA (Thelma): «Les maquilas: une alternative au chômage?», en: *Les républiques maquilas. Les zones franches au Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua* (Bruxelles, Oxfam-Solidarité, 1998), pp. 3339.

MERINO (Juan): «Las maras en Guatemala», en: ERIC/IDESO/ IDIES/IUDOP: *Maras y pandillas en Centroamérica. Volumen I*. Managua, Universidad centroamericana, 2001, pp. 109-218.

MONCADA SILVA (Efraín): *Las dos caras de la maquila en Honduras*. Tegucigalpa, POSCAE/UNAH, 1995.

MORENO (Ismael, sj): «Pandilleros: ¿limpieza social en las cárceles?», en: *Envío* n° 254 (Managua, mayo de 2003), pp. 23-27.

MORTIMORE (Michael): «Industrialización a base de confecciones en la cuenca del Caribe ¿Un tejido raído?» en: *Revista de la CEPAL* n° 67 (Santiago, abril de 1999), pp. 113-131.

NAZARIO (Sonia): «Enrique's journey», in: *Los Angeles Times*, 29 and 30 september; 2,4,6 and 7 october 2002. Traducción: «La travesía de Enrique», en: *Éxito* (Publicado por *Chicago Tribune*), 17, 24 y 31 de octubre; 7, 14,21 y 28 de noviembre; 5 y 12 de diciembre de 2002.

ORELLANA R. (Isbela), CERRATO (Faustino), LARA (Jorge) y TINOCO (Orlando): *La participación de los diferentes actores en el fenómeno de la maquila (Diagnóstico y propuesta de trabajo)*. San Pedro Sula, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) / Consultoría y Asesoría para el Desarrollo (ICAD), 1997.

ORTEZ (O.): *Purchasing practices in global value chains that result in precarious employment. The case of Honduran maquilas*. Tegucigalpa, Oxfam GB, 2003 .

PARANAGUA (Paulo A): «En Amérique centrale, des gangs juvéniles défient les pouvoirs», en: *Le Monde* 14/4/2004.

PARVEX (Ricardo): «La drogue, une géopolitique nord-américaine de substitution», en: *Volcans/Tlalticpac* n° 27 (Paris, Été 1997), pp. 16-19.

PÉREZ (T.B.), HERNÁNDEZ (V.), ALTAMIRANO (K. Lorena) and ALTAMIRANO (O.): *Women in the maquila. At what price?* Tegucigalpa, Oxfam GB, 2003.

PONCE (Susana): «Les maquiladoras», en: *Relations* (Québec, mars 1994), pp. 53-54.

PROYECTO OIT/NOR - COSIBAH: *El sector bananero y sus organizaciones. Balance general y perspectivas*. La Lima, Organización Internacional del Trabajo (OIT) / Gobierno de Noruega / Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Honduras (COSIBAH), 2000.

RAIMBEAU (Cécile): «La crise des maquiladoras au Mexique. Au Sud aussi les firmes délocalisent », en: *Alternatives Internationales* (Juillet-Août 2004), pp. 18-20.

ROCHA (José Luis): «Tatuajes de pandilleros : estigma, identidad y arte», en: *Envío* n° 258 (Managua, septiembre de 2003), pp. 42-50.

RODGERS (Dennis): «Globalización de un barrio “desde abajo”: emigrantes, remesas, taxis y drogas», en: *Envío* n° 264 (Managua, marzo de 2004), pp. 23-30.

ROWLANDS (Joanna): *Questioning empowerment. Working with women in Honduras*. Oxford, Oxfam, 1997.

SALOMÓN (Leticia), CASTELLANOS (Julieta) y FLORES (Mima): *La delincuencia juvenil en Honduras*. Tegucigalpa, CEDOH/ALDI, 1999.

SANTACRUZ GIRALT (María L) y CRUZ ALAS (José Miguel): «Las maras en El Salvador», en: ERIC/IDESO/IDIES/IUDOP: *Maras y pandillas en Centroamérica. Volumen I*. Managua, Universidad centroamericana, 2001, pp. 15-107.

SAVE THE CHILDREN UK/ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE HONDURAS ACJ/YMCA: *Las Maras en Honduras. Investigación sobre pandillas y violencia juvenil. Consulta nacional. Plan nacional de atención. Ley Especial*. Tegucigalpa, 2002.

SIERRA M. (Jorge Alberto): *La maquila en Honduras. Estudio sociojurídico sobre las condiciones de trabajo en las maquilas de Honduras*. San Pedro Sula, Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) / Comité para la Defensa de los derechos humanos en Honduras (CODEH) / Asamblea de Cooperación para la Paz (ACOPAZ), 1997.

SILVA (Cristina Isabel): *¿Hasta cuándo? Ejecuciones extrajudiciales en Honduras 1998-2000*. Costa Rica, Casa Alianza, 2001.

SOSA MELÉNDEZ (Juan José) y ROCHA (José Luis): «Las maras en Nicaragua», en: ERIC/IDESO/IDIES/IUDOP: *Maras y pandillas en Centroamérica. Volumen I*. Managua, Universidad centroamericana, 2001, pp. 333-430.

THOMPSON (Ginger): «Tattooed warriors: The next generation. Shuttling between nations. Latin gangs confound the law», in: *The New York Times*, 26/9/2004. (Repris dans la sélection hebdomadaire du journal *Le Monde* en fecha du 2 octobre 2004, con los títulos: «A disquieting war against gangsters» y «Repressive tactics used to battle latino gangs»).

TURCIOS GÓMEZ (Yanina): «Doce días en un campo de concentración», en: *Envío* n° 247 (Managua, octubre de 2002), pp. 22-31.

TREJO TERUEL (Elvis Geovany) y BARAHONA LÓPEZ (Nora Inés): «Impacto de las remesas de los emigrantes hondureños y el rol de la cooperación internacional», en: MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA SOCIAL: *Población y Desarrollo. Argonautas y caminantes*. Tegucigalpa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Postgrado Latinoamericano en Trabajo Social (PLATS), 2003, pp. 47-58.

Capítulo 6

BEORLEGUI (Jesús); *Hacia la silla de San Pedro*. Tegucigalpa, AZER, 2004.

BOUSSARD (Caroline): *Crafting Democracy. Civil Society in Post-Transition Honduras*. Lund University, Department of Political Science, 2003, 304 p.

CÁLIX RODRÍGUEZ (José Álvaro): *La emergencia de la sociedad civil en Honduras: la dinámica de la esfera pública no estatal*. Tegucigalpa, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colección «Visión de País» n° 17, 2003.

CASTELLANOS (Julieta): «Seguridad ciudadana, sociedad civil y respuesta institucional», en: SALOMÓN (Leticia), compiladora: *Gobernabilidad democrática y seguridad ciudadana en Centroamérica: El caso de Honduras* (Tegucigalpa, CEDOH / CRIES, 2000), pp. 87-118.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE HONDURAS (CEDOH): *Honduras: Prensa, poder y democracia*. Tegucigalpa, CEDOH, 2001.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE HONDURAS (CEDOH): *Honduras: Sistema político, crisis y reformas. Monitoreo desde la Sociedad civil*. Tegucigalpa, CEDOH, 2003.

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: *Derechos humanos: Dos años de realidades y retos: 1998-1999*. Tegucigalpa, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), 2000.

CHÁVEZ BORJAS (Manuel): Honduras: *Descentralización y visión de país*. Tegucigalpa, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colección Cuadernos de Desarrollo Humano Sostenible 12, 2003.

ESPINOZA MEZA (José Luis), Coordinador: *La sociedad civil en Honduras. Caracterización y directorio*. Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 2003.

FALLA (Ricardo, sj): «Cuestionando a los sindicatos, vigilando la corrupción», en: *Envío* n° 206 (Managua, mayo de 1999), pp. 25-29.

HOLLYMAN (Stephenie): «Honduras, bonne gouvernance. Ouvrir la voie à l'émancipation des populations», en: *Choix, La Revue du développement humain IX, 1* (New York, PNUD, mars 2000), pp. 13-15.

MEJÍA (Thelma): «La Reforma militar, una agenda inconclusa », en: TORRES CALDERÓN et alii: *Descifrando a Honduras. Cuatro puntos de vista sobre la realidad política tras el huracán Mitch*. Cambridge, Ma., Hemisphere Initiatives, 2002, pp. 16-21.

MEJÍA (Thelma): «La Reforma política y la participación de la sociedad civil», en: TORRES CALDERÓN et alii: *Descifrando a Honduras. Cuatro puntos de vista sobre la realidad política tras el huracán Mitch*. Cambridge, Ma., Hemisphere Initiatives, 2002, pp. 22-31.

MEMBREÑO CEDILLO (Sergio A): *Honduras: Reforma del Estado, política pública y capacidad de gobierno para la integración en el siglo XXI*. Tegucigalpa, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colección Cuadernos de Prospectiva 4, 2003.

MEZA (Víctor), coordinador general: *Proceso electoral 2001. Monitoreo desde la sociedad civil*. Tegucigalpa, Foro de Fortalecimiento de la Democracia (FFD) y Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), 2002.

MONCADA SILVA (Efraín): *Reformas político-electorales: El referéndum y el plebiscito frente a la Constitución*. Tegucigalpa,

Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Documentos de Análisis, Boletín Especial n° 87, diciembre de 2003.

MORENO (Ismael, sj): «Elección del Defensor del pueblo: qué dijo y qué deja», en: *Envío* n° 241 (Managua, abril de 2002), pp. 31-35.

ORELLANA (Edmundo): *Las reformas políticas*. Tegucigalpa, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Documentos de Análisis, Boletín Especial n° 85, agosto de 2003.

PAZAGUILAR (Ernesto): *Las leyes de amnistía a la luz del derecho interno e internacional*. Tegucigalpa, Alin Editora, s.f. (post 1996).

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo): *Informe sobre desarrollo humano. Por una democracia incluyente*. Tegucigalpa, PNUD, 2002.

POSAS (Mario): «Gobernabilidad, democracia y sociedad civil en Honduras», en: SALOMÓN (Leticia), compiladora: *Gobernabilidad democrática y seguridad ciudadana en Centroamérica: El caso de Honduras* (Tegucigalpa, CEDOH / CRIES, 2000), pp. 59-85.

PRATS (Joan): «Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano sostenible. Marco conceptual y analítico», en: *Revista Institucional y Desarrollo* n° 10 (Barcelona, 2002).

RAISON (Emmanuel): *La democracia desde abajo. Nuevos sujetos para la participación política en Honduras*. Tegucigalpa, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colección «Visión de País» n° 18, 2003.

SALOMÓN (Leticia), compiladora: *Gobernabilidad democrática y seguridad ciudadana en Centroamérica: El caso de Honduras*. Tegucigalpa, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) / Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), 2000.

SALOMÓN (Leticia): *El papel de la sociedad civil en la construcción de la democracia*. Tegucigalpa, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Documentos de Análisis, Boletín Especial n° 83. Noviembre de 2002.

TORRES CALDERÓN (Manuel): «Honduras. Transición democrática: la historia interminable», en: *Envío n° 190-191* (Managua, enero-febrero de 1998), pp. 27-33.

TORRES CALDERÓN (Manuel): «¿Quién conoce Honduras?», en: TORRES CALDERÓN et alii 2002, pp. 5-16.

TORRES CALDERÓN (Manuel): «Honduras. Fragilidades, desigualdades y complicidades», en: *Envío n° 252* (Managua, marzo de 2003), pp. 32-36.

TORRES CALDERÓN (Manuel), MEJÍA (Thelma), ALDER (Dan), JEFFREY (Paul) and SPENCE (Jack): *Descifrando a Honduras. Cuatro puntos de vista sobre la realidad política tras el huracán Mitch*. Cambridge, Ma., Hemisphere Initiatives, 2002.

La edición de este
libro consta de 1,000 ejemplares.
Fue impreso en el mes de febrero de 2008
en los talleres litográficos de
IMPRESOS CERRATO

- **PODERES FÁCTICOS Y SISTEMA POLITICO**
Equipo de Investigación del CEDOH
- **LEVIATÁN HERIDO**
Reflexiones sobre el poder, el Estado y la ciudadanía
Rocio Tábor
- **LOS CONTROLES DEMOCRÁTICOS EN LOS OPERADORES DE JUSTICIA**
Miroslava A. Meza
- **DEMOCRACIA, LEGISLACION ELECTORAL Y SISTEMA POLÍTICO**
Equipo de Investigación del CEDOH
- **DEMOCRACIA Y PARTIDOS POLÍTICOS EN HONDURAS**
Equipo de Investigación del CEDOH
- **HONDURAS: HACIA UNA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA**
Equipo de Investigación del CEDOH
- **HONDURAS: SISTEMA POLÍTICO, CRISIS Y REFORMAS**
Equipo de Investigación del CEDOH

El estudio de una catástrofe desde el punto de vista de la llamada ecología política, descarta la idea de que pueda ser considerada como un fenómeno puramente natural. Por supuesto, el fenómeno meteorológico conocido en Honduras popularmente como Mitch obedeció, entre otras causas, a las modificaciones climáticas y otras alteraciones que casi nadie pudo predecir o siquiera averiguar a través de los diferentes y múltiples instrumentos que la ciencia y la tecnología han desarrollado hasta ahora.

El huracán Mitch puso al desnudo toda una red de interacciones entre la sociedad y su propio entorno material, revelando la naturaleza última de factores demográficos, económicos, sociológicos, psicológicos y culturales que se ven entrelazados en esta espesa y laberíntica madeja de consecuencias.

Más allá de una simple visión "meteorológica" de los hechos, este libro, escrito por el profesor francés André-Marcel d'Ans, un buen conocedor y gran amigo de estas honduras, profundiza en los hechos y rescata las raíces sociales y culturales que anidan en lo más hondo de un fenómeno que aparece como "natural" sólo en la superficie. De esa forma, nos ayuda a descubrir el hilo rojo que atraviesa el ovillo de conflictos, paradojas, contradicciones y consecuencias sociales que el Mitch produjo y desencadenó al interior de la sociedad hondureña.

Al publicar este libro en su versión en español, el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) contribuye a un mejor conocimiento de la realidad hondureña y a la interpretación más precisa de sus dilemas y desafíos. Se trata de un inestimable aporte al estudio de Honduras y, sin duda, de un enriquecimiento valioso de la bibliografía sobre nuestro país.

El CEDOH aprovecha para agradecer el generoso apoyo que la Embajada de Francia ha prestado a la edición y divulgación de esta importante obra, aclarando que ello no implica compromiso alguno ni responsabilidad específica por las opiniones y juicios emitidos por el autor en el texto.